

CORREO

INTERNACIONAL

PUBLICACIÓN DE LA LIT-CI
LIGA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

FEBRERO
2026

EDICIÓN
28

VENEZUELA TRUMP Y AMÉRICA LATINA

Como el intervencionismo estadounidense en Venezuela, marcado por la búsqueda de control político y petróleo, expone la nueva cara del imperialismo de Washington frente a los dilemas económicos con China; la edición incluye además una sección especial con textos históricos sobre la realidad venezolana



ÍNDICE

■	Editorial de la edición de Correo Internacional	4
■	Intervencionismo norteamericano en Venezuela, control político y sed de petróleo	6
■	La nueva política del imperialismo norteamericano hacia América Latina	18
■	La política económica del imperialismo estadounidense en la encrucijada	26
■	Una polémica con el campismo estalinista de Breno Altman sobre Venezuela	32
■	Minneapolis lucha contra la ocupación federal	36
■	Acuerdos y reformas legales para profundizar la entrega del petróleo y la soberanía nacional	40
■	La dominación imperialista norteamericana sobre Colombia	44
■	El narcotráfico es un negocio capitalista, conveniente para la intervención imperialista	48
■	Nayib Bukele y El trumpismo latinoamericano: bonapartismo y criminalización político-social	54
■	La presión imperialista aumenta la subordinación de México y la polarización social	58
■	Ecuador, imperialismo y soberanía: la ofensiva geopolítica de Estados Unidos en el contexto de la seguridad hemisférica	68
■	Cómo lograr la Segunda Independencia Latinoamericana	72

■	Declaración conjunta de trabajadores socialistas revolucionarios de Venezuela, Colombia, y los Estados Unidos	78
■	¡Abajo la agresión yanqui! ¡Defendamos a Venezuela!.....	80
■	¡Manos fuera de Groenlandia! ¡Abolición de la OTAN!	83
■	Del Caracazo a la crisis actual	86
■	La “boliburguesía”: un nuevo sector burgués	96
■	Colectivos chavistas: ¿“Guardianes de la revolución” o grupos paramilitares?	99
■	Posicionamientos de la UST contra las agresiones del imperialismo estadounidense	102
■	La crisis del chavismo y la catástrofe social	108
■	Auge y decadencia de chavismo	116
■	Urge construir una alternativa de la clase trabajadora y el pueblo humilde	128
■	¿Adónde va Venezuela?	138
■	Declaración conjunta	146

Editor responsable: Eduardo Almeida
Diagramación: Victor Bud y Ricardo Malagori
Acceda a las publicaciones de la LIT-CI en:

www.litci.org

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
Febrero de 2026

EDITORIAL

**LIGA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
FEBRERO 12, 2026**

Presentamos esta edición de Correo Internacional con el objetivo de explicar nuestra visión sobre la compleja situación internacional a partir de la invasión de Trump a Venezuela. Incluye una primera parte con artículos sobre la realidad actual y una segunda parte más histórica, con nuestros textos antiguos sobre el chavismo y el país.

Existe una crisis del orden imperialista mundial que se está agravando directamente por las acciones de Trump, como la invasión de Venezuela. Y hay una lógica detrás de la aparente imprevisibilidad del gobierno estadounidense: la búsqueda de recomponer la hegemonía imperialista ante el ascenso económico del imperialismo chino.

Trata-se de una globalidad económica (la disputa por Inteligencia Artificial, guerra tarifaria, la batalla por el petróleo), política (toda la disputa de la ultraderecha) y militar (la invasión a Irán de 2025 y ahora nuevas amenazas, invasión a Venezuela, amenazas a Groenlandia).

Existe una unidad entre la política exterior de Trump y sus brutales ataques contra los trabajadores en Estados Unidos, en particular contra los inmigrantes. Entre el impulso bonapartista dentro de Estados Unidos y las guerras o amenazas de guerra en el exterior.

La agresividad de Trump es una expresión brutal de la decadencia del imperialismo norteamericano en su lucha para recomponer en los niveles anteriores su hegemonía, ahora con otros métodos, directamente bonapartistas.

Trump está tratando de utilizar la justa lucha de las masas iraníes contra la dictadura de los ayatolás para repetir una maniobra similar a la que hizo en Venezuela, con una invasión para imponer un gobierno adaptado a sus intereses. Aún no lo ha conseguido, pero nadie puede descartar que lo intente en un futuro próximo, para avanzar en el control del petróleo y alejar a China de su penetración en Irán.



Amenazó con anexionar por la fuerza Groenlandia, poniendo en jaque a la propia OTAN, de la que forma parte Dinamarca, que controla la isla ártica. Todo se justifica por el enfrentamiento con el ascenso del imperialismo chino, por el control de los minerales de la región y la ruta marítima. Aparentemente, tuvo que retroceder ante la crisis provocada por la primera reacción del imperialismo europeo, tras innumerables sumisiones.

Como se puede ver, nuestra interpretación de la realidad es más que la necesaria denuncia de la agresión militar de la mayor potencia imperialista a un país semicolonial como Venezuela. Esta parte de la verdad es fundamental, lo que incluye la polémica con sectores de las masas que creen que Trump puede traer «democracia» y mejores condiciones de vida a Venezuela. El imperialismo norteamericano no tiene ninguna postura de defensa de las libertades. Por el contrario, Trump es un agente de la difusión del bonapartismo autoritario tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo, precisamente para combatir al también bonapartista imperialismo chino.

Pero, además, buscamos hacer una interpretación marxista de la realidad, superando la visión «campista» estalinista, que divide el mundo en «gobiernos pro Trump» y «gobiernos progresistas», el «imperialismo malo norteamericano» versus el «sul global» en lo cual esta China.

**Visión estalinista
abstrae las clases
en lucha y termina
por vincular el
movimiento de
masas a dictaduras
burguesas decadentes
como Venezuela
e Irán, así como al
imperialismo chino**



Manifestante frente al consulado de Estados Unidos en Nuuk, Groenlandia.

Esta visión estalinista abstrae las clases en lucha y termina por vincular el movimiento de masas a dictaduras burguesas decadentes como Venezuela e Irán, así como al imperialismo chino, que no tiene nada de bueno. Es incapaz de ver por qué los trabajadores venezolanos que derrotaron el intento de golpe de Estado del imperialismo

estadounidense en 2002 odian hoy la dictadura de Maduro. Al igual no puede explicar porque las masas iraníes se levantan contra la decadente dictadura burguesa de los ayatolás.

Por eso defendemos la independencia política de clase de los trabajadores contra los imperialismos estadounidense, chino, etc., así como contra todos los sectores de la burguesía nacional.

Existe una totalidad económica, política y militar de estos ataques de Trump dentro y afuera de Estados Unidos que está llevando

a la profundización de la crisis de la orden mundial y a una creciente polarización social y política en el mundo. No es correcto tener una visión unilateral de este proceso, viendo solo las distintas y múltiples acciones del gobierno ultraderechista de Trump en el gobierno del país imperialista más poderoso del mundo.

La acción de Trump en Venezuela conduce a una tendencia a nuevas convulsiones de la lucha de clases en el continente, así como en otras partes del mundo. No hay una reacción inmediata no homogénea, pero sí genera una tendencia a nuevos conflictos. Las enormes movilizaciones en Bolivia contra el paquete del nuevo gobierno de derecha para entregar el litio son parte de esa tendencia a la polarización social y política.

La gigantesca movilización de Minneapolis, con un intento de huelga general y una movilización de 50 000 personas bajo un frío de 20 grados bajo cero, es una gran expresión de eso en el corazón del imperialismo y puede estar señalizando un camino de enfrentamiento a las masas del mundo. ■

INTERVENCIONISMO NORTEAMERICANO EN VENEZUELA, CONTROL POLÍTICO Y SED DE PETRÓLEO

LEONARDO ARANTES
FEBRERO 11, 2026

El imperialismo norteamericano ha realizado un bombardeo contra Venezuela y, además, ha secuestrado al dictador Nicolás Maduro, presidente del país. Este gravísimo hecho constituye un acto de guerra que amenaza y afecta no solo a Venezuela, sino también al resto de Latinoamérica, y que nada tiene que ver con la razón esgrimida por el ultraderechista presidente de los EE.UU., Donald Trump, de “combate al narcotráfico”.

Cuáles son las verdaderas razones de esta ofensiva intervencionista en Venezuela?, cuál ha sido el marco previo?, cómo evolucionaron los hechos?, cuáles son sus implicaciones y consecuencias?, cuál es la estrategia de conjunto del imperialismo norteamericano para Venezuela y el resto de la región?, qué perspectivas se abren?, cuál es la dinámica del régimen chavista a partir de estos hechos?, qué programa, política y cómo debemos actuar los revolucionarios para enfrentar la estrategia del imperialismo norteamericano?; son cuestiones que intentaremos abordar en el presente artículo.

PRESIÓN POLÍTICA Y DESPLIEGUE MILITAR

Consideramos pertinente describir y analizar el contexto político y los acontecimientos que precedieron los eventos ocurridos en los primeros días del mes de enero de 2026.

Desde la primera quincena de agosto de 2025, los EE.UU., bajo el argumento de la supuesta “lucha contra el narcotráfico”, iniciaron un desproporcionado despliegue armamentístico en las costas del Caribe y de Latinoamérica, con especial cercanía a las costas venezolanas. Previo a esto, el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, emitió una orden autorizando el uso de las fuerzas armadas para la “lucha contra

carteles de drogas extranjeros, con el objetivo de defender a su nación”, de la misma manera, el gobierno norteamericano duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujese al arresto de Nicolás Maduro, acusado de liderar una presunta organización criminal denominada “El Cártel de los Soles”, dedicada al narcotráfico y al terrorismo. De manera simultánea fueron decomisados dinero, joyas, bienes y propiedades atribuidos a Maduro como producto de su actividad criminal.

En semanas anteriores, la administración Trump había desarrollado un proceso de negociación con el gobierno de Maduro, que incluyó el canje de prisioneros norteamericanos por migrantes venezolanos retenidos por el gobierno de Bukele en cárceles de El Salvador, la liberación de algunos presos políticos en territorio venezolano y el otorgamiento de una nueva licencia que autorizaba a Chevron a operar en el país, a extraer y a comercializar petróleo venezolano.

Desde entonces, se inició por parte de los Estados Unidos, un inusitado despliegue militar, el cual incluyó en principio, tres buques de guerra (destructores dotados del sistema de defensa aérea Aegis, armados con misiles guiados Tomahawk para atacar objetivos en tierra, de última tecnología en la Marina de EE.UU.), un submarino nuclear con capacidad misilística y operaciones de inteligencia, además de aeronaves de patrulla marítima P-8 Poseidón y un personal militar que sobrepasaría los 4000 efectivos marines. Tal maniobra fue incrementándose con el paso de los meses, incorporándose cada vez más buques de guerra, aviones F-35 y bombarderos estratégicos B-52, junto con el envío al Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de las fuerzas armadas norteamericanas, y el aumento del número



de efectivos militares a aproximadamente 10.000, incluyendo tropas de asalto. En resumen, todo un despliegue de fuerzas y recursos bélicos que, desde el principio, se mostró más propio de guerras y/o invasiones militares que de acciones de combate contra el narcotráfico.

El imperialismo norteamericano, durante meses (desde septiembre 2025), llevó adelante una ofensiva militar, expresada en acciones de guerra, como más de 25 ataques a pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando un saldo de más de una centena de muertos, pescadores de varias nacionalidades (venezolanos, colombianos, trinitarios, entre otros), incautación de cargueros petroleros provenientes de Venezuela, con el robo de las toneladas de petróleo que contenían, además de un ataque cibernético contra Pdvsa, afectando las operaciones de la empresa y poniendo en peligro a

las trabajadoras y trabajadores petroleros y un supuesto ataque con drones a “una gran instalación en la costa venezolana” (presuntamente en los muelles de Maracaibo, estado Zulia), esto último no confirmado, pero que el mismo Donald Trump asegura haber llevado a cabo. «No sé si lo has leído o visto, pero tienen una gran planta, unas grandes instalaciones de las que salen los barcos, y hace dos noches las destruimos» (BBC News Mundo 29/12/2025), afirmó Trump en una llamada telefónica a la emisora radial WABC para hablar con el multimillonario John Catsimatidis.

A esto hay que agregar la declaración de un bloqueo naval total a los petroleros que entrasen o saliesen del país, con el claro propósito de asfixiar la economía venezolana, cortando el comercio del principal recurso de la misma y, con ello, el ingreso de dólares; y la orientación de un bloqueo aéreo

contra el país, que fue parcialmente acatado por diversas aerolíneas a nivel internacional.

Luego de los bombardeos contra territorio venezolano del pasado 03/01/2026, toda esta fuerza bélica continúa apostada en las costas del Caribe, en las cercanías de Venezuela, como mecanismo de amenaza y coacción.

UNA AGRESIÓN BÉLICA CRIMINAL CONTRA UN PAÍS OPRIMIDO

Como es sabido, aproximadamente a la 1:50 am del sábado 03 de enero de 2026, se inició un bombardeo con helicópteros y drones por parte del gobierno del ultraderechista Donald Trump, las fuerzas militares norteamericanas bombardearon varios puntos de la ciudad de Caracas, a saber, Forte Tiuna, la Base Aérea de la Carlota, el Cuartel de la Montaña (donde reposan los restos de Chávez), la Comandancia General de la Mi-



licia y la Academia de la Armada (Escuela Naval en la Meseta de Mamo, estado La Guaira). Además de esto, fueron atacados aeropuertos civiles como el de Higuerote (estado Miranda) y el puerto de La Guaira (el principal del país), y se reportan ataques en instalaciones militares del vecino estado de Aragua. Todos estos objetivos se encuentran en la ciudad de Caracas (capital del país) o en estados cercanos a la capital, en zonas con alta densidad poblacional, algunas de ellas rodeadas de edificios y áreas residenciales.

Así pues, mientras aeronaves sobrevolaban y bombardeaban sostenidamente la ciudad de Caracas y otros puntos del territorio venezolano, mientras se registraban

explosiones en las inmediaciones de objetivos militares, puertos, aeropuertos y zonas urbanas; fuerzas especiales llevaban a cabo la operación de secuestro del dictador Nicolás Maduro y su esposa y primera dama Cilia Flores; hecho que pocas horas más tarde fue anunciado por Donald Trump en su red social Truth Social y ratificado luego en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. Lo mismo fue confirmado por voceros oficiales del gobierno venezolano, quienes exigieron al gobierno norteamericano la vida del jefe de Estado secuestrado y de su esposa.

Tales hechos constituyen una agresión bélica criminal, contra la soberanía de un país oprimido, siendo una intromisión imperia-

lista inaceptable por parte del gobierno norteamericano, con el ultraderechista Donald Trump a la cabeza, y que lejos de representar ninguna lucha contra el narcotráfico y/o el terrorismo, se enmarca en la estrategia del imperialismo estadounidense, de aplicar la conocida Doctrina Monroe, acrecentada con el denominado “Corolario Trump”, en el contexto de las disputas y negociaciones por territorios, mercados y áreas de influencia entre las potencias imperialistas.

Se trata de un ataque sin precedentes contra Venezuela perpetrado por Estados Unidos, la principal potencia imperialista del mundo. El mismo constituye una amenaza no sólo para este país, sino para el conjunto de Latinoamérica; siendo la primera intervención militar directa, es decir, haciendo uso de sus propias fuerzas armadas, del imperialismo norteamericano en los últimos 36 años en el continente[1] y la primera en toda la historia contra un país sudamericano. De esta manera, EE.UU. reinaugura en el continente la modalidad de realizar intromisiones en los asuntos políticos internos de los países mediante la intervención militar directa, retomando abiertamente la diplomacia de las cañoneras, el chantaje y la militarización.

El objetivo estratégico es profundizar brutalmente la condición semicolonial de Venezuela, subordinando su régimen político, su economía y sus recursos estratégicos a los dictados de la Casa Blanca, al tiempo que se intenta disciplinar al conjunto de los pueblos de América Latina. Este operativo bélico, con características similares a la intervención de 1989 – 1990 en Panamá, forma parte de una política global de Donald Trump que persigue revertir la crisis de dominación de Estados Unidos, como

principal potencia imperialista, en un contexto más amplio de la crisis económica global del capitalismo, la más grande de la historia.

ESTRATEGIA DE RECOLONIZACIÓN. DOCUMENTO SOBRE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL

Resulta evidente que, en medio de la crisis económica global del capitalismo y de la disputa interimperialista con potencias emergentes como China y Rusia, el imperialismo norteamericano pretende recuperar su dominio hegemónico en un continente que siempre ha considerado su patio trasero, “revivificando” la Doctrina Monroe y extendiéndola al hemisferio occidental como un todo.

Esto ha sido anunciado formalmente en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2025. Documento publicado por la administración Trump el 05/12/2025, en el que se presenta este objetivo como prioridad central de la política exterior estadounidense, afirmando que el hemisferio occidental es la principal área de interés estratégico de Washington.

No se trata apenas de un plan gubernamental, ni de un documento de perspectivas políticas más, sino del anuncio formal de todo un cambio radical en la intervención estadounidense en la contienda interimperialista, una elevación del nivel de agresividad y proteccionismo del imperialismo norteamericano para recuperar el terreno perdido, basándose en un control más férreo y directo de Latinoamérica, un área geográfica que consideran históricamente como su colonia y su expansión al resto del hemisferio occidental (Europa, Groenlandia), tal como lo señala el “corolario Trump” a la

Doctrina Monroe.

“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro Hemisferio. Este “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe es una restauración sensata y contundente del poder y de las prioridades estadounidenses, en consonancia con los intereses de seguridad de Estados Unidos. “Nuestros objetivos para el Hemisferio Occidental se pueden resumir en “Reclutar y Expandir”. Reclutaremos aliados consolidados en el Hemisferio para controlar la migración, detener el flujo de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad en tierra y en el mar. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevos socios, al tiempo que reforzamos el atractivo de nuestra propia nación como socio económico y de seguridad predilecto del hemisferio” (La Estrella de Panamá, 26/12/2025)[2].

Posterior a la publicación del mencionado documento, el secretario de Guerra Pete Hegseth declaró:

“Las actividades del departamento en todo el hemisferio occidental no se limitan a eliminar a los narcoterroristas, sino que también incluyen la disuasión y la defensa de los intereses de nuestra nación contra otras amenazas en el hemisferio. [...] Esto incluye garantizar el acceso militar y comercial de EE. UU. a zonas estratégicas como el Canal de Panamá, el Caribe, el Golfo de América, el

Ártico y Groenlandia” (Revista Opera, 19/12/2025)[3]. Una declaración que reafirma los objetivos estratégicos del imperialismo norteamericano, con el ultraderechista Trump a la cabeza.

Así pues, es este el marco estratégico, político, geopolítico y militar en el que el imperialismo norteamericano desarrolla el ataque a Venezuela y amenaza al resto del continente, dejando explícito el objetivo del gobierno Trump de tener gobiernos títeres en toda Latino América; no bastando para sus intereses hegemónicos y colonizadores gobiernos pró imperialistas, que apliquen los planes neoliberales; sino que pretenden gobiernos de ultraderecha, completamente sometidos a Trump y sus intereses.

Para ello ejercen presiones económicas, políticas y militares para imponer este tipo de gobiernos en el continente. En este sentido, mediante presiones económicas y políticas, y ayudados por los desastres cometidos por los gobiernos de conciliación de clases, han logrado imponer, vía elecciones, gobiernos como el de Milei en Argentina, Kast en Chile, Bukele en El Salvador, Asfura en Honduras, y persiguen continuar ese avance con el uribismo en Colombia (de ahí las amenazas y presiones a Petro).

Ahora, mediante la invasión militar, depusieron a Maduro, pese a que este venía entregando la soberanía del país y haciendo grandes concesiones tanto en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) como en el Arco Minero del Orinoco (AMO).

El objetivo es robar el petróleo venezolano e imponer un gobierno títere del imperialismo, por ahora a través de la hasta entonces Vicepresidente Ejecutiva en

funciones Delcy Rodríguez, ahora investida como Presidente de la República, mientras Trump afirma que gobernará directamente a Venezuela, que llevará adelante una nueva incursión militar si el reciclado “nuevo gobierno” venezolano no hace lo que ellos dicen, impone condiciones y mantiene a María Corina Machado a la reserva para un eventual gobierno títire si la fórmula Delcy no les resulta adecuada.

Sin embargo, las acciones ejecutadas hasta ahora por el gobierno de Delcy, sus anuncios, los compromisos adquiridos y los acuerdos suscritos evidencian un colaboracionismo propio de los gobiernos títeres que pretende Trump.

Toda esta estrategia de Trump y el imperialismo norteamericano, en el contexto de la crisis capitalista mundial y la disputa interimperialista, el ataque contra Venezuela, la pretensión explícita de colonizar este país y saquear sus recursos para posicionarse mejor en esta crisis y disputa, hacen prever también ataques más duros contra los trabajadores inmigrantes, venezolanos, latinoamericanos y de otras latitudes en EE.UU., así como a la clase trabajadora de conjunto, además de nuevas presiones, amenazas e intervenciones en otros países de la región y del mundo. Por lo cual es necesario construir estrategias unificadas para enfrentar y derrotar las pretensiones y los ataques del imperialismo norteamericano y de sus rivales en sus respectivas áreas de influencia.

COMPLICIDAD INTERNA ELEMENTO CLAVE DE LA OPERACIÓN NORTEAMERICANA

El operativo desplegado contra Venezuela la madrugada del 03 de enero del año en curso, encon-

tró una casi nula resistencia por parte de las fuerzas armadas y los organismos de defensa venezolanos, alrededor de un centenar de aeronaves (entre aviones, drones y helicópteros) sobrevolaron el cielo caraqueño, mientras que aproximadamente doce helicópteros artillados cruzaron la frontera desde La Guaira a Caracas, burlaron los radares sin un sólo disparo de advertencia, bombardearon Fuerte Tiuna, sede de la comandancia general y del Ministerio de la Defensa y otros tres centros militares, además del parlamento. Uno de esos helicópteros se posó sobre el palacio, capturó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores sin grandes aspavientos y los sacó del país. Apenas en el nivel de seguridad más cercano a Maduro se reportaron enfrentamientos, dejando un saldo de al menos 32 efectivos cubanos de la guardia de seguridad personal de este fallecidos.

Nada de esto puede ocurrir sin la colaboración de los aparatos militares y de seguridad interior, menos aún en un país cuyo gobierno ha afirmado poseer defensas antiaéreas que incluyen radares, sistemas de misiles, cohetes y cañones comprados a China y Rusia. Esto, aunado a declaraciones posteriores por parte de Donald Trump, Marco Rubio y otros voceros del gobierno norteamericano, así como a las actitudes y medidas de Delcy Rodríguez, dejan en evidencia la complicidad interna para que la operación yankee consiguiera sus objetivos, y que Maduro ha sido traicionado y entregado por el propio chavismo para su captura.

Esta complicidad interna, junto a la evidente superioridad militar estadounidense, que destruyó el 90% de las defensas antiaéreas señaladas del país, y la incompetencia de los militares venezolanos

responsables de la defensa del país, explican la relativa facilidad con la que las fuerzas norteamericanas llevaron a cabo con éxito su operativo de incursión en Venezuela[4].

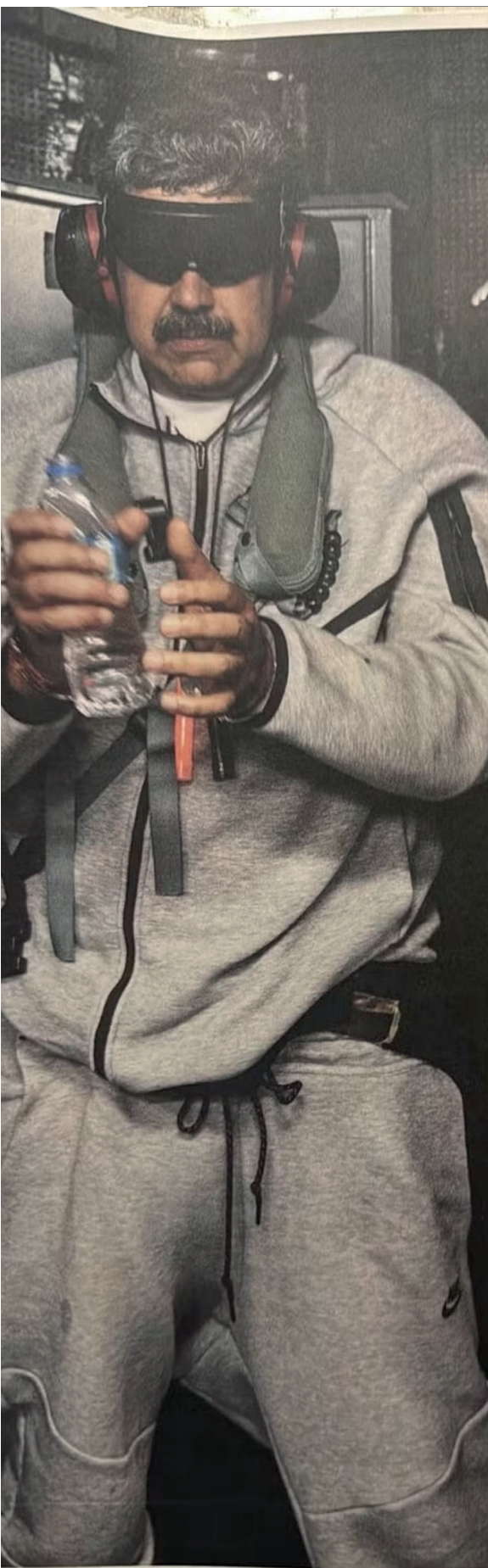
¿DELCY RODRÍGUEZ FUE PARTÍCIPE DE LA TRAICIÓN?

Resulta obvio, que la complicidad interna basada en una negociación previa, devino en la entrega – captura de Nicolás Maduro (entrega por parte del chavismo, captura por parte de las fuerzas norteamericanas), vale citar las declaraciones de Eric Rojo general retirado del ejército norteamericano y asesor de Marco Rubio en América latina; quien afirmó “...a Maduro lo entregaron los venezolanos a las fuerzas armadas de EE.UU...”[5], ahora bien, ¿Qué dirigentes y sectores del chavismo negociaron la entrega y salida de Maduro del poder?

Las claras respuestas de Trump, cuando se le preguntó acerca de qué personaje habría sido el facilitador desde Caracas, fueron: “...las negociaciones se realizaron con Delcy Rodríguez...” y agregó: “Marco Rubio está negociando con Delcy Rodríguez la transición. La vice habló con Rubio y dijo que hará lo que nosotros digamos; dejan clara su participación en las negociaciones para la entrega del depuesto presidente y, aparte, su colaboracionismo con el imperialismo norteamericano.

Todo esto lo refuerza su reconocimiento, finalmente y sin ninguna objeción inmediata por parte de EE. UU., por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, como sucesora legal de Maduro, además de su investidura ante la Asamblea Nacional (AN, parlamento venezolano), presidida desde 2021 por su hermano Jorge Rodríguez.

El reconocimiento de Delcy



Rodríguez se produjo a costa de las ambiciones de protagonismo de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y de la reivindicación de poder de Edmundo González Urrutia, quienes, hasta entonces, parecían los favoritos de Trump para encabezar la transición.

Así pues, el tándem Delcy – Jorge, ahora conocido como “Los Rodríguez”, sería el sector chavista que habría negociado con el gobierno de EE.UU. los términos y condiciones de colaboración que este último impondría para la continuidad del régimen chavista al frente del Estado tutelado por EE.UU. Este sector habría arrastrado hacia sus objetivos a otro liderado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien se habría replegado ante el acoso de la CIA. Un tercer sector, liderado por Diosdado Cabello, sería el menos potente y más resistido por los estadounidenses[7].

Delcy Rodríguez ha construido una reputación de astuta operadora en el manejo de los asuntos de política y de economía del país, así como en aspectos administrativos, pero carece de la suficiente ascendencia en el partido para garantizar la unidad del chavismo. Por tal razón, busca rodearse de un sector duro en lo político, mientras se pliega al tutelaje de Washington en lo económico. En el discurso al país, recurre a alusiones a Bolívar y a Chávez, así como a referencias a Maduro como Presidente de Venezuela, para conformar a la base chavista (aunque tienden a ser cada vez menos), mientras que con la administración Trump, habla de trabajar “de manera conjunta” con Estados Unidos, calla ante la decisión de Washington de controlar los recursos energéticos y obligar a comprar solo productos estadou-

nidenses con ese dinero.

Entonces al interior del país, el poder ejecutivo y legislativo se concentra en los Rodríguez, con el auxilio de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, ministros de interior y justicia y de defensa respectivamente, es decir, garantes del poder militar y policial, para acentuar el modelo represivo que sigue vigente, mientras que el imperialismo norteamericano con Donald Trump, Marco Rubio y Pete Hegseth, dictan, controlan y regulan las decisiones económicas y políticas trascendentales para los destinos del país, en una relación colonial sin precedentes en la historia reciente del país.

LA DINÁMICA DEL RÉGIMEN CHAVISTA, UN RÉGIMEN COLABORACIONISTA Y UN GOBIERNO TÍTERE. LOS ACUERDOS EN MATERIA PETROLERA.

El régimen chavista conserva parte importante de sus características, sobre todo en lo que respecta a su carácter represivo contra el movimiento obrero y de masas, a la centralidad del poder ejecutivo, apoyado fundamentalmente en las fuerzas armadas y en los cuerpos represivos policiales y parapoliciales, y al carácter ajustador contra la clase trabajadora y el pueblo humilde; así como también preserva la continuidad administrativa en la gestión del Estado. Sin embargo, lo que ha cambiado esencialmente es su relación con el imperialismo norteamericano, pasando de estar encabezado, en los últimos veinticinco años, por gobiernos (el de Chávez antes y el de Maduro luego) entreguistas y dependientes, pero con roces con los distintos gobiernos estadounidenses a estar comandado por uno totalmente colaboracionista, potencial títere



del imperialismo norteamericano y el gobierno de Donald Trump y que consiente una relación de tipo colonial entre dicho imperialismo y Venezuela.

Una contundente evidencia son las declaraciones emitidas por Trump y reseñadas por diversos medios internacionales, en las que afirma ser quien está al mando de Venezuela y que el gobierno norteamericano dirigirá el país sudamericano en lo inmediato, aceptando y aprobando tratar con Delcy Rodríguez como nueva presidenta en funciones y bajo una combinación de aval y presión.

El de Rodríguez es a todas luces un gobierno inestable y de crisis, sin apoyo popular, a quien solo lo sostiene el apoyo imperialista gringo en la medida en que cumpla a cabalidad (según los criterios de Trump y cía.), con su rol colaboracionista y su papel de títere.

La mayor prueba de esta relación de colaboración (por parte del gobierno de Delcy) y tutelaje (por parte de Donald Trump y del imperialismo yankee) son los acuerdos suscritos en materia petrolera luego de que el presidente norteamericano anunciase que él

administraría los recursos petroleros venezolanos.

Dichos acuerdos, anunciados por Donald Trump[8] y confirmados posteriormente por el propio gobierno venezolano y la directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) mediante un comunicado oficial[9], consisten en que el gobierno de Delcy entregará a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

Tal comunicado de PDVSA es explícito en que la negociación con las transnacionales petroleras estadounidenses se dará en los términos ya establecidos con la Chevron-Texaco, es decir, sin obligación por parte de la transnacional de pagar impuestos y/o regalías al Estado venezolano por las ganancias obtenidas, y de pagar salarios a discreción.

Pero el Departamento de Energía de EE.UU., explica más detalladamente el acuerdo petrolero anunciado por Trump:

“El petróleo se venderá en el mercado global para beneficio de Estados Unidos, Venezuela y los aliados; todo el dinero de la venta del petróleo llegará primero a una cuenta estadounidense en bancos

reconocidos para garantizar la integridad y la legitimidad de la última distribución; los fondos serán destinados al beneficio de los estadounidenses y de los venezolanos bajo la dirección del gobierno de EE.UU, la venta de este petróleo empieza de inmediato y continuará de manera indefinida, el petróleo que se transporte hacia y de Venezuela ser hará únicamente a través de canales legítimos y autorizados consistentes con la seguridad nacional de EE.UU, EE.UU está selectivamente retirando sanciones para permitir el transporte y la venta de este petróleo, venezolano en el mercado global, El petróleo ligero estadounidense irá a Venezuela, según lo requerido, para optimizar la producción y el transporte del muy pesado petróleo venezolano, como parte de la modernización, expansión y desarrollo, EE.UU autorizará la importación a Venezuela de equipamiento petrolero y servicios para subsanar décadas de malos manejos y corrupción, esto involucrará tecnología, expertos e inversión, EE.UU trabajará en la red eléctrica venezolana, para también corregir la destrucción que ha sufrido” (Departamento de Energía EE.UU. 06/01/2026)[10] [11] [12].

Aparte de esto, el gobierno de Estados Unidos establece condiciones tales como prohibir la venta de petróleo venezolano a potencias imperialistas rivales, como China y Rusia, suspender los envíos de petróleo a Cuba y exigir que la compra de insumos y productos realizada con el dinero de la venta petrolera sea exclusivamente a EE.UU.

Habría que remontarse a los tiempos del dictador Juan Vicente Gómez para encontrar condiciones de tutelaje y colonialismo tan aberrantes en los cien años de la

historia de la explotación petrolera venezolana.

Otros ejemplos del colaboracionismo de Delcy y el carácter potencialmente títere de su gobierno son los pasos en función de reabrir la embajada norteamericana en el país, así como el hecho de que ya se anuncia que las cuatro principales corporaciones bancarias estadounidenses JP Morgan Chase & Co., Bank of América (BofA), Wells Fargo y Citigroup (Citi) planean iniciar operaciones a partir de la semana del 12/01/2026 en Caracas, bajo el control del Departamento del Tesoro de los EE.UU., y que sería a través de estos bancos que los EE.UU. maneje todas las transacciones en Venezuela. Adicionalmente, se especula que los empleados públicos cobrarían los salarios a través de estos bancos, según reseña la cuenta de X, ElObservadorBinario, y portales web como Forbes.com.mx y Bancaynegocios.com, que lo plantean como una posibilidad. Y así otro conjunto de anuncios que se han realizado en los últimos días.

LA SITUACIÓN DE LAS MASAS VENEZOLANAS

En medio de toda esta vorágine colonialista y de este empeño colaboracionista del gobierno venezolano, surge la interrogante sobre la situación de la clase trabajadora y de las masas venezolanas.

Estas siguen padeciendo los rigores del ajuste propatrontal y antiobrero, que el gobierno de Maduro, al menos formalmente desde 2018 (porque en los hechos ya se aplicaba desde antes), descarga sobre sus hombros, el salario mínimo devengado por los trabajadores apenas es de 0.39\$ mensuales, y los bonos que otorga el gobierno, sin incidencia salarial, como el de alimentación y el denominado son

de 40 y 120\$ mensuales respectivamente (aunque nunca alcanzan tales cantidades debido a la devaluación), lo que hace un ingreso mínimo mensual de 160,39 \$ (ingreso no salario, debido a que de esto solo es salario 0.39\$), frente a una canasta básica familiar que según datos del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas – FVM) y la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM), supera los 630\$ mensuales.

La inflación golpea duramente los bolsillos de los trabajadores venezolanos. Según el portal BloombergLinea, la tasa de inflación se ubicó en 556% en los 12 meses del año 2025, haciendo palidecer el 45% del año 2024.[13]

Las masas y los trabajadores venezolanos siguen padeciendo hambre y miseria, sobreviviendo en gran parte gracias a las remesas de familiares en el exterior, mismas que se ven cada vez más mermadas por los efectos de la devaluación y la inflación. Aunado a esto, servicios básicos como la electricidad, el gas, el agua, la telefonía y el internet avanzan en un proceso de privatización o de encarecimiento y son una calamidad permanente.

Aunado a esto, los derechos laborales, contractuales y sindicales han sido conculcados a través de mecanismos como el Memorándum 2792 y el instructivo Onapre[14], que hacen parte del programa de ajuste aplicado por el gobierno de Maduro, bautizado con el pomposo nombre de “Programa de Recuperación y Reactivación Económica”. Nada de esto ha cambiado y se prevé que siga así durante el gobierno de Delcy Rodríguez tutelado por Donald Trump.

Otro aspecto que siguen padeciendo los trabajadores vene-

zolanos es la sistemática violación de las libertades democráticas: abundan en las prisiones venezolanas cientos de presos políticos que padecen aislamiento, torturas y violaciones a los derechos más elementales, así como a todas las normas y procedimientos jurídicos establecidos en la legislación. También cientos de dirigentes sindicales, delegados de prevención o trabajadores sin cargos de representación se encuentran detenidos o con procesos judiciales abiertos solo por protestar en defensa de derechos laborales que les han sido transgredidos o por expresar alguna opinión política. Además, la mayoría de los partidos de oposición se encuentran ilegalizados o arrebatados a sus legítimas direcciones, imponiendo el gobierno otras afines a sus intereses.

Los recientes anuncios de ex-carcelaciones de presos políticos realizados por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, se han limitado a presos emblemáticos y dirigentes políticos reconocidos, mientras que una gran cantidad de personas de a pie, detenidas durante las protestas contra el fraude electoral del 28 de octubre de 2024, permanece tras las rejas.

LAS REACCIONES DEL MOVIMIENTO OBRERO Y DE MASAS

La brutal crisis económica que golpea a la economía venezolana desde al menos 2013 y que es descargada sobre los hombros de los trabajadores y las masas populares a través del ajuste antiobrero y antipopular aplicado por el gobierno del depuesto dictador Nicolás Maduro, mantiene a los trabajadores y al pueblo humilde del país en condiciones de pobreza y miseria; esto aunado al deterioro de los servicios básicos como salud, educa-

ción, electricidad, agua, entre otros aumentan la desesperación y la desesperanza del pueblo trabajador venezolano.

Adicionalmente la política entreguista de los recursos minerales y energéticos a transnacionales norteamericanas, chinas y rusas principalmente, entre otras (en menor medida), la grosera corrupción del régimen chavista, factor clave para el surgimiento y enriquecimiento abyecto de la bobili burguesía, la desigualdad social (también se ha incrementado el enriquecimiento de la burguesía tradicional), los salarios miserables, el despotismo de los jerarcas y burócratas gubernamentales, además de las continuas violaciones de las libertades democráticas y los derechos humanos, sociales, sindicales y políticos más básicos, propio esto del carácter dictatorial del régimen, a lo que se le agrega la brutal represión contra el movimiento obrero y de masas. Son todos elementos que han contribuido a que los trabajadores y las masas venezolanas mayoritariamente llegasen a la conclusión de que en Venezuela nada tenían o tienen que defender y celebren la intervención imperialista, viéndola con expectativas de democratización y reivindicación social.

El justificado desprecio al régimen dictatorial chavista y a su política hambreadora, corrupta y represiva, hace que los planteamientos de rechazo a los ataques del gobierno norteamericano contra el país y contra la injerencia del imperialismo en los asuntos políticos internos de Venezuela sean vistos como una defensa al odiado régimen chavista y esto se expresa tanto en la mayoría de la población, como en sectores sindicales y políticos que se reivindican de izquierda e incluso revolucionarios.

El hecho cierto es que la política de ajuste, empobrecedora, corrupta y represiva del gobierno de Maduro y del chavismo, no ha hecho más que cumplir un papel facilitador para los planes injerencistas y la intromisión imperialista que se han desarrollado con una nula resistencia de las masas e incluso con una reivindicación mayoritaria por parte de estas.

Desde la madrugada del sábado 03/01/2026, no se tienen registros de manifestaciones de masas en la calle de manera espontánea e independiente para rechazar los ataques militares yanquis, aunque tampoco para reivindicarlos (creemos que esto último por miedo a la represión y/o a ser detenidos), sin embargo, las redes sociales de la mayoría de los ciudadanos venezolanos, tanto dentro como fuera del país, abundaron en expresiones de celebración.

A primeras horas de la mañana del día del ataque, sectores del oficialismo intentaron movilizar a los denominados “colectivos” armados, así como a parte de su aparato, tanto en la ciudad capital, como en las principales ciudades del país, sin embargo, en todos los lugares, esto no pasó de algunos centenares de militantes y milicianos (grupos de reserva militar), en su mayoría asalariados de organismos públicos centrales, así como de gobernaciones y alcaldías, que son regularmente utilizados para nutrir las movilizaciones gubernamentales.

En el estado Aragua, a una hora de Caracas, la gobernadora convocó a las milicias, a los barrios y a los militares frente a la base aérea de Maracay, que fue bastión antigolpista en 2002. Pasadas las horas y en los días subsiguientes, gobernadores de estados y alcaldes de varios municipios del país con-

vocaron algunas movilizaciones que no pasaron de lo antes descrito.

Ninguna de estas acciones fue acompañada masivamente por trabajadores o habitantes de los sectores populares, ni ha habido manifestaciones de importancia social, ni siquiera los disminuidos sectores de base del chavismo salieron de manera significativa.

Sectores de la burocracia chavista han intentado, mediante su discurso y con las acciones antes descritas, emular la situación actual con la ocurrida en el año 2002, en ocasión del golpe contra el fallecido presidente Hugo Chávez; sin embargo, la situación es completamente diferente.

UNA COMPARACIÓN NECESARIA

Como es conocido, en 2002, un sector de las fuerzas armadas venezolanas, aliado con casi la totalidad de los partidos de la oposición burguesa, ONG's como SUMATE, dirigida por María Corina Machado (con el apoyo financiero y político de George Bush), sectores gerenciales de PDVSA, la mayoría de los grandes medios de comunicación (principalmente los grandes canales de TV y emisoras de radio), Fedecámaras (principal gremio empresarial del país), otros gremios empresariales y la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV – la burocrática principal central sindical del país, dirigida para entonces por el partido Acción Democrática, en la persona de Carlos Ortega) entre otras fuerzas políticas y sociales, llevaron adelante un golpe de estado contra el entonces presidente de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías. Todo esto, impulsado y respaldado políticamente, logísticamente y financieramente por el imperialismo



norteamericano, bajo el gobierno de George W. Bush, presidente de los Estados Unidos en aquel momento.

Luego de semanas de presiones, marchas, masivas movilizaciones y concentraciones en las calles, principalmente de Caracas, aunque también de otras importantes ciudades del país, finalmente el día once de abril, una masiva marcha opositora fue dirigida al Palacio de Miraflores con la pretensión de ocuparlo, esto produjo enfrentamientos, a la altura de Puente Llaguno, entre sectores de la policía metropolitana y grupos armados aliados al golpe de Estado en curso, con sectores afectos al gobierno que defendían el palacio, dejando como resultado un saldo importante de heridos y fallecidos. Mientras esto ocurría sectores de las fuerzas armadas, vinculados a la intentona golpista secuestraron a Chávez, trasladándolo a la isla de la Orchila, horas después, ya en la

madrugada del día doce de abril, el para entonces General en Jefe del Ejército, Lucas Rincón Romero, aparecía en los medios televisivos anunciando que, en nombre del Alto Mando Militar venezolano, habían solicitado la renuncia a Chávez y que éste había aceptado.

«Los miembros del Alto Mando Militar de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos ocurridos en la ciudad capital el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor Presidente de la República la renuncia a su cargo, la cual aceptó. Los integrantes del Alto Mando ponen sus cargos a la orden, los cuales entregaremos a los oficiales designados por las nuevas autoridades». (12-04-2002 hs. 03:20 a. m. Inspector General del Ejército Lucas Rincón Romero) [15]

El golpe se había concretado. Pedro Carmona Estanga, para entonces presidente del gremio pa-

tronal Fedecámaras, fue investido y juramentado como presidente de la República ante el parlamento nacional, donde realizó una serie de anuncios al país.

Luego de unas primeras horas de desconcierto, las masas trabajadoras y populares del país comenzaron a reaccionar; sectores sindicales, barriales, populares, estudiantiles, entre otros, comenzaron a ocupar las calles de las principales ciudades del país y a recorrer los barrios y localidades para explicar la invalidez de la supuesta renuncia de Chávez y llamar a la gente a las calles para exigir que fuese traído de vuelta. Tales llamados resultaron en masivas movilizaciones en las principales ciudades del país, en Caracas la población de los barrios más populosos ocupó el centro de la ciudad y rodeó las inmediaciones del Palacio de Miraflores exigiendo el regreso de Chávez, ante esto la dirigencia chavista comenzó a reaparecer y a ocupar sus puestos de gobierno, la tropa y la media y baja oficialidad se puso de lado de las masas, no reprimió, aplaudía y alentaba las movilizaciones alrededor del palacio, los altos oficiales afectos al gobierno reaparecieron y asumieron el mando de las tropas, la presión popular hizo huir en estampida del Palacio de Miraflores a la dirigencia golpista y factores aliados, el para entonces presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello fue investido presidente a finales del día doce de abril y ya en la madrugada del día trece de abril, Chávez fue traído de vuelta y reinstalado en su cargo de presidente de la República.

Enormes diferencias existen entre aquel momento y el actual, fundamentalmente, para entonces Chávez, más allá de las diferencias que, desde su elección en 1998, tu-

vimos tenido con él y su gobierno, era un presidente legítimamente electo y así era percibido por las masas, contaba además, y en consecuencia de esto con un enorme prestigio y respaldo del movimiento de masas, mayoritariamente de los sectores populares, pero también de sectores de considerable peso en el movimiento sindical y estudiantil. Esto explica las movilizaciones masivas para derrotar el golpe y devolverlo a la presidencia.

Nada de esto ocurre con Maduro hoy; al contrario, este es un presidente fraudulento que fue derrotado en el último proceso electoral presidencial y ocupó el cargo desconociendo la voluntad de las masas, de una amplísima mayoría de la población venezolana y de factores políticos en el país. Maduro no cuenta con ningún respaldo popular, y de ahí que las masas y la clase trabajadora no se movilicen en su defensa.

TOTAL EL RECHAZO A LA INTERVENCIÓN IMPERIALISTA, NINGÚN RESPALDO POLÍTICO A MADURO Y AL RÉGIMEN CHAVISTA

El rechazo que expresamos sectores de vanguardia, en su mayoría organizaciones de izquierda y revolucionarias, contra la intervención imperialista en Venezuela e incluso contra el secuestro de Maduro y su esposa, Cilia Flores, no puede ser confundido con un respaldo político a este. Al contrario, denunciamos su carácter propatronal, enemigo de los trabajadores, dictatorial, corrupto y entreguista.

Lo que defendemos es la soberanía venezolana, que está siendo atacada por el imperialismo norteamericano en un nivel de colonialismo infinitamente superior

al entreguismo de Maduro hacia ella. Denunciamos el secuestro de Maduro como un acto de injerencismo por parte de los EE.UU. que se abroga el derecho a decidir sobre los destinos políticos de Venezuela y a imponer gobiernos en este país, estamos en contra de eso en este y en cualquier país del mundo, los destinos políticos de los países y sus gobiernos los deben decidir sus propios pueblos no tiene Estados Unidos ningún derecho ni autoridad política ni moral para inmiscuirse en esto y menos por la vía de las armas. En consecuencia, rechazamos y denunciamos también el pacto colaboracionista para imponer el gobierno de Delcy Rodríguez y el tutelaje impuesto por el gobierno de Trump sobre la dirección política y económica del país.

Rechazamos la estrategia del imperialismo norteamericano de reinaugurar la “diplomacia de las cañoneras”, así como sus pretensiones coloniales continentales y hemisféricas expuestas en el Documento de Seguridad Nacional de EE.UU. de 2025.

UNA POLÍTICA Y UN PROGRAMA PARA ENFRENTAR LOS PLANES IMPERIALISTAS Y EL COLABORACIONISMO GUBERNAMENTAL

Como hemos dicho a lo largo de este artículo, existe un pacto de tutelaje – colaboracionismo entre el imperialismo norteamericano y el régimen chavista, ahora con Delcy Rodríguez a la cabeza, que ha convertido al chavismo de un régimen entreguista, con roces con el imperialismo norteamericano, a uno totalmente colaboracionista con este último. Esto hace impensable e imposible cualquier tipo de unidad política con dicho régimen

para enfrentar los planes del imperialismo estadounidense.

Este pacto arranca del objetivo de profundizar el saqueo de nuestro petróleo y recursos, que ha sido desde siempre el objetivo de Donald Trump, como máximo representante del principal imperialismo del planeta. Además, dicho pacto se enmarca en una estrategia más general de profundizar el control político, geopolítico, económico y militar de todo el continente latinoamericano y del hemisferio occidental.

La tarea, entonces, que se nos impone en Venezuela es la de construir una amplia unidad de acción con los sectores que se oponen al intervencionismo yankee, a sus pretensiones coloniales en el país, y adversamos al régimen chavista, que no damos ningún apoyo político a este régimen ni cuando estuvo encabezado por Maduro ni ahora por Rodríguez, para derrotar dichas pretensiones coloniales en el país, pero también a nivel continental y hemisférico.

Consideramos que un programa para derrotar este pacto y esta política del imperialismo norteamericano pasa por rechazar categóricamente los ataques imperialistas contra Venezuela y la intromisión en los asuntos políticos del país, defender el derecho soberano de Venezuela a darse su propio gobierno.

Igualmente, se deben rechazar los recientes acuerdos petroleros que profundizan la entrega de nuestro petróleo y recursos energéticos por parte del chavismo a EE.UU., así como el saqueo y la rapiña del gobierno de este país imperialista sobre los mismos. Rechazar desde ya la posible extensión de estos acuerdos a otros sectores, como el de minerales.

Es preciso nacionalizar la industria petrolera al 100%, poniendo

fin a los acuerdos de empresas mixtas con las transnacionales y expulsando a las mismas del negocio petrolero. Fuera Trump y las transnacionales del negocio petrolero.

El no pago de la deuda externa debe ser también una consigna central de este programa, al igual que rechazar la intervención de la banca privada norteamericana en el manejo de los recursos y las operaciones financieras de la nación.

Aunado a esto, se debe exigir el aumento del salario mínimo y de las pensiones al nivel de la canasta básica, indexados al aumento de esta y de la inflación, el fin de la bonificación del salario, así como la derogación del memorándum 2792 y del instructivo Onapre, y la restitución de todos los derechos laborales, contractuales, sindicales y sociales conculcados.

Por la restitución y respeto de las libertades democráticas, políticas y sindicales; cese a la represión, no a la criminalización de la protesta laboral y social; respeto al derecho a manifestarse políticamente; y legalización de los partidos y organizaciones políticas hoy proscritos por la dictadura.

Libertad inmediata y plena de todos los presos políticos y de todos los activistas sindicales, sociales y populares detenidos por luchar en defensa de sus derechos, y libertad para todos los detenidos por las protestas del 28, 29 y 30 de octubre de 2024. No a las excarcelaciones por goteo ni a los mecanismos de puerta giratoria [16].

Armas para los trabajadores para enfrentar la agresión bélica imperialista.

No a la colonización de Venezuela: derrotemos las pretensiones colonizadoras de Donald Trump y del imperialismo yankee en el país, en América Latina y en el hemisferio occidental.

Fuera Trump y el imperialismo yankee de Venezuela y de Latinoamérica. ■

NOTAS

[1] La última había sido a finales de 1989, exactamente a partir del 17 de diciembre de 1989, cuando tropas norteamericanas ocuparon Panamá. Luego de trece días de ocupación, el entonces presidente del país, Manuel Noriega, fue capturado, trasladado a EE.UU. y juzgado por cargos de narcotráfico.

[2] <https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/ee-uu-declara-el-regreso-de-la-doctrina-monroe-IL18643694>

[3] <https://revistaopera.operamundi.uol.com.br/2025/12/19/anova-estrategia-nacional-de-seguranca-de-trump/>

[4] La incompetencia y la traición explican la falta de resistencia de Venezuela ante EE. UU.

https://noticias.uol.com.br/opiniaocoluna/2026/01/05/incompetencia-e-traicao-explicam-nula-resistencia-da-venezuela-aos-eua.htm?utm_source=whatsapp-network&utm_medium=compartilhar_conteudo&utm_campaign=organica&utm_content=geral

[5] ¿Quién entregó a Maduro? https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/quien-entrego-a-maduro/

[6] Idem

[7] La incompetencia y la traición explican la falta de resistencia de Venezuela ante EEUU.

https://noticias.uol.com.br/opiniaocoluna/2026/01/05/incompetencia-e-traicao-explicam-nula-resistencia-da-venezuela-aos-eua.htm?utm_source=whatsapp-network&utm_medium=compartilhar_conteudo&utm_campaign=organica&utm_content=geral

n=organica&utm_content=geral

[8] Venezuela transferirá 50 millones de barriles de petróleo a EEUU.

<https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2026/01/06/delcy-entre-gara-50-milhoes-de-barris-de-petroleo-aos-eua-diz-trump.htm?cmpid=copiaecola>

[9] PDVSA confirma la negociación con Estados Unidos.

[10] <https://www.politico.com/news/2026/01/05/trump-venezuela-oil-fields-00710893>

[11] <https://t.me/jhorman-cruznoticias/72751>

[12] <https://serviciodeinformacionpublica.com/>

[13] Inflación en Venezuela supera 500% ante mayor presión de Donald Trump <https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/venezuela/inflacion-en-venezuela-supera-500-ante-mayor-presion-de-donald-trump/>

[14] El memorándum 2792, deja las manos libres a los patronos públicos y privados para modificar condiciones laborales y eliminar beneficios establecidos a discreción y según su conveniencia, por su parte el instructivo Onapre, elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto, rebajó la base de cálculo para primas y bonificaciones, la cual pasó de ser el salario efectivamente percibido por los trabajadores de acuerdo a la escala salarial, al salario mínimo; igualmente estableció tablas salariales que tienden igualar hacia abajo los salarios de los trabajadores de la administración pública.

[15] https://es.wikipedia.org/wiki/Lucas_Rinc%C3%B3n_Romero

[16] Nombre dado a la práctica de que, conforme se libera a unos presos políticos, se detiene a otros.

LA NUEVA POLÍTICA DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO HACIA AMÉRICA LATINA

EDUARDO ALMEIDA Y FLORENCE OPPEN
FEBRERO 9, 2026

En noviembre de 2025, el gobierno de Trump publicó el documento “Estrategia de Seguridad Nacional”, en el que anunció los nuevos fundamentos estratégicos de la acción imperialista en este periodo para imponer su hegemonía en el “hemisferio occidental”. Este plan no es ninguna sorpresa, ya que Trump, en su discurso de inauguración, anunció que “los EE. UU. volverán a considerarse como una nación en crecimiento —que aumenta nuestra riqueza, expande nuestro territorio, construye nuestras ciudades, eleva nuestras expectativas y lleva nuestra bandera a nuevos y bellos horizontes.”

En este artículo queremos enfocarnos en las consecuencias de esta nueva política para América Latina, que se concretó de manera brutal con la invasión y el secuestro de Maduro a principios de enero de 2026. Con esa agresión, el gobierno de los EE. UU. retomó la práctica de las invasiones militares directas en América Latina, que no se producían desde hacía décadas.

El documento publicado por la Casa Blanca detalla, con el descaro típico de Trump, la estrategia del gobierno de extrema derecha que está al frente de la potencia imperialista aún hegemónica pero decadente, y que busca por todos los medios consolidar una base regional para competir y enfrentar a China. Esta política, a su vez, profundiza cada vez más la crisis del orden imperialista mundial y la polarización social, económica y política.

DE LA DOCTRINA MONROE AL «COROLARIO TRUMP»

El documento reivindica explícitamente la Doctrina Monroe y afirma un «Corolario Trump» a

dicha doctrina. La Doctrina Monroe, anunciada por el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, en 1823, establecía la definición de «América para los americanos». En ese momento, se trataba de una expresión defensiva contra la intervención de los países europeos hegemónicos en América, en un contexto de países recién liberados de la dominación de Inglaterra, España y Portugal.

Posteriormente, esta doctrina fue cambiando de carácter, expresando la transformación del país en un imperialista, con una postura ofensiva y intervenciones militares a finales del siglo XIX y principios del XX. La guerra hispanoamericana de 1898 marcó ese giro. EE. UU. no solo se apoderó de las antiguas colonias españolas (Guam, las Filipinas, Puerto Rico) e impuso un protectorado en Cuba, sino que también anexó Hawái, inició la exploración de lo que sería el canal de Panamá y, en los meses siguientes, adquirió más de 7,000 islas en el Pacífico, a más de 10,000 km de distancia de California, estableciendo una presencia militar en la región de más de 100,000 tropas.

En 1904, el «corolario Roosevelt» (presidente Theodore Roosevelt) de la doctrina Monroe defendía sin rodeos una política imperialista agresiva, apodada «Big Stick» (gran garrote). Esta política se expresó en las sucesivas intervenciones militares para el control del Canal de Panamá entre 1903 y 1925, así como en las más de 6 intervenciones en Honduras entre 1903 y 1925, y en las ocupaciones militares en Nicaragua (1912-33), Haití (1915-34) y la República Dominicana (1916 y 1924). Con este giro, EE.UU. inició su campaña ideológica para postularse como un “poder policial internacional”, con la potestad moral y militar para reprimir las



“malas conductas” de los demás gobiernos y defender los valores de la “civilización” cristiana y de la democracia liberal.

Estados Unidos se convirtió en hegemónico después de la Primera Guerra Mundial, en la que entró al final, asociado al imperialismo inglés (hasta entonces hegemónico). Estados Unidos se aprovechó de su proceso expansivo y de no haber sufrido grandes pérdidas en la guerra.

El imperialismo estadounidense consolidará su hegemonía mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, fueron clave los acuerdos de Yalta y Potsdam, un pacto contrarrevolucionario de EE. UU. con la burocracia soviética de Stalin que garantizó la hegemonía estadounidense.

Durante más de 5 décadas, la hegemonía económica de Estados Unidos se basó en su dominio tecnológico, financiero y militar. Sus oligopolios industriales utilizaban ideologías como el

«libre comercio» para exponer las frágiles industrias de otros países a su dominio. El «estilo de vida americano», difundido por Hollywood y la democracia burguesa norteamericana, era la base de la dominación política e ideológica. Las instituciones económicas y financieras internacionales, como el FMI y la OMC, operaban a nivel internacional como expresión de la hegemonía económica estadounidense.

El acuerdo de Yalta y Potsdam, junto con el papel de la burocracia estalinista, aseguró innumerables derrotas en las grandes luchas de la posguerra. Aun así, algunas revoluciones fueron victoriosas y generaron nuevos estados obreros, pronto burocratizados, como Yugoslavia, China, Cuba y Vietnam.

La combinación entre el freno de las direcciones y el desvío de las revoluciones hacia la democracia burguesa nunca fue una política exclusiva del impe-

rialismo. Cuando esto no era suficiente, el imperialismo recurría a golpes de Estado e invasiones militares. En las décadas de 1960 y 1970, el gobierno de los Estados Unidos promovió innumerables golpes de Estado en América Latina, como los ocurridos en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y otros países.

En las décadas de los 80 y 90, la globalización, los planes neoliberales y la restauración del capitalismo en los antiguos estados obreros hicieron posible un nuevo ascenso del capitalismo. Entonces se impusieron los planes neoliberales, la apertura de las fronteras económicas de los países y la formación de cadenas internacionales de valor.

China y Rusia, tras restaurar el capitalismo, se integraron de forma subordinada a la curva ascendente del imperialismo. Pero luego, en este siglo, se convirtieron en nuevas potencias imperialistas emergentes.



EE. UU. BUSCA FRENAR LA PENETRACIÓN DE CHINA EN LA REGIÓN

Desde principios del siglo XXI, el imperialismo norteamericano ha mostrado signos crecientes de decadencia. Si bien sigue siendo la potencia imperialista hegemónica en los ámbitos económico, financiero, tecnológico y militar, su hegemonía ha ido disminuyendo, perdiendo importantes espacios económicos, en particular frente a China. Desde 2010, China ha superado a Estados Unidos en producción industrial y hoy representa el 31,8 % del PIB industrial mundial. En la lista de las 500 mayores empresas del mundo de la revista Fortune Global de 2025, las empresas chinas (147) ampliaron su ventaja sobre las estadounidenses (134) por quinto año consecutivo.

El documento Estrategia de Seguridad Nacional respondió

a esta realidad. El imperialismo estadounidense sigue siendo hegemónico, pero está en decadencia y su hegemonía se va disminuyendo. Lejos de abandonar la lucha por la hegemonía mundial, el «corolario Trump» de la Doctrina Monroe es una expresión agresiva, el «Big Stick» del imperialismo hegemónico decadente para recomponer su dominio global frente al imperialismo chino en ascenso.

Si bien América Latina no es el lugar donde China acumula la mayoría de sus inversiones y disputa por la hegemonía, como lo son Asia del Suroeste y África, la inversión de China en la región que los EE. UU. consideraban su patio trasero; ha dado un salto cualitativo en las dos últimas décadas.

En primer lugar, los lazos comerciales de la región con el gigante asiático han aumentado: «En el año 2000, el mercado

chino representaba menos del 2 % de las exportaciones de América Latina, pero el rápido crecimiento de China y la demanda resultante impulsaron el posterior auge de las materias primas en la región. Durante los ocho años siguientes, el comercio creció a una tasa anual del 31 %. En 2021, el comercio superó los 450 000 millones de dólares, una cifra que, según los medios de comunicación estatales chinos, creció hasta alcanzar un récord de 518 000 millones de dólares en 2024, y algunos economistas predicen que podría superar los 700 000 millones de dólares en 2035.»

Obviamente, se trata de un comercio altamente desigual que beneficia al imperialismo asiático: mientras América Latina exporta soja y otros productos vegetales, productos cárnicos, cobre, petróleo, litio y otros minerales clave para el desarrollo chino, la región importa produc-

tos manufacturados de alto valor añadido, proporcionando así un mercado para la industria china y arruinando la industria nacional en la región. En este marco, Beijing ya logró imponer acuerdos de libre intercambio con 5 países: Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Perú. En el caso de algunos países, como Chile, la dependencia comercial con China es muy significativa, ya que en 2023 el 38% de sus exportaciones totales fueron a ese país.

Más allá del comercio desigual, China ha aumentado su inversión directa (\$8 500 millones en 2024) en los más de 20 países latinoamericanos que ha incorporado a la Ruta de la Seda (BRI). Dicha inversión se centra en sectores estratégicos, como los recursos energéticos, o en infraestructuras de “uso doble” (comercial y militar) que preocupan cada vez más a Washington. Es ya sabida la inversión estratégica de China en el Triángulo del Litio (Chile, Bolivia, Argentina), ya que la región alberga entre el 60% y el 70% de las reservas mundiales de litio, esenciales para las baterías eléctricas. Entre 2018 y 2024, las multinacionales mineras chinas han invertido más de \$16.000 en su explotación. En Argentina, China es propietaria o socia de seis de los dieciséis proyectos de litio activos, incluidos cuatro de los más avanzados. En 2023, un consorcio chino (CATL, BRUNP, CMOC) cerró un acuerdo por valor de 1000 millones de dólares para construir plantas de carbonato de litio en los salares de Uyuni y Coipasa en Bolivia, el primer proyecto comercial de litio liderado por extranjeros en el país. Se estima que las empresas chinas controlan casi el 40 % de la producción mundial de litio a

través de sus operaciones en Sudamérica.

China tiene hoy inversiones y el control total o parcial de más de 40 puertos en la región, algunos en sectores estratégicos clave, como el puerto de Abaco, en las Bahamas (cerca de Florida), o el del Beagle Channel, en Argentina, en el Antártico. A esto se suman la docena de instalaciones satelitales chinas y el hecho de que China proporciona equipamiento militar a varios países. Es el caso de Venezuela, por ejemplo, que tenía un embargo a la compra de armas por parte de los EE. UU. desde 2006, pero también el de Argentina, Bolivia, Ecuador o Cuba.

Además, desde 2005 los monopolios bancarios chinos han prestado más de \$120.000 millones a los países latinoamericanos. De especial relevancia son los préstamos solicitados por Venezuela, el principal acreedor de China en la región, que ha recibido casi \$60,000 millones en préstamos, más del doble que Brasil, el segundo acreedor. También hay que resaltar el último crédito SWAP de \$5,000 millones que Milei, en Argentina, contrató con China en abril de 2025, a pesar de su infeudación a Trump.

TRUMP BUSCA IMPONER GOBIERNOS TÍTERES EN LA REGIÓN

El documento explica la estrategia de imponer gobiernos títeres en el hemisferio occidental para lograr sus objetivos económicos y militares:

«Queremos garantizar que el hemisferio occidental siga siendo razonablemente estable y esté lo suficientemente bien gobernado como para prevenir y desalentar la migración masiva a Estados

Unidos; queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que siga libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que apoye las cadenas de suministro críticas; y queremos garantizar nuestro acceso continuo a lugares estratégicos clave. En otras palabras, afirmaremos y aplicaremos un «corolario Trump» a la Doctrina Monroe.»

Y el caso de Venezuela es, en este momento, el foco central de esta política. Contrariamente a lo que difunde la propaganda estalinista, Maduro ha sido un gobierno entregado al imperialismo norteamericano. Chevron seguía presente, con toda su fuerza, en la explotación del petróleo venezolano. De hecho, en octubre del 2025, Maduro, según un reportaje del New York Times, ofreció “abrir todos los proyectos petroleros y auríferos existentes y futuros a las empresas estadounidenses, otorgar contratos preferenciales a las empresas estadounidenses, revertir el flujo de las exportaciones petroleras venezolanas de China a Estados Unidos y recortar los contratos energéticos y mineros de su país con empresas chinas, iraníes y rusas” a cambio de permanecer en el poder. Pero Trump no aceptó porque su objetivo no es solo el petróleo, sino también implementar una estrategia de seguridad nacional más global. El gobierno de Maduro, a pesar de ser proimperialista, no era un gobierno títere, sino que reflejaba los intereses contradictorios y oportunistas de la boliburguesía corrupta construida a partir del Estado. Trump,

al contrario, quiere un gobierno completamente sometido a sus intereses en la región y, por eso, invadió y secuestró a Maduro.

Esta invasión puede abrir la puerta a que se repita en otros países, como Colombia, Cuba u otros. Y supone una grave amenaza para los nuevos procesos revolucionarios de la región.

El significado de «reclutar y comprometer» a gobiernos aliados es muy preciso: no basta con los gobiernos burgueses proimperialistas; se necesitan gobiernos títeres de extrema derecha. Como lo afirma el documento:

«La política estadounidense debe centrarse en reclutar a líderes regionales capaces de contribuir a crear una estabilidad tolerable en la región, incluso más allá de las fronteras de esos socios. Estas naciones nos ayudarían a detener la migración ilegal y desestabilizadora, neutralizar los cárteles, fomentar la fabricación cercana a la costa y desarrollar las economías privadas locales, entre otras cosas. Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que estén ampliamente alineados con nuestros principios y nuestra estrategia. Pero no debemos pasar por alto a los gobiernos con perspectivas diferentes, con quienes, no obstante, compartimos intereses y que quieren trabajar con nosotros.»

Para ello, Trump utiliza abierta y cínicamente la presión económica, condicionando los préstamos a las victorias electorales de sus aliados, como Milei en Argentina y Nasry Asfura (del Partido Nacional, en Honduras).

Es innegable que Trump ha obtenido resultados con esta política. Aprovechando los desastres cometidos por los gobiernos de

colaboración de clases, como los de Xiaomara (Honduras), Boric, Petros y otros, la ultraderecha está avanzando mucho en América Latina. Ya cuenta con los gobiernos de Milei (Argentina), Kast (Chile), Bukele (El Salvador) y Asfura (Honduras), y con la victoria en las elecciones de 2026 en Colombia.

El caso de Lula en Brasil es diferente. Se trata de un gobierno proimperialista, con el que Trump negocia bajo la presión de su propia base burguesa estadounidense, rebelada por las consecuencias negativas de la guerra arancelaria. Aun así, Trump ayudará a construir una alternativa de derecha pos-Bolsonaro para intentar derrotar a Lula en 2026.

Algo similar ocurre con Sheinbaum (México), que se ha adaptado por completo a la presión de Trump, ya que la economía mexicana está totalmente subordinada a su relación con EE. UU.: alrededor del 80 % de las exportaciones de México, el 55 % de sus importaciones y el 41 % de su inversión extranjera directa dependen de Estados Unidos.

En este contexto, es imprescindible luchar en todos los países latinoamericanos contra esta nueva agresión de Trump, que busca anexarse el continente. Para ello, es importante que todos los partidos que realmente luchan por el socialismo levanten un programa por la Segunda Independencia de América Latina que plantee enfrentar a todos los imperialismos, tanto al estadounidense como a los europeos y al imperialismo chino que se presenta como “amigo”. Debemos buscar la más amplia unidad de acción que logre movilizar a la clase trabajadora y sus aliados, como los pueblos indígenas, contra las intervenciones

militares, como la de Venezuela, contra los proyectos extractivistas o de sobreexplotación, y contra los demás ataques a la soberanía nacional, como el endeudamiento y los acuerdos comerciales desiguales, sea quien sea el imperialismo que los propone e impone. Una vez más, debemos mostrar que sólo una salida independiente de la clase trabajadora puede lograr una verdadera independencia que garantice los derechos sociales y políticos de la clase trabajadora y pare la destrucción del medio ambiente.

EL «COROLARIO TRUMP» EN LA POLÍTICA: BONAPARTISMO, ULTRADERECHA Y XENOFOBIA

Trump, para imponer su plan en Estados Unidos y en el mundo, necesita el bonapartismo: la política descarnada del imperialismo decadente. Una de las principales diferencias entre la Doctrina Monroe de inicios del siglo 20 y la política de Trump hoy es que ya no se disfraza con el falso discurso “civilizador” que utilizaron los colonialismos del siglo pasado, que buscaban defender una moral y una legalidad universales y promovían un relato de prosperidad, modernidad y progreso. Hoy Trump busca someter a otros países con el discurso de “EE. UU. primero”, y asumiendo desencarnadamente que sobrepone sus propias necesidades económicas a las de otras naciones, simplemente porque tiene la relación de fuerzas para hacerlo.

Trump es un gobierno bonapartista en Estados Unidos, en choque con el régimen democrático burgués, que quiere convertirlo en un régimen autoritario



bonapartista. Está en conflicto permanente con la justicia. Envía tropas a los estados gobernados por los demócratas. Ha reforzado enormemente la Guardia de Frontera (ICE) para la represión de los inmigrantes.

En el mundo, Trump sigue un camino similar: deja de lado las instituciones internacionales y los acuerdos que antes expresaban la dominación imperialista (ONU, OMC, FMI) y recurre a la fuerza para imponer su dominio. Los valores de la democracia burguesa, el «estilo de vida americano», han quedado atrás. La dominación se ejerce mediante la fuerza militar, la presión económica directa y el bonapartismo.

La crisis del orden imperialista mundial se va estrechan-

do cada vez más en torno a dos bloques: uno directamente subordinado al imperialismo norteamericano y otro que se está formando en torno a China.

Al mismo tiempo, en los países se afirma una tendencia creciente al bonapartismo, lo que profundiza la crisis de la democracia burguesa. No sólo eso, el documento expresa explícitamente el apoyo directo al crecimiento de la extrema derecha a nivel mundial:

«Nuestros objetivos para el hemisferio occidental pueden resumirse en «reclutar y expandir». Reclutaremos a amigos consolidados en el hemisferio para controlar la migración, detener el flujo de drogas y reforzar la estabilidad y la seguridad en tierra

y en mar. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevas alianzas, al tiempo que reforzamos el atractivo de nuestra propia nación como socio económico y de seguridad preferido del hemisferio».

Para ello, Trump utiliza todos los recursos del Estado estadounidense, incluyendo la presión económica, política y militar. Pero no debe pasarse por alto la base ideológica y política, común a toda la ultraderecha. Esto incluye la lucha contra la inmigración, tan importante para la ultraderecha en los países imperialistas:

«La era de la migración masiva ha terminado: quiénes son admitidos en las fronteras de un país, en qué número y de dónde

proceden, definirá inevitablemente el futuro de esa nación.”

“Cualquier país que se considere soberano tiene el derecho y el deber de definir su futuro. A lo largo de la historia, las naciones soberanas prohibieron la migración descontrolada y rara vez concedieron la ciudadanía a extranjeros, quienes además tenían que cumplir con criterios muy exigentes. La experiencia de Occidente en las últimas décadas confirma esta sabiduría perdurable. En países de todo el mundo, la migración masiva ha agotado los recursos nacionales, aumentado la violencia y otros delitos, debilitado la cohesión social, distorsionado los mercados laborales y socavado la seguridad nacional. La era de la migración masiva debe terminar.”

Del mismo modo, difunde ideologías, como la «guerra contra el narcotráfico», que se vinculan a la explotación electoral de la extrema derecha del tema de la violencia urbana, tan bien capitalizada por gobiernos como los de Bukele (El Salvador) y Noboa (Ecuador), y por toda la extrema derecha latinoamericana. En Brasil, la extrema derecha se hace eco de Trump y promueve la calificación de los delincuentes comunes como «terroristas».

El documento defiende otro punto ideológico fundamental para la extrema derecha, tanto en los países imperialistas como en los semicoloniales (como los latinoamericanos, por ejemplo), que es la defensa de la opresión contra las mujeres, los negros y las personas LGBTQ.

Este conjunto ideológico puede tener una importancia política fundamental para unificar a la extrema derecha internacional alrededor de Trump y debilitar la conciencia antiimperialista, pro-

ducto de las acciones del gobierno de Trump contra los países latinoamericanos, por ejemplo. Esta es una hipótesis que puede o no confirmarse en el próximo período.

Es importante señalar que los llamados “gobiernos burgueses de colaboración de clases”, también denominados “progresistas”, tienen una responsabilidad directa en la ascensión de la ultraderecha. La aplicación de planes neoliberales contra las masas por parte de esos gobiernos provoca un desgaste que aprovecha la ultraderecha.

El caso del régimen chavista es una expresión particular de ese proceso, porque no era de colaboración de clases, sino una dictadura burguesa odiada por las masas y originada por la “izquierda”. Las encuestas posteriores a la invasión muestran que la mayoría de la población latinoamericana, inclusive en Venezuela, apoya el derrocamiento de Maduro por el imperialismo norteamericano, lo que evidencia el retroceso de la conciencia antimperialista.

Es esencial que las organizaciones de la clase trabajadora hagan suyas las reivindicaciones por los derechos de los migrantes y de los pueblos indígenas e originarios a su soberanía nacional, combatan activamente el racismo y la xenofobia, y luchen por defender y ampliar los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Es tarea de los socialistas revolucionarios buscar la combinación de las luchas por los derechos democráticos con la lucha por el socialismo, y la necesidad de que sea nuestra clase la que llegue al poder.

LAS CONSECUENCIAS DE LA AGRESIÓN A VENEZUELA PARA CUBA

La crisis de la economía cubana se agrava cada día que pasa, y

después de la destitución forzada de Maduro por los EE. UU., la isla podría sumirse en un caos social. Según las estadísticas del gobierno, en los últimos 5 años, más de un millón de cubanos (10% de la población), la mayoría jóvenes, emigraron al extranjero en busca de mejores condiciones de vida. Desde 2020, el PIB del país cayó 11 %, la red energética se está desintegrando y los salarios son muy bajos. Fuera de La Habana, donde viven los sectores de la burguesía extranjera y de la burguesía nacional incrustada en el aparato de Estado cubano, los cortes de electricidad, de hasta 18 horas diarias, son comunes. Es obvio que las nuevas sanciones impuestas por Trump en 2019 han contribuido grandemente a ahogar a la isla, con fuertes restricciones a los viajes y al envío de remesas de los inmigrantes cubanos en EE. UU.

En este contexto, el nuevo control que Trump ejerce sobre lo que queda del régimen chavista, a cargo de Delcy Rodríguez, puede provocar el colapso económico total de Cuba. Cuba necesita 100.000 barriles de petróleo diarios para garantizar el funcionamiento mínimo de su economía, y solo logra producir un cuarto de ese volumen. Si bien Venezuela, hace una década, le enviaba el restante, hoy sólo envía 35.000 barriles al día, en parte por las presiones de EE. UU., y en parte, por la frustración del régimen chavista, que no lograba recibir los pagos a tiempo. Lo mismo pasa con México, que enviaba 22.000 b/d, pero bajó sus envíos a 7.000 b/d a finales de 2025. La política criminal de Trump es clara, ya que escribió el 11 de enero en su red social: “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, ¡NADA!!

Frente a las amenazas de

Trump, es fundamental oponerse rotundamente a cualquier intervención de EE. UU. en Cuba y exigir el fin inmediato de las sanciones y del bloqueo económico contra la isla. Construir la mayor unidad de acción posible de nuestra clase contra el ataque a Venezuela y un posible ataque a Cuba no implica dar ningún tipo de apoyo político a los gobiernos de Rodríguez o de Díaz-Canel. Al contrario, en Cuba, como en Venezuela, nuestra solidaridad política y material es con el pueblo que se moviliza por sus derechos, y nuestro objetivo es lograr que se organice de manera independiente del gobierno y de cualquier injerencia de los imperialismos extranjeros, para postularse como una alternativa de clase, independiente y democrática, que pueda avanzar hacia un verdadero socialismo.

LAS CONTRADICCIONES DE LA “DONROE DOCTRINE”

Si bien el gobierno de Trump está decidido a ejercer con firmeza la dominación despótica sobre el continente, ello no significa que el triunfo de su política esté garantizado. Por un lado, esta nueva política se encontrará con la resistencia de las masas; por otro, deberá lidiar con limitaciones inherentes, es decir, lo que podemos llamar los “corolarios ocultos” de esta doctrina imperialista.

Primero, hay que considerar que la explotación del petróleo en Venezuela no es una tarea fácil ni automática. La producción de petróleo de Venezuela está en caída: a finales de los 90 se producían 3,5 millones de barriles diarios y hoy apenas 800.000. Los analistas afirman que se necesitan al menos 5 años de inversiones masivas para recuperar una producción equivalente. La consultora Rystad

Energy, por ejemplo, afirma que se necesitarían al menos \$53,000 millones durante los próximos 15 años para aumentar la producción a 1,1 bpd. Para ser rentable, la operación que hoy Trump vende como fácil y rápida requiere asegurar tanto la inversión económica como el control político del país durante, al menos, las dos próximas décadas. Muchos de los yacimientos petroleros ya habían sido concedidos a China mediante contratos legales, y estas multinacionales imperialistas van a exigir que sus derechos sean reconocidos o que sean indemnizadas.

También no basta con invertir en el petróleo y los recursos mineros para lograr expulsar a China de la región. De hecho, como hemos mostrado, China ha logrado insertarse en las cadenas de producción del continente y en los sectores energéticos y de infraestructura digital. Para lograr “reconquistar” el continente, EE. UU. va a necesitar invertir mucho más que sólo en los sectores que le convengan y proponerse como alternativa económica en otros sectores.

Segundo, esta repetición de Monroe no ocurre en un vacío histórico. Al contrario, los EE. UU. ya tienen la experiencia de la dificultad de mantener una dominación económica y militar sobre otros territorios: una vez uno se entrometer, acaba también entrometido, lo que conlleva destinar recursos a la dominación neocolonial. El primer caso que mostró el coste de tal política fue el de las Filipinas, porque, si bien la administración de McKinley pensó que instalar un gobierno títere en el país garantizaría su control, pronto se dio cuenta de que los EE. UU. no podían simplemente retirar sus tropas y mantener un gobierno

afín. De hecho, los EE. UU. tuvieron que mantenerse ahí durante décadas y las Filipinas solo lograron su independencia en 1946. La misma situación se repitió recientemente con las guerras de Irak y Afganistán, que resultaron en desastres similares.

Tercero, existe un “corolario” nacional: la mayoría de los estadounidenses no apoyan otra guerra prolongada. Encuestas realizadas en enero de 2026 muestran que sólo el 33% de los estadounidenses concuerda con la acción militar diseñada para secuestrar a Maduro, mientras que el 72% teme que dicha intervención lleve a una intervención prolongada en Venezuela. De hecho, el Congreso estadounidense, controlado por el Partido Republicano, ha adoptado medidas para limitar cualquier intervención militar adicional.

Otro riesgo de la profundización de esta política agresiva de EE. UU. hacia el continente americano (y Europa) es que aumente la popularidad de China entre las masas, como factor de equilibrio y desarrollo. Si bien sabemos que China es otra potencia imperialista y saqueadora, el hecho de encontrarse en una dinámica emergente y de poseer más capital para invertir le permite aparecer como la potencia que ofrece “desarrollo económico” a sus aliados semicoloniales, mientras que los EE. UU. sólo ofrecen coerción y opresión.

La contradicción más importante es que va a ampliar la polarización social y política en Latinoamérica, así como en Estados Unidos. El movimiento de masas no está derrotado y, más temprano o más tarde, habrá grandes movilizaciones y, incluso, explosiones revolucionarias. Eso apunta a un periodo más convulsivo de la lucha de clases. ■

LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE EN LA ENCRUCIJADA

A decadência do imperialismo estadunidense e a ascensão da luta de classes global

EDUARDO ALMEIDA (PSTU BRASIL) & ESPI RAMÓ (WV, EEUU)
FEBRERO 9, 2026

El final de 2025 trajo consigo tres importantes documentos estratégicos redactados por los planificadores del imperialismo estadounidense. Se trata de la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) del presidente para 2025, el Informe n.º 83 del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Económica del Consejo de Relaciones Exteriores, titulado «Ganar la carrera por las tecnologías del mañana», y el «Informe anual al Congreso sobre los avances militares y de seguridad que afectan a la República Popular China» del Departamento de Defensa/Guerra.

En conjunto, los tres informes dibujan un panorama en el que la posición internacional del imperialismo estadounidense pasa de un dominio indiscutible a verse obligado a pelear por su lugar en un nuevo orden mundial. Si bien Estados Unidos mantiene su superioridad económica y militar, los grandes avances tecnológicos de China y su control de sectores estratégicos están acortando rápidamente las brechas. Todos los informes apuntan a un sistema económico mundial que se enfrenta al estancamiento y a conflictos cada vez más agudos entre las grandes potencias.

El informe del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), principal think tank del gobierno estadounidense, reconoce que, en todos los países, «cada vez más, la economía y la seguridad nacional han convergido...». Las economías nacionales se ven reforzadas por la inversión estatal y la «política industrial», principalmente en los sectores de armamento y defensa. También se ha producido un fuerte aumento en el uso de restricciones a la exportación desde 2018, lo que indica una mayor agresividad económica.

LA LUCHA POR LA HEGEMONÍA TECNOLÓGICA Y LA IA

En esos documentos se perfilan los 3 ejes de la política económica del imperialismo estadounidense para intentar desesperadamente conservar su hegemonía: el impulso de la competencia tecnológica centrada en la IA, la guerra arancelaria y la reindustrialización de EE. UU. El NSS es claro: «El poder nacional estadounidense depende de un sector industrial fuerte, capaz de satisfacer las demandas de producción tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra». Para ello, propone «reubicar» la producción industrial en el «hemisferio occidental» bajo su dominio y centrarse en «los sectores tecnológicos críticos y emergentes», «en particular en materia de inteligencia artificial, biotecnología y computación cuántica, que impulsen el progreso mundial». Es importante resaltar que esos tres sectores son de «doble uso», es decir, civil o comercial y también militar.

La disputa tecnológica es fundamental para el futuro del imperialismo en general y de los Estados Unidos en particular. De momento, la economía norteamericana presenta una estabilidad precaria porque los precios de las acciones de las «siete magníficas» están al alza, en gran medida gracias a la inversión especulativa en «inteligencia artificial», en la construcción de centros de datos y en tecnologías de vigilancia masiva. Aún no hay confirmación de que esta apuesta tecnológica se incorpore al conjunto de la economía, lo que aseguraría una tasa de ganancias correspondiente. El gigantesco flujo de inversiones hacia la IA



asegura, hasta ahora, el crecimiento del mercado bursátil de Estados Unidos, con récords tras récords. Pero existe una burbuja en torno a la IA, aun mayor que las burbujas de inversión del pasado reciente. Sigue siendo una apuesta, con un enorme potencial y grandes riesgos. A pesar de la importancia de estos grandes monopolios de tecnología avanzada, Estados Unidos se encuentra muy rezagado en materia de inversión, y el resto de los sectores económicos presenta una baja productividad. La producción manufacturera en EE. UU. está a la baja, en parte debido a las políticas arancelarias.

Como detalla el informe del CFR, en los últimos diez años, «el Gobierno chino ha gastado aproximadamente 900 000 millones de dólares en inteligencia artificial, tecnología cuántica y biotecnología, más del triple de lo que el Gobierno estadounidense ha destinado a esas tecnologías durante el mismo periodo».

La competencia con China, una vez más, también es el telón de

fondo de esta carrera tecnológica. El imperialismo estadounidense sigue siendo hegemónico en el ámbito de los semiconductores y la IA, pero China responde de forma agresiva y ha sorprendido al mundo con DeepSeek. China también está muy por delante de Estados Unidos en vehículos eléctricos y baterías de litio, paneles solares y vehículos aéreos no tripulados (drones), e invierte el doble que los EE. UU. en tecnología cuántica.

La política del “Big Stick” en América Latina y Europa, para controlar territorios y recursos, se debe a que China ha tomado una ventaja estratégica al insertarse en las cadenas de valor de los sectores tecnológicos del futuro. Para lograr reindustrializarse y competir con China, EE. UU. debe primero lograr restablecer un lugar privilegiado en los mercados de recursos estratégicos. El CFR afirma que “Estados Unidos depende de China para las tierras raras (70 % en total, 99 % para las tierras raras pesadas), los componentes de centros

de datos y chips (30 % de las placas de circuito impreso [PCB], 60 % de los productos químicos), insumos biotecnológicos y desarrollo de fármacos (80 % de los materiales de partida clave [KSM], 33 % de la capacidad mundial de ingredientes farmacéuticos activos [API], el 80 % de las empresas biotecnológicas estadounidenses tienen al menos un contrato con China) y proveedores únicos de equipos cuánticos (diodos láser, espejos, amplificadores).”

El gobierno de Trump ha autorizado recientemente la exportación de chips de NVIDIA a China, con el argumento del jefe de IA del gobierno, David Sacks, de que ahora el envío de chips de IA avanzados a China desalienta a los competidores chinos, como Huawei, a redoblar sus esfuerzos para alcanzar los diseños de chips más avanzados de Nvidia y AMD. Esto supone un reconocimiento de que el bloqueo estadounidense solo ha reforzado la carrera china hacia la autonomía en el desarrollo de semiconductores.

LA GUERRA COMERCIAL ENTRE CHINA Y EE. UU.

La imposición de aranceles ya forma parte del reconocimiento del declive de Estados Unidos. Antes, el imperialismo podía imponer su hegemonía económica a través del «libre comercio» y, a partir de ahí, utilizaba el Estado estadounidense, así como las instituciones mundiales (ONU, FMI, OMC) para imponer su hegemonía política, militar y financiera.

Hoy en día, el «libre comercio» favorece a China, que consigue en varios ámbitos, como la producción de medios de producción, coches eléctricos, paneles solares y otros, vender productos mejores y más baratos que los de



Estados Unidos. Esta es la base de la guerra arancelaria de Trump, una medida defensiva, típica de las economías más frágiles. El nacionalismo imperialista del gobierno de Estados Unidos es una expresión de su decadencia.

Y eso no ha logrado frenar a China. En 2025, China superó la meta de un billón de dólares en exportaciones en noviembre, un aumento del 21,7 % respecto a 2024. Vendió menos a Estados Unidos y más al resto del mundo. Y los aranceles impuestos por Trump hicieron que las exportaciones chinas a Estados Unidos disminuyeran en casi un 20 %. Pero China redujo sus compras de soya estadounidense y de otros productos y siguió vendiendo tres veces más a Estados Unidos de lo que compraba.

En esencia, los aranceles, como medida defensiva del imperialismo estadounidense, no lograron detener la decadencia del imperialismo. Afectan al comercio mundial, pero no revierten la decadencia.

La política de reindustrialización de Trump en Estados Uni-

dos es una apuesta complicada. Puede funcionar parcialmente si logra repatriar la producción de semiconductores y los centros de datos asociados a la disputa por la inteligencia artificial. Pero Estados Unidos no está en condiciones de revertir la globalización en su conjunto, porque tendría que destruir y reconstruir las cadenas de valor internacionales, incluida la producción de componentes hoy globalizados. Esto implicaría un aumento general de los costos que los grandes monopolios de Estados Unidos no podrían asumir.

En conjunto, la política económica de Trump no garantiza la recomposición de la hegemonía norteamericana. Su mayor apuesta es el dominio de la IA, el centro de los centros del problema. Veremos hasta qué punto esta apuesta logrará compensar la probable ineficacia de la guerra arancelaria y de la reindustrialización del país.

Frente a la guerra comercial, es muy importante que los socialistas expliquen al movimiento obrero que la política comercial de los gobiernos burgueses es elaborada

por los capitalistas en beneficio de su propia clase y no para los trabajadores. Ya sea «libre comercio» o proteccionismo, la aplicación de la política tiene por objeto proteger y aumentar los beneficios de la clase dominante. Las contradicciones inherentes al sistema capitalista no pueden resolverse ni mediante aranceles ni mediante maniobras militares amenazantes. La única solución al desempleo y la precariedad crecientes, así como a la ola inflacionaria, es la lucha de clases, con un programa que plantee la necesidad de que sean los trabajadores quienes se pongan al mando de la economía.

Las políticas comerciales proteccionistas en países imperialistas como EE. UU. UU. van de la mano con el auge del chovinismo y con los ataques a los inmigrantes y a otras comunidades oprimidas. Debemos explicar a los sindicatos que no deben apoyarlas, ya que no resolverán la crisis económica muy real que el capitalismo está atravesando a escala mundial. Debemos, en todas nuestras organizaciones, pelear contra el patriotismo nacio-

nalista y la xenofobia que instalan las guerras comerciales y explicar que la clave es que los trabajadores y los sectores oprimidos libren una lucha política implacable por la independencia de la clase capitalista en sus organizaciones y comunidades, para formular un programa de lucha que responda a sus necesidades más inmediatas.

LA DISPUTA MILITAR Y LA CARRERA ARMAMENTÍSTICA

«... los días en que Estados Unidos sostenía todo el orden mundial como Atlas han terminado». Esta frase puede dar a entender que el imperialismo deja de lado la lucha por la hegemonía mundial en el terreno militar. Gran error. El significado real es que Estados Unidos ha cambiado los instrumentos de esa lucha, adaptándolos a su propia decadencia.

En primer lugar, Trump mantiene todo el énfasis en la disputa por la hegemonía militar:

«Queremos reclutar, entrenar, equipar y desplegar el ejército más poderoso, letal y tecnológicamente avanzado del mundo para proteger nuestros intereses, disuadir guerras y, si es necesario, ganarlas de forma rápida y decisiva, con el menor número posible de bajas entre nuestras fuerzas... Queremos la disuasión nuclear más sólida, creíble y moderna del mundo, además de defensas antimisiles de última generación, incluido un Golden Dome para el territorio estadounidense, para proteger al pueblo estadounidense, los activos estadounidenses en el extranjero y los aliados de Estados Unidos. Estados Unidos no puede permitir que ninguna nación se vuelva tan dominante como para amenazar nuestros intereses. Trabajaremos con nuestros aliados y socios para mantener el equilibrio de poder a

nivel mundial y regional, con el fin de evitar la aparición de adversarios dominantes.»

En segundo lugar, el imperialismo se caracteriza por no contar ya con los recursos suficientes para desempeñar el papel de policía del mundo, con tropas militares en los lugares más importantes del planeta.

Ese enfoque en la disputa militar se manifiesta en un presupuesto militar cada vez más desorbitado, a pesar del endeudamiento brutal del país, ya que desde 2020 la deuda pública excede el PIB (entre 118% y 126%). Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, el país con el mayor presupuesto militar. En 2024, bajo Biden, superó los 824 000 millones de dólares; en 2026, ascendió a los 900 000 millones de dólares, y Trump ha propuesto aumentar el presupuesto militar de Estados Unidos a 1,5 billones de dólares para el año fiscal 2027 – algo nunca visto en la historia.

China ocupa el segundo lugar, con un gasto militar total de 246.000 millones en 2025, manteniendo un ritmo de aumento anual del 7 % en las últimas dos décadas. No obstante, otras fuentes, como el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), estiman que el gasto real de China en defensa fue de unos 318 000 millones de dólares en 2024, mientras que otro estudio lo sitúa en una cifra aún mayor: 471 000 millones de dólares.

Estados Unidos podría estar en guerra con China en 2027. Esta fecha siempre ha formado parte de los documentos estratégicos de planificación militar de Estados Unidos como la fecha en la que este país podría estar preparado para hacer frente al aumento del armamento de China.

La maquinaria bélica indus-

trial estadounidense está operando a pleno rendimiento. Las empresas estadounidenses de producción de armas han aprovechado la guerra de Ucrania y las disposiciones y proyectos de ley de ayuda militar para reactivar sus líneas de producción, que ahora se ven reforzadas por la competencia con China. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Estados Unidos ya ha duplicado su producción de proyectiles de artillería de 155 mm, con el objetivo de alcanzar 100 000 proyectiles al mes para 2025.

No obstante, la rápida expansión militar de China, en particular su poderío naval, ha cuestionado la ventaja estratégica de Estados Unidos, especialmente en posibles conflictos relacionados con Taiwán. China está ampliando rápidamente su fuerza naval y aspira a contar con una flota más grande que la de Estados Unidos. Y este último no puede seguirle el ritmo debido a la amplia capacidad de los astilleros chinos, que supera con creces a la de Estados Unidos: Según el Pentágono, China tiene previsto alcanzar una flota de 400 buques en 2025 y de 440 en 2030, mientras que el Plan de Navegación 2022 de la Marina de los Estados Unidos es alcanzar los 350 buques tripulados... ¡en 2045!

A partir de ahí, el imperialismo norteamericano está «reclutando y comprometiendo» activamente a partidarios regionales para desempeñar ese papel contrarrevolucionario. Esto pasa por una relocalización del papel de la Rusia de Putin, a la que Trump quiere desplazar de su bloque con China. De ahí su cambio de postura respecto a Ucrania y toda la batalla que libra para que Europa cambie de postura frente a Rusia.

En el mismo sentido, Trump exige al imperialismo europeo un

aumento de las inversiones militares (a un 5 % del presupuesto) para aliviar la carga de la OTAN sobre Estados Unidos.

En Oriente Medio, Trump apuesta por el papel regional contrarrevolucionario de Israel y, paralelamente, por el de Turquía, Egipto y las monarquías del Golfo.

Y también, lo que es muy importante, los acuerdos de Abraham, que permitirían la integración económica de Arabia Saudita y otros países de la región con Israel, además de los ya firmados, como los de los Emiratos Árabes Unidos.

Esto supondría una barrera para el avance económico de China, que hoy en día ya es el principal exportador a Israel y, probablemente, a los principales países del Golfo. Además, fortalecería una nueva alianza contrarrevolucionaria para Trump.

¿PRESIÓN O SABOTAJE A LA UNIÓN EUROPEA?

En este nuevo orden mundial, Europa ha quedado relegada, sin poder aparecer como un bloque económico y político propio ni como un socio en igualdad de condiciones con Estados Unidos dentro de la OTAN. Eso se debe en parte al declive económico de la región. Según el economista Michael Roberts, «se espera que el crecimiento de la zona euro se ralentice en 0,2 puntos porcentuales el próximo año, hasta situarse en el 1,2 % en 2026». Esto está muy por debajo del crecimiento del PIB mundial, estimado en torno al 2,6 %. El imperialismo europeo está perdiendo rápidamente los últimos vestigios de sus posesiones coloniales formales, especialmente en África, lo que deja más territorio en juego en la nueva lucha interimperialista.

La guerra de Ucrania, inicia-

da en 2022, ha mostrado que, en la actualidad, la capacidad de Europa para defenderse de Rusia es mucho más débil que antes. Estados Unidos negocia directamente con Putin el reparto de Ucrania y, al concederle a Putin el mantenimiento de su esfera de influencia, deja a Europa en su posición más vulnerable desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, Rusia lleva a cabo acciones militares de «sabotaje» limitadas en Europa de un alcance sin precedentes, sin que haya habido apenas respuesta europea, salvo el intento de los países de la UE de mejorar su postura defensiva mediante un mayor gasto.

Es posible que, como señala el analista socialista Michael Probsting, el objetivo de Trump sea “destruir la Unión Europea e instalar gobiernos proestadounidenses en los Estados europeos”, utilizando “una retórica chovinista de derecha sobre los «peligros» de la migración y la defensa de las «naciones soberanas» frente a las «instituciones transnacionales»”. Es cierto que si la UE colapsa, los Estados nacionales deberán tratar con los Estados Unidos “de forma individual, es decir, desde una posición negociadora más débil”, y aunque “siendo realistas, Estados Unidos no puede esperar convertir a todos los Estados europeos en vasallos, espera lograrlo al menos con varios países”, Austria, Hungría, Italia o Polonia – nombrados en la versión ampliada del NSS. Aunque esta posibilidad no puede descartarse, el futuro de la UE aún está por decidirse.

En todo caso, lo que está claro es que EE. UU. ya no cuenta con Europa como su principal socio. La NSS y su versión más extensa, aún sin publicar, apuntan a la creación o revitalización de diversos organismos multilaterales de coordina-

ción. Esto incluye la idea de crear una coalición «Core 5» (C5) integrada por Estados Unidos, China, Rusia, India y Japón. La idea de la C5 indica que Estados Unidos ya no quiere gobernar el mundo junto con la UE. La clase dirigente estadounidense ve cada vez más a la UE como un obstáculo para reordenar las relaciones económicas con Rusia y China, cada una en su esfera de influencia.

Este declive de Europa lo hace explícito el documento de Seguridad Nacional, que le añade un interés barniz ideológico, el de la ya conocida “guerra de civilizaciones”.

«Europa continental ha ido perdiendo cuota del PIB mundial —del 25 % en 1990 al 14 % en la actualidad— debido, en parte, a las regulaciones nacionales y transnacionales que socavan la creatividad y la laboriosidad. Pero este declive económico se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización. Entre los problemas más importantes a los que se enfrenta Europa se encuentran las actividades de la Unión Europea y de otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la represión de la oposición política, la caída de la natalidad y la pérdida de la identidad nacional y de la confianza en sí misma».

En otras palabras, la decadencia europea es un hecho y su origen radica en la Unión Europea y en los gobiernos de democracia liberal, que cuestionan a la extrema derecha. El imperialismo norteamericano no puede actuar de la misma manera con los países imperialistas europeos que con los sudamericanos. Pero explícitamente busca



hacer estallar la UE para poder negociar país por país y apoya abiertamente a los movimientos de extrema derecha europeos. Para ello, la lucha contra los inmigrantes desempeña un papel importante, bandera política fundamental de la extrema derecha europea.

LAS CONSECUENCIAS SOBRE LA LUCHA DE CLASES MUNDIAL; LA POLARIZACIÓN AUMENTARÁ AÚN MÁS

Es innegable que un gobierno de extrema derecha en el poder del país más poderoso del planeta, armado con esta estrategia, causará repercusiones importantes y brutales en todo el mundo. La presión económica, los recursos militares, la influencia política e ideológica se manifestarán con dureza en todo el mundo.

Pero se equivocan quienes sacan conclusiones unilaterales sobre la aplicación de esta estrategia. Incluso con todo el poderío estadounidense, no puede superar

su decadencia con medidas extra-económicas como la guerra arancelaria. O bien avanza en el dominio y la extensión de la IA y otras tecnologías de vanguardia, o bien profundiza su decadencia y favorece aún más a China.

Lo mismo ocurre con la lucha de clases. La enorme polarización social y económica, producto de la aplicación de esta estrategia, provocará también una polarización política cada vez mayor y una agudización de la lucha de clases. La invasión de Venezuela, que puede ser solo la primera de una serie, apunta en la misma dirección.

La ofensiva genocida de Israel contra Gaza ha provocado un aumento histórico del apoyo a la lucha palestina en todo el mundo, lo que incluso ha provocado por primera vez fenómenos como la huelga general en Italia.

En todo el mundo están surgiendo movilizaciones que llegan a explosiones populares, como las ocurridas en Sri Lanka, Bangladés

y Nepal, que apuntan en este sentido.

Incluso en Estados Unidos, las gigantescas movilizaciones «No Kings» contra Trump, así como sus derrotas electorales en la ciudad de Nueva York y en otros estados, demuestran que esta polarización política va en aumento.

Pueden volver a producirse grandes ascensos revolucionarios en América Latina, como en 2018 y 2019, que pueden generar enfrentamientos directos no solo con los gobiernos burgueses de la región, sino también con Trump.

Es más, en varios países del mundo comienza a surgir una efervescencia en la vanguardia que da lugar al crecimiento del espacio para programas revolucionarios.

Como decía Moreno, «el imperialismo no hace lo que quiere, sino lo que puede». Y las acciones del imperialismo norteamericano, guiadas por esta estrategia, pueden provocar nuevas convulsiones en la lucha de clases a nivel mundial. ■

UNA POLÉMICA CON EL CAMPISMO ESTALINISTA DE BRENO ALTMAN SOBRE VENEZUELA

EDUARDO DE ALMEIDA NETO
FEBRERO 9, 2026

La invasión de Venezuela por el imperialismo norteamericano y el secuestro de Nicolás Maduro son hoy uno de los temas centrales debatidos por la vanguardia a nivel mundial.

El periodista Breno Altman escribió un artículo sobre el tema con el cual tenemos algunos acuerdos y muchas diferencias. Nos gustaría comenzar esta discusión por los acuerdos, por el respeto que tenemos por Altman. Aunque, probablemente, no fundamentamos esos acuerdos con los mismos argumentos.

LA INVASIÓN IMPERIALISTA DEBE SER REPUDIADA

La invasión de Trump es un acto criminal, cometido por el país imperialista más poderoso del mundo contra un país semicolonial. La motivación alegada — combate al narcotráfico — es ridícula, y pronto fue sustituida por la verdadera motivación: el control del petróleo venezolano y la disputa con el imperialismo chino. Se trata de una expresión de la política del documento de seguridad estratégica de EE. UU., como analizamos en otro artículo.

Esta acción brutal de Trump puede despertar expectativas en sectores de las masas venezolanas y latinoamericanas debido al desgaste de la dictadura de Maduro.

Pero, contrariamente a esas expectativas, esta intervención imperialista no traerá libertad a las masas venezolanas. Todo el aparato represivo venezolano sigue presente, y ahora amplificado por la posibilidad de presencia terrestre de tropas estadounidenses. No hay más libertades hoy en Venezuela ni siquiera se vislumbran elecciones libres en el país. La imposición imperialista, para garantizar sus objetivos petroleros, implica mantener la represión sobre el pueblo vene-

zolano.

El hecho de que el régimen de Maduro haya sido una dictadura burguesa, odiada por las masas, no cambia nuestro repudio a la agresión de EE. UU., por tratarse de un ataque de un país imperialista contra un país semicolonial, al servicio de los intereses norteamericanos.

Tampoco las expectativas de mejora en las condiciones de vida tienen base en la realidad. El imperialismo norteamericano está imponiendo, a nivel mundial, salarios cada vez más bajos a los trabajadores. No será diferente en Venezuela. Ni siquiera las inversiones propagandeadas por Trump han sido asumidas hasta ahora por las grandes empresas petroleras, que exigen seguridad estratégica para invertir. Y eso, al menos hasta ahora, no existe en Venezuela.

Contrariamente a las expectativas, la invasión imperialista para garantizar el control del petróleo solo traerá más miseria y más represión al pueblo venezolano.

¿HUBO O NO FACILITACIÓN DE LA INVASIÓN?

Pero nuestro acuerdo con Breno Altman llega hasta ahí, en el repudio a la agresión imperialista contra Venezuela. A partir de ahí vienen las diferencias.

En primer lugar, Breno niega la realidad. Según él, no hubo facilitación de la invasión de EE. UU. por parte de una importante facción del régimen chavista.

“Por un lado, la Venezuela chavista, ahora sin su máximo conductor, quedó emparedada por las tropas norteamericanas, con su inmensa superioridad aérea y naval, capaces de bloquear el país y herirlo gravemente. Por otro lado, Estados Unidos demuestra un enorme potencial de presión externa, pero sin las cartas para derrotar estratégicamente al enemigo, que

continúa gobernando.”

Se trata de una situación de equilibrio precario, como es evidente. Hasta donde es posible entender, en sus modos erráticos, el presidente norteamericano, aprovechándose de la ventaja actual, trata de exigir las concesiones más brutales e intenta desmoralizar al gobierno chavista, ahora liderado por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Lo presenta como un títere en sus manos y alimenta los rumores más sórdidos de traición del nuevo núcleo dirigente a Nicolás Maduro.

Estos rumores, despropósitos, son reproducidos por la prensa occidental y sus aliados, en el intento de llevar a la lona al movimiento creado por Hugo Chávez, contra el cual empuñaron armas durante tantos años – muchas veces con la simpatía de círculos de izquierda influenciados por ideas liberales o simplemente engañados por la narrativa difundida desde Estados Unidos y Europa.

El problema es que las Fuerzas Armadas venezolanas tienen 120 mil soldados, que no entraron en combate contra la invasión norteamericana. Poseen un sistema de defensa aérea apoyado en armas rusas como los sistemas S-300 (con misiles de alcance de 150 km, considerado el rival del Patriot norteamericano) y BUK-M2 (alcance de 40 km), además de los misiles portátiles Pechora e Igla-S, que pueden ser manejados por un soldado. Nada de eso funcionó.

Seguramente, la innegable superioridad militar norteamericana y su guerra tecnológica influyeron. Pero solo eso no puede explicar cómo doscientos soldados de EE. UU. entraron en Venezuela, secuestraron a Maduro en menos de tres horas, sin siquiera una baja. Incluso la invasión de Panamá y el



secuestro de Noriega en 1989 implicaron 13 días de combate terrestre.

¿Cómo se explica esto sin que se hayan entregado a las fuerzas invasoras los puntos ciegos del sistema de defensa venezolano y la ubicación exacta de Maduro?

La realidad es que todas las fuentes, desde la prensa burguesa, los activistas independientes en Venezuela e incluso el propio gobierno de Trump, dicen que “una parte del gobierno venezolano entregó a Maduro”.

La única y obvia excepción es el propio gobierno chavista y sus apoyos a nivel internacional. Gran parte de los partidos comunistas forman parte de ese coro, así como figuras identificadas con el castrochavismo como Breno Altman. Una excepción es uno de los PC venezolanos, que también afirma que hubo entrega.

EL CARÁCTER DEL GOBIERNO DE DELCY RODRÍGUEZ

Esta discusión sobre la facilitación de la invasión norteamericana no es menor. Y se vincula directamente con el carácter del nuevo gobierno venezolano.

Para sorpresa de muchos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una vez investida, propuso

una “agenda de cooperación” con Trump.

Al mismo tiempo, Trump describió a Delcy como “una persona formidable”. “Es alguien con quien trabajamos muy bien”.

Para completar el cuadro, Trump no apostó por María Corina Machado, representante de la oposición burguesa de ultraderecha venezolana, trumpista desde el primer momento, diciendo que “no tiene la fuerza ni el respeto de la población”.

Incluso después de su visita a Trump, cuando le entregó de manera sumisa la medalla recibida por el premio Nobel, el presidente norteamericano mantuvo su apoyo a Delcy Rodríguez y no a Corina Machado.

Según gran parte de los analistas de izquierda y de derecha, Delcy Rodríguez tuvo contacto con el gobierno norteamericano varios meses antes de la invasión y participó en la facilitación de la invasión.

Esto explica el nuevo papel del gobierno chavista, que pasa a ser de apoyo directo a la política de Trump en Venezuela. Delcy Rodríguez, aunque tenga la misma apariencia chavista, no tiene el mismo significado que Maduro. No se trata de un gobierno de la bolibur-

guesía chavista, con roces parciales con el imperialismo norteamericano. Es un gobierno alineado directamente con Trump.

El hecho de mantener un discurso chavista en la forma tiene que ver con la preservación de sus bases, formadas formalmente en el antiimperialismo.

Esto se explicita abiertamente en el acuerdo sobre el petróleo, deseado por Trump y objetivo de la invasión. A partir de ahora, el petróleo venezolano pasa a ser comercializado directamente por el gobierno norteamericano y, con la venta, los venezolanos deberán comprar productos de EE. UU. Este tipo de acuerdo, directamente colonial, no existe en ninguna otra parte del mundo.

Este cambio en el gobierno y en el régimen chavista está en curso, recién comienza. Seguramente habrá nuevos desarrollos. Un cambio como este casi con seguridad llevará a crisis dentro del aparato chavista. La base material del petróleo sobre la cual se apoyaba la boliburguesía venezolana se estrechó. El discurso formalmente antiimperialista durante décadas tiene base en sectores de masas y del aparato del Estado. Se están gestando nuevas contradicciones.

Pero está ocurriendo un cambio de fondo en el régimen venezolano, ahora realineado con Trump.

LA EXPLICACIÓN DE ALTMAN

Breno Altman afirma que la actitud de “no confrontación” de Delcy Rodríguez es una política determinada “por la relación de fuerzas”. Altman se apoya en la continuidad de la forma (“el régimen chavista continúa”) para decir que el gobierno de Delcy es el mismo que el régimen chavista anterior.

Según él, Delcy busca ganar



tiempo, reagrupar fuerzas para poder enfrentarse al imperialismo.

“La presidenta interina actúa para mantener cohesionado el bloque histórico chavista y movilizadora su base social — denunciando la agresión imperialista, reafirmando la soberanía nacional y exigiendo la liberación inmediata de la pareja presidencial. Entre sus innumerables tareas, Delcy Rodríguez necesita mantener el funcionamiento del Estado, reactivar el ánimo de las calles y cicatrizar las heridas del ataque sufrido.

También busca ampliar las alianzas internas, a pesar de la hegemonía del PSUV sobre todas las instituciones, buscando un arco de apoyos más amplio para defender la supervivencia de la nación. La excarcelación de presos, ya en curso, forma parte de esta estrategia de distensión interna.”

Realmente existe un problema importante de relación de fuerzas, que es necesario analizar. El imperialismo es cualitativamente más fuerte en términos militares. Sin embargo, queda por ver si esas acciones del nuevo gobierno venezolano apuntan en el sentido de la reaglutinación de fuerzas o de su desorganización y desmoralización. Las declaraciones de Delcy Rodríguez, señalando un traba-

jo “constructivo” con el invasor Trump, apuntan a la segunda hipótesis.

Históricamente, los pueblos se han enfrentado a los imperia- lismos, en la inmensa mayoría de los casos en una brutal inferioridad militar. En algunos casos, obtuvieron victorias muy importantes, como en Vietnam, Argelia e Irak. En todos ellos, la movilización de masas tuvo un papel fundamental.

La propia historia venezolana lo demuestra. En 2002, un golpe militar, patrocinado por el gobierno de Bush, derrocó al gobierno de Chávez. Una movilización de masas derrotó el golpe y recompuso el gobierno chavista.

Delcy Rodríguez no llamó a la movilización de las masas venezolanas contra el ataque, no entregó armas a los trabajadores. Tampoco llamó a la movilización internacional contra la invasión, ni en EE. UU. ni en América Latina.

EL EJEMPLO DE BREST-LITOVSK

Altman recurre al ejemplo del acuerdo de Brest-Litovsk, firmado entre los bolcheviques y el gobierno alemán, para justificar los acuerdos entre Delcy Rodríguez y Trump, como un acuerdo impuesto por la relación de fuerzas.

“El chavismo atraviesa, sin embargo, un momento que podría ser comparado con el de la Revolución Rusa en las negociaciones de Brest-Litovsk, en los primeros meses de 1918, aún durante la Primera Guerra, cuando Alemania presentó reivindicaciones absurdas para un acuerdo: el control de territorios que albergaban un tercio de la población rusa, el 50 % de la industria y el 90 % de las minas de carbón.”

Se trata de un malabarismo teórico, muy común en el reformismo. Frecuentemente, para justificar lo injustificable, se recurre al problema de la “relación de fuerzas”. Por ejemplo, así se justifica la política del gobierno de Lula de acuerdos con las multinacionales y el agronegocio — defendida explícitamente por Breno Altman — por la “relación de fuerzas”. En esta evaluación de la “relación de fuerzas”, el reformismo recurre con frecuencia a la relación de fuerzas parlamentaria, lo cual es coherente con su visión del mundo, según la cual los cambios deben realizarse por medio del régimen democrático burgués, y no mediante revoluciones.

Pero, según el marxismo, la relación de fuerzas está centrada en la relación entre las clases en lucha o en su expresión militar durante las guerras. Esto es coherente con la tradición marxista, según la cual los cambios en la estructura de clases y los enfrentamientos con el imperialismo deben realizarse por la vía de las revoluciones.

Ya vimos que el gobierno chavista no recurrió a la movilización de masas ni al enfrentamiento militar con el imperialismo norteamericano.

Pero, como existe un problema real de relación de fuerzas, examinemos el ejemplo histórico

citado — Brest-Litovsk — y luego volvamos al caso venezolano.

El acuerdo de Brest-Litovsk fue firmado el 3 de marzo de 1918 entre el gobierno bolchevique y el alemán.

En primer lugar, los bolcheviques eran una dirección revolucionaria del primer Estado obrero de la historia. Nada que ver con el Estado burgués dirigido por la dictadura de Maduro. Breno Altman, con su metodología campista, compara dos Estados y gobiernos opuestos.

En segundo lugar, los bolcheviques llevaban apenas algunos meses en el poder; todavía no existía el Ejército Rojo. Las masas rusas estaban exhaustas por la guerra impuesta por el zarismo y continuada por el gobierno provisional. El fin de la guerra fue una de las consignas defendidas por los bolcheviques y apoyadas por las masas. Si no se aceptaba el acuerdo de Brest-Litovsk, los alemanes podrían derrotar militarmente al nuevo Estado recién formado.

Después de ese acuerdo, el Estado obrero se organizó, formó el Ejército Rojo y derrotó a 14 ejércitos de países imperialistas que invadieron la URSS durante la guerra civil.

El chavismo gobierna Venezuela desde hace 28 años; tiene un ejército formado y organizado que no entró en la lucha. Si no recurrió a la movilización de masas ni al armamento de los trabajadores en el pasado ni ahora, eso tiene que ver con el carácter de clase burgués del régimen chavista y del Estado venezolano, que Altman se niega a caracterizar.

La adhesión del nuevo gobierno venezolano a Trump no tiene nada que ver con un retroceso táctico, y menos aún con el Tratado de Brest-Litovsk. Se trata de un

pasaje melancólico de un régimen bonapartista decadente al alineamiento con el imperialismo norteamericano.

UNA VEZ MÁS, LA QUIEBRA DEL CAMPISMO

Breno Altman es un periodista e intelectual reconocido, que defiende abiertamente la visión estalinista de los “campos progresivos”.

El análisis marxista comprende de la realidad a partir de su estructura de clases sociales y de la lucha de clases. El campismo estalinista sustituye esa metodología por la de los “campos progresivos”, con sectores burgueses. Esto incluye a los “gobiernos progresivos” que “se enfrentan al imperialismo norteamericano”.

Esa es la lógica por la cual China es un régimen “progresivo”, alternativo al imperialismo norteamericano, y no un país imperialista ascendente, con empresas multinacionales explotando brutalmente al proletariado chino.

Breno Altman no ve el imperialismo chino, así como defiende a la dictadura iraní en la masacre contra el pueblo iraní. En su lógica, “el gobierno progresista de los ayatolás” es atacado por infiltrados sionistas y norteamericanos.

Del mismo modo, Altman no vio la decadencia del régimen chavista ni su transformación en una dictadura burguesa, odiada por las masas. No vio la formación de una boliburguesía en el país ni la brutal miseria de los trabajadores. Se trataba de un “gobierno progresivo”...

Pero ahora, el error es mayor. El nuevo gobierno venezolano es el instrumento de Trump en el país. La boliburguesía y su régimen chavista prefirieron aliarse con el imperialismo norteamericano antes que enfrentarlo y arriesgar sus propiedades. ■

MINNEAPOLIS LUCHA CONTRA LA OCUPACIÓN FEDERAL

N. IRAZU

ENERO 29, 2026

Minneapolis está bajo una ocupación paramilitar por parte del gobierno federal. Desde diciembre, la «Operación Metro Surge» ha desplegado más de 3000 hombres armados y enmascarados de varias agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo ICE y CBP, más que en cualquier otra ciudad. Se está secuestrando a personas en la calle, se las mete en camiones sin distintivos y desaparecen. Se encuentran coches abandonados con las llaves aún en el contacto, recuerdos de las redadas del ICE. Están derribando puertas sin órdenes judiciales e interrogando a las familias para que revelen la ubicación de sus vecinos inmigrantes. Se utiliza a los niños como cebo para atraer a los miembros de la familia y deportarlos.

Hasta ahora, dos activistas han sido asesinados, otros dos han recibido disparos y muchos otros han sido atacados con gases lacrimógenos y brutalmente maltratados. En respuesta, la gente de Minneapolis se ha organizado calle por calle y manzana por manzana para apoyarse mutuamente y hacer frente a la violenta ocupación de su ciudad. En sus organizaciones comunitarias y sindicatos, han salido a organizar acciones locales y masivas en la lucha por expulsar al ICE de sus comunidades.

ANATOMÍA DEL TERROR DE ESTADO

El 7 de enero, Jonathan Ross, un agente armado y enmascarado del ICE, disparó tres tiros a la cabeza de Renée Good y la llamó «puta de mierda». Sus compañeros se aseguraron de que muriera negándole atención médica, haciendo caso omiso de las súplicas de un médico que se encontraba en el lugar. Por si fuera poco, la reacción inmediata del gobierno federal fue defender al pistolero a capa y espada, presentándolo como una persona que «temía por su vida». Cómo un veterano de 10 años del militarista ICE como Ross podía tener tanto miedo de una madre desarmada de tres hijos que acababa de dejar a su hijo en la escuela y que simplemente observaba su operación, sería

desconcertante si no fuera una patética invención inventada para encubrir un asesinato patrocinado por el Estado.

Esta espantosa secuencia de acontecimientos se repitió el 24 de enero, cuando seis agentes del ICE rodearon y golpearon a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, antes de asesinarlo. Pretti se encontraba en el lugar de una redada documentando al ICE e intentando ayudar a una mujer que había sido tirada al suelo por los mismos agentes. A continuación, tiraron a Pretti al suelo, lo golpearon y le rociaron con spray pimienta. Mientras estaba cegado por el spray pimienta y tirado en el suelo, un agente del ICE le disparó diez balas, matándolo. Aunque Pretti estaba armado, en ningún momento desenfundó su arma ni representó ninguna amenaza para los agentes, y de hecho fue desarmado por los mismos agentes antes de ser disparado. Minnesota es un estado en el que se permite el porte abierto de armas.

Una vez más, el gobierno federal calificó a una víctima asesinada por el Estado como «terrorista nacional». El 14 de enero, agentes del ICE intentaron asesinar a Julio César Sosa-Celis. Le dispararon en la pierna delante de su casa y, de nuevo, los agentes mintieron sobre las circunstancias, hasta que salió a la luz un vídeo que demostraba que Sosa-Celis no había supuesto ninguna amenaza para ellos.

En Minneapolis, los trabajadores sufren a diario represión y persecución. Los agentes del ICE han lanzado gases lacrimógenos a una familia de ocho personas en su coche, incluido un bebé que necesitó reanimación cardiopulmonar. Han invadido escuelas y secuestrado autobuses escolares para secuestrar a niños. Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre fueron secuestrados cuando regresaban del preescolar y enviados rápidamente al otro lado del país, a un campo de concentración de Texas. Los detenidos en este mismo campo protestaron contra su encarcelamiento, coreando «¡Libertad!».

Hay informes procedentes de trabajadores sani-

tarios de Minneapolis que hablan de agentes enmascarados que vigilan clínicas y hospitales y siguen a los pacientes hasta las instalaciones, así como de profesionales que tratan lesiones incompatibles con lo que informan las autoridades (léase: el ICE secuestró a personas, las maltrató y mintió sobre las circunstancias).

La oleada de agentes del ICE en Minneapolis ha dado lugar al secuestro de más de 2400 personas en las ciudades gemelas de Minneapolis-St. Paul desde el inicio de la operación. Con miles de agentes recorriendo las calles, el Departamento de Guerra ha amenazado ahora con enviar 1500 soldados adicionales para participar en la ocupación.

EL LIDERAZGO POLÍTICO

Renée Good y Alex Pretti fueron asesinados por agentes del ICE que ocuparon Minneapolis en parte debido a un bulo en Internet en el que se basó la administración Trump para llevar a cabo la «Operación Metro Surge». El bulo se hizo viral gracias a Nick Shirley, una personalidad de Internet de 22 años que hizo afirmaciones falsas sobre una estafa multimillonaria en los servicios de guardería gestionados por inmigrantes somalíes.

Todas las operaciones del ICE se basan de alguna manera en una realidad falsa que presenta a los trabajadores inmigrantes como delincuentes, distorsionando la imagen de lo que realmente son los inmigrantes: una parte esencial de la clase trabajadora, integral a la vida cultural y económica de este país. Sin esta cobertura ideológica, no sería posible que el gobierno mantuviera el apoyo al secuestro y la desaparición de personas.

Hay que engañar a millones de personas. Los aliados de los in-



migrantes contra este régimen terrorista, como Good y Pretti, corren el riesgo de ser asesinados y de que el Departamento de Seguridad Nacional los tilde de «terroristas» por no someterse a esta narrativa. Trump dijo que, dado que Good era «muy irrespetuosa con las fuerzas del orden», merecía morir. Lo mismo se ha dicho de Pretti.

Tras el asesinato de Good, el vicepresidente J.D. Vance afirmó que Jonathan Ross tenía «inmunidad absoluta». Esto pretendía ser una luz verde concedida a los agentes del ICE por el Gobierno federal que decía: «No teman asesinar a activistas, adelante, comete actos violentos contra la población de este país, nosotros los respaldaremos». El Gobierno federal está en pie de guerra contra los trabajadores, tanto en el país como en el extranjero.

Al otro lado del «espectro» político dominante, los líderes

políticos electos de la ciudad han abandonado a la población a su suerte. Tim Walz, gobernador de Minnesota, ha movilizado a la Guardia Nacional. Sin embargo, cualquier ilusión de que lo hace para enfrentarse a la ocupación federal es errónea. Está movilizando a la Guardia Nacional porque recuerda la explosión popular de 2020 que tuvo su epicentro en Minneapolis. No quiere que se repita esta experiencia que enfrentó a las masas trabajadoras contra los políticos demócratas y republicanos por igual. Una y otra vez, insta a los que están en las calles a «mantener la calma».

Walz nos asegura que, aunque apoya las protestas pacíficas, busca una solución a este caos a través de los canales institucionales burgueses. Le dice a la gente de Minneapolis que «vayan a votar, lucharemos en los tribunales, etc.». Su intención es llevar a un callejón sin salida al



movimiento que tiene el potencial de enfrentarse a todo el aparato estatal asesino. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha dicho muchas palabrotas contra el ICE, pero en un mundo en el que las acciones hablan más que las palabras, ¡el silencio de sus acciones hace que sus mandatos sean meros susurros!

La Orden Fraternal de Policía de Minnesota emitió un comunicado en el que dice que «apoya al ICE», y los informes sobre el terreno indican que el Departamento de Policía de Minneapolis cubre las espaldas de los agentes del ICE mientras estos lanzan gases lacrimógenos a los manifestantes. Esto no debería sorprendernos si entendemos que el trabajador que cruza la línea para convertirse en policía (o en agente del ICE, para el caso) traiciona y abandona a su clase al servicio del Estado capitalista. No habrá salvación por parte de los políticos o las instituciones

que se basan en la misma explotación y opresión capitalistas que el ICE y Trump. Los trabajadores y los oprimidos deben confiar en sí mismos y en sus aliados cercanos en su lucha.

ORGANIZACIÓN DE BASE

Las calles de las Ciudades Gemelas se han convertido en un campo de batalla político y físico entre las fuerzas de ocupación y las masas de personas que consideran la ciudad su hogar. Los informes sobre el terreno indican que, dentro de la contraofensiva generalizada, hay un fervor por la acción que ha conectado y reconectado a trabajadores, estudiantes y comunidades para luchar, lo que recuerda a la respuesta de la ciudad tras el asesinato de George Floyd en 2020.

Las organizaciones con mayor reconocimiento y recursos pueden llevar a cabo diariamente entrenamientos de respuesta rápida con-

tra el ICE para miles de personas. Los grupos de respuesta rápida se han extendido por barrios enteros y calles individuales, con chats de Signal de cientos de vecinos. Estos están interconectados con otros chats de vecinos, creando una red de organización que permite una respuesta inmediata a la actividad del ICE en cualquier parte de la ciudad. Cuando el ICE aparece en un barrio, la gente puede estar allí en un minuto y, en ocasiones, salen cientos de personas.

En una reunión de May Day Strong, un organizador informó de que al menos el 4 % de cada barrio participaba en estas redes. Esto significa que se han sentado las bases para una sólida organización comunitaria de base. Como activistas, debemos organizarnos para aumentar el tamaño de estas redes y avanzar hacia su consolidación mediante asambleas locales masivas abiertas a todos los miembros de nuestras comunidades. Podríamos elegir líderes, votar nuestras demandas, coordinar la ayuda mutua y defender eficazmente nuestras comunidades contra las bandas itinerantes de hombres armados y enmascarados que ocupan Minneapolis. Estas redes, si se pueden consolidar en asambleas comunitarias de abajo hacia arriba, vinculadas entre sí, podrán coordinar la lucha en toda la ciudad.

El terror de Estado está a la orden del día. La administración no dará marcha atrás a menos que se enfrente al verdadero poder de la clase trabajadora. Dado que son las manos de los trabajadores las que hacen funcionar la economía, también son las manos de los trabajadores las que pueden paralizarla. La clase trabajadora organizada tiene el poder de poner palos en las ruedas de la producción y la circulación capitalistas, golpeando

el corazón de la clase capitalista dominante que apoya al régimen de Trump. El Día de Acción del 23 de enero en Minneapolis nos dio una idea de este potencial.

EL PODER DE LOS SINDICATOS: 23 DE ENERO

Con temperaturas que alcanzaron los -20 grados Fahrenheit con sensación térmica, decenas de miles de trabajadores, estudiantes, pequeños comerciantes y miembros de la comunidad marcharon por el centro de Minneapolis para repudiar la ocupación de su ciudad. Aunque las estimaciones oscilan entre 50 000 y 100 000 personas en las calles, fue, según todos los indicios, una demostración de fuerza monumental. «Todo el mundo acudió», informó In These Times.

La insoportable persecución, los secuestros y los asesinatos llevados a cabo por el Gobierno federal en las Ciudades Gemelas aumentaron el número de personas que sienten que es su deber hacer algo, lo que sea, para poner fin a esta barbarie. En los sindicatos, los líderes sintieron la presión de sus bases para participar en el movimiento.

El Día de Acción nació de una reunión de organizaciones comunitarias, religiosas y sindicales tras el asesinato de Good. Convocaron el Día de la Verdad y la Libertad: «Sin trabajo, sin colegio, sin compras». SEIU Local 26, UNITE HERE Local 17, CWA Local 7250, ATU 1005 y otros sindicatos locales y organizaciones comunitarias respaldaron la convocatoria del Día de Acción, con una manifestación a las 2 de la tarde en el centro de Minneapolis.

También fue respaldado por la federación sindical AFL-CIO, que declaró: «Los trabajadores, nuestras escuelas y nuestras comunidades

están siendo atacados. Los miembros de los sindicatos están siendo detenidos cuando van y vienen del trabajo, lo que está destrozando familias. Los padres se ven obligados a quedarse en casa, los estudiantes no pueden ir a la escuela por temor a perder la vida, mientras que la clase patronal permanece en silencio. Nuestras federaciones sindicales animan a todo el mundo a participar el 23 de enero. Es hora de que todos los habitantes de Minnesota que aman este estado y la noción de verdad y libertad alcen sus voces y profundicen su solidaridad con nuestros vecinos y compañeros de trabajo que viven bajo esta ocupación federal».

El Día de Acción del 23 de enero fue, en efecto, una huelga masiva, tal y como expresó el presidente de CWA Local 7250, Kieran Knutson, en una llamada con el autor de este artículo. Especificó que, aunque el sindicato animaba a sus miembros a tomarse un día libre por enfermedad y participar, no estaba convocando una huelga. Otros sindicatos hicieron lo mismo. ATU 1005 aclaró en su página de Facebook que, aunque apoyaban la acción, no podían decir a sus miembros que se tomaran un día libre en el trabajo.

Pero eso no debe llevarnos a subestimar la importancia de este día. Los sindicalistas y organizadores sobre el terreno informan de que algunos lugares de trabajo cerraron por completo, mientras que en otros se produjo un 30 % de absentismo laboral, y los directivos tuvieron que realizar el trabajo de los trabajadores para mantenerlos abiertos. En el aeropuerto de Minneapolis, la principal vía por la que se deporta a los inmigrantes secuestrados, un representante de UNITE HERE declaró a In These Times: « Muchos trabajadores del aeropuerto afi-

liados a su sindicato no acudieron al trabajo el viernes para apoyar el cierre, y muchos de ellos se dieron de baja por enfermedad».

Aunque la baja masiva y la protesta no paralizaron la economía, ahora se está debatiendo la posibilidad de organizar una verdadera huelga general política. El Día de Acción abre el espacio para hablar con nuestros compañeros de trabajo sobre nuestro poder colectivo y para formar comités de trabajadores que presionen a los líderes de nuestros sindicatos para que pongan a estos en primera línea de esta lucha.

La imaginación se ha disparado: podríamos organizar reuniones masivas de miles de trabajadores, en representación de cientos de miles de trabajadores, en una conferencia masiva del movimiento obrero, para debatir y decidir cómo llevar a cabo una huelga general. Los sindicatos pueden y deben ser tanto la lanza como el escudo de nuestras comunidades contra la ocupación. Hay mucho que aprender de la histórica huelga general de Minneapolis en 1934, cuando el sindicato Teamsters Local 544 lideró una batalla contra los patrones, la policía y las bandas fascistas para convertir Minneapolis de una ciudad sin sindicatos en una ciudad sindical.

Convocada por el movimiento sindical, una huelga general política sería una fuerza seria que detendría en seco al ICE y a la administración Trump. Pondría en tela de juicio todo el podrido sistema capitalista que está desapareciendo y asesinando a nuestros vecinos. ¿Quién merece dirigir la sociedad: gente como Trump, Vance y Miller, o las heroicas masas trabajadoras que salen a la calle todos los días para defenderse unas a otras? ■

ACUERDOS Y REFORMAS LEGALES PARA PROFUNDIZAR LA ENTREGA DEL PETRÓLEO Y LA SOBERANÍA NACIONAL

LEONARDO ARANTES
FEBRERO 10, 2026

Luego del criminal ataque perpetrado contra el país durante la madrugada del 03 de enero de 2026, Donald Trump, jefe del imperialismo norteamericano, realizó varios anuncios dejando claras sus reales pretensiones y las verdaderas razones por las cuales mantuvo meses de asedio militar y finalmente perpetró la incursión bélica en Venezuela, secuestrando al hasta entonces jefe de Estado, el dictador Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

Así, poco después de la incursión militar en Venezuela, Trump, dejando de lado sus argumentos sobre libertades democráticas y lucha contra el narcotráfico, pasó a afirmar que el gobierno de EE.UU. pasaría a administrar y tutelar directamente el petróleo venezolano, sobre el que antes había expresado que le habría sido robado por Venezuela a EE.UU., asegurando que estarían recuperando lo que les pertenecía. Anunciando, a continuación, que Venezuela entregaría a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

Tales aseveraciones del mandatario estadounidense fueron respaldadas posteriormente por el secretario de Energía norteamericano, Chris Wright. Quién afirmó: “Estados Unidos controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo «indefinido» y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington” (DW 07.01.2026).

Al respecto detalló Chris Wright, en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami: «... vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado» (DW 07.01.2026); añadiendo, «... esta-

mos trabajando directamente en cooperación con los venezolanos, tras el anuncio del pasado martes del presidente Donald Trump, de que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado norteamericano, EE.UU. permitirá la venta de crudo de Venezuela a las refinerías estadounidenses y alrededor del mundo, pero esas ventas las hará el Gobierno estadounidense y se depositarán en cuentas controladas por este, entonces, a partir de ahí, esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela...” (DW 07.01.2026).

Además de esto, el gobierno de Estados Unidos establece condiciones tales como limitar, controlar y dado el caso, directamente prohibir la venta de petróleo venezolano a potencias imperialistas rivales, como China y Rusia, suspender los envíos de petróleo a Cuba y garantizar que la compra de insumos y productos realizada con el dinero de la venta petrolera sea exclusivamente a EE.UU.

Estos anuncios públicos de negociaciones con el gobierno venezolano, encabezado ahora por Delcy Rodríguez y del colaboracionismo del mismo, fueron confirmados mediante un comunicado público emitido por la estatal petrolera Pdvsa, donde además de corroborar que Venezuela vendería a EE.UU. volúmenes de petróleo entre 30 y 50 millones de barriles, se deja claro que las negociaciones con las transnacionales petroleras estadounidenses se dará en los términos ya establecidos con la Chevron – Texaco.

Posteriormente, el viernes 09 de enero, Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con los principales CEO de las transnacionales petroleras para explicarles



tales condiciones, proponerles que invirtiesen el equivalente a 100.000 millones de \$ en el sector en Venezuela y tomar decisiones sobre los destinos del petróleo venezolano.

Adicional a esto, se está encaminando el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la reapertura de la embajada de este país en Venezuela; así como también está planteada la posibilidad de que Delcy Rodríguez viaje a EE.UU. a reunirse con Trump.

UNA REFORMA LEGAL PARA CONCRETAR Y PROFUNDIZAR EL ENTREGUISMO PETROLERO

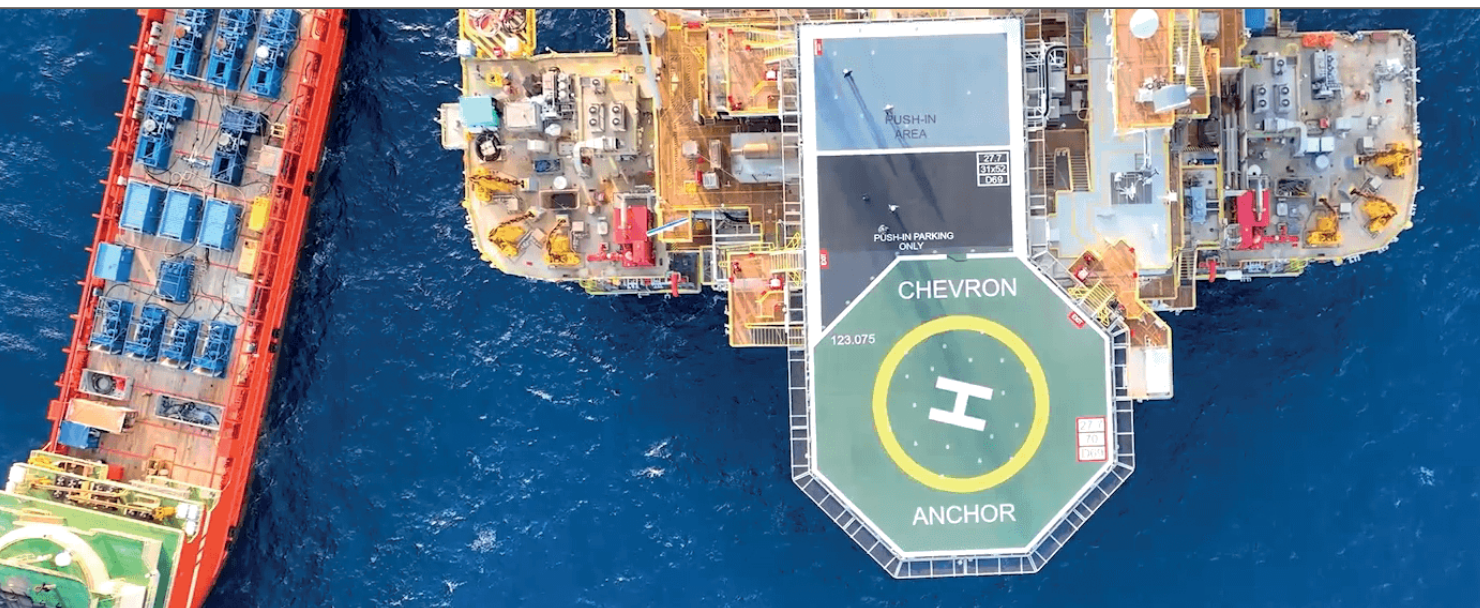
El reciente 22 de enero de 2026, la Asamblea Nacional, controlada casi exclusivamente por el chavismo aprobó en primera discusión una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el voto

favorable de un sector de la ínfima y potable minoría de los diputados de la oposición patronal; abriendo el camino para una profunda transformación en los manejos de la industria petrolera en el país, acelerando y profundizando la deriva privatizadora que se inició incluso desde el gobierno de Chávez.

Tal reforma, es llevada adelante por un gobierno totalmente colaboracionista y que actúa bajo la tutela y a las órdenes del gobierno norteamericano, quien por su parte no tiene el menor interés en el bienestar ni de los trabajadores petroleros, ni del conjunto de los trabajadores y el pueblo venezolano, ni mucho menos en el desarrollo nacional, al contrario, sólo persigue satisfacer sus pretensiones políticas, geopolíticas, económicas y militares; para lo cual precisa subordinar a Venezuela y al resto del continente, en función de reafir-

mar su hegemonía imperialista.

Esta modificación de la Ley de Hidrocarburos, realizada con el pretexto de «modernizar la industria petrolera» y «atraer inversiones», constituye un salto cualitativo en el curso hacia la privatización de la industria y el negocio del petróleo en Venezuela, debido a que apunta hacia una total apertura del sector petrolero a las inversiones privadas nacionales y/o extranjeras, las cuales, ya no estarán bajo la obligación de operar en asociación con Pdvsa a través de las empresas mixtas. A partir de ahora, los socios, nacionales o foráneos participarán directamente y tomarán decisiones en la exploración y extracción y comercialización de petróleo mediante los llamados «Contratos de Participación Productiva» (CPP). Contratos que otorgan al capital extranjero de transnacionales imperialistas (y al



capital minoritario nacional) autonomía operativa y de gestión en el negocio petrolero, sin el control de Pdvsa. De esta manera, se elimina el control que el país ejercía, a través de la estatal petrolera, sobre las operaciones y la comercialización del crudo.

Vale decir que, aunque el esquema de empresas mixtas, establecido por Chávez, significó el inicio de una apertura al proceso privatizador (debido a que las empresas transnacionales de ser simples contratantes con el estado pasaban a ser socias en el negocio petrolero) de la industria petrolera, bajo el que las transnacionales asociadas se lucraban enormemente; la legislación del sector hidrocarburos, bajo el cual estaba regido este esquema, garantizaba hasta ahora, el control estatal directo de la exploración, explotación, comercialización y venta del petróleo, bien sea a través de Pdvsa o de las empresas mixtas.

La Ley de Hidrocarburos obligaba a una mayoría accionaria de la estatal petrolera (más del 50% de las acciones, aunque por lo general era más del 60%); aunque esta legislación venía siendo arbitrariamente infringida y violentada, por

el gobierno de Maduro desde 2015 y de manera más acentuada desde la aprobación de la denominada Ley Antibloqueo, en octubre de 2020.

La reforma, llevada adelante por el colaboracionista gobierno de Delcy Rodríguez, contraria a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos de 2006, posibilita que las empresas privadas nacionales o extranjeras puedan operar de manera directa y sin control estatal, en el sector primario petrolero, es decir, en la exploración y producción, y además comercializar directamente el producto de estas actividades, pasando a mediante el control de la producción y la venta el negocio petrolero y la apropiación de la renta.

Así aunque el Estado formalmente pueda mantener una mayoría accionaria en las empresas mixtas, el capital privado nacional o extranjero asociado podrá manejar la ejecución operativa, tomar decisiones técnicas y manejar la comercialización de hidrocarburos según sus criterios, lo que en los hechos implica entregarles el control estratégico de la industria y el negocio. Ampliando al resto del sector petrolero el esquema bajo el

cual ya se operaba con la transnacional Chevron durante el gobierno de Maduro.

EL MARCO POLÍTICO DE LA REFORMA, OTROS ASPECTOS CLAVES Y SUS CONSECUENCIAS

Esta reforma legal, se contextualiza dentro de las pretensiones imperialistas hegemónicas de EE.UU. en el continente y en Venezuela, en la disputa interimperialista con sus competidores en la región, es decir, en los objetivos de EE.UU. de hacer prevalecer sus intereses políticos, geopolíticos, económicos y militares en la región. Es en este marco en el que debemos entenderla.

Además del aspecto estratégico de la reforma que señalamos anteriormente, y que digamos, es lo más relevante en el espíritu de la misma, esta incluye otros aspectos claves, tales como: la reducción de las regalías que transnacionales y empresas nacionales deben pagar al Estado venezolano, pasando estas del 33,3% a un 15%, y en algunos proyectos, a un 20%. De otro lado se contempla la no obligatoriedad de resolver litigios y controversias con las empresas en tribunales na-

cionales, permitiendo que estos casos sean llevados directamente ante instancias internacionales, en una muestra de entreguismo sin precedentes.

Igualmente, es preciso destacar que, siendo las regalías un impuesto que las empresas cancelan al Estado por su participación en la actividad petrolera, la reducción de las mismas significa, por un lado, mayores ganancias para las transnacionales petroleras, y, por otro lado, menos ingresos para el país.

Con esta entreguista y neocolonial reforma, se concreta el pacto colaboracionista y abiertamente proimperialista entre el régimen chavista, encabezado ahora por el gobierno de Delcy Rodríguez y el gobierno norteamericano dirigido por Donald Trump; dando paso a una profunda y estructural modificación del régimen de propiedad y control de los estratégicos recursos petroleros del país, en beneficio de los intereses del capital transnacional y del imperialismo estadounidense. Profundizando y ahora legalizando el rumbo privatizador y entreguista de la industria petrolera del país y avanzando hacia la liquidación de la soberanía nacional. Proceso iniciado en años y gobiernos anteriores.

Un curso privatizador y entreguista que se viene desarrollando desde hace años y hoy se profundiza y legaliza abiertamente. Es la consolidación de un rumbo que liquida la soberanía sobre el recurso más estratégico del país y entrega las palancas de la producción y comercialización a intereses internacionales de las grandes corporaciones.

LA CONTINUIDAD DE UNA ENTREGA

Lo que acabamos de afirmar,

no es más que la continuidad y un salto de calidad de un proceso que se viene dando desde el gobierno del fallecido presidente Chávez. Basta recordar que en el año 2007, con el llamado plan “Plena Soberanía Petrolera” las empresas transnacionales en Venezuela pasaron a ser socias de Pdvsa en el negocio petrolero, vía la constitución de empresas mixtas, que vinieron a reemplazar los convenios operativos y asociaciones estratégicas por un esquema de hasta 51%/49% de participación accionaria. Es importante recordar que las empresas transnacionales nunca se fueron de Venezuela.

Bajo este esquema de negocios se constituyeron empresas mixtas con Chevron, Repsol, Shell, Total, China National Petroleum, Statoil, Eni, Petrobras, entre otras; luego se adicionaron Mitsubishi, Lukoil, Gazprom y Rosneft. Quedando por fuera del negocio Exxon Mobil y Conoco Phillips, porque decidieron no participar, en el caso de la primera emprendió demandas legales contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI).

Como parte de esta política, Chávez, en 2010, entregó a las transnacionales varios bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, la reserva de crudo más grande del mundo, profundizando así la entrega de nuestro petróleo.

Como consecuencia de esto, los enormes recursos que ingresaron al país, fueron a parar a las arcas de las transnacionales petroleras y de otros sectores, a la banca internacional vía pagos de deuda externa y a los bolsillos de la corrupta boliburguesía. Y a los pocos años en contradicción con la enorme cantidad de recursos que recibió, el país entró en la

mayor crisis conocida de su historia reciente.

Posteriormente, a partir de 2018, Maduro, empezó a implementar políticas que flexibilizaban los controles estatales sobre el negocio petrolero, saltándose aspectos como la obligatoriedad de la mayoría accionaria en las empresas mixtas o poniendo en garantía de deudas recursos y activos petroleros, saltándose aspectos y establecidos en la legislación de hidrocarburos, otorgando a las transnacionales control de determinados aspectos del negocio reservados exclusivamente para el Estado, siendo la mayor expresión del esto los acuerdos del Arco Minero del Orinoco (AMO) y el “modelo Chevron”.

Esta dinámica entreguista y privatizadora del petróleo tendrá nocivos impactos sobre la vida de millones de venezolanos. La entrega de la industria petrolera y la colonización del país significarán la expoliación y el saqueo de nuestros recursos y bienes, en beneficio del capital privado, tanto nacional como mayormente extranjero, y en detrimento de las necesidades de los trabajadores y del pueblo humilde.

Por lo tanto, es necesario preparar la lucha contra la entrega y el saqueo del petróleo, y derrotar la agresión imperialista de conjunto, que solo persigue imponer sus intereses económicos, políticos, geopolíticos y militares sobre la soberanía de Venezuela y Latinoamérica, así como contra la clase trabajadora del país y del continente.

Para derrotar estas pretensiones imperialistas es necesario construir la más amplia movilización obrera y popular, tanto en el país como en el resto del continente y el mundo, así como una extensa solidaridad internacional. ■

LA DOMINACIÓN IMPERIALISTA NORTEAMERICANA SOBRE COLOMBIA

Así paga el diablo a quien bien le sirve

**FRANCISCO CUARTAS (PST, COLOMBIA)
FEBRERO 2, 2026**

La agresión militar de Trump contra Venezuela ha alcanzado su punto más alto con el secuestro de Nicolás Maduro y la exigencia al chavismo de convertirlo en su colaborador para imponerle un régimen colonial, como modelo para la dominación imperialista de Latinoamérica. Con esa lógica se ha dado la dominación imperialista estadounidense sobre Colombia, históricamente un “aliado” incondicional y estratégico en la región para Estados Unidos, y la amenaza directa de Trump contra Petro y la soberanía de Colombia.

UN ALIADO INCONDICIONAL CONTRA LOS ASCENSOS DE POSTGUERRA

A lo largo del siglo XX, la burguesía colombiana, tanto liberal como conservadora, se ha preocupado por mantener una relación de subordinación con el imperialismo norteamericano. Las precarias instituciones colombianas, la economía y las fuerzas armadas fueron moldeándose de acuerdo con los modelos estadounidenses, y se convirtieron en un apoyo incondicional a los intereses norteamericanos, especialmente luego del triunfo de la revolución bolchevique y de la amenaza de que esta se extendiera por el mundo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un gran ascenso de masas en diversas partes del mundo; Latinoamérica no fue la excepción. Cuando el mundo fue repartido mediante los tratados de Yalta y Potsdam, procesos revolucionarios amenazaron con romper la estabilidad lograda. En 1949 triunfó la Revolución china, proceso que se extendió a Corea. De hecho, Colombia colaboró con Estados Unidos enviando tropas a la guerra de 1950.

En América Latina, el ascenso de posguerra fue enfrentado por el imperialismo norteamericano, que

auspició directamente golpes de Estado, combinado con la llamada Alianza para el Progreso, política asistencialista impulsada por Kennedy para contener la creciente influencia de la Revolución cubana en el continente. Utilizaba el discurso de la democracia y los derechos humanos, mientras organizaba, a través de la CIA, golpes de Estado, grupos contrarrevolucionarios, como en Centroamérica, y adoctrinaba las fuerzas armadas del continente en técnicas de tortura y guerra sucia.

EL NARCOTRÁFICO, PRETEXTO PARA LA INTERVENCIÓN IMPERIALISTA

Durante las décadas de los años 60, la producción de narcóticos encontró terreno fértil para prosperar gracias a la vocación de las fracciones burguesas en Colombia, acostumbradas a enriquecerse con las bonanzas.

El crecimiento del fenómeno de las drogas no demoró en entrar en la órbita de los problemas de “seguridad nacional” y nuevo pretexto para la política imperialista. Fue Nixon quien, en 1968, acuñó la frase “guerra contra las drogas”, manifestando así el carácter bélico y de “seguridad nacional” que se concretaría, bajo Reagan y Bush, a finales de los años 80, en el tratamiento militar del problema de las drogas.

Así, mientras las ganancias del tráfico gozaron de impunidad en Estados Unidos, en Colombia la intervención militar aumentó, combinando la contrainsurgencia con la persecución al narcotráfico. Igualmente, los agentes de la DEA, tuvieron vía libre para actuar en Colombia, con plena inmunidad a las leyes locales e internacionales. La guerra contra las drogas no ha sido más que un pretexto para la intervención imperialista.



En diciembre de 1989, Bush invadió Panamá, derrocando a su presidente, Manuel Antonio Noriega, con el pretexto de su vinculación con el narcotráfico.

El negocio del narcotráfico inyectó millones de dólares a la economía colombiana, y, también, alimentó los aparatos armados de las guerrillas y de los paramilitares, al tiempo que permeó y corrompió prácticamente todas las instituciones del régimen político colombiano. La incidencia del narcotráfico en la política llegó a un importante punto de crisis con las denuncias de financiamiento del cartel de Cali a la campaña presidencial del liberal Ernesto Samper, gracias a la filtración de grabaciones hechas por la DEA, lo que, junto al fortalecimiento militar de las FARC, llevó a una importante desestabilización del régimen en 1996, que terminó allanando el terreno a los

gobiernos conservadores de Andrés Pastrana y luego Álvaro Uribe Vélez.

En el año 2000, bajo la presidencia de Bill Clinton, EE. UU. lanzó el Plan Colombia para hacerle frente a esta crisis y modernizó nuevamente el aparato militar y las instituciones del régimen político colombiano bajo el modelo y las necesidades norteamericanas.

Pero su objetivo iba más allá de las fronteras de Colombia. También significó un plan preventivo de contención ante la gran inestabilidad política en la región. En esos años se dio una oleada de insurrecciones que dieron al traste con varios gobiernos en América Latina, al tiempo que gobiernos “progresistas” amenazaban la estabilidad de la dominación imperialista en el continente. Contar con un país incondicionalmente subordinado, como Colombia, servía

a Estados Unidos como contención y prevención ante una situación altamente inestable, mientras que, con el Tratado de Área de Libre Comercio de las Américas (Alca, que, ante su fracaso, fue reemplazado por TLC bilaterales), se buscó una nueva ofensiva de sometimiento económico al servicio de Estados Unidos. En este contexto, Colombia recibió el deshonroso apelativo de “Israel (el Caín) de América Latina”, lo que ilustra el papel que históricamente ha desempeñado la burguesía de este país. De hecho, el monto de ayuda militar a Colombia entre 2001 y 2016 superó los 10.000 millones de dólares, lo que la colocó en el tercer país en recibir ayuda militar de Estados Unidos, después de Israel y Egipto.

EL PRIMER GOBIERNO DE TRUMP

Con el triunfo de Donald



Trump en 2016, y su política de América Primero, se redireccionó la política exterior hacia América Latina. En Colombia, se mantuvo estrecha y armónica la relación con Trump, dado el abierto carácter proimperialista de los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, a pesar del mayor desinterés y desprecio de Trump hacia la región, quien, además, colocó en el mismo plano del terrorismo y el narcotráfico a los crecientes fenómenos migratorios, como problemas de

seguridad nacional, lo cual planteó políticas más agresivas, especialmente hacia Centroamérica.

PETRO Y ESTADOS UNIDOS

Entre 2019 y 2021, en Colombia, se dio un importante ascenso de las luchas, parte de una oleada que convulsionó principalmente a Ecuador y Chile, en la que las masas se movilizaron contra los gobiernos y sus políticas insostenibles para las masas. Fruto de este ascenso, nuevamente triunfaron

gobiernos “progresistas”, y en el caso de Colombia, con la llegada de Gustavo Petro al gobierno en 2022, se dio por primera vez en el país un gobierno de frente popular, rompiendo dos siglos de hegemonía de la burguesía liberal-conservadora.

En relación con Estados Unidos, Petro contó al principio con un terreno favorable para su proyecto de “capitalismo humano”, además, contaba con el beneplácito de Joe Biden, en la medida en que no cuestionaba de fondo los pilares de la dominación imperialista de Estados Unidos sobre Colombia. Al contrario, renovó el papel de Colombia como socio privilegiado de Estados Unidos en la región, desempeñando un papel importante en la estrategia de negociar una transición en Venezuela. Sus intenciones de renegociar el TLC, buscar cambio de deuda por cuidar el Amazonas y apaciguar la lucha de clases exaltada en el continente recibieron elogios por parte de Biden. Incluso Petro le propuso a Biden reactivar la Alianza para el Progreso de Kennedy. Sin embargo, por parte de Estados Unidos no hubo cambios significativos en su política antidrogas, en el intercambio comercial ni en su injerencia en los procesos políticos en el continente. Al contrario de los deseos de Petro, Biden continuó con la reducción de la ayuda estadounidense y la represión de la migración.

El regreso de Trump al gobierno, así como el recrudecimiento del genocidio de Israel contra Gaza, han planteado fricciones importantes en la relación con Estados Unidos, alimentadas por el lobby de la derecha colombiana, que ha contado con interlocutores importantes en los republicanos, especialmente con Marco Rubio. Este lobby se ha centrado en bus-

car el apoyo de la derecha en Colombia y en debilitar políticamente al gobierno de Petro, presionándolo por el tema del narcotráfico.

Por su parte, Petro ha manifestado abiertas diferencias con Trump en el terreno de la crisis climática, el cambio de matriz energética, la migración y el narcotráfico, pero sobre todo con su postura contra el genocidio en Gaza y la ruptura de relaciones con Israel.

La crítica a la agresiva deportación de migrantes colombianos fue respondida por Trump con amenazas de imponer mayores aranceles a los productos colombianos. Petro ha denunciado a Trump por su carácter negacionista ante la ciencia y el cambio climático. Sin embargo, estas contradicciones no han socavado los pilares de la dominación imperialista norteamericana sobre Colombia.

Lo que realmente ha sido cualitativo ha provenido del propio Trump y su cambio en la política exterior condensada en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con la cual retoma abiertamente la doctrina Monroe, planteando incluso su “Corolario Trump”, con la que retoma una política de mayor presencia militar en América Latina, la expulsión de potencias que disputan su hegemonía, una relación abiertamente transaccional con los estados y gobiernos (obtener ventajas y ganancias claras para Estados Unidos).

Bajo esta nueva estrategia, desde hace meses, el discurso se ha endurecido hacia los gobiernos de Maduro y de Petro, usando la retórica del narcotráfico como pretexto para adelantar una ofensiva militar en el Caribe, específicamente dirigida contra Venezuela y Colombia.

Como lo demostró la incursión militar del 3 de enero sobre Caracas y el secuestro de Nico-

lás Maduro y su esposa, la actual campaña militar naval de Trump en el mar Caribe y el Pacífico colombiano, en que bombardearon pequeñas embarcaciones y secuestraron barcos petroleros, obedecía principalmente al plan de Trump de derrocar a Maduro y apropiarse del Petróleo venezolano, y para amarga sorpresa de la oposición burguesa de derecha, en cabeza de Corina Machado, el control de Trump sobre Venezuela será ejecutado por el propio chavismo.

El secuestro de Maduro también ha sido, abiertamente, una advertencia para Petro. Dice Trump que, de no seguir sus dictados al pie de la letra, tendrá la misma suerte.

Las horas y los días posteriores a la acción contra Maduro fueron de zozobra y angustia para Petro, pues Trump insinuó varias veces que él sería el siguiente. Al igual que la derecha en todo el continente, la mayoría de la burguesía opositora colombiana de derecha no solo aplaudió la intervención norteamericana, sino que le pidió a Trump que siguiera con Petro.

Sin negar ni minimizar la gravedad de la amenaza actual de intervención, la situación en Colombia no es la misma que en Venezuela. Mientras Maduro personaliza la decadencia del proyecto nacionalista burgués del chavismo, con el cual ya han roto en su mayoría las masas venezolanas, Petro aún cuenta con un importante apoyo de masas que, ante un eventual ataque contra Colombia, puede desencadenar de nuevo un ascenso de luchas, esta vez con un componente antiimperialista que puede desestabilizar aún más la región. La apuesta de Trump por una transición controlada por el autoritarismo chavista en Venezuela muestra que le importa minimizar costos, por lo que una posible in-

tervención en Colombia deberá tener en cuenta mucho más el factor de la lucha de clases.

En medio de estas circunstancias, Petro recurrió al discurso antiimperialista, no solo para denunciar el secuestro de Maduro, sino también la amenaza contra su gobierno y contra Colombia, señalando la grave violación a la soberanía de Venezuela y el precedente que significaba para cualquier país. Convocó a una movilización antiimperialista para el día 7 de enero, llamando incluso a enfrentar, de ser necesario, con las armas una posible intervención en Colombia. Sin embargo, desde la diplomacia colombiana se buscó intensamente acercamientos con el Departamento de Estado para establecer un diálogo directo con Trump. Este se concretó con una llamada que, previa a la movilización, logró distensionar la situación, al parecer, estableciendo compromisos por parte del gobierno colombiano frente al narcotráfico.

Luego de esta llamada y de mutuos elogios, el discurso antiimperialista de Petro ha bajado. Pero, de fondo, es claro que la amenaza de Trump sobre Colombia es real. Si se concreta en una acción militar directa contra Petro, o se mantiene como una amenaza disuasoria, dependerá en gran medida de la respuesta de Petro ante las crecientes exigencias de Trump y de la respuesta de las masas en las calles ante una agresión imperialista.

Sin tener claro el curso de la actual crisis, ya es evidente que la actual ofensiva imperialista sobre Colombia es la más grave desde la separación de Panamá, lo que coloca la relación histórica de dominación sobre Colombia en el plano de una nueva ofensiva de profundización de la semicolonización sobre el país y el continente. ■

EL NARCOTRÁFICO ES UN NEGOCIO CAPITALISTA, CONVENIENTE PARA LA INTERVENCIÓN IMPERIALISTA

FERNANDO GRACO
FEBRERO 4, 2026

Que Trump y la extrema derecha colombiana, el uribismo, coincidan en la política antidrogas de represión militar, erradicación forzada de cultivos ilícitos y defensa de la “cooperación” entre Estados Unidos y Colombia no es casual; los une la defensa, no declarada, del carácter ilegal del negocio del narcotráfico, por lo que significan las ganancias de una economía que representan el 7% del PIB mundial.

¿QUÉ ES EL NARCOTRÁFICO?

Más allá de sus efectos adversos en la salud, los narcóticos son mercancías, valores de cambio; es decir, algo producido para el mercado. Así como unas zapatillas son mercancías porque se producen para el mercado, para cambiarlas por otra mercancía: el dinero. Entonces, el narcotráfico es un negocio capitalista, pero ilegal, lo que permite que sea de los más rentables, porque produce ganancias extraordinarias; además, sirve como pretexto para la intervención imperialista en países productores como Colombia. Eso no sucede, por ejemplo, con el tabaco y el alcohol, que son mercancías legales, a pesar de que también tienen efectos dañinos en la salud humana.

Varios sectores de la burguesía se benefician de este negocio; en el caso de Colombia, la propia burguesía narcotraficante, ganadera y terrateniente. Además de los bancos y empresas que lavan el dinero del negocio, la burguesía de la industria militar que produce armas para la guerra que origina esa economía, los “respetados” capitalistas que se encargan de los insumos, incluyendo las fábricas de glifosato para fumigar la hoja de coca, supuestamente para erradicarla. En México, país productor de fentanilo, ganan los capitalistas de los cárteles; mientras que en China ganan los capitalistas de ese país por la producción de

insumos, tanto para el fentanilo como para la cocaína.

Como todo negocio capitalista, el narcotráfico cuenta con la protección del Estado, aunque sea de forma ilegal. Agentes de instituciones como las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios de aduanas y aviación (Aerocivil en Colombia), entre otras, garantizan el negocio. Un ejemplo muy conocido es el relacionado con las acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez cuando fue director de la Aerocivil (1980-1982), quien aprobó licencias para rutas aéreas del narcotráfico del Cartel de Medellín, licencias que después fueron revocadas por el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado precisamente por ese cartel del narcotráfico, por haber desafiado a los empresarios que lo conformaban, cuyo gerente y dueño era Pablo Escobar.

NO HAY CRIMEN AL QUE NO SE LE MIDA EL CAPITAL

Quarterly Reviewer, autor anónimo de un artículo publicado en julio de 1826, en la revista británica The Quarterly Review, afirma que el capital es capaz de cometer el crimen que sea, con tal de obtener ganancia.

Es verdad: el capital se arriesga a cometer un crimen, pequeño o grande, según la tasa de ganancia que prometa la producción de una determinada mercancía. Si la tasa de ganancia es de un 10% explotará a los trabajadores hasta quitarles su salud; pero, si es mayor, por ejemplo, un 3.000%, que es más o menos la tasa de ganancia con la cocaína, cometerá crímenes de “lesa humanidad” como organizar grupos paramilitares para ejecutar masacres; es el caso por el cual fue acusado Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, condenado recientemente a 28 años de



cárcel. También su primo, Mario Uribe, fue condenado a 7 años de cárcel por concierto para delinquir agravado, por hacer pactos y alianzas con grupos paramilitares de ultraderecha, concretamente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se puede decir que los Uribe han sido empresarios muy arriesgados, no simples emprendedores.

Otros crímenes del capital son el contrabando, la trata de personas, la especulación financiera, las quiebras fraudulentas y la corrupción del presupuesto de los estados, entre otros.

Veamos la cita de Quarterly Reviewer sobre el tema:

“El capital huye de los tumultos y las riñas, y es tímido por naturaleza. Esto es verdad, pero no toda la verdad. El capital tiene horror a la ausencia de ganancia o a una ganancia demasiado pequeña, como la naturaleza tiene horror al vacío. Conforme aumenta la ganancia, el

capital se envalentona. Asegúresele un 10% y acudirá adonde sea; un 20% y se sentirá ya animado; con un 50%, positivamente temerario; al 100%, es capaz de saltar por encima de todas las leyes humanas; al 300%, y no hay crimen a que no se arriesgue, aunque sufra el patíbulo. Si el tumulto y las riñas suponen ganancia, allí estará el capital encizañándolas. Prueba: el contrabando y la trata de esclavos”. (P. J. Dunning, *Trade Unions, etc.*, p. 36. Citado por Karl Marx en *El Capital*, capítulo XXIV.

Para el capitalismo, que los negocios sean legales o ilegales es irrelevante. Este sistema solo tiene una moral: la que rige la ganancia. Vale todo si es útil para obtener ganancia.

PRODUCCIÓN SOCIAL Y APROPIACIÓN PRIVADA

En el capitalismo existe la siguiente contradicción: producción social, por un lado, y, por otro,

apropiación privada de la riqueza.

La producción de bienes y servicios es social porque involucra la cooperación a gran escala entre trabajadores de todo el mundo y el conocimiento científico y la tecnología, que son productos del desarrollo social e histórico colectivo de la humanidad.

A pesar de que la producción es un esfuerzo colectivo y social, los medios de producción (fábricas, máquinas y capital) son propiedad de una clase social minoritaria: la clase capitalista, con sus empresas privadas. Por lo tanto, la plusvalía generada por la fuerza de trabajo de los trabajadores, convertida en ganancia, es apropiada por los propietarios privados; no por la colectividad de trabajadores que la produjo. En el caso de los narcóticos no es distinto, porque, como ya se ha dicho, estos productos son simples mercancías, solo que tienen un carácter ilegal que potencia su nivel de ganancia.



EL MERCADO DE LA COCAÍNA

La producción mundial de cocaína, que en 2024 fue de 3.708 toneladas, se sustenta en materias primas como la hoja de coca cultivada por Colombia con 230.000 hectáreas sembradas, Perú con 95.000 hectáreas y Bolivia con 30.000 hectáreas, además de insumos químicos como permanganato de potasio (usado para purificar la pasta de coca), acetona, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y éter, producidos, en primer lugar, por China; le siguen India, Alemania y Estados Unidos. Eso es producción

social.

El precio del kilo de hoja de coca que le pagan a un campesino en Colombia es de 50 centavos de dólar; el kilo de pasta base de cocaína vale alrededor de 500 dólares; el kilo de cocaína en Colombia vale cerca de 5.000 dólares, pero ese kilo en Estados Unidos o Europa puede alcanzar hasta 39.000 dólares. Esa rentabilidad es el secreto de todos los crímenes en Colombia y en el mundo, en el mercado de la cocaína. Ahora, la ganancia del fentanilo es, de lejos, mucho mayor. La apropiación de esa ganancia es privada.

EL MERCADO DEL FENTANILO

El mayor productor de fentanilo para venderlo como narcótico es México, cuyos empresarios están organizados en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y en el Cártel de Sinaloa, de los hijos del Chapo Guzmán, destacado empresario mexicano de diversas drogas psicoactivas, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua en la prisión federal ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, por exportar su “valiosa” mercancía a ese país. Hoy la mayor parte del fentanilo que llega a los Estados Unidos ingresa por la frontera norte de México, dejando en Estados Unidos alrededor de 100 mil muertos al año por sobredosis. En cuanto a la materia prima (precursores), el país productor es China.

HEROÍNA Y OPIO

La producción se centra en dos zonas: el “Triángulo de Oro”, en el sudeste asiático, y la Creciente de Oro, o Media Luna Dorada, en Asia Central. Los principales países productores son: Birmania (Myanmar), Afganistán y México. Como en el caso de la cocaína y el fentanilo, el principal país productor de precursores es China.

“La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) estima que el total de ingresos provenientes del comercio de opio y heroína se sitúa entre 2.800 y 3.400 millones de dólares anuales, con base en datos de hace algunos años. Es importante tener en cuenta que las cifras pueden variar considerablemente y que las estimaciones recientes son difíciles de determinar con certeza.

En Europa, el valor anual del mercado minorista de heroína se estimó en al menos 5.200 millones de euros en 2021” (Google.com,

modo IA).

La prohibición es útil para los capitalistas, no para la población

“La discusión sobre la legalidad o ilegalidad de las drogas es tan vieja como la existencia de las mismas.

En este terreno, los hechos económicos y sociales, como siempre, han ido ganando terreno a la ley y al derecho. A lo largo de la historia, distintos tipos de sustancias han sido consideradas medicinas o consumidas socialmente, para luego ser prohibidas e ilegalizadas; y viceversa, sustancias “ilegales” pasan a ser legales y aceptadas socialmente. Lo que ayer se consideraba drogas o sustancias ilegales o dañinas para el cuerpo humano y para la sociedad se ha impuesto de facto y luego se han ido legalizando: el tabaco, el alcohol, los estimulantes, los calmantes, etc. Antes que un problema moral o legal, lo que hay es una disputa por imponer un “nuevo” producto y controlar su producción, distribución y consumo. El capitalista no distingue entre lo que es moral o inmoral, legal o ilegal, dañino o no dañino; él solo sabe distinguir con mucha precisión entre lo que da poca ganancia y lo que da mucha ganancia.

En el terreno de las expresiones políticas y militares de este fenómeno, también se expresa la “moral” imperialista.

Para el imperialismo norteamericano solo está permitido lo que favorezca su seguridad nacional y, por lo tanto, el saqueo económico y la dominación política de los países semicoloniales. Les exige a países como Colombia, Perú, México y Bolivia que ilegalicen el cultivo de marihuana y de hojas de coca, y que repriman a sangre y fuego al narcotráfico. Pero en otras regiones y países dejan correr esas actividades y hasta las utilizan en

beneficio de sus objetivos estratégicos”. (Luis Herrera, Narcotráfico, lucrativo negocio capitalista, pretexto para la intervención imperialista).

La prohibición del consumo de alcohol cuenta con la Ley Seca en Estados Unidos (1920-1933) como una de sus referencias más conocidas, que se replicó en otros países. Esa ley prohibió la fabricación, la venta y el transporte de bebidas alcohólicas. En 1933 se derogó precisamente porque no funcionó, lo que originó un auge del crimen organizado, con Al Capone como uno de sus jefes más destacados.

En Colombia, donde la burguesía nacional tiene como modelo ideal el capitalismo norteamericano, hizo algo parecido con la chicha, una bebida ancestral indígena fermentada cuya materia prima es el maíz. Se prohibió su producción y venta mediante el Decreto 1839 de 1948 y la Ley 34 de 1949.

Su prohibición fue orquestada para que no compitiera con la cerveza producida por la fábrica Bavaria, propiedad del capitalista Julio Mario Santodomingo, quien quería el monopolio de las bebidas alcohólicas. Pero la chicha no, por prohibirla, se dejó de producir y consumir. Ahora no solo es permitida, sino que en Bogotá se celebra cada año un festival de la chicha en el tradicional barrio La Perseverancia, en el centro de la ciudad, bajo el auspicio del gobierno local.

Con la cocaína en Colombia y en otros países ha sucedido lo mismo que con la prohibición del alcohol en Estados Unidos: se potenció el crimen organizado y surgieron muchos Al Capone, como Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, los Ochoa, Carlos Ledher y Gonzalo Rodríguez Gacha, para no hablar de los

legales, porque se denuncia que la mafia de la cocaína ha tenido senadores, representantes a la cámara (entre ellos el propio Pablo Escobar) y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con múltiples denuncias de relaciones con el narcotráfico.

Una prueba más de que la política antidrogas del imperialismo norteamericano es solo un pretexto para intervenir militarmente es el indulto y la excarcelación que Trump le concedió el 2 de diciembre al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de una cárcel de Estados Unidos. Hernández había sido condenado a 45 años de prisión en 2024 por cargos de narcotráfico y posesión de armas, y por haber sido culpable de importar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. A este narcotraficante lo indulta porque tiene afinidades políticas con él y, en el pasado gobierno de Trump, fue lacayo suyo; sin embargo, acusa a Maduro y a Petro de ser narcotraficantes, sabiendo que no lo son, solo como pretexto para la intervención en estos dos países.

EL NARCOTRÁFICO Y EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

Históricamente, sectores de la burguesía en Colombia han escogido atajos para enriquecerse, usufructuando de múltiples negocios ilegales, como el contrabando y luego el narcotráfico. El peso de estos negocios ilegales ha actuado como colchón para la economía colombiana, permitiéndole sortear situaciones de recesión y crisis económica. Las rentas ilegales han permeado todas las ramas de la economía y de la sociedad, generando violencia crónica en Colombia.

Por un lado, burgueses contrabandistas o narcotraficantes, re-

curren a las armas para proteger y defender su negocio, y por otro, los aparatos militares protagonistas de la violencia en Colombia, han sido permeados por las rentas de los negocios ilegales, ya sea por la vía de “vacunas” o impuestos a los negocios, el control de los territorios y rutas, o directamente la participación del negocio en la producción y distribución de narcóticos. El poder del narcotráfico ha sido tan fuerte que ha penetrado profundamente en el ejército y la policía, y, en el caso de las guerrillas, las ha transformado de organizaciones con programa pequeñoburgués reformista en ejércitos al servicio del negocio del narcotráfico.

Tras el boom marimbero en los años 70 y el auge de la cocaína en la década de los 80, la burguesía narcotraficante organizó grupos armados de paramilitares para monopolizar el negocio, expropiarle a los campesinos su tierra y deforestar, con el argumento de que esos grupos servían para enfrentar a la insurgencia guerrillera. Álvaro Uribe Vélez es uno de los auspiciadores de esos grupos armados. Cuando fue gobernador del departamento de Antioquia, legalizó grupos paramilitares bajo el nombre de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural y Urbana (Convivir) en los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper, mediante el Decreto Ley 356 de 1994.

Por esa misma época, un sector de la guerrilla maoísta, el Ejército Popular de Liberación (EPL), que se desmovilizó en 1991, se pasó a las filas del paramilitarismo para incorporarse al negocio del narcotráfico y apoyar a los terratenientes y ganaderos. Varios de los principales comandantes de esa guerrilla pasaron a ser capos del narcotráfico; uno de ellos, Dairo Antonio Úsuga (alias

Otoniel), se convirtió en el capo del grupo paramilitar y narcotraficante “Los Urabeños”, que luego cambió de nombre a Clan del Golfo y hoy es uno de los grupos armados de derecha más grandes, con entre 7.000 y 14.000 paramilitares en sus filas. Actualmente, a las disidencias de las Farc y al ELN se les acusa de estar también en el negocio del narcotráfico, pero esas guerrillas lo han negado.

Es en ese contexto en el que el gobierno de Petro ha impulsado su política de paz total, que incluye tanto a las organizaciones que se reivindican guerrilleras como a las que se reivindican paramilitares, y en el marco de la cual se han realizado bombardeos en los que han caído menores de edad reclutados por los grupos armados. Las muertes de esos niños han generado rechazo tanto de la izquierda como, de manera oportunista, de la derecha.

El paramilitarismo ha sido utilizado no solo por la burguesía narcotraficante, sino también por la burguesía terrateniente y ganadera para desplazar al campesinado pobre y expropiarle sus tierras, en una superficie que supera los siete millones de hectáreas. Así, se puede decir que hoy existe una burguesía narcotraficante, terrateniente y ganadera.

Por su parte, la burguesía industrial y las multinacionales también han utilizado el paramilitarismo para asesinar dirigentes sindicales, debilitar los sindicatos y la lucha de los trabajadores, y así defender sus intereses, financiando a los grupos paramilitares. Solo dos ejemplos: la multinacional bananera Chiquita Brands ha sido sancionada y declarada responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización hipócritamente señalada por

el gobierno norteamericano como organización terrorista. Además, Chiquita Brands fue multada por 38.3 millones de dólares para indemnizar a 16 familiares de víctimas asesinadas.

El otro caso es Coca-Cola, que, aunque no ha sido sancionada porque la justicia norteamericana dice que no hay pruebas que demuestren que su sede matriz en Atlanta esté involucrada; sin embargo, los directivos de esa empresa en Colombia sí han sido acusados de financiar a grupos paramilitares para asesinar dirigentes sindicales en las décadas de 1990 y 2000. Pero en este caso, la justicia colombiana tampoco juzga ni castiga porque, ya se sabe, defiende los intereses de los empresarios, no los de los trabajadores.

LEGALIZAR EL NEGOCIO Y ASUMIR LA ADICCIÓN COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Hay algunos sectores de la misma burguesía que defienden la legalización de las drogas porque se ha demostrado que la represión y el prohibicionismo han fracasado.

Es que con la legalización se elimina el carácter ilegal y, por lo tanto, las inmensas ganancias que se reparten entre la burguesía narcotraficante, los bancos lavadores del dinero y los funcionarios corruptos, además de quitarle el pretexto al imperialismo para su intervención en los países productores y en la periferia, como está haciendo actualmente el gobierno de Trump con su maquinaria de guerra en el Caribe y en las costas de Venezuela.

Desde un punto de vista obrero, el problema del narcotráfico debe resolverse entendiendo la producción y distribución de nar-

cóticos como una rama de la economía, que, como el alcohol, es un problema de salud pública, ya que sus efectos son utilizados por millones como una vía de escape de la alienación capitalista y de la decadencia de la sociedad. Por lo tanto, una solución de fondo no está en la prohibición y persecución de las sustancias, las plantas, las plantaciones o de los campesinos y trabajadores que sobreviven de su producción, sino en el combate a los burgueses dueños del negocio, al carácter ilegal que multiplica sus ganancias y al problema social del consumo.

La lucha contra el fenómeno del narcotráfico está íntimamente ligada a la lucha contra el capitalismo y a la lucha por la revolución socialista. En el marco de esa lucha estratégica, incluso dentro de la decadente sociedad actual, es necesario y posible luchar por medidas urgentes que eliminen la distorsión que el narcotráfico representa para la economía y la lucha de clases.

Legalización bajo control estatal. La primera medida debe ser eliminar la fuente que hace rentable el negocio, es decir, su carácter ilegal, y que pasen a ser legales, como el alcohol y el tabaco. En un proceso de legalización está la marihuana. Uruguay fue el primer país en legalizarla completamente en 2013; Canadá la legalizó en 2018, Malta en 2021 y Luxemburgo en 2023; en Alemania hay legalización parcial para consumo recreativo y autocultivo desde abril de 2024, permitiendo la posesión y el cultivo limitado, con venta a través de clubes de cannabis prevista para más adelante; en México se despenalizó el uso recreativo para consumo personal, aunque existen restricciones para la venta comercial a gran escala, y en Estados Unidos, a nivel federal es ilegal, pero en va-



rios estados se ha legalizado.

Todas las drogas deben ser legales, bajo control estatal y social, y así eliminar el monopolio del narco. Por lo tanto, en el caso de la cocaína y la marihuana en Colombia, se debe legalizar su producción, distribución y consumo.

Legalizar las drogas no significa que recomendemos su consumo; por el contrario, estamos a favor de que se desarrollen campañas contra el consumo adictivo, con la sustentación de que, como con todas las drogas, si el consumidor se vuelve adicto, le hace daño a su salud. Por eso la legalización implica varias medidas:

- Lucha contra la intervención y la militarización “antidrogas” del imperialismo norteamericano.
- Control obrero de laboratorios farmacéuticos, puertos, zonas francas y el sistema financiero.
- Expropiación sin indemnización de los bienes del narcotráfico y de las empresas involucradas en el lavado de dinero.
- Despenalizar el consumo. La criminalización se centra en atacar a los consumidores y a

los pequeños distribuidores, mientras los grandes capos cuentan con impunidad y la colaboración de agentes de las instituciones del Estado. Esto permitirá reducir la violencia, la corrupción y los homicidios relacionados con este negocio ilícito.

- Campañas de salud pública para enfrentar la adicción, garantizando atención y planes de rehabilitación a la población adicta a todas las drogas, incluido el alcohol. Con un mercado regulado que permita establecer controles de calidad, pureza y dosificación, reduciendo el riesgo de sobredosis por adulteración o por desconocimiento de la potencia de la sustancia.
- Recursos para inversión social. Los destinados hoy a la “guerra contra las drogas” pueden destinarse a la inversión social mediante programas de prevención y tratamiento para la población adicta.
- Acceso a tratamiento médico sin estigma, valorando el consumo de drogas como un asunto de salud y no de justicia penal. ■

NAYIB BUKELE Y EL TRUMPISMO LATINOAMERICANO: BONAPARTISMO Y CRIMINALIZACIÓN POLÍTICO-SOCIAL

LUIZ FERNANDO DA SILVA
FEBRERO 7, 2026

Nayib Bukele representa un proceso típico de bonapartización latinoamericana, en el período histórico en el que no existen contradicciones estructurales entre las burguesías locales (y sus partidos y gobiernos) y el proyecto imperialista estadounidense.

Bukele realizó un recorrido político que se originó en el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), siendo elegido intendente de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y, posteriormente, de San Salvador (2015-2018), y fue acusado de lavado de dinero y fraude durante sus mandatos. Fue expulsado del partido en 2017, intentó sin éxito fundar su propio partido y luego se postuló a la presidencia por GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional), cuando en febrero de 2019 fue elegido en primera vuelta con el 53% de los votos. En esa ocasión, Bukele se autoproclamó el “dictador más cool del mundo”. En febrero de 2021, ya con su propio partido, Nuevas Ideas, en alianza con GANA, obtuvo dos tercios de los escaños de la Asamblea Nacional.

El “combate al crimen organizado” y la corrupción fue el principal lema y la justificación política que Bukele y su grupo utilizaron para consolidarse en el poder. En 2024 fue elegido para un segundo mandato presidencial, con cerca del 83% de los votos, en medio de numerosas denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos.

Bukele se autodenomina “sabio”, “rey filósofo”.

Junto a la imagen de “combatiente” del crimen, construye la imagen de modernizador de la economía salvadoreña, asociada a la tecnología, las criptomonedas y los activos digitales, al turismo internacional y a la atracción de inversiones. Aunque mantiene la imagen de modernizador, lo que se ve en sus gobiernos es una “máquina de corrupción” que involucra a hermanos y otros familiares, colaboradores cercanos y miembros de su gabinete, que desvían fondos públicos, conceden contratos de obras a beneficiados y direccionan selectivamente compras de alimentos y medicamentos. El contrapunto es el creciente endeudamiento con el FMI y los datos sociales y laborales que indican un proceso simultáneo de profundización de la miseria, la informalidad y la vulnerabilidad social.

En febrero de 2020, ocho meses después de asumir, Bukele ordenó que el Ejército ocupara la Asamblea Nacional y amenazó con disolverla para respaldar su plan de gastos militares, llamado Plan de Control Territorial, que también implicaba la reestructuración de las Fuerzas Armadas.

Ya con mayoría en el Congreso, en mayo de 2021 destituyó a cinco miembros de la Corte Suprema y al fiscal general del país, reemplazándolos por personas cercanas a su círculo político. Además, aprobó una reforma que despidió a todos los mayores de 60 años. En junio de 2021 se aprobó la posibilidad de su reelección.

Luego, en septiembre de 2021, Bukele aprobó en

el Congreso la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar, con el objetivo de “inclusión financiera”, inversión y desarrollo económico. Anunció el cambio en un mensaje reproducido en una conferencia sobre bitcoin en Miami:

“Esto va a generar empleos y ayudar a proporcionar inclusión financiera a miles de personas fuera de la economía formal y, a mediano y largo plazo, esperamos que esta pequeña decisión nos ayude a impulsar a la humanidad, aunque sea un poquito, en la dirección correcta”.

Contra la nueva moneda, unas 8 mil personas salieron a las calles de San Salvador (capital) para protestar contra el Bitcoin y el acelerado proceso de bonapartización del régimen político. Habría sido la gota que colmó el vaso de un proceso de dos años: las reformas constitucionales; las revelaciones sobre el pacto entre Bukele y las pandillas para “pacificar” el país; la intención de duplicar el tamaño del Ejército; y, finalmente, la imposición de la nueva moneda. La manifestación reunió a distintos sectores, desde estudiantes, feministas y sindicalistas hasta integrantes de los partidos del orden, como el FMLN y ARENA. Según reportes periodísticos, la mayoría de los manifestantes marchaba con el rostro cubierto con mascarillas, anteojos de sol y gorra por temor a ser fotografiados o grabados por drones que sobrevolaban la protesta.

ESTADO DE EXCEPCIÓN Y BONAPARTISMO

El estado de excepción es el eje político central que, hasta el momento, estructura el régimen bonapartista de Nayib Bukele desde marzo de 2022. La medida fue



justificada como necesaria debido al aumento de los índices de violencia en esos días. Pero, en realidad, lo que estaba en juego eran las protestas sociales contra Bukele que tendían a crecer.

De este modo, el gobierno suspendió tres garantías constitucionales básicas: el derecho a la defensa, el plazo máximo de detención y la prohibición de incomunicación. Esto ha servido de pretexto para detenciones masivas en el país. La represión estatal, presentada como combate a las pandillas, también alcanza a las oposiciones críticas al gobierno: sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Bukele difunde sus concepciones de seguridad pública con un papel estratégico. La política de encarcelamiento y la represión militar generalizada se justifican con el discurso de la “guerra contra las pandillas”; en la práctica, sin em-

bargo, funcionan como mecanismos ampliados de control social y político. Afectan a amplios sectores populares, a la clase trabajadora, a la juventud periférica y a los opositores del régimen. También operan como instrumento de propaganda, movilizando el apoyo de la clase media urbana, la burguesía e incluso de sectores populares, que pasan a asociar orden, seguridad y crecimiento económico con la suspensión de derechos políticos.

EL “MODELO” BUKELE: ENCARCELAMIENTO MASIVO

La población de El Salvador se estima en 6,3 millones de habitantes, de los cuales unos 526 mil viven en San Salvador (capital). Tras la aprobación del estado de excepción en marzo de 2022, el país vive uno de los procesos de encarcelamiento masivo más intensos del mundo.

En marzo de 2024, la pobla-



ción carcelaria llegó a 109.519 personas, de las cuales 84 mil están detenidas sin juicio, sin acusación formal y sin derecho a la defensa. Entre estos presos hay periodistas, abogados, sindicalistas y defensores de derechos humanos u opositores político-partidarios al régimen. En términos proporcionales, esto significa 1.659 prisioneros por cada 100 mil habitantes, la tasa carcelaria más alta del mundo, superando incluso a países como Estados Unidos y China.

Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos presentan denuncias continuas sobre las condiciones del sistema penitenciario salvadoreño. En los últimos tres años se registraron al menos 473 muertes en prisión, cerca del 50% por acciones violentas y alrededor de un tercio asociadas a la negativa deliberada de atención

médica:

“Sin haber sido condenadas en juicio, el 94% de las personas no tenía perfil de integrantes de pandillas y murieron bajo custodia del Estado y en total impunidad. El número de muertes puede superar el millar, pero hay información que está siendo ocultada en los juicios masivos”.

TRABAJO, INFORMALIDAD Y MISERIA SOCIAL

El Salvador tiene una tasa de empleo informal urbano del 70%, incluyendo asalariados informales y trabajadores “por cuenta propia/ autónomos”. Es una de las tasas más altas entre los países latinoamericanos, muy por encima del promedio regional del 55,6%, según un informe de la CEPAL. Esto equivale a cerca de 1,94 millones de personas: vendedores ambulantes, trabajadoras domésticas, empleos informales en transporte, manufactura y construcción, entre otros. Entre los jóvenes, alrededor de 3 de cada 4 están en empleos informales.

Solo el 25% de la población ocupada está en el mercado formal, una pequeña fracción de trabajadores con contrato y alguna protección social. Los empleos formales abarcan cerca de 900 mil personas (entre el 31% y el 32% del total de ocupados).

Reportajes de campo realizados por El Faro en 2024 indicaron altos niveles de inseguridad alimentaria: “casi la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria moderada o grave”.

Según El Faro, las principales causas de esta situación son: el aumento de los precios de los alimentos, las pérdidas de cosechas por la crisis climática y la falta de subsidios agrícolas. El problema se agravó aún más a partir del estado

de excepción de marzo de 2022. Miles de familias salvadoreñas redujeron sus ingresos, ya sea porque sus principales proveedores fueron detenidos, o porque debieron dividir los escasos recursos para enviar paquetes con artículos básicos a familiares encarcelados.

Las remesas familiares de migrantes salvadoreños en Estados Unidos siguen siendo un amortiguador social. En una investigación de 2023, el Banco Central del país destacó que más de 1,5 millones de salvadoreños vivían en EE. UU., de los cuales el 80,9% enviaba remesas regularmente a sus familias, y cerca del 55,4% trabajaba en la construcción, limpieza y restaurantes. Otra investigación de la misma institución indica que, en 2024, esas remesas representaron el 24% del PBI salvadoreño, totalizando 8.206,4 millones de dólares. También señala que cerca de la mitad se encontraba en situación migratoria irregular.

BUKELE Y EL TRUMPISMO

La integración de Nayib Bukele al trumpismo no es circunstancial. Se trata de un alineamiento ideológico estructural presente desde su primera elección presidencial en 2019, y profundizado tras su reelección en 2024.

En 2023, Marco Rubio, entonces senador republicano por Florida, visitó a Bukele en El Salvador y lo elogió por traer paz al país. A comienzos de 2024, el salvadoreño fue recibido con ovaciones en la CPAC (Conservative Political Action Conference). En la asunción de su segundo mandato, Bukele recibió a Javier Milei y a Don Jr., hijo de Trump, quien lo elogió en redes sociales:

“¡Felicitaciones por tu victoria y por tus increíbles logros (...). Y hacés todo eso sin tener que encar-

celar a tus oponentes políticos!”

A comienzos de 2025, tras la asunción de Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó El Salvador y firmó un acuerdo con Bukele para la deportación de inmigrantes desde Estados Unidos. EE. UU. pagaría al gobierno salvadoreño 4,76 millones de dólares por año.

El lugar de encarcelamiento fue el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad inaugurada en 2023, denunciada internacionalmente por condiciones inhumanas. Varios deportados venezolanos denunciaron torturas y abusos generalizados en la cárcel. Se presentaron diversas demandas judiciales contra el gobierno estadounidense por las deportaciones.

El alineamiento político se reiteró en abril de 2025, cuando Trump recibió al presidente salvadoreño en la Casa Blanca y reafirmó la ampliación de la cooperación en políticas de inmigración y deportación.

EL PAPEL GEOPOLÍTICO DE BUKELE PARA TRUMP

En el plano externo, en la geopolítica latinoamericana, el “dictador cool” se alinea con las prioridades de la política exterior de EE. UU. bajo el trumpismo: contención de la migración, externalización del control migratorio y enfoque securitario contra el crimen transnacional. El Salvador pasa a operar como una extensión del aparato represivo estadounidense.

Las cárceles salvadoreñas, en particular el sistema de encarcelamiento de máxima seguridad, se convierten en infraestructura funcional para la política migratoria de EE. UU., como una forma de tercerización de la represión, desplazando costos políticos, jurídicos

y humanitarios hacia la periferia.

Es necesario considerar otros aspectos de este alineamiento geopolítico. A comienzos de noviembre pasado, según la prensa estadounidense, se observaron al menos tres aeronaves militares de EE. UU. en el principal aeropuerto de El Salvador, lo que indica una ampliación de la cooperación militar ya existente. Ese mismo mes, EE. UU. anunció la transferencia de dos helicópteros al país con el objetivo de “fortalecer sus contribuciones” a los “esfuerzos de seguridad” en Haití.

El acuerdo Escudo de las Américas, firmado entre El Salvador y Costa Rica, refuerza aún más la función geopolítica salvadoreña en el “tablero” trumpista. Según Bukele, dicho acuerdo buscaría “que ambos países se ayuden mutuamente en la lucha contra el crimen”:

“El crimen no conoce fronteras, opera de manera transnacional (...) funciona como una única red coordinada, pero los países no. Por lo tanto, no tiene sentido que varias estructuras transnacionales operen en sintonía sin coordinación”.

¿QUIÉN SOSTIENE EL RÉGIMEN DE BUKELE?

Nayib Bukele se apoya en una base política y económica articulada con los sectores de tecnología, criptomonedas, turismo, construcción y servicios. Se orienta hacia las “inversiones” extranjeras que, en la práctica, implican una fuerte desregulación mediante exenciones impositivas y grandes inversiones públicas en infraestructura.

El intento es posicionar a El Salvador como un centro regional de tecnología. Para eso, se firman contratos con grandes empresas internacionales para infraestructura digital o alianzas de plataformas.

En ese marco, aprobó proyectos de ley para reducir o eliminar impuestos sobre software, hardware, desarrollo tecnológico e inteligencia artificial. En 2023, Bukele se expresaba así sobre esta flexibilización:

“La próxima semana enviaré un proyecto de ley al Congreso para eliminar todos los impuestos (renta, propiedad, ganancias de capital y aranceles de importación) sobre las innovaciones tecnológicas (...) y sobre el desarrollo en IA, así como sobre la fabricación de hardware y las comunicaciones”.

En estas grandes obras públicas, los proyectos de construcción son ejecutados por grandes constructoras vinculadas a redes de empresas nacionales e internacionales, lo que beneficia a grupos económicos cercanos al gobierno. Participan grandes contratistas, empresas de ingeniería y proveedores de materiales que obtienen contratos estatales.

EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y EL FMI

La deuda pública de El Salvador se disparó durante el gobierno de Bukele a más de 30 mil millones de dólares, lo que equivale al 84% del producto interno bruto del país.

Bukele se encuentra subordinado a los mecanismos del FMI. Renegocia deudas y profundiza el endeudamiento. Aun así, logra acuerdos con la institución gracias a las relaciones que mantiene con el trumpismo. Según el Banco Mundial, los “desequilibrios fiscales y externos” llevaron al gobierno a realizar “tres recompras de deuda soberana entre 2022 y 2024”. Estas renegociaciones fueron “seguidas por la aprobación de un presupuesto austero para 2025”, con el objetivo de “apoyar la consolidación fiscal”. ■

LA PRESIÓN IMPERIALISTA AUMENTA LA SUBORDINACIÓN DE MÉXICO Y LA POLARIZACIÓN SOCIAL

A subordinação do México ao imperialismo estadunidense: um desafio à soberania e à luta dos trabalhadores

PAVEL (CST, MÉXICO) Y FLORENCE OPPEN (WV, EEUU)
FEBRERO 2, 2026

SHEINBAUM Y LA SUBORDINACIÓN DE MÉXICO A LA POLÍTICA ECONÓMICA DE TRUMP

El segundo mandato de Donald Trump ha reconfigurado aún más agresivamente la relación de dominación imperialista entre Estados Unidos y México. Lejos de inaugurar una etapa de confrontación por la soberanía nacional, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por una política de adaptación activa a las exigencias económicas, comerciales y geopolíticas de Washington. El gobierno de Sheinbaum —a pesar de su discurso “en defensa de la soberanía”— cede sistemáticamente a esas presiones y las reproduce sobre los sectores explotados de la sociedad mexicana, profundizando la inserción subordinada del país en la economía estadounidense, en el marco de la nueva versión de la Doctrina Monroe impuesta por Trump.

Uno de los ejes centrales de esta relación de dominación es la política comercial. Desde el inicio de su nuevo mandato, Trump utilizó los aranceles como instrumento de presión directa. En junio de 2025, Trump impuso a México gravámenes generales del 25 % sobre mercancías no contempladas en el T-MEC (el sustituto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2020), del 25 % sobre automóviles y hasta del 50 % sobre acero, aluminio y cobre. Estas medidas no respondían solo a criterios económicos, sino que estaban explícitamente vinculadas a exigencias políticas: el control migratorio, el endurecimiento de la “guerra contra las drogas” y el alineamiento con la ofensiva estadounidense contra China.

El impacto de estas medidas sobre la economía

mexicana fue inmediato. El Banco de México revisó a la baja su previsión de crecimiento para 2025, reduciéndola de 0,6 % a 0,3 %, en un contexto de creciente riesgo de estancamiento económico (Banco de México, 2025).

Dado que la industria mexicana depende en gran medida del mercado estadounidense, los aranceles no solo afectan las exportaciones, sino que también reconfiguran las cadenas productivas, presionan los salarios y trasladan los costos de la disputa comercial a la clase trabajadora. México exporta aproximadamente el 76 % de su acero terminado a Estados Unidos. En 2025, las exportaciones del sector automotriz registraron una caída cercana al 6 %, mientras que otros sectores manufactureros experimentaron un crecimiento interanual de alrededor del 17 %, reflejando una reorganización desigual de la producción en función de las necesidades del capital estadounidense. Esta dinámica confirma que la estrategia de Washington no apunta a una ruptura con México, sino a una integración más profunda y jerárquica entre ambas economías.

El problema, en realidad, es mucho más profundo que la política comercial. En las últimas 5 décadas, las cadenas de valor de la producción de ambos países, que cruzan la frontera entre EE. UU. y México, múltiples veces antes de que un producto llegue al consumidor final, han sido integradas con una jerarquía clara. Su objetivo no es solo reducir costos para las empresas estadounidenses, sino también reforzar su capacidad competitiva frente a China, principal rival estratégica de Estados Unidos. Ahora, este entramado industrial, está destinado a desempeñar un rol aún más impor-



tante frente a la competencia de China, que no solo es un competidor comercial, sino que también tiene la capacidad de producir a una escala mayor. El Proyecto 2025 y la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump subrayan la necesidad de relocalizar la producción de China hacia el “hemisferio occidental” y de consolidar un bloque productivo regional, bajo el liderazgo estadounidense, que pueda rivalizar con el nuevo imperialismo asiático. Como vamos a ver, toda la política económica del gobierno de Sheinbaum anunciada en el “Plan México” a principios de 2025 no es sino el “corolario mexicano” del “corolario Trump” de la Doctrina Monroe.

En este contexto, México ocupa un lugar clave como territorio de relocalización de la producción (nearshoring) bajo control estadounidense. El Plan México, pre-

sentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en enero de 2025, tiene como objetivo principal atraer inversiones nacionales y extranjeras masivas a través de más de 2 mil proyectos registrados, para elevar la proporción de inversión respecto al PIB por encima del 25% en 2026, además de generar 1,5 millones de empleos adicionales.

Sin embargo, hasta el momento, este plan se ha concretado de manera parcial y desigual. Lejos de constituir una estrategia de desarrollo soberano, su implementación responde fundamentalmente a las necesidades de relocalización de la producción del capital estadounidense.

En enero de 2026, GM de México, que cuenta con cuatro plantas en el país, anunció que invertirá 1.000 millones en 2026-2027 con el ojo puesto en la conversión de plantas para fabricar vehículos

eléctricos. Esta decisión no expresa una apuesta estructural por el desarrollo industrial mexicano, sino una reacción defensiva frente a la creciente competencia de los fabricantes chinos en el mercado nacional. La multinacional china BYD, actualmente el mayor productor mundial de vehículos eléctricos casi duplicó su volumen de ventas en México en 2025 y concentró alrededor del 60-70 % de las ventas de vehículos híbridos en el país. A este anuncio le siguió el de Pilgrim's Pride, multinacional estadounidense especializada en la industria avícola, que comunicó una inversión de 1.300 millones de dólares entre 2026 y 2030 destinada a la modernización de sus plantas en territorio mexicano.

Si bien el gobierno mexicano ha señalado que el portafolio nacional de inversiones alcanza aproximadamente 277.000 millones de

dólares, este volumen resulta insuficiente para cumplir la meta oficial de inversión del 25 % del PIB para 2026. En 2025, la inversión representó alrededor del 22 % del PIB, una caída respecto del 24,8 % registrado en 2024, lo que refleja la persistente incertidumbre económica tanto a nivel nacional como regional.

Más allá de estas cifras, lo central es que las inversiones promovidas por el Plan México responden prioritariamente a las necesidades del reshoring del capitalismo estadounidense, lo que constituye un proletariado recolonizado y no un proyecto orientado a las necesidades de la población mexicana que avance hacia la soberanía nacional.

La otra cara del Plan México es la adopción de medidas comerciales alineadas con la ofensiva estadounidense contra China. En particular, el gobierno mexicano anunció la imposición de aranceles a más de 1.400 productos provenientes de China y de otros países asiáticos, incluidos textiles y calzado. Estas medidas afectan directamente a China, segundo socio comercial de México, con quien el intercambio bilateral superó los 130.000 millones de dólares en 2024 y representó alrededor del 20 % de las importaciones mexicanas. Lejos de fortalecer una política industrial autónoma, esta orientación confirma que México es integrado como una pieza funcional en la competencia interimperialista entre Estados Unidos y China, profundizando su condición de economía dependiente.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), presentado por los gobiernos mexicanos sucesivos como una plataforma de estabilidad y certidumbre, funciona, en la práctica, como un mecanismo de dominación que

ata la economía mexicana a las necesidades estratégicas del capital estadounidense. Lejos de garantizar una relación simétrica, el tratado consolida un patrón de inserción basado en mano de obra barata, en regulación laboral flexible y en subordinación productiva dentro de las cadenas de valor dominadas por Estados Unidos.

Si bien alrededor del 85 % de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ingresan actualmente sin aranceles en el marco del T-MEC esta condición dista de ser una garantía estructural. La amenaza permanente de nuevas tarifas actúa como un instrumento de presión política que limita el margen de maniobra real del Estado mexicano. El tratado contempla una revisión obligatoria en 2026, pero esta instancia ha sido vaciada de contenido incluso antes de comenzar. El 13 de enero de este año, durante una conferencia de prensa en una planta de Ford en Detroit, lo volvió a dejar claro: “Ni siquiera pienso en el T-MEC”. O sea, quiero que a Canadá y México les vaya bien. Pero el problema es que no necesitamos sus productos... No necesitamos autos fabricados en México. Queremos fabricarlos aquí.”.

Frente a este desprecio abierto, la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum resulta reveladora. En lugar de denunciar el carácter extorsivo de los aranceles o cuestionar la asimetría estructural del tratado, la administración mexicana insiste en sostener la ficción de una negociación entre iguales. En octubre de 2025, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que las conversaciones preparatorias para la revisión del T-MEC presentaban un avance “de alrededor del 90 %”, tras más de 80 reuniones bilaterales admitien-

do que no se trataba de acuerdos definitivos y que el T-MEC volvería a ser renegociado bajo condiciones todavía más desfavorables. Del mismo modo, en respuesta al exabrupto de Trump este enero, Sheinbaum contestó afirmando: «Estoy convencida, pues, de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos (...) Las economías de México, Estados Unidos y Canadá están altamente correlacionadas; quienes más defienden el T-MEC son los empresarios estadounidenses».

En ningún momento el gobierno y los analistas burgueses que le hacen eco se han plantado para defender una política económica independiente que permita reindustrializar el país con el objetivo de satisfacer las necesidades de la clase trabajadora y detener la destrucción del medio ambiente. Lejos de plantear una estrategia orientada a romper con esta dinámica, el gobierno de Sheinbaum ha llegado a presentarse como “el país mejor colocado” frente a la guerra arancelaria de Trump, es decir, como el socio dispuesto a ceder más rápido y más profundamente ante las exigencias de Washington.

Desde una perspectiva histórica, esta política de sumisión a los intereses del imperialismo estadounidense no es nueva en México. Se inscribe en una larga tradición de subordinación de las burguesías latinoamericanas... que también incluye a los gobiernos progresistas, pese a su retórica diferenciada, que han demostrado una incapacidad recurrente para romper con ese patrón. En el caso mexicano, el actual gobierno reproduce este esquema bajo una forma más sofisticada, pero ya conocida, la del cardenismo, combinando un discurso nacionalista y de progreso de fachada con una práctica de



integración dependiente, es decir, administrando la subordinación en lugar de movilizar a las fuerzas sociales del país para enfrentarla.

MÉXICO SE CONSOLIDA COMO GENDARME DEL IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE

La militarización de la frontera entre México y Estados Unidos constituye uno de los ejes más visibles y persistentes de la subordinación del Estado mexicano a la política imperialista estadounidense. Durante el segundo mandato de Donald Trump, este proceso no solo se ha profundizado, sino que ha adquirido un carácter cualitativamente nuevo. Desde los primeros meses del nuevo gobierno estadounidense, Trump retomó y radicalizó su agenda antimigratoria, presentando la migración como una “invasión” y un problema de seguridad nacional, lo que sirvió de justificación para un endurecimiento represivo sin precedentes, combinando el despliegue directo de las fuerzas armadas es-

tadounidenses del lado norte con una creciente externalización del control migratorio hacia territorio mexicano.

Desde los primeros meses del nuevo gobierno estadounidense, Trump retomó y radicalizó su agenda antimigratoria. La migración fue presentada nuevamente como una “invasión” y un problema de seguridad nacional, lo que justificó medidas de excepción para reprimir con brutalidad a los inmigrantes dentro y fuera del país, mediante redadas de las patrullas de ICE que operan con total impunidad, asesinando, amenazando y deteniendo a inmigrantes y ciudadanos sin respeto alguno por la ley.

Un elemento central de esta ofensiva fue la creación, a comienzos de 2025, de nuevas zonas militares a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, denominadas oficialmente “Áreas de Defensa Nacional”, que abarcan aproximadamente 400 kilómetros y quedan bajo control directo del Pentágono. Estas zonas —ubicadas en Arizona, Texas, Nuevo México y El Paso—

permiten que las Fuerzas Armadas estadounidenses detengan a personas migrantes sin recurrir a leyes especiales como la Ley de Insurrección de 1807, lo que normaliza la intervención militar en tareas de control civil. Se estima que actualmente hay más de 9.000 soldados estadounidenses desplegados en la frontera: 4.200 bajo órdenes federales y alrededor de 5.000 de la Guardia Nacional bajo el control de los gobernadores. A este contingente se suman más de 100 vehículos blindados Stryker, drones de vigilancia, aeronaves espía y al menos dos buques de la Armada desplegados en tareas de monitoreo costero.

Este proceso no puede comprenderse de manera aislada del papel desempeñado por el Estado mexicano. Mientras Estados Unidos refuerza su frontera con una lógica abiertamente militar, México asume la función complementaria de contención desde el sur y el norte de su propio territorio.

En febrero de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum aceptó



desplegar 10.000 nuevos elementos de la Guardia Nacional en los estados fronterizos como parte de un acuerdo con la administración de Trump que permitió suspender por un mes la aplicación de aranceles del 25 % a las exportaciones mexicanas. Este refuerzo se sumó a un contingente previo que ya superaba los 50.000 efectivos en entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León, elevando el número total de fuerzas involucradas en tareas de control migratorio y seguridad fronteriza a cerca de 60.000.

La lógica de este despliegue no es ambigua. Aunque el discurso oficial insiste en que se trata de combatir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad, los propios anuncios gubernamentales reconocen que el objetivo prioritario es frenar el flujo migratorio. México actúa, en los hechos, como la primera línea de contención de la política migratoria estadounidense,

deteniendo, dispersando y deportando a personas antes de que lleguen a la frontera norte. Esta función de gendarme regional no es nueva —ya había sido consolidada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador—, pero bajo Sheinbaum se mantiene y se profundiza como moneda de cambio en las negociaciones comerciales y diplomáticas.

La militarización fronteriza incluye además un entramado tecnológico y empresarial cada vez más sofisticado. Empresas israelíes especializadas en tecnología militar y de vigilancia, como Elbit Systems, participan en la instalación de sistemas de monitoreo, muros “inteligentes” y dispositivos de control tanto del lado estadounidense como en territorio mexicano. Estas tecnologías, desarrolladas y probadas en contextos de ocupación y control poblacional en Palestina, convierten la frontera en un laboratorio de guerra contra

las personas migrantes, reforzando una lógica de apartheid migratorio.

La militarización no solo criminaliza a quienes migran, sino que también normaliza la presencia del Ejército en tareas de control poblacional, y sirve para dividir y aumentar la explotación de la clase trabajadora en su conjunto. Personas que huyen de la pobreza, la violencia o el desempleo —fenómenos en gran medida producidos por las propias políticas económicas y geopolíticas de Estados Unidos en la región— son tratadas como amenazas para la seguridad. Mientras tanto, el capital atraviesa las fronteras sin control alguno, y las causas estructurales de la migración permanecen intactas.

LA “GUERRA CONTRA LAS DROGAS”: PRETEXTO IMPERIALISTA, MILITARIZACIÓN Y BARBARIE SOCIAL

La llamada “guerra contra las

drogas” constituye uno de los pilares históricos de la intervención imperialista de Estados Unidos en México y en América Latina. Lejos de tratarse de una política orientada a resolver un problema de salud pública o a reducir la violencia, ha funcionado como un dispositivo de control territorial, militarización y control social.

Bajo el segundo mandato de Donald Trump, esta estrategia adquirió una nueva radicalidad con el objetivo de retomar cierto control sobre los cárteles. El gobierno de Claudia Sheinbaum, pese a su retórica crítica, ha optado por profundizar la cooperación con Washington, reproduciendo los efectos destructivos de esta política sobre la clase trabajadora y los sectores populares.

El gobierno estadounidense volvió a colocar el narcotráfico en el centro de su agenda regional, utilizando una retórica belicista que combina un falso discurso de “seguridad nacional”, racismo y amenazas explícitas de intervención militar. Entre las propuestas más significativas se encuentra la intención de declarar a los llamados “cárteles” como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que habilitaría legalmente operaciones extraterritoriales, sanciones financieras ampliadas y acciones militares directas.

En el caso mexicano, esta amenaza se ha combinado con declaraciones abiertas de Trump sobre la posibilidad de realizar ataques terrestres contra supuestas instalaciones de cárteles en territorio nacional, lo que viola de manera flagrante la soberanía del país.

Es importante situar el hecho de que en México tenemos una suerte de “narcoestado” en el sentido de que sectores de la burguesía mexicana, a raíz del corpo-

rativismo y clientelismo heredados del régimen del PRI, tienen una participación indirecta en los dividendos del narcotráfico y otras actividades ilegales (como el robo de combustible, el blanqueo de capitales o la trata de personas), a través de la extorsión.

La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum frente a esta ofensiva ha sido ambigua en el discurso, pero clara en los hechos. Mientras sostiene que la problemática de las drogas debe abordarse como un fenómeno social y de salud pública, su administración ha intensificado la cooperación exigida por Washington.

Un ejemplo central de esta subordinación es el aumento de las extradiciones de presuntos dirigentes del crimen organizado a Estados Unidos. En el último período, al menos 29 personas fueron entregadas a tribunales estadounidenses, muchas de ellas de alto perfil. Estas extradiciones se presentan como gestos de cooperación, pero, en la práctica, refuerzan la subordinación judicial y política de México, trasladando la administración de justicia a Estados Unidos.

Asimismo, se ha incrementado el despliegue de las fuerzas federales en operativos de seguridad interna. Esto se debe a que los cárteles mexicanos han sufrido un desgaste en su enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y se han visto obligados a reclutar y entrenar a jóvenes. Según un informe, se calcula que hay “20 y 30 mil menores de edad que están funcionando como sicarios”. La ofensiva contra el Cártel de Sinaloa, encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, implicó el despliegue de cientos de soldados y de fuerzas federales. Lejos de reducir la violencia, estas acciones

tienden a provocar disputas internas entre facciones criminales, generando picos de enfrentamientos armados y un aumento de las muertes de civiles. La captura y la posterior extradición de Ismael “El Mayo” Zambada son ilustrativas en este sentido, ya que desataron una escalada de violencia en ciudades como Culiacán.

Las consecuencias sociales de esta estrategia son devastadoras. México registra actualmente más de 125.000 personas desaparecidas y se han documentado alrededor de 2.700 fosas clandestinas en todo el país. El hallazgo de un campo de exterminio en el estado de Jalisco, con más de 500 cuerpos y crematorios subterráneos, pone de manifiesto la dimensión de la barbarie social asociada a la militarización y a la economía criminal (Fiscalía del Estado de Jalisco, 2025). El hallazgo de un campo de exterminio en el estado de Jalisco, con más de 500 cuerpos y crematorios subterráneos, pone de manifiesto la dimensión de la barbarie social asociada a la militarización y a la economía criminal

Esta violencia presenta un claro sesgo de clase: son los sectores empobrecidos, las juventudes precarizadas, las comunidades indígenas y las mujeres quienes cargan con el principal peso del terror, mientras que amplios sectores de la burguesía se benefician directa o indirectamente de esta economía criminal.

Un elemento sistemáticamente ocultado por la narrativa oficial es el papel del propio imperialismo estadounidense en la reproducción del narcotráfico. Estados Unidos no solo es el principal mercado consumidor de drogas, sino también un actor clave en la provisión de armas y en el lavado de dinero asociado a estas redes. En la última

década, el 74 % de las armas ilegales incautadas en México provenía de estados estadounidenses como Texas, Arizona y Florida,

Asimismo, la complicidad de las agencias estadounidenses tampoco es un secreto. Existen antecedentes documentados de colaboración entre agencias estadounidenses y organizaciones narcotraficantes, como ocurrió en los años ochenta con el financiamiento de la Contra nicaragüense mediante el tráfico de drogas, así como casos más recientes que involucran a funcionarios de la DEA y del FBI.

En este sentido, la “guerra contra las drogas” no constituye una cruzada moral ni una política de seguridad eficaz, sino un instrumento selectivo que criminaliza a los sectores populares mientras preserva los intereses estratégicos del imperialismo y de las élites locales. La guerra contra las drogas ha justificado la militarización del Estado mexicano desde 2006, bajo Calderón, y ha sido financiada por EE. UU. Los gobiernos posteriores, incluidos los de corte progresista, no rompieron con esta lógica.

LOS LÍMITES DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN (4T)

La sociedad mexicana acumuló durante muchas décadas una tremenda desigualdad económica e injusticia social. A lo largo de toda nuestra historia hubo enormes levantamientos, revoluciones y una resistencia permanente. El ascenso más reciente se remonta a 2014: los pueblos de México volvieron a enfrentar esa injusticia. El detonante fue, sin duda, el crimen de Estado contra los 43 de Ayotzinapa. La inmensa ola de indignación y movilizaciones produjo un cambio radical en la situación. A esas acciones les siguieron la Jornada

magisterial de huelgas contra la “Reforma educativa” neoliberal en 2016 y, en ese contexto, la masacre de Nochistlán. Un punto culminante de ese proceso fue el masivo levantamiento contra el “Gasolinazo” de 2017, cuando se crearon cientos de asambleas populares y rebeliones locales, y en las calles de todo México cientos de miles de personas gritaban “¡Fuera Peña!”.

La “mafia del poder”, la “minoría rapaz”, se espantó y decidió “sacarse algunos anillos para perder los dedos”. Y así fue como apeló a López Obrador, para encarnar la “esperanza de México”. Dejaron archivado que años antes el mismo AMLO lo había estigmatizado como un “peligro para México”. Y por si les quedaban algunas dudas, AMLO les explicó a los mayores banqueros de México, reunidos en el palaciego Hotel Prince de Acapulco, que si no era él “¿Quién va a amarrar al tigre?”...

Hoy, pasado el sexenio y en el “Segundo piso” de la “Cuarta Transformación”, los paliativos asistenciales a los sectores más sumergidos en la miseria –que fueron recibidos con alivio y bendiciones al inicio del sexenio pasado– ya no logran compensar el malestar de otros amplios sectores de obreros y explotados, que, con extensas jornadas semanales, generan enormes riquezas y no salen de la precariedad. Las becas y otras ayudas no resolvieron la falta de perspectivas para un sector mayoritario de la juventud: con trabajos informales, inestabilidad laboral o contratos “basura” que violan las leyes y todos los derechos laborales, sin seguro social ni prestaciones, largas jornadas de trabajo sin respeto al horario de término ni a los descansos, sin acceso a vivienda propia y con dificultades para asumir una renta debido a los bajos salarios. Y

también la frustración de aquellos que, con grandes sacrificios para sus familias, han terminado sus estudios y no encuentran trabajo ni cercano a su especialidad, sino puras “chambas” precarias.

Las expectativas de mejora que generó el gobierno de AMLO empiezan a transformarse en decepción, incertidumbre y desconfianza. La “esperanza” popular se va tornando en angustia y apatía, y comienza a dar paso al hartazgo. Esa decepción aún no genera acciones masivas de los explotados por el brutal freno del charrismo sindical, fiel al poder de turno, y también porque las masas desconfían de esa derecha rancia que ahora es “rabiosa opositora”.

¿Por qué sucede esto? Porque los cambios fueron superficiales, pero no de fondo. Cambió el presidente y el partido de gobierno, pero no cambió el régimen, que sigue al servicio de los oligarcas. Para peor, numerosos odiados personajes del PRI y del PAN saltaron como “chapulines” a acomodarse en el oficialista Morena. A pesar del lema “Para bien de todos, primero los pobres”, fueron los grandes magnates quienes primero duplicaron sus fortunas.

Tampoco cambió la subordinación semicolonial del país. La deuda externa creció a casi la mitad (49,9 %) del Producto Interno Bruto. El yugo del TLCAN, firmado en 1992, demostró ser un instrumento de saqueo de las riquezas del país y de la ruina del campesinado, y se reforzó con la firma del T-MEC en 2018. Por otro lado, sigue creciendo la injerencia de la DEA y del propio Trump en relación con su supuesto “combate al narco”. Y al decadente magnate imperialista no le faltan excusas cuando queda al desnudo la co-lusión del crimen organizado con



muchos gobernadores, alcaldes, diputados y senadores.

LA MANIPULACIÓN DE TV AZTECA, TRUMP Y EL PAN

Como ha pasado antes en otros países del continente: Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador... Ante el fracaso de los gobiernos que se dicen “progresistas” o incluso “de izquierda”, también aquí los viejos sectores políticos reaccionarios que gobernaron México durante más de 80 años sienten que ha llegado “la hora de su revancha”. Y algunos de esos mismos oligarcas salen hoy con sus poderosos medios de difusión para manipular el malestar popular justificado y las manifestaciones del enojo de amplios sectores de las clases medias del campo y de la ciudad. Manipulan intentando darle un cauce tan ultrarreaccionario como sus propios intereses capitalistas y que en realidad van contra los intereses

de la mayoría de los propios manifestantes, aunque no lo sepan.

No vamos a desperdiciar espacio de esta nota en describir los motivos de la ira del usurero dueño del “Banco Azteca” y de la red comercial “Electra”, Ricardo Salinas Pliego, quien se niega a pagar impuestos adeudados desde hace largos años por un valor de casi 3 mil millones de dólares. Justo Salinas Pliego fue uno de los que apoyaron la campaña electoral de AMLO, por lo que su banco recibió el favor del poder durante el sexenio pasado. Ahora, en lugar de pagar sus deudas con el Estado, prefiere gastar millones en manipulación mediática opositora. Tampoco nos detendremos demasiado en las “pruebas” presentadas por Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, sobre el contrato que el PAN firmó con un joven de la “Generación Z”, convocante de la marcha del 15 de noviembre... Tampoco

creemos productivo zambullirnos en la trama de tantos otros montajes y provocaciones. Porque son parte de la “guerra sucia” entre los propios partidos del podrido régimen, que sirven a los oligarcas capitalistas y de ninguna manera “a los pobres”. Repudiamos esa riña entre explotadores en la que usan a los explotados. Para nosotros, la verdadera lucha no es entre las letras 4T y Z. ¡Es la lucha de los explotados y oprimidos contra todos los explotadores y opresores!

LAS LEGÍTIMAS LUCHAS DE DIVERSOS SECTORES SOCIALES

Apoyamos con todas nuestras modestas fuerzas las acciones directas de sectores, como el paro y plantón de los maestros de la CNTE por la falta de respuestas a sus demandas –apoyadas por la mayoría de los trabajadores de diferentes sectores–, la abrogación



de la neoliberal Ley del ISSTE de 2007, así como por un sistema jubilatorio solidario y por un mayor presupuesto para Educación, Salud y Seguridad Social. Los bloqueos de miles de agricultores en varios estados, perjudicados por el T-MEC y hartos del parasitismo de los cárteles que les imponen “el impuesto criminal”, tienen un gran impacto económico y social en México”. Las organizaciones que lo agrupan convocaron a un nuevo bloqueo de carreteras y una acción conjunta con los transportistas de carga. Luchan contra los grandes intermediarios como “Maseca” y otras corporaciones en demanda de un precio de sostén para el maíz, cuyo precio se define en la Bolsa de Chicago y que en EE. UU. está subsidiado. También en la Ciudad de México, ha habido una lucha contra la gentrificación y los desalojos de vivienda.

Por otra parte, crece la indignación de las centenas de miles de pobladores afectados por las inundaciones en Veracruz y otros estados, por el abandono de los gobiernos de todos los niveles, y la incertidumbre de los obreros de Pemex de Poza Rica ante la parálisis de la planta productiva, producto de la destrucción causada por las inundaciones. México se ubica en el 4.º lugar en asesinatos de defensores o activistas ambientales y sociales, y por eso el movimiento contra la criminalización de los movimientos sociales es clave. Ayotzinapa, por ejemplo, revivió la memoria de la lucha estudiantil y de la juventud trabajadora (aunque en menor grado), ya que se reivindica la tradición de las luchas de los 60 (1968, 1971) y de los 90. Se destaca en este contexto de colapso ambiental la lucha de los trabajadores tecnológicos del agua del

SITIMTA, que resisten en defensa del derecho humano al agua contra los planes privatizadores del recurso hídrico, al servicio de las transnacionales, como las refresqueras y cerveceras, así como de los grandes latifundistas, y contra la creciente contaminación de los mantos acuíferos por parte de Pemex y otras corporaciones extractivas.

En este contexto de crecientes tensiones, el detonante que enardeció a las masas de Michoacán fue el asesinato a quemarropa de Carlos Manzo, el presidente municipal de Uruapan, enfrentado tanto a los cárteles como al gobernador michoacano de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya. Este alcalde, surgido de las filas de Morena, de la que fue diputado federal, rompió con Morena, se postuló como candidato independiente, ganó y se perfilaba para postularse a la gubernación. Por si faltaran factores de

indignación, saltan los escándalos de colusión con el narco de algunos personajes notorios de Morena, como el senador Adán Augusto —muy cercano a AMLO— y otros altos oficiales de Marina, parientes del exsecretario de SEMAR, implicados en el “huachicol” fiscal y de hidrocarburos.

El gobierno no resolvió ninguna de estas demandas, pero sí cumple con las exigencias del imperialismo y de los oligarcas locales que le imponen planes para profundizar la explotación y el saqueo del país. Todas estas falencias y agravios están cambiando la situación política en el país. No pretendemos aquí dar una opinión acabada de un proceso inacabado y, además, incipiente. Pero algo es evidente: el “Segundo piso de la 4T” presenta grietas.

PARA LOGRAR UNA VERDADERA SOBERANÍA, NECESITAMOS LOGRAR INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS TRABAJADORES

El análisis de la relación entre México y Estados Unidos bajo el segundo mandato de Donald Trump, así como de la respuesta del gobierno de Sheinbaum, conduce a una conclusión central: no existe una salida progresiva dentro de los marcos de la subordinación imperialista ni mediante la administración “realista” de la dependencia. Ni la diplomacia cautelosa, ni la cooperación en materia de seguridad, ni la adaptación a la guerra comercial estadounidense ofrecen una defensa efectiva de la soberanía ni una mejora sustantiva de las condiciones de vida de las mayorías.

El gobierno de Sheinbaum combina declaraciones formales contra el injerencismo con una práctica sistemática de concesiones: profundización del T-MEC, alinea-

miento con la política comercial de Trump, militarización de las fronteras, cooperación en inteligencia y extradiciones en el marco de la “guerra contra las drogas”.

Esta contradicción no es accidental, sino estructural. El progresismo gobierna sobre economías dependientes, integradas de manera subordinada al mercado mundial, y busca conciliar intereses incompatibles: por un lado, contener el descontento social; por otro, garantizar la estabilidad necesaria para la reproducción del capital y el cumplimiento de los compromisos con las potencias imperialistas. El resultado es una política de administración del conflicto, no de transformación, que deja intactos los mecanismos de dominación y explotación.

La ofensiva imperialista encabezada por Trump —expresada en amenazas de intervención militar, chantajes arancelarios, criminalización de la migración y expansión de la militarización— pone en evidencia la impotencia de esta estrategia. Frente a un imperialismo que actúa abiertamente mediante la coerción, la diplomacia sin respaldo social se revela insuficiente. Las declaraciones de principios, las apelaciones al derecho internacional o a la “comunidad internacional” no han frenado ni la intervención en Venezuela, ni el genocidio en Gaza, ni la militarización de la frontera, ni las amenazas directas contra México.

El único camino para lograr la justicia social y la independencia nacional y no volver a caer en falsas alternativas ni ser usados como instrumentos involuntarios de las disputas por el poder entre los dueños del dinero grande, es construir una alternativa política independiente de los trabajadores, que encabece las luchas de todos los explotados y aspire no sólo a

reclamar al gobierno de los patrones una porción de la riqueza que producimos, sino a establecer un gobierno obrero, campesino y popular. La construcción de una alternativa obrera implica, en primer lugar, romper con esa pasividad a la que contribuyen las burocracias sindicales. Por eso, frente a la militarización y al avance imperialista, es necesario que las centrales sindicales, los sindicatos combativos, el movimiento estudiantil y las organizaciones populares asuman un rol activo. No se trata solo de pronunciarse, sino de movilizar, organizar paros, huelgas y acciones coordinadas, y generar espacios de organización con democracia obrera e independencia de clase que enfrenten tanto las amenazas externas como las políticas internas que las viabilizan.

Desde las luchas de nuestra clase, debemos formular una alternativa política independiente, un programa por la verdadera independencia mexicana, un programa de soberanía nacional y de emergencia climática que cuestione de raíz los pilares de la política imperialista estadounidense (la guerra contra las drogas, la criminalización de la migración y la militarización de la vida social) sin alimentar ninguna expectativa en los imperialismos rivales como el chino. Esto implica plantear medidas que hoy son excluidas del debate oficial, como la desmilitarización del país, el retiro del Ejército de las tareas de seguridad interna, la legalización de las drogas para desarticular el negocio criminal y la reorientación del gasto militar hacia salud, educación, vivienda y empleo. En esa tarea estamos empeñados los que nos agrupamos en la Corriente Socialista de los Trabajadores; los llamamos a poner un granito de arena en esa construcción. ■

ECUADOR, IMPERIALISMO Y SOBERANÍA:

LA OFENSIVA GEOPOLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA

LENA SOUZA (PSTU B)
FEBRERO 8, 2026

MILITARIZACIÓN, EXTRACCIÓN DE RECURSOS Y CONTROL GEOPOLÍTICO

La política exterior de Estados Unidos en América Latina entró en una fase abierta de agresividad militar y de imposición política forzada. Bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”, Trump profundiza la militarización del continente y busca reinstalar una lógica colonial de control territorial, económico y político en varios países. Bajo la presidencia de Daniel Noboa, un títere de Trump, Ecuador se convirtió en una de las plataformas de ese proyecto.

El gobierno de Noboa justifica su entrega con la narrativa del combate al crimen y al narcotráfico, que en los últimos años transformó a Ecuador en el país con la mayor tasa de homicidios de América Latina. Esta narrativa coincide con la retórica estadounidense de que el país se volvió un importante punto de tránsito de drogas y de que la cooperación militar y la presencia de bases extranjeras serían “esenciales” para dismantelar redes criminales de alcance regional.

Ninguna iniciativa del gobierno estadounidense es “coincidencia” ni “cooperación desinteresada”. La seguridad de los pueblos latinoamericanos no es la prioridad: la prioridad es garantizar rutas militares, influencia política y control de los recursos naturales con la ayuda de gobiernos dóciles y entreguistas.

SUMISIÓN AL IMPERIALISMO

Desde el inicio de su mandato, Daniel Noboa pasó a gobernar con una agenda centrada en la retórica de la “seguridad”, la militarización del país y el alineamiento explícito con Estados Unidos, tratando a la Constitución de 2008 como un obstáculo para ese objetivo. En los primeros meses de gobierno, el Ejecutivo intensificó el uso de decretos de estado de excepción y el envío de proyectos de ley que ampliaban el papel de las Fuerzas Armadas y restringían derechos fundamentales, de manera tan explícita que la Corte

Constitucional se vio obligada a cuestionarlos, generando un conflicto con el gobierno.

Ese conflicto institucional se profundizó a lo largo de 2025, cuando Noboa pasó a atacar públicamente a la Corte, acusándola de “favorecer al crimen” y de actuar contra la “voluntad popular”. En paralelo, el gobierno comenzó a defender abiertamente cambios constitucionales estructurales, incluida la flexibilización de la prohibición de bases militares extranjeras, abriendo un enfrentamiento directo con los movimientos sociales organizados, que se posicionaron contra una nueva Constitución, ya que el objetivo de quitar soberanía al país y derechos conquistados en la Constitución de 2008 estaba claramente detrás de la intención del gobierno.

En junio de 2025, la Asamblea Nacional, con mayoría alineada al gobierno, llegó a aprobar una propuesta de reforma constitucional que permitiría la instalación de bases militares extranjeras en el país con el argumento de que el narcotráfico se habría intensificado tras el cierre de la base militar de Estados Unidos en Manta en 2009.

El alineamiento con Washington tuvo un hito simbólico el 4 de septiembre de 2025, cuando el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visitó Quito y declaró públicamente que, si Ecuador “lo necesitaba”, Estados Unidos “evaluaría” el regreso de bases militares al país. El objetivo explícito era avanzar en acuerdos de seguridad que permitieran operaciones conjuntas por aire, mar y tierra, incluso con garantías de inmunidad jurídica para militares estadounidenses, profundizando la sumisión estratégica del país.

Frente a las resistencias institucionales impuestas por la Corte Constitucional y a la creciente presión del movimiento social, que se movilizó contra cualquier cambio en la Constitución de 2008 y levantó la bandera de la defensa de la soberanía nacional, el gobierno optó por llevar el conflicto al terreno del plebiscito,



convocando un referéndum nacional.

EL PUEBLO DIJO NO AL PROTECTORADO MILITAR

El intento de consolidar la sumisión ocurrió en el referéndum del 16 de noviembre de 2025, cuando el gobierno de Noboa incluyó una pregunta central sobre la derogación del artículo 5° de la Constitución del Ecuador, que desde 2008 prohíbe expresamente la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. La respuesta popular fue contundente: más del 60% del electorado votó NO.

En el mismo plebiscito, la población también rechazó otras propuestas del Ejecutivo. El resultado representó una derrota política significativa para el gobierno y una victoria histórica de la soberanía popular.

Ese “no” fue más que un resultado electoral: fue una afirmación de memoria, dignidad y resistencia antiimperialista. Fue la negativa del pueblo ecuatoriano al proyecto de transformar el país en una plataforma militar de Estados Unidos y al intento de imponer, mediante fuerza institucional y represiva, un

modelo de sumisión ya rechazado en luchas recientes.

MANTA: EL REGRESO ENCUBIERTO DE LA PRESENCIA MILITAR

Aunque derrotado en el papel, el plan no retrocedió. En diciembre de 2025 se anunció una operación conjunta en la Base Aérea de Manta, con presencia directa de tropas de EE. UU. Esa misma base fue utilizada entre 1999 y 2009 por Washington y hoy vuelve a escena con otro nombre y otra narrativa, pero con el mismo objetivo: garantizar la posición estratégica de Estados Unidos en el Pacífico Sur.

El contexto geopolítico es central para entender esta ofensiva. El intento de reintroducir bases militares en Ecuador se inscribe en la estrategia de control hemisférico de Estados Unidos, marcada por la disputa con China, el interés en rutas estratégicas del Pacífico Sur y la consolidación de puntos de apoyo militar en América Latina.

NOBOA ABRE LAS PUERTAS PARA QUE EL IMPERIALISMO SAQUE LOS RECURSOS NATURALES

En el mismo camino de ali-

neamiento con los intereses del imperialismo, el gobierno de Daniel Noboa mantuvo una postura de silencio e inacción frente al arbitraje internacional favorable a Chevron, que volvió a beneficiar a la petrolera estadounidense en el histórico conflicto judicial contra el Estado ecuatoriano y las comunidades amazónicas. La decisión arbitral, emitida en instancias internacionales de protección al capital transnacional, reafirmó la anulación de la condena ambiental impuesta a la empresa en Ecuador, ignorando décadas de contaminación, violaciones de derechos humanos y daños irreversibles en territorios indígenas. Al no reaccionar —ni siquiera cuestionar política, diplomática o jurídicamente esa decisión—, Noboa se somete a los mecanismos internacionales que blindan a las corporaciones y debilitan la soberanía nacional, abandonando a las víctimas de la devastación ambiental y reforzando la lógica de que los intereses de las multinacionales están por encima de la justicia social y ambiental.

DEPÓSITO DE MIGRANTES

Para completar la sumisión de Noboa, en septiembre de 2025 se negoció con Washington —según confirmó la Cancillería ecuatoriana— un plan para recibir personas deportadas desde terceros países, como parte de un acuerdo discutido durante la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a Ecuador. La disposición del gobierno de Daniel Noboa a negociar con Estados Unidos la aceptación de migrantes deportados o solicitantes de asilo revela otra faceta de la sumisión de Ecuador a la agenda imperial. Al convertir al país en una pieza auxiliar de la política migratoria estadouniden-



se, Noboa acepta la lógica de la externalización de fronteras, en la que las naciones dependientes asumen los costos humanos, sociales y económicos de una crisis creada por el propio imperialismo. En un contexto de profunda crisis social, desempleo y precarización, esta posibilidad no responde a ninguna necesidad del pueblo ecuatoriano, sino a los intereses de Washington, convirtiendo a Ecuador en un “depósito humano” y reforzando su posición subordinada en la jerarquía geopolítica regional.

MIENTRAS SE SOMETE AL IMPERIALISMO, NOBOA UTILIZA LA FUERZA, LA REPRESIÓN Y LOS ASESINATOS CONTRA LA RESISTENCIA SOCIAL

La sumisión del gobierno de Daniel Noboa a los intereses estratégicos de Estados Unidos va de la mano con el endurecimiento autoritario en el plano interno. La intensificación de la cooperación en seguridad con Washington —expresada en acuerdos militares, presencia de asesorías extranjeras, entrenamiento de fuerzas de seguridad y adopción de la doctrina del

“narcoterrorismo”— creó el marco político e ideológico que legitimó la represión contra el movimiento social. Aunque no existen pruebas públicas de participación operativa directa de agentes estadounidenses en la represión de las protestas, medios comunitarios, organizaciones indígenas y colectivos de derechos humanos denuncian que ese alineamiento brindó respaldo político, discursivo y estratégico a la militarización del país.

Durante el Paro Nacional de 2025, esta lógica se hizo explícita. El gobierno respondió a las movilizaciones populares con el despliegue del Ejército, operaciones militares en territorios indígenas y urbanos, estados de excepción encubiertos y el uso sistemático de la fuerza policial. Protestas masivas y mayoritariamente pacíficas fueron encuadradas como amenazas a la “seguridad nacional”, mientras que dirigentes indígenas, sindicales y estudiantiles pasaron a ser acusados de terrorismo, en un claro intento de asociar la lucha social con el narcotráfico y con organizaciones criminales. Esta estrategia de criminalización, ampliamente denunciada por medios comuni-

tarios y organizaciones internacionales, violó garantías constitucionales y derechos humanos.

La represión no se limitó a la judicialización y la estigmatización: hubo detenciones arbitrarias, persecución judicial, congelamiento de cuentas bancarias de dirigentes, ataques a la prensa comunitaria y asesinatos de luchadores sociales, revelando un patrón de violencia política orientado a desarticular la resistencia popular mediante el miedo y la fuerza.

Esta escalada represiva no es un desvío, sino una parte estructural del proyecto de gobierno. Mientras Noboa profundiza la entrega de la soberanía nacional —ya sea en la apertura al capital transnacional, en la aceptación de arbitrajes internacionales favorables a las corporaciones o en la disposición a convertir a Ecuador en plataforma militar y migratoria de Estados Unidos—, refuerza internamente un Estado represor, con sumisión externa al imperialismo y en guerra contra los sectores populares, indígenas, la juventud y los trabajadores y trabajadoras que resisten el saqueo, la militarización y la pérdida de derechos.

UNIR A AMÉRICA LATINA CONTRA EL IMPERIALISMO: SOBERANÍA, UNIDAD Y RESISTENCIA POPULAR

La ofensiva imperialista en curso en Ecuador no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia regional que busca transformar a América Latina en un territorio subordinado, militarizado y funcional a los intereses del capital transnacional y de Estados Unidos. La experiencia ecuatoriana —marcada por la resistencia popular al protectorado militar, el rechazo en las urnas a la entrega de la soberanía y la movilización

permanente de pueblos indígenas, trabajadores/as y juventudes— demuestra que los pueblos no están derrotados. Incluso bajo represión, criminalización y violencia estatal, los movimientos sociales siguen siendo la principal trinchera de defensa de la autodeterminación, de los bienes comunes y de la dignidad colectiva.

Sin embargo, la correlación de fuerzas impuesta por el imperialismo exige más que resistencias nacionales aisladas. Frente a gobiernos títeres que administran la dependencia y gobiernan contra sus propios pueblos, se vuelve urgente construir unidad latinoamericana desde abajo, articulando luchas, organizaciones y proyectos políticos capaces de enfrentar al imperialismo en todas sus dimensiones —militar, económica, jurídica e ideológica—. Defender hoy a Ecuador es defender a toda América Latina: es afirmar que nuestros pueblos tienen el derecho de decidir sus destinos sin tutela externa, sin bases militares extranjeras, sin tribunales del capital y sin Estados que apunten sus armas contra su propia población. La historia del continente muestra que solo la organización, la solidaridad internacionalista y la lucha colectiva podrán romper el ciclo de sumisión y abrir camino hacia una América Latina soberana, socialista y libre del imperialismo. ■

REFERÊNCIAS

• Reuters — El Parlamento de Ecuador respalda una reforma que permitiría bases militares extranjeras (sobre la aprobación de la reforma que habilitaría la instalación de bases extranjeras en Ecuador). UOL Noticias

• Reuters — Ecuador votará en noviembre sobre si permitir bases militares extranjeras (referendo programado para noviembre de 2025). Reuters

• Agence France-Presse / UOL — Ecuador negocia recibir refugiados de EE. UU. (negociaciones migratorias con Estados Unidos). UOL Noticias

• Reuters / AP — Fracasa en la votación la medida para permitir bases militares extranjeras en Ecuador (resultado del referendo que rechazó permitir bases extranjeras). Reuters

• Euronews / Reuters — Los votantes ecuatorianos rechazan propuestas de bases militares extranjeras (resultados detallados del referendo). Euronews

• Amnistía Internacional — Ecuador: alerta por la represión de las protestas (informe sobre uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y acusaciones de terrorismo contra dirigentes sociales).

• Human Rights Watch — Respuesta abusiva a las protestas en Ecuador (documentación sobre restricciones al derecho de reunión, uso excesivo de la fuerza, congelamiento de cuentas y ataques a medios comunitarios).

• ESCR-Net — Llamado urgente de la comunidad internacional para el fin inmediato de la represión... (datos sobre heridos, muertos, desaparecidos y criminalización de organizaciones sociales).

• CIMI — Organizaciones latinoamericanas repudian la persecución a Guardias Indígenas en Ecuador (repudio a la criminalización de las Guardias Indígenas y acusaciones de terrorismo).

• Wambra Medio Comunitario — Militarización, criminalización y protesta social en el gobierno de Noboa (coberturas y análisis

sobre represión, estado de excepción y criminalización de los movimientos sociales).

• Radio Pichincha — Gobierno de Noboa, seguridad y militarización: impactos en derechos humanos (análisis críticos sobre la política de seguridad y la represión).

• Primicias (sección de análisis crítico) — Referéndum, bases militares y soberanía nacional (contexto político del referendo y debates sobre soberanía).

• CONAIE — Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador: pronunciamientos y denuncias sobre el Paro Nacional y la represión estatal (comunicados oficiales).

• Revista Crisis (Argentina) — Ecuador: seguridad, militarización y disciplinamiento social (editoriales y análisis regionales).

• Página/12 — Noboa, militarización y alineamiento con Estados Unidos (cobertura crítica de la política exterior y la represión).

• CLACSO — Militarización, extractivismo y criminalización de la protesta en América Latina (artículos y dossiers regionales).

• ALAI – América Latina en Movimiento — Ecuador: entre el autoritarismo y la resistencia popular (análisis políticos y sociales).

• CIDH/OEA — Comunicados sobre protestas sociales y uso de la fuerza en Ecuador (observaciones regionales).

• RSF – Reporteros Sin Fronteras — Agresiones contra periodistas durante protestas en Ecuador.

• CELAG — Estados Unidos, la seguridad hemisférica y el control político en Ecuador.

• Observatorio Latinoamericano de Geopolítica — Bases militares, cooperación securitaria y dependencia.

CÓMO LOGRAR LA SEGUNDA INDEPENDENCIA LATINOAMERICANA

ALEJANDRO ITURBE
MAYO, 2019

El imperialismo avanza y se profundiza en Latinoamérica. La independencia política lograda en el siglo XIX hoy es formal y limitada. Los movimientos nacionalistas burgueses fracasaron en su resistencia limitada y terminaron por capitular. ¿Cuál es el camino y cuáles son las tareas para lograr la segunda y definitiva independencia latinoamericana?

La liberación nacional del yugo imperialista (es decir, la independencia política) es una “tarea democrática”. En el lenguaje marxista, estas tareas son aquellas que llevó adelante la burguesía en su época revolucionaria, cuando combatió y destruyó las estructuras económicas y el Estado feudales para convertirse en la clase dominante de la sociedad. En estas tareas se apoyó y encabezó las luchas de las masas insurrectas en procesos cuyo modelo histórico fue el de la Revolución Francesa (1789). Las principales tareas revolucionarias llevadas adelante por la burguesía en esa época fueron la unidad nacional de diversos países europeos, la destrucción del régimen feudal, la construcción de la democracia burguesa parlamentaria y la distribución de la tierra (hasta entonces propiedad mayoritaria de la nobleza).

Junto con estas revoluciones, se desarrolló otro proceso revolucionario que ya no se dirigía contra el viejo feudalismo sino contra el capitalismo, que iniciaba su predominio mundial: la lucha por la independencia de diversas naciones coloniales conquistadas por las potencias centrales en siglos anteriores. En el continente americano, este período comienza con la independencia de Estados Unidos (1776), continúa en Haití (1804) y con el proceso de las colonias españolas (iniciado en 1810). En todos los casos, hubo guerras revolucionarias para defender y consolidar la independencia contra las naciones colonialistas. La dinámica de Brasil fue diferente: quien declara la independencia, en 1821, es una rama de la monarquía y de la corte portuguesa instalada en el país.

LAS TAREAS DEMOCRÁTICAS BAJO EL CAPITALISMO IMPERIALISTA

Sin embargo, en numerosos países y regiones, la burguesía fue incapaz de llevar a cabo una o varias tareas democráticas que, por ello, quedaron pendientes de resolución. Por otro lado, el desarrollo del capitalismo fue creando nuevas tareas democráticas y la necesidad de luchar por ellas. Por ejemplo, el resurgimiento de la esclavitud en gran escala en Estados Unidos, Brasil, Centroamérica y el Caribe, como servicio del desarrollo capitalista (fundamentalmente mediante el secuestro y traslado compulsivo de esclavos negros africanos), varias de cuyas consecuencias subsistieron tras la abolición de la esclavitud. O la opresión a los pueblos latinoamericanos originarios derivada de la colonización y que se mantuvo luego de la independencia. Además, como vimos, en el siglo XX se desarrolló una nueva forma de dominación por parte de las potencias imperialistas: la colonización. Se puso a la orden del día una tarea: la “liberación nacional” o la “segunda y definitiva independencia”.

Por todo lo que hemos analizado, la lucha por las viejas y nuevas tareas democráticas es profundamente actual. Pero ya no se dirige contra el sistema y las clases feudales (o sus resabios) o contra los viejos imperios coloniales, sino contra el capitalismo imperialista en su conjunto, es decir, contra las burguesías imperialistas y contra las burguesías nacionales (que son sus agentes). Esto significa que la lucha por las tareas democráticas pasa a integrarse en un proceso mayor que las engloba: la revolución obrera y socialista, con sus tareas propias.

LA ACTUALIDAD DE LA TEORÍA DE LA REVOLUCIÓN PERMANENTE

El primero en señalar con total claridad esta continuidad o “nexo interno” entre las diferentes tareas



revolucionarias fue Trotsky en el debate entre los marxistas rusos, desarrollado entre las revoluciones de 1905 y 1917. Después, basado en la experiencia de esa revolución triunfante y de la que fue derrocada en China (1923-1928), escribiría la formulación definitiva de su Teoría de la Revolución Permanente. En una de sus Tesis, expresa: Con respecto a los países de desarrollo burgués retrasado, y en particular de los coloniales y semicoloniales, la teoría de la revolución permanente significa que la resolución íntegra y efectiva de sus fines democráticos y de su emancipación nacional tan solo puede concebirse por medio de la dictadura del proletariado, empuñando este el poder como caudillo de la nación oprimida y, ante todo, de sus masas campesinas.

Esto significa que la clase obrera debe tomar el poder como caudillo de “la nación y las masas oprimidas” y comenzar a resolver esas tareas democráticas junto con tareas propias de la revolución socialista. Todos estos conceptos se aplican, de modo agudo, en Latinoamérica. Al no avanzar hacia la revolución socialista en su nivel

nacional (ni menos aún impulsar su extensión internacional), los procesos revolucionarios o de resistencia desarrollados en los siglos XX y XXI acabaron retrocediendo y abortando o siendo derrotados. Es responsabilidad de la política aplicada por las direcciones burguesas y pequeñoburguesas. De esta forma, los triunfos obtenidos con luchas revolucionarias o de resistencia se perdieron o se erosionaron al extremo.

UNA EXCEPCIÓN: LA REVOLUCIÓN CUBANA

En Latinoamérica, hubo una excepción a esta regla: la revolución encabezada por Fidel Castro y el Che Guevara que, en 1959, derrocó la dictadura pro yanqui de Fulgencio Batista.

La mayoría de la dirección del Movimiento 26 de Julio (M26J) provenía de la juventud estudiantil burguesa o pequeñoburguesa, y su programa era “democrático popular”. Es decir, no sobrepasaba los límites del capitalismo ni los del régimen democrático-burgués. Después de tomar el poder, el M26J intentó aplicar su programa “democrático popular” y formó un

gobierno con numerosos políticos burgueses que habían sido opositores a Batista.

Sin embargo, la realidad presionó a la dirección castrista y la llevó a “ir más allá” de sus intenciones y de su programa.

Al comenzar a implementar medidas como la reforma agraria y la expropiación de algunas empresas de Batista asociadas al imperialismo, el sector de la burguesía cubana que había apoyado a Fidel y el propio imperialismo empezaron a atacarlas. El resultado inmediato de esta alianza fue el fracaso del intento de invasión a Bahía de Cochinos-Playa Girón (abril de 1961), apoyado por la CIA y el gobierno de John F. Kennedy.

En respuesta, el gobierno de Castro profundizó la política de expropiación de empresas y campos de la burguesía y el imperialismo, y comenzó a aplicar un plan económico centralizado desde el Estado. Como resultado de ello, se transformó en el primer Estado obrero de Latinoamérica e inició así el camino hacia la transición al socialismo. El Che Guevara expresaba esta realidad diciendo que la revolución socialista en Cuba se



había hecho “de contragolpe”.

Para los trotskistas, el proceso Cuba no corroboraba lo planteado por Trotsky: la resolución plena de las tareas democráticas implica avanzar hacia la dictadura del proletariado. La dirección castrista tiene el gran mérito de haber decidido “avanzar” e “ir más allá” de su programa. El Che Guevara expresó esto en su frase: “Revolución que no avanza, retrocede”.

Por eso, Cuba fue durante casi tres décadas el único país latinoamericano realmente independiente del imperialismo yanqui. No se trató solo de palabras: las conquistas de la revolución cubana para los trabajadores y el pueblo fueron inmensas, especialmente en los campos de la salud, la educación y la alimentación. En ellos, partiendo de mucho más atrás, Cuba superó a países latinoamericanos mucho más ricos como Brasil, México y Argentina. Así, se convirtió en una referencia para muchos revolucionarios en todo el mundo.

LAS LIMITACIONES DEL PROCESO CUBANO

Al mismo tiempo que reivindicamos estos grandes logros de la revolución, es necesario decir que la dirección cubana construyó un Estado obrero burocrático, de acuerdo con el modelo estalinista, sin democracia real para los trabajadores y las masas. Los trabajadores cubanos nunca dirigieron el gobierno del país sino que lo hizo la burocracia del Partido Comunista cubano (sucesor del M26J).

Además, la dirección castrista siempre se mantuvo dentro del criterio del “socialismo en un solo país”, propuesto por el estalinismo desde la segunda mitad de la década de 1920, en contra de la revolución socialista internacional propuesta por el marxismo desde

su fundación. Coherente con esta realidad, en la década de 1960, el castrismo se integró al aparato estalinista internacional, centralizado por la burocracia de la entonces URSS, y pasó a defender lo esencial de sus posiciones políticas.

En los primeros años, sin embargo, lo hizo de manera contradictoria, ya que impulsó la “exportación” de la revolución mediante el entrenamiento y la formación de cuadros, así como el apoyo material a numerosas organizaciones guerrilleras latinoamericanas, una línea que no era compartida por Moscú.

Posteriormente, la dirección castrista dejó de impulsar la “exportación” de la revolución y pasó a sostener, sin mayores contradicciones, la política que emanaba de Moscú (aunque mantuvo el apoyo a algunas organizaciones guerrilleras). Por ejemplo, en 1970 respaldó al gobierno chileno de Salvador Allende y su supuesta “vía pacífica al socialismo”, que terminó en el desastre del golpe de Estado de Augusto Pinochet. En 1973, apoyó al gobierno burgués del peronismo argentino, en un momento en que este movimiento no volvía a tener roces con el imperialismo, como en su etapa anterior, sino para controlar y derrotar el ascenso obrero y popular que había comenzado en 1969 con el Cordobazo.

EL PROCESO CENTROAMERICANO

Esta política equivocada tendría un altísimo costo. En 1979, la lucha contra el régimen de Anastasio Somoza, la destrucción de la Guardia Nacional somocista y su derrocamiento por la vía revolucionaria, pusieron al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en una situación similar a la del M26J cubano veinte años

atrás. El FSLN estaba ante la alternativa de seguir el “camino cubano” y avanzar en la construcción de un nuevo Estado obrero o seguir el “camino argelino” y reconstruir el Estado burgués.

La dirección sandinista viajó a Cuba para ver a Fidel Castro (a quien reconocía como “su dirigente”) y consultarlo acerca de cuál “camino” debía seguir. La respuesta de Fidel fue muy clara: “Nicaragua no debe convertirse en una nueva Cuba”. Es decir, no hagan lo que hicimos nosotros, manténganse en el terreno del capitalismo y reconstruyan el Estado burgués.

Por orientación de Fidel, Nicaragua no se transformó en una nueva Cuba. El destino final de todo este proceso se analiza en otros artículos de la revista ya citada arriba: actualmente, el FSLN de Daniel Ortega encabeza un régimen burgués dictatorial contra los trabajadores y el pueblo nicaragüense. Como un efecto expansivo de aquella política de la dirección castrista, la lucha que la guerrilla salvadoreña desarrolló en esos años ni siquiera logró una “nueva Nicaragua”, y el FMLN terminó entregándola en la mesa de negociaciones.

Existe una consecuencia aún más profunda de esta criminal política de la dirección castrista: al frenar la revolución nicaragüense y la centroamericana, y llevarla a la derrota, Fidel contribuyó a profundizar el aislamiento del Estado obrero cubano. El final también es conocido: fueron Fidel y la dirección castrista los que restauraron el capitalismo en la década de 1990, completando así un círculo que destruyó lo que había construido. Las conquistas logradas se han perdido o están en ese camino.

Más allá de estas duras críticas a la dirección cubana y de las

consecuencias de sus graves limitaciones, la experiencia de Cuba fue muy valiosa y queda como una enseñanza imprescindible para la actualidad. Para mantener y profundizar sus aciertos y evitar repetir sus gravísimos errores.

LAS TAREAS PARA LA LIBERACIÓN LATINOAMERICANA

En este artículo no podemos desarrollar extensamente el programa que resume las tareas para la segunda independencia latinoamericana ni los debates con las propuestas del nacionalismo burgués o la izquierda adaptada a los regímenes democrático-burgueses o bonapartistas sui generis. Por eso, nos limitaremos a formular sintéticamente sus ejes principales.

El primero es el eje económico-financiero, base estructural de la dominación imperialista. El punto de partida es la suspensión del pago de la deuda externa y pública, verdadera aspiradora de riqueza y, al mismo tiempo, mecanismo de control de los planes económicos de los gobiernos burgueses latinoamericanos. Es una deuda que ya se ha pagado varias veces en sus valores reales y que, a pesar de ello, con un mecanismo usurario, no ha dejado de crecer. Sin romper ese mecanismo no hay forma de lograr ninguna independencia ni atender las necesidades de los trabajadores y el pueblo.

El siguiente paso es la expropiación sin pago y la estatización de las principales palancas de la economía en la producción y los servicios (hoy dominadas por las empresas imperialistas). Esas empresas ya han recuperado con creces sus inversiones reales a través de las remesas de ganancias, las exenciones impositivas, las adquisiciones de bienes de las empresas

privatizadas a precios de remate, la fuga de capitales y el usufructo de las fraudulentas deudas del Estado (recordemos el caso de Ford y YPF en Argentina). No les debemos nada: todo lo que poseen es de los trabajadores y el pueblo de los países latinoamericanos. Por eso, se trata de recuperar lo que es nuestro.

El tercer punto es la expropiación de los grandes latifundios para llevar a cabo una combinación de una reforma agraria que otorgue tierras a los pequeños agricultores y un proceso de socialización de la agricultura. Una combinación que tendrá proporciones distintas según la estructura agraria y socio-poblacional de cada país.

Todo este potencial productivo será desarrollado a través de un plan económico centralizado desde el Estado, que debe ser democráticamente discutido y votado por los trabajadores y el pueblo, en función de las necesidades nacionales y de la población, y no de las ganancias del imperialismo y de las burguesías nacionales.

Para que este plan pueda desarrollarse sin obstáculos, es necesaria la existencia de un monopolio estatal de la banca y el comercio exterior. Es decir, la creación de un único banco estatal con ramas especializadas: producción, consumo, comercio interno y exterior, etc. De esa forma, no solo se utilizarán racionalmente los fondos y los recursos existentes, sino que se impedirá la fuga de capitales y las maniobras, hoy habituales, de la burguesía con las divisas extranjeras en el comercio exterior.

Otro aspecto esencial de esta centralización económica estatal es la aplicación de un plan de obras públicas. Estará destinado, por un lado, a atender las necesidades más apremiantes de la población: hos-

pitales, escuelas, servicios de agua potable y alcantarillado, viviendas populares, etcétera. Por el otro, a garantizar trabajo para todos, acabando así con el flagelo de la desocupación.

LAS TAREAS POLÍTICO-MILITARES

Un segundo eje es la necesidad de ruptura de los pactos políticos y militares que subordinan nuestros países al imperialismo, como los de Río de Janeiro (1947) y otros posteriores, así como el desconocimiento de los acuerdos de la deuda externa y de las privatizaciones de empresas que renuncian a la soberanía jurídica. Son pactos inadmisibles desde el punto de vista de la soberanía nacional, y sin romper con ellos no hay independencia posible.

De modo especial, no existe independencia real sin el desmantelamiento de las bases militares imperialistas y su expulsión, así como la eliminación de los "ejercicios militares conjuntos" que manda el Pentágono estadounidense. Es necesario construir fuerzas armadas al servicio de la independencia. Retomaremos este punto al hablar del carácter continental de la lucha.

En el plano político-institucional resulta evidente que todos los regímenes de las burguesías nacionales (democrático-burgueses o bonapartistas) acaban siendo instrumentos del imperialismo y presentan un grado de corrupción cada vez más repugnante. Nuestra propuesta es construir organismos estatales democráticos de los trabajadores y las masas, al estilo de los soviets (concejos) de los primeros años de la URSS. Como ejemplo latinoamericano, está la Central Obrera Boliviana (COB) de 1952, en la que, enca-

bezada por los mineros y otros sectores de trabajadores industriales, participaban los maestros, los campesinos pobres, las amas de casa de los barrios populares, los pequeños comerciantes, etc. En cada país, estas instituciones pueden adoptar formas diferentes, determinadas por su tradición y la conformación social de las clases explotadas y oprimidas.

Aunque no vamos a desarrollarlo aquí, en esas instituciones deben contar con un espacio especial para los sectores más explotados y oprimidos de nuestros países, como la población negra de Brasil y otros países, y las nacionalidades indígenas. Con respeto y apoyo tanto para mantener su cultura, sus tradiciones y su lengua, como para el desarrollo de sus experiencias económicas y políticas propias (como las comunas de los pueblos andinos). Integradas en una totalidad nacional más amplia y compleja, es indispensable que cuenten con ese espacio.

LA LUCHA ES CONTINENTAL

La lucha por la segunda independencia contra el imperialismo se inicia en cada país, pero solo puede ser exitosa en el marco de una lucha continental. La primera independencia de muchos países se logró en una guerra continental contra el imperio español, con ejércitos unificados integrados por soldados y oficiales de muchos países.

Esta necesidad de unidad surge de dos elementos centrales. El primero es que padecemos los mismos problemas. El segundo es que enfrentamos al mismo enemigo (el imperialismo yanqui que, además, es muy poderoso). En esta realidad, Brasil se suma hoy a los países de habla hispana. Los países separados somos presas más fáciles;

juntos en la lucha, existen muchas mayores posibilidades de triunfar.

Esto nos lleva nuevamente al problema militar que plantea esta lucha. Nadie subestima, ni mucho menos, el poderío militar del imperialismo ni la violenta reacción que tendrá si comienza a perder su “patio trasero”. Al igual que la primera independencia, la segunda requerirá una dura lucha militar, en la que, unidos, seremos mucho más fuertes. Los países que fueron colonia de España tienen la tradición de unidad político-militar de quienes los libraron, como Bolívar, San Martín, O’Higgins y otros patriotas.

Nadie dice que será una lucha fácil ni que la victoria está asegurada. Pero la historia nos muestra que la convicción y la determinación políticas pueden derrotar a potencias que, en el campo puramente militar, son superiores. Es la enseñanza de la primera independencia latinoamericana, de la naciente Unión Soviética, que enfrentó y derrotó la invasión de catorce ejércitos imperialistas, del pueblo cubano, que rechazó la invasión organizada por la CIA, del pueblo vietnamita, que derrotó al poderoso ejército estadounidense, etc.

Al mismo tiempo, un proceso de revolución latinoamericana se metería dentro de los propios Estados Unidos, a través de su gran población latina y negra. Posiblemente tendrá un impacto muy superior a lo ocurrido durante la guerra de Vietnam y las movilizaciones antibélicas de las décadas de 1960 y 1970, que erosionaron políticamente su capacidad militar y desgastaron la base de las Fuerzas Armadas.

Reivindicamos a Bolívar, San Martín y O’Higgins (agreguemos a otros como el haitiano Tous-



saint L'Ouverture) porque fueron los líderes de la primera independencia. Los tres primeros fueron la mejor expresión de una burguesía revolucionaria que estuvo dispuesta a llevar hasta el final su lucha por la independencia. Hoy, los sectores centrales de esas burguesías latinoamericanas están “del otro lado” de esa lucha, asociados a esa subordinación al imperialismo. Son parte del enemigo a combatir.

Tal como decía Trotsky, esa segunda independencia solo puede lograrse si esa lucha la protagoniza el proletariado, encabezando al campesinado pobre y a las masas urbanas oprimidas. Por eso, la “Patria Grande” con la que soñaron Bolívar, San Martín, O’Higgins y L'Ouverture solo podrá lograrse a través de una Federación de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas. La LIT-CI y sus partidos se ponen al servicio de esta tarea. ■

DECLARACIÓN CONJUNTA DE TRABAJADORES SOCIALISTAS REVOLUCIONARIOS DE VENEZUELA, COLOMBIA, Y LOS ESTADOS UNIDOS

“Necesitamos movilizarnos para enfrentar la maquinaria de guerra imperialista con el poder de la clase trabajadora organizada. No tenemos ningún compromiso con los gobiernos burgueses de Maduro y Petro.”

**UNIDAD SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES — VENEZUELA; PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES — COLOMBIA; LA VOZ DE LOS TRABAJADORES — EE. UU.
FEBRERO 2, 2026**

Nosotros, organizaciones de trabajadores socialistas revolucionarios de Venezuela, Colombia y los Estados Unidos, repudiamos totalmente los asesinatos injustificables de marineros y pescadores de Venezuela, Colombia y Trinidad por la armada yanqui. Igualmente, las asquerosas y mortíferas amenazas y provocaciones del gobierno de Trump contra los pueblos de Venezuela y Colombia, que implican un ataque imperialista y un riesgo mortal para toda la región de América Latina. El gobierno de Trump ha reconocido 10 ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas procedentes de Sudamérica, en los que han muerto al menos 57 personas como reseña The New York Times, sumando el ataque del viernes 27/10/2025, que dejó un saldo de catorce fallecidos.

Los argumentos de la “guerra contra las drogas” son solo un pretexto para configurar una maniobra vacía imperialista. Siendo que no se ha mostrado ninguna prueba de que los que han sido asesinados por los EE. UU. en las últimas semanas sean narcotraficantes — haciendo notar que incluso si fuese verdad, esto no justifica su asesinato aleatorio por un escuadrón militar. El historial de las intervenciones yanquis muestra que su política no tiene la menor intención de combatir el narcotráfico. Por el contrario, las agencias federales de EE. UU. han colaborado con los car-

teles narcotraficantes en México y Colombia, y sus intervenciones no han servido para parar el tráfico, sino para reorganizarlo bajo control yanqui.

Al acusar, sin mostrar pruebas, a Nicolás Maduro y recientemente a Petro, como un líder de los narcos, Trump claramente prepara el pretexto para una intervención militar contra Venezuela y no se puede descartar también contra Colombia. Por su parte, el intento de Trump de presentar a Maduro y Petro como inmorales e ilegales “líderes del tráfico de drogas” ignora la propia participación de su gobierno y gobiernos anteriores de EE. UU. en el narcotráfico, tanto como sus conexiones personales con el famoso traficante de mujeres, Jeffrey Epstein.

Trump, o cualquier presidente estadounidense, no tienen ninguna autoridad moral para denunciar a presidentes o incluso países enteros de América Latina como traficantes de cualquier tipo. El intento del gobierno estadounidense es utilizar la “diplomacia de cañoneras”—que puede llegar a ser invasión plena— para avanzar en una política imperialista de rapiña y opresión para todos los pueblos de nuestra América.

En los Estados Unidos, identificamos como estos ataques imperialistas están directamente ligados a los ataques del gobierno de Trump contra la clase trabajadora norteamericana, e igualmente con el largo historial de intervenciones de EE. UU. contra América



Latina y la clase trabajadora en general, y alentamos la movilización de masas para frenarlo totalmente, incluyendo la anulación sin pago de todas las deudas neocoloniales que controla EE. UU.

NUESTRA POSICIÓN

Como socialistas que nos organizamos en Estados Unidos, Venezuela, y Colombia reconocemos que necesitamos movilizarnos para enfrentar la maquinaria de guerra imperialista con el poder de la clase trabajadora organizada. No tenemos ningún compromiso con los gobiernos burgueses de Maduro y Petro.

SITUACIÓN EN VENEZUELA Y COLOMBIA

En Venezuela, sabemos que Maduro no tiene nada de socialista, que mantiene a su pueblo sumido en la pobreza y que incluso está dispuesto a entregar toda la riqueza natural del país para satisfacer las demandas de Trump. En Colombia, a pesar de sus denuncias correctas ante la hipocresía y la injerencia imperialista, Petro sigue en el marco de pagar la deuda externa, y de ser socio global de la OTAN, atado a compromisos que mantienen a Colombia bajo el control del imperialismo.

Nuestro compromiso es con la clase trabajadora de Venezuela y Colombia, reconociendo que el intento de derrocar a Maduro con la presión militar imperialista no va a

hacer nada para mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano; cualquier sanción de Trump contra Colombia afectará a los trabajadores; la injerencia imperialista solo dejará a los países más empobrecidos y dominados por el imperialismo. Tal como lo muestra el largo historial de intervenciones militares yanquis en nuestro continente y en el mundo.

Una intervención militar en Venezuela, Colombia o cualquier otro país del continente, de última lo que persigue es reinstalar el método del garrote y de las incursiones militares directas para determinar los rumbos políticos de nuestros países según la conveniencia del imperialismo norteamericano y reforzar el resguardo de sus intereses políticos, económicos y militares, en una región históricamente estratégica para el imperialismo yanqui y que consideran su patio trasero.

DEMANDAS Y LLAMAMIENTOS

Por tales razones, en Venezuela, llamamos a la acción política unificada para derrotar la amenaza de los ataques imperialistas. El pueblo obrero necesita movilizarse en esta lucha, y desde allí avanzar y organizarse para derrotar los ajustes antiobreros y antipopulares del gobierno de Maduro. Mientras que en Colombia, llamamos a no pagar la deuda externa imperialista, salir de la OTAN y al rechazo de cual-

quier chantaje imperialista. En toda América Latina y en todo el mundo, rechazamos la intervención militar imperialista y exigimos el retiro de la presencia militar yanqui en el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

Llamamos a la más amplia unidad de acción internacional, de la clase trabajadora, los oprimidos y el pueblo en general, para derrotar la ofensiva imperialista. Es un hecho que el pueblo estadounidense ya se moviliza contra su gobierno, con los 7 millones de personas que se tomaron las calles el 18 de octubre, y se necesita profundizar y organizar este sentimiento popular para que tenga la fuerza de la clase de hacer huelga general; y en los países latinoamericanos es necesario movilizarse ampliamente de la misma manera para defenderse tanto de los ataques yanquis como de los amos de nuestros países que nos entregan a los mismos imperialistas. Estas luchas de nuestra clase incluso necesitan incorporar la lucha de los inmigrantes por el derecho de vivir en paz y unirse a la lucha mundial contra el saqueo imperialista en general.

¡Manos yanquis fuera de América Latina!

¡Abajo la deuda externa!

¡Trump tiene que pagar por todos los asesinados!

¡La lucha contra el imperialismo se gana con la movilización y dirección de la clase obrera internacional! ■

¡ABAJO LA AGRESIÓN YANQUI! ¡DEFENDAMOS A VENEZUELA!

LIT-QI; UIT-CI; CCRI
JANEIRO 31, 2026

El gobierno de Estados Unidos que preside el ultraderechista Donald Trump, avanza en su ofensiva belicista e injerencista en el Caribe, y en particular contra Venezuela.

En diciembre ha declarado un bloqueo absoluto a los petroleros que entren o salgan del país, después de haber secuestrado arbitrariamente varios buques provenientes de este país, apropiándose de toneladas de petróleo venezolano. Eso después de haber perpetrado casi tres decenas de ataques contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico, dejando un saldo de una centena de muertos, con el falso argumento del “combate al narcotráfico”.

Esto representa algo extremadamente grave para un país sumamente dependiente de los ingresos por exportaciones petroleras.

Junto con eso Trump está preparando una intervención militar de Venezuela para sacar a Maduro e imponer un gobierno de ultraderecha. Para eso ha estacionado una gigantesca flota naval de guerra en el Caribe. Sea por vía de la invasión, un ataque aéreo o por la asfixia económica, el objetivo es el mismo: imponer un gobierno títere en el país.

Los argumentos de la “guerra contra las drogas” son sólo un pretexto para la maniobra imperialista. El historial de las intervenciones yanquis muestra que su política no tiene la menor intención de combatir el narcotráfico. Por el contrario, las agencias federales de EE. UU. han colaborado con los carteles narcotraficantes en México y Colombia, y sus intervenciones no han servido para parar el tráfico, sino para reorganizarlo bajo control yanqui. El indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EUA por narcotráfico, muestra la farsa.

El recién publicado documento sobre Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno Trump explicita su objetivo de tener gobiernos títeres en Latinoamérica. Ya no bastan gobiernos pró imperialistas, que

apliquen planes neoliberales y abran la economía a las multinacionales. Quieren gobiernos de ultraderecha, completamente sometidos a Trump. Para eso, hacen inclusive presiones económicas y políticas para influenciar en las elecciones. Están avanzando con Milei, Kast, Bukele, Asfura y quieren más con el uribismo en Colombia.

Como parte de eso, Trump ha rechazado la propuesta de Maduro de entregar todo el petróleo y los minerales del país a cambio de quedarse en el poder, como ha reseñado el New York Times. Trump quiere imponer, de la forma que sea, a María Corina Machado, como un gobierno títere. Sin embargo, Trump no tiene todo a favor. Más del 70 por ciento de las y los estadounidenses se oponen al plan de invasión y agresión a Venezuela.

Esa postura del gobierno de EUA tiene enorme gravedad ya que afectará a los trabajadores en Venezuela; a los venezolanos residentes en otros países y los pueblos de Latinoamérica como un todo. Hace décadas que no se produce una agresión militar o una invasión directa de EUA en el continente.

Por eso llamamos a una amplia campaña unitaria con todos aquellos que están contra la imposición del imperialismo sobre Venezuela y Latinoamérica. Hasta este momento no hay aún una movilización antiimperialista contra la intervención de Trump a la altura de la magnitud de la amenaza existente. Es muy importante y urgente revertir eso y avanzar en la unidad de acción ante la gravedad de los hechos.

NINGUNA CONFIANZA EN MADURO

Pelear contra Trump y su intervencionismo no significa, bajo ningún concepto, dar algún tipo de apoyo político a Maduro. Su gobierno no tiene nada de antiimperialista y menos aún de socialista. De hecho, hasta el día de hoy la transnacional estadounidense Chevron sigue operando en Venezuela y es la principal explotadora y exportadora de petróleo vene-



zolano. Es una dictadura capitalista que gobierna aplicando un ajuste contra el pueblo trabajador, un gobierno de doble discurso y falso socialismo.

El salario de los trabajadores venezolanos ha sido pulverizado por la inflación. Hoy el sueldo mínimo equivale a menos de un dólar por mes. Los derechos laborales y sindicales han sido conculcados como parte de la política ajustadora pro patronal y antiobrera de Maduro. Los servicios básicos se encuentran en el más completo deterioro como consecuencia de todo esto.

Las sanciones imperialistas y ahora está ofensiva belicista e injerencista no hacen más que agravar esta situación, deteriorándose aún más las ya dramáticas condiciones de vida del pueblo trabajador.

Por eso, estaremos en la primera fila del combate contra la intervención de Trump en Venezuela, pero sin dar apoyo político, ni

depositar confianza en Maduro.

HAGAMOS UNA FUERTE Y UNITARIA CAMPAÑA ANTIIMPERIALISTA

Rechazamos las declaraciones de Donald Trump, reclamando «le sean devueltos a los Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y demás activos que les robaron», como si estos recursos alguna vez hubiesen sido suyos. Lo cierto es que quién históricamente ha venido saqueando los recursos energéticos, petrolíferos, minerales, tierras y demás ha sido el imperialismo norteamericano, en connivencia con los gobiernos de turno venezolanos, tanto los del puntofijismo, como los chavistas y más aún el actual de Maduro. Lo que Trump pretende, en su disputa interimperialista en el continente, es reforzar y reasegurar este saqueo, con un gobierno títere, como el de María Corina Machado y el sector burgués que esta representa.

El gobierno de Maduro, por su parte con su política ajustadora y represiva no hace más que facilitar una eventual intervención al aumentar el repudio hacia su régimen dentro de la población trabajadora.

En tal sentido, consideramos que el enfrentamiento consecuente al imperialismo pasa por unificar a los trabajadores y al pueblo venezolano para exigir al gobierno de Maduro un programa que parta de exigir la defensa de las libertades democráticas, la liberación de los presos políticos que repudien la agresión imperialista; exigir que se aumente el salario mínimo mensual y las pensiones al nivel de la canasta básica; se restituyan los derechos laborales, contractuales y sindicales cercenados, se pare la represión a las organizaciones de los trabajadores; se otorguen derechos políticos a los partidos de izquierda como el PCV, PPT, Marea Socialista, el PSL, entre otros; cese



de la entrega de los recursos del Arco Minero del Orinoco (AMO) y la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), y el rechazo a la injerencia imperialista y sus amenazas de intervención.

Es preciso que desde las organizaciones del movimiento obrero y de masas impulsemos la más amplia unidad de acción para rechazar y enfrentar las agresiones militares, los bombardeos criminales en el mar Caribe y el Pacífico, el bloqueo petrolero, todas estas acciones de guerra, así como una eventual intervención militar. En cualquier enfrentamiento entre las fuerzas armadas de EE. UU. y Venezuela, los trabajadores y las organizaciones populares deben abogar por la victoria militar de esta última y la derrota del imperialismo yanqui.

En los Estados Unidos identificamos como estos ataques imperialistas están directamente ligados a los ataques del gobierno de Trump contra la clase trabajadora norteamericana, e igualmente con el largo historial de intervenciones

de EE. UU. contra América Latina y la clase trabajadora en general, y alentamos la movilización de masas para frenarlo totalmente, incluyendo la anulación sin pago de todas las deudas neocoloniales que controla EE. UU.

Los gobiernos latinoamericanos que dicen oponerse a la intervención de Trump deben convocar a movilizar, cosa que hasta ahora no hacen. ¡Que Lula, Petro, Sheinbaum -que dicen rechazar la intervención de Trump- convoquen a jornadas de movilización y ayuden directamente Venezuela a evadir las sanciones, ayudando a exportar e importar bienes y brindándole apoyo militar contra la agresión yanqui.

El llamado es a los trabajadores y los pueblos de Estados Unidos y Latinoamérica a unificarnos y movilizarnos contra las acciones que viene llevando a cabo el imperialismo norteamericano en el continente, las cuales deben ser denunciadas como lo que son, acciones de guerra, contra todos los pueblos de este continente en

general y contra el venezolano en particular

¡Total y categórico rechazo al bloqueo naval contra Venezuela y su petróleo venezolano!

¡No al robo del petróleo venezolano y el secuestro de buques de transporte del mismo!

¡Abajo las sanciones imperialistas contra Venezuela!

¡Basta de bombardeos y asesinatos en el Caribe y el Pacífico!

¡No a la invasión de Venezuela!

¡Ninguna confianza en Maduro

¡Armas para los trabajadores!

¡Amplias libertades para movilizar contra el imperialismo! ¡Suspensión del pago de deudas, de contratos entreguistas de los recursos del Orinoco!

¡Todo el rechazo a las acciones de guerra de Donald Trump en el Continente!

¡Que Lula, Petro, Sheinbaum -que dicen rechazar la intervención de Trump- ayuden directamente a Venezuela a repeler militarmente estas acciones!

¡Fuera Trump y el imperialismo norteamericano de América Latina y el Caribe!

LIGA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES – QUARTA INTERNACIONAL (LIT-CI, WWW.LITCI.ORG)

UNIÃO INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABALHADORES – QUARTA INTERNACIONAL (UIT-CI, WWW.UIT-CI.ORG)

CORRENTE COMUNISTA REVOLUCIONÁRIA INTERNACIONAL (CCRI, WWW.THECOMMUNISTS.NET) ■

¡MANOS FUERA DE GROENLANDIA! ¡ABOLICIÓN DE LA OTAN!

M.A. AL GHARIB
ENERO 27, 2026

Las amenazas de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia en las primeras semanas del nuevo año siguen siendo inquietantes. Consideradas al principio de su segundo mandato como una broma o como un intento de «negociar» con Europa, hoy en día las amenazas no son ninguna broma. Antes de que diera marcha atrás, existía un temor palpable, sobre todo en Groenlandia, pero también en Europa, Norteamérica y, en realidad, en todo el mundo, de que Trump pudiera iniciar otra guerra mundial. Ahora ha rebajado la amenaza militar, pero solo después de una sorprendente demostración de fuerza en el Foro Económico de Davos, en Suiza.

Trump dio marcha atrás tras declarar que había conseguido «todo lo que queríamos» en las conversaciones con el secretario de la OTAN, Mark Rutte, en Davos el 21 de enero. Los términos del «marco de un futuro acuerdo» siguen siendo confusos, aunque, según se informa, concederían a Estados Unidos la propiedad de las bases militares en Groenlandia y ciertos derechos para extraer minerales allí. El 25 de enero, una alta funcionaria de Groenlandia, Naaja Nathanielsen, insistió en que su Gobierno aún no había «recibido ninguna propuesta» y que «renunciar a la soberanía de Groenlandia no está sobre la mesa por ahora».

No nos equivoquemos, la amenaza contra Groenlandia sigue vigente, aunque es muy fácil imaginar que el siempre errático Trump se despierte un día y decida dar un giro de 180 grados. Al igual que el ataque de Trump a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y Celia Flores, las amenazas contra Groenlandia demuestran que el imperialismo estadounidense se ha vuelto cada vez más disfuncional, más personalizado y, en consecuencia, más peligroso.

**EL IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE
SIEMPRE HA SIDO UNA AMENAZA PARA EL**

MUNDO

Todavía existe mucha nostalgia liberal por una supuesta era anterior y mejor del imperialismo estadounidense, aunque los liberales utilizarían palabras como «orden basado en normas» en lugar de «imperialismo». A continuación, analizamos cómo la versión MAGA y ultraderechista del imperialismo estadounidense está tomando una trayectoria cualitativamente diferente en comparación con las iteraciones pasadas. Sin embargo, aquí debemos hacer una pausa para destacar que los indígenas y los pueblos de innumerables países con mayoría negra y morena en todos los continentes señalarían que Estados Unidos nunca ha tenido ningún problema en violar la soberanía nacional y masacrar a millones de personas para servir a los intereses del capitalismo estadounidense.

Al igual que en anteriores ejercicios del imperialismo brutal por parte de Estados Unidos, los líderes de la administración, en este caso, están motivados en última instancia por intereses materiales y políticos. También en este caso hablan abiertamente de la riqueza mineral de Venezuela y Groenlandia, y de los combustibles fósiles y los minerales «raros» en enormes cantidades. Las amenazas del secretario de Estado Rubio de un cambio de régimen en Cuba son una escalada del asedio que el imperialismo yanqui ha impuesto a la nación insular durante las últimas seis décadas.

Otra continuidad es el intento de asegurar la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental. Incluso el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, una persona poco inclinada a criticar el discurso sobre los «valores occidentales» y «la importancia de la alianza de la OTAN», lo admitió recientemente en un artículo de opinión del New York Times: «El temor es que una Groenlandia independiente pueda algún día acercarse a la órbita de Rusia o China, colocando sus armas a las puertas de Estados Unidos. Sería una repetición ártica de la Bahía de Cochinos».



¿ES DIFERENTE ESTA VEZ?

Se trata de la misma vieja paranoia estadounidense sobre cualquier país, especialmente uno con una población mayoritariamente indígena, que siquiera contemple la independencia. Pero también sería una tontería estratégica descartar las diferencias entre la expresión actual del imperialismo estadounidense y las anteriores. Si bien hay continuidades en cuanto al contenido del imperialismo estadounidense bajo Trump, la diferencia en la forma es de gran importancia.

Esto está relacionado con la profunda crisis de ese proyecto imperialista. Los anteriores presidentes de Estados Unidos rara vez, o nunca, dejaron de encubrir sus acciones depredadoras con el lenguaje de los fines superiores: promover la democracia, hacer el mundo más «pacífico» o «libre», «liberar a las mujeres morenas de los hombres morenos», etc. Esta vez, el presidente y sus colaboradores más cercanos admiten abiertamente la verdad de lo que están haciendo.

Y lo que es más importante, tal y como prevén los nuevos do-

cumentos de estrategia nacional publicados a finales de 2025, Estados Unidos ve ahora el mundo en términos de la «supervivencia del más apto» schmittiana o darwinista social.

Como dijo Stephen Miller, el ideólogo más abiertamente fascista de la administración, en una entrevista con la CNN a principios de enero, «vivimos en un mundo, en el mundo real... que se rige por la fuerza, que se rige por la violencia, que se rige por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo». En otras palabras, Estados Unidos, incapaz de mantener su hegemonía global, recurrirá ahora cada vez más al lado duro de su poder.

Un reciente artículo de Erwin Freed en La Voz de los Trabajadores resume bien las implicaciones de estos documentos: «En conjunto, los tres informes pintan un panorama en el que la posición internacional del imperialismo estadounidense pasa de un dominio indiscutible a verse obligado a negociar su lugar en un nuevo orden mundial. Aunque Estados Unidos conserva su superioridad económica y militar, los grandes avances

tecnológicos de China y su control de sectores estratégicos están reduciendo rápidamente la brecha. Todos los informes apuntan a un sistema económico mundial que se enfrenta al estancamiento y a conflictos cada vez más agudos entre las grandes potencias.

LA OTAN EN CRISIS; EL IMPERIALISMO CHINO EN PRIMER PLANO

Otra novedad profundamente inquietante es el lenguaje bélico — tanto en el ámbito comercial como en el literal o «cinético» — entre los aliados de la OTAN. Antes de que Trump retirara sus amenazas militares, los funcionarios europeos discutían abiertamente la imposición de sanciones a las empresas tecnológicas estadounidenses. Los boicots a los productos y servicios estadounidenses se están convirtiendo en la norma entre la población de Europa y Canadá.

La historiadora y bloguera estadounidense Heather Cox Richardson también señaló lo siguiente en su boletín diario, con fecha del 18 de enero: «A pesar de todas las bravuconadas de Trump sobre el comercio estadounidense, el mundo parece seguir adelante sin Estados Unidos». El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visitó Pekín esta semana, la primera visita de un primer ministro canadiense a China desde 2017. El viernes, Canadá rompió con Estados Unidos y llegó a un importante acuerdo con China, reduciendo sus aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos a cambio de que China bajara sus aranceles sobre las semillas de canola canadienses. Carney publicó en las redes sociales: «La relación entre Canadá y China ha sido distante e incierta durante casi una década. Estamos cambiando eso, con una nueva

asociación estratégica que beneficia a los pueblos de ambas naciones».

Poco después, Carney pronunció un discurso en Davos en el que habló sin rodeos de una «ruptura» en la alianza de la OTAN causada por la malicia de Trump y pidió a las «potencias medias» —aquellas potencias secundarias tradicionalmente bajo la hegemonía de Estados Unidos, China o Rusia— que se unieran y propusieran una alternativa al dominio fascista de MAGA y al imperialismo chino. Sin embargo, la política de Carney, que promueve el capital financiero y la industria de los combustibles fósiles de Canadá, es incapaz de abordar —y mucho menos resolver— las contradicciones que generan las crecientes crisis y toxicidades de nuestro tiempo. Solo una lucha socialista masiva e internacional contra el imperialismo puede hacerlo. Pero el grado en que el discurso puso de manifiesto una profunda y probablemente irreparable fractura dentro del imperialismo occidental fue sorprendente, aunque no inesperado.

AUTODETERMINACIÓN PARA GROENLANDIA

A menudo se pierde en los debates sobre la OTAN, Trump, Estados Unidos, Europa y China el hecho de que casi el 90 % de los 60 000 habitantes de Groenlandia son de ascendencia indígena inuit groenlandesa. Las amenazas absolutamente despreciables de Trump muestran en toda su ignominia el racismo y la mentalidad colonialista que impregna cada fibra de este hombre y que él y sus seguidores glorifican. Pero el tono más suave de Dinamarca contradice su propia historia de colonialismo.

La colonización de Groenlandia por parte de Dinamarca

se remonta a principios del siglo XVIII. Durante la mayor parte de ese tiempo hasta la actualidad, la primera trató a la segunda de una manera típica de la colonización de pobladores, incluyendo, hasta la década de 1990, un programa de anticoncepción forzada de cientos de mujeres groenlandesas. A pesar de la disculpa oficial del Gobierno danés y del intento de indemnizar a las víctimas de este crimen, las comunidades groenlandesas siguen viviendo con el trauma y el daño físico que esto les causó.

El movimiento independentista groenlandés presionó al Reino de Dinamarca para que concediera a Groenlandia el estatus de autonomía en 1979. En 2024, justo antes de las amenazas de Trump, el movimiento independentista contaba con el apoyo del 60 % de la población en las encuestas. El año pasado, y especialmente en los últimos meses, se ha producido un retroceso en la demanda de independencia total, y la mayoría de los groenlandeses afirma ahora que, si tuvieran que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, preferirían a Dinamarca, con su red de seguridad social y su previsibilidad en los asuntos internacionales.

La idea de la independencia total, por ahora, ha quedado en segundo plano, ya que los groenlandeses han llegado a la conclusión, bastante razonable, de que su escasa población y su falta de capacidad defensiva los convertirían en presa fácil de la insaciable bestia colonial estadounidense.

POR UNA ABOLICIÓN EMANCIPATORIA Y OBRERA DE LA OTAN

Si el momento actual supone una crisis existencial para la OTAN, nosotros, como socialistas revolucionarios, no lamentaremos

la desaparición de esta banda imperialista de gánsteres. Fundada como una alianza de países imperialistas con el objetivo de hacer retroceder a la Unión Soviética —y, en términos más generales, a una alternativa socialista— después de la Segunda Guerra Mundial, el verdadero papel de la OTAN durante los últimos 80 años ha sido el de la principal organización anticomunista del mundo. Se ha posicionado como el enemigo implacable de la emancipación de los pueblos colonizados y anteriormente colonizados del mundo, como un caballo de Troya del imperialismo estadounidense.

Por lo tanto, aunque luchamos junto a cualquiera que luche contra Trump y su movimiento ultraderechista MAGA, también dejamos claro que apoyamos la abolición de la OTAN. Pero la abolición de la OTAN solo puede evitar que el mundo se hunda en más ciclos de violencia y guerra si es liderada por movimientos de masas desde abajo, como parte de una visión emancipadora y socialista de la sociedad. Si se permite que el colapso de la OTAN se produzca al estilo trumpista, esto significará simplemente aceptar el reparto del mundo en «esferas de influencia». Esto no es un mal menor en relación con el statu quo, sino que significa exacerbar sus peores aspectos.

Como argumentamos en nuestro llamamiento a la abolición de la OTAN en el momento de la invasión rusa de Ucrania, «al igual que la clase trabajadora es la única clase que produce la riqueza de la sociedad, es la única fuerza social que puede poner fin a las guerras de forma permanente».

¡Manos fuera de Groenlandia!
¡Manos fuera de Venezuela! ¡Por la abolición de la OTAN!! ■

DEL CARACAZO A LA CRISIS ACTUAL

ALEJANDRO ITURBE, CORREO INTERNACIONAL, SEPTIEMBRE DE 2017.

Desde 1999, el proceso que el fallecido Chávez y el chavismo encabezaron en Venezuela fue apoyado por numerosas organizaciones de izquierda, millones de trabajadores y miles de luchadores, en su país y en todo el mundo, entusiasmados por el proyecto que se autodenominó Socialismo del Siglo XXI (Chávez, incluso, llegó a declararse “trotskista”). En los hechos, surgió un “movimiento chavista” internacional que, aunque nunca tuvo una unidad organizativa formal, llegó a ser la principal corriente de la izquierda mundial, a inicios del siglo XXI.

La actualidad es completamente distinta de aquellos momentos de gloria. Dentro del país, el gobierno de Nicolás Maduro (sucesor de Chávez desde 2013) es apoyado por apenas el 20% de los venezolanos, en un contexto de hambre y represión para los trabajadores y el pueblo. En el mundo, una parte importante de las organizaciones que apoyaron y defendieron al chavismo hoy se distancia de él (otras siguen apoyándolo), mientras los millones de trabajadores que simpatizaron con ese proceso lo ven como un nuevo engaño que no cambió nada y que acabó empeorando las cosas para el pueblo.

En la revista Correo Internacional n.º 14, de noviembre de 2015 (poco antes de que el chavismo perdiese las elecciones legislativas frente a la oposición de derecha, en una proporción de 2 a 1), decíamos que las razones del fracaso del proyecto chavista radicaban en su raíz de clase burguesa. Por eso, nunca realizó una construcción socialista y ni siquiera avanzó en ese camino. Siempre mantuvo intactas las bases del sistema capitalista venezolano y actuó dentro de la institucionalidad burguesa del Estado.

A diferencia de otras corrientes de izquierda que fueron cambiando sus posiciones, de nuestra parte no es una conclusión reciente, sino la posición que sostuvimos desde el propio comienzo del proceso. Una definición que nos llevó, desde el inicio, a ser oposición de izquierda al proyecto chavista, en defensa de los intereses de la clase obrera.

Por eso, para entender los debates actuales (que desarrollamos en otro artículo), nos parece necesario realizar un repaso de la historia venezolana de las últimas décadas, para entender, por un lado, el contexto del surgimiento de Chávez y del chavismo y, por otro, su verdadero papel en ese contexto.

EL MODELO DE ACUMULACIÓN CAPITALISTA VENEZOLANO

El marco de este proceso histórico es que en Venezuela, lo largo del siglo XX, se consolidó un modelo de acumulación capitalista que hemos definido como rentista, petrolero, parasitario y semicolonial.

La economía del país se basa en la extracción y exportación de petróleo y gas (posee las mayores reservas de hidrocarburos de Latinoamérica). Es un modelo rentista porque funciona alrededor de la renta petrolera: un margen de ganancia superior al de otras actividades productivas y que depende mucho menos de las inversiones burguesas. Por eso, las fluctuaciones del precio internacional del petróleo determinan el marco de fondo de la dinámica de los procesos políticos venezolanos.

Ese carácter rentista se transforma, inevitablemente, en parasitario. Casi toda la burguesía nacional vive de parasitar esa renta, a través del Estado o en la actividad privada, y del imperialismo también extrae ganancias. Así, se desarrolla una tendencia a invertir y producir cada vez menos en el país (alimentos y productos industriales) y a obtenerlos mediante la importación. También proviene de la importación el consumo suntuario de la burguesía.

Finalmente, es semicolonial porque una parte importante de la riqueza nacional es apropiada, a través de distintas vías, por el imperialismo (la explotación directa del petróleo, el pago de la deuda externa, las ventas de productos, etc.).

EL AUGES DEL RÉGIMEN DE PUNTO FIJO

Sobre la base de este modelo de acumulación, en-



tre 1958 y 1989, la política burguesa venezolana se asentó en el régimen institucional iniciado con el “Pacto de Punto Fijo”. Fue firmado por los principales partidos burgueses del país: Acción Democrática (AD) y Partido Social Cristiano (COPEI).

Este pacto buscaba, en primer lugar, poner fin a la intervención permanente de las FFAA (a través de golpes de Estado y gobiernos militares) en la vida política del país. En segundo lugar, constituir un régimen democrático burgués sólido y estable, basado en las instituciones “normales” de este régimen (elecciones, presidente y Parlamento). Los resultados electorales se respetarían: la presidencia correspondía al candidato más votado, pero el gabinete debía formarse, de forma equilibrada, con ministros de todas las organizaciones (sobre la base de un “programa mínimo común”) y así repartir la administración de la parte de la renta petrolera que quedaba en el Estado.

Este régimen burgués se fue consolidando y logró una estabilidad institucional que duró tres décadas. Los ingresos de la riqueza petrolera le permitieron a la burguesía venezolana discutir sus negocios con mayor tranquilidad y, a la vez, otorgar algunas concesiones a los trabajadores y al pueblo.

En la década de 1970, se dieron los “años de oro” del régimen y de la burguesía tradicional venezolana. En especial, a partir de 1973, cuando el precio del petróleo se duplicó en pocas semanas y, luego, continuó subiendo. Las grandes compañías petroleras internacionales ganaron fortunas y, a la vez, los países exportadores recibieron ingresos adicionales en dólares. En 1974, Carlos Andrés Pérez (AD) asume la presidencia. Con esos altos ingresos, Pérez y la burguesía venezolana pudieron darse muchísimos lujos. En 1975, se nacionaliza la industria del hierro. En 1976, la industria del petróleo, y se crea PDVSA (Petróleos de Venezuela)

como monopolio estatal. Se construyen autopistas, represas y centrales eléctricas, así como barrios de vivienda popular... Hay una situación de pleno empleo y los trabajadores, con sus luchas y reivindicaciones, consiguen importantes conquistas económicas. Al mismo tiempo, la burguesía y los sectores medios del país vivían una “fiesta de importaciones” de lujosos automóviles, electrodomésticos y artículos suntuarios. En ese marco, como una espada que luego resultaría muy peligrosa, la deuda nacional interna y externa se multiplicó por 12.

EL “FIN DE LA FIESTA”

Pero la fiesta iba a terminarse: el precio del petróleo en el mercado mundial se congeló a finales de los '70, luego comenzó a derrumbarse y, con él, cayeron los ingresos del país. Pérez terminó su mandato en 1979, y dejó como herencia una pesada deuda pública, un Estado gigantesco y un régimen cada vez

más corrupto.

El cumplimiento de la deuda pública se hacía cada vez más pesado, lo que obligaba a los distintos gobiernos a realizar ajustes permanentes, ordenados por el FMI. Las condiciones de vida de los trabajadores y las masas se deterioraban cada vez más: crecía el desempleo, bajaba el poder adquisitivo del salario, se achicaban o desaparecían las conquistas y beneficios sociales de la década anterior. La bronca de las masas se acumulaba y eran más frecuentes las huelgas de diferentes sindicatos, las manifestaciones estudiantiles, y las protestas populares en varias ciudades. En 1987, hubo una importante huelga general. Los gobiernos que se sucedían eran cada vez más débiles.

EL CARACAZO

Acción Democrática (AD) era considerada “el partido del pueblo”, con una historia de lucha contra las dictaduras y de apoyo a la revolución cubana. Era un partido de masas, que dirigía el movimiento sin-

dical (controlaba la Central de los Trabajadores de Venezuela CTV). En este marco, Carlos Andrés Pérez, tras un amplio triunfo electoral, asume nuevamente la presidencia a inicios de 1989. Los trabajadores y las masas tenían la esperanza de que se repitieran los “años de oro” de su gobierno anterior.

Pero estas esperanzas duraron muy poco. A los pocos días, con las reservas internacionales agotadas, un déficit fiscal monstruoso, un desabastecimiento generalizado y servicios públicos deteriorados, Pérez lanzó un brutal “paquetazo” económico contra los trabajadores y el pueblo: duplicación del valor del dólar (lo que disparó una gran suba general de precios), aumentos de los intereses bancarios, alza de 80% en los precios de la gasolina y de 40% en todos los servicios públicos.

La respuesta obrera y popular no se hizo esperar. El “vapor acumulado” de varios años estalló a finales de febrero de 1989 en una gran insurrección contra las medidas, en Caracas y en varias ciu-

dades del interior. Centenares de miles de personas de las barriadas salieron a la calle a protestar y saquear comercios, y se enfrentaron con barricadas, piedras y armas a la durísima represión ordenada por el gobierno. Murieron cientos de personas, la mayoría en los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas represivas. La represión fue violentísima, con asesinatos, torturas y prisiones arbitrarias.

Al mismo tiempo, mientras la policía prácticamente se “disolvía”, hubo numerosos episodios de división en las FFAA, con sectores (especialmente de suboficiales y tropa) que se negaban a reprimir o, directamente, participaban de los saqueos.

El Caracazo fue una insurrección obrera y popular que marcó un nuevo curso en la historia de Venezuela: puso en crisis a todas las instituciones del poder, que fueron incapaces de frenar la rebelión, y por eso hirió de muerte al Régimen de Punto Fijo. En ese marco, como elemento fundamental y pi-



lar último y central del Estado burgués (las fuerzas armadas y de represión), se encontraba quebrado.

Debilitadas al extremo sus bases económicas; corroídas por la corrupción y el desgaste sus instituciones de gobierno; golpeados los partidos burgueses, la izquierda reformista y la burocracia sindical, y casi sin apoyo popular, el régimen de Punto Fijo iniciaba su agonía. Como resultado tardío, Pérez renunciaría en 1993, en medio de nuevas movilizaciones populares y tras un juicio político por corrupción.

EL ASCENSO DE CHÁVEZ

A partir de ahí, siguieron años de convulsiones sociales, con gobiernos cada vez más débiles y una insatisfacción creciente de las masas. En 1994, es electo como presidente el viejo político burgués Rafael Caldera, con apenas 25% de apoyo electoral y sospechas de fraude sobre el dirigente sindical de las siderúrgicas de Guayana, Andrés Velásquez. Una medida importante de su gobierno fue la llamada “apertura petrolera” que quebraba el monopolio estatal de PDVSA por la vía de las “empresas mixtas” y las concesiones de explotación a compañías extranjeras.

Antes de eso, en un intento de dar respuesta a esta situación de crisis institucional global, el coronel Hugo Chávez, junto con un grupo de jóvenes oficiales (que habían participado en la represión al Caracazo), encabezó una tentativa de golpe militar en febrero de 1992. El golpe fue derrotado y Chávez fue preso y condenado a 20 años de prisión. Pero, desde la cárcel, comenzó a ganar prestigio entre los sectores obreros y populares porque aparecía opuesto al “sistema”.

En 1994, por exigencia popular, Caldera liberó a Chávez, quien comenzó a formar su propia cor-

riente política, el MBR (Movimiento Bolivariano Revolucionario), e inició su recorrido hacia la candidatura presidencial. Fue electo en diciembre de 1998 con el 56,24 % de los votos. Asume en febrero de 1999 y, en su discurso, convoca a un plebiscito para formar una Asamblea Constituyente con el objetivo de recomponer las estructuras destrozadas del Estado. El “sí” obtuvo 73% de los votos, y luego los “bolivarianos” lograron una amplísima mayoría de los diputados constituyentes. La Asamblea modifica la Constitución y reforma todas las instituciones: nace el término V República y el país cambia su nombre por el de República Bolivariana de Venezuela. El MBR se transforma en MVR (Movimiento V República)

En 2000, se realizan nuevas elecciones después de una huelga petrolera fuertemente reprimida por el gobierno. La balanza petrolera estaba en alza. Chávez es reelecto, ahora para un mandato de 6 años.

Ya en ese momento comienzan los debates en la izquierda. En un material anterior escribimos:

“Para la mayoría de las corrientes de izquierda que reivindican al chavismo, su triunfo electoral y su posterior gobierno son el producto directo del Caracazo y del ascenso que lo continuó, es decir, su genuina y progresiva expresión política. Para nosotros, en cambio, siendo un subproducto del ‘Caracazo’ y del ascenso, el chavismo es un movimiento de la segunda línea de la oficialidad militar, que se montó sobre el ascenso para frenarlo o, por lo menos controlarlo, para que no desbordase hacia la revolución socialista y, esencialmente, para cerrar la fractura de las FF.AA. y así reconstruir plenamente el Estado burgués”[1].

A estos elementos, cabría

agregar también las aspiraciones de ese sector de la oficialidad de las fuerzas armadas que acompañó a Chávez: como había ocurrido otras veces en el pasado venezolano, querían controlar el Estado para usufructuar la renta petrolera y transformarse en burguesía (acompañados de otros sectores burgueses menores o desplazados, que tenían la misma aspiración).

LAS CONTRADICCIONES CON EL IMPERIALISMO

Esto no significa que no hubiera contradicciones con el imperialismo estadounidense. Fundamentalmente, durante el período de George W. Bush y su proyecto del Nuevo Siglo Americano, cuyo eje central era obtener el dominio de los recursos naturales en el mundo (especialmente el petróleo) y recurrir a métodos agresivos para ello.

Chávez pagaba puntualmente la deuda externa y nunca propuso revertir la apertura petrolera hecha por Caldera. Además, abastecía regularmente de petróleo a EEUU. Pero intentó un mayor control del Estado sobre PDVSA, con una mayor participación fiscal para mejorar la recaudación, y defendía la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) como “cartel regulador” de los precios. El gobierno de Bush no aceptaba esta política y organizó el golpe de Estado de abril de 2002, el lockout de diciembre del mismo año, aliado con los sectores burgueses desplazados por el chavismo.

EL GOLPE DE 2002 Y EL CONTRAGOLPE POPULAR

En este marco, 2002 fue un año decisivo. Se conforma una alianza golpista formada por la federación patronal venezolana Fedecámaras, los burócratas de la CTV, la alta burocracia estatal de

PDVSA, los militares ligados a las antiguas oligarquías, los dirigentes de AD y de COPEI, la alta jerarquía de la Iglesia Católica y los dueños de los grandes medios de comunicación, como Gustavo Cisneros; todos articulados por el embajador estadounidense, Charles Shapiro.

Esta alianza convoca una huelga general a partir del 9 de abril. El 11, realiza una marcha hasta el Palacio Presidencial de Miraflores, apoyada por la policía de Caracas. Hay enfrentamientos con grupos y activistas bolivarianos y mueren 15 personas. Chávez es acusado de “crímenes contra la humanidad” y detenido por militares golpistas. Los medios anuncian su renuncia.

Pedro Carmona de Fedecámaras es designado presidente y se forma un nuevo gobierno que disuelve la Asamblea Nacional, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, y destituye a alcaldes y gobernadores. Después del golpe, se lanza una dura represión: fuerzas golpistas apoyadas por grupos paramilitares “cazan” a militantes chavistas, a dirigentes sindicales y comunitarios. Esa noche hubo varias muertes.

Si bien Chávez nunca firmó su renuncia, el aparato del chavismo estaba derrotado y se había entregado sin luchar. Por eso, al inicio, las masas no reaccionaron. Pero, luego, entraron con toda su fuerza y determinación. El 12 por la noche, comenzaron las movilizaciones en Caracas, y el 13, se generalizaron en todo el país. Los obreros metalúrgicos de Guayana tomaron las fábricas, los trabajadores de Carabobo y los petroleros de Puerto La Cruz se prepararon para resistir. Comenzaron a rodear los cuarteles para pedir armas. En varios de ellos, los soldados realizaron asambleas para discutir y se declararon contra los golpistas.

En Caracas, miles de personas descienden nuevamente de los barrios pobres de los cerros, como en el “Caracazo”, toman las calles y montan barricadas para enfrentarse a la policía. Los enfrentamientos se generalizan. Se cierran las avenidas con barricadas de madera y neumáticos ardiendo, se cercan las redes de televisión y se exige transmitir “la verdad”. A la cabeza están los jefes comunitarios de los círculos bolivarianos, que se multiplican cada vez más. Nuevamente, una insurrección popular toma Caracas y comienza a derrotar el golpe.

Cada vez hay más sectores militares antigolpistas que empiezan a marchar hacia Caracas: el comando de la Guardia de Honor (tres mil hombres) retoma parte del Palacio Presidencial.

“El suelo se hundía” para Carmona y su gobierno golpista: anuncia que va a convocar la Asamblea Nacional con carácter extraordinario. Era tarde: el golpe había sido derrotado por las masas (no por el aparato chavista). Carmona intenta huir pero es detenido en el propio palacio presidencial. Para contener a las masas insurrectas, la burguesía no tiene otra alternativa que traer a Chávez de vuelta, con la tarea de recomponer el Estado[2].

EL LOCKOUT PATRONAL

Derrotado el golpe, el imperialismo, la oposición política de derecha y la patronal, realizan un nuevo intento conspirativo contra el gobierno, a través del lockout patronal realizado entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, que buscaba paralizar la producción del país y así ahogar al gobierno de Chávez “por hambre”. Parte central de este plan fue la paralización de la producción petrolera para cortar el suministro de oxígeno a la economía del país. Este lockout contó

con la colaboración de gran parte del cuadro de gerentes e ingenieros de PDVSA, quienes utilizaron el sabotaje y la destrucción de los controles automáticos. El producto dejó de bombardear sus destinos y los depósitos y puestos de bombeo amenazaban con estallar.

No lo consiguieron porque se enfrentaron a los obreros y técnicos de las operaciones de pozos, tanques de depósito, refinerías y embarques, a lo que se sumó la reacción popular. Juntos, comenzaron a tomar los depósitos de gasolina, los tanques y las refinerías. En el Estado de Carabobo, los obreros tomaron el depósito de gasolina de Yagua y lo pusieron en funcionamiento manualmente. Lo mismo ocurrió en Carenero y Guatire. Los petroleros reconquistaron las refinerías de El Palito y de Puerto La Cruz, y las reactivaron. Mantuvieron las plantas en operación, de forma democrática, con la elección de nuevos supervisores.

Hubo también lockout en otros sectores: disminuyeron el horario y las operaciones de los bancos; las escuelas privadas, el comercio y las industrias cerraron sus puertas. Algunos sectores más radicales comenzaron a realizar algunos atentados terroristas, destruir máquinas e instalaciones, y robar materiales.

Pero la resistencia empezó a crecer. En Caracas, la población se organizó en los barrios para una justa distribución de gasolina y gas, el reinicio de las clases, y la defensa contra los ataques de la derecha y su policía. Se montaron comercios comunitarios donde se repartían alimentos gratuitos o se vendían a precios más bajos. Una multitud rodeó un canal privado de TV en una zona residencial de clase media alta, y lo obligó a transmitir un comunicado firmado por más de

100 organizaciones comunitarias, políticas y sindicales, exigiendo, entre otras cosas, el control social de los medios de comunicación.

Los metalúrgicos de Guayana, ante la amenaza de que las fábricas quedaran paralizadas por la falta de gas en los hornos, decidieron viajar en más de 15 ómnibus hasta Anaco y tomar las puertas de PDVSA-GAS para exigir su reactivación. La Parmalat fue tomada por la población que exigía su reapertura. La cerveza Polar y la Coca-Cola, en Valencia, fueron tomadas por la Guardia Nacional y se confiscaron millares de litros de agua mineral, maltas y refrescos. A pesar de que anunciaron que tomarían medidas legales, estas empresas fueron obligadas a reabrir sus fábricas. Sectores de la clase media y de la propia burguesía (perjudicados por las pérdidas que comenzaban a tener) empezaron a defender el fin del “paro”.

La presión y la acción de los trabajadores y el pueblo obligaron al gobierno a endurecer sus posiciones: suspendió la venta de divisas, estableció el control de cambios y de precios, y despidió a cerca de cinco mil saboteadores de PDVSA (entre ejecutivos y directores). Finalmente, el lockout fue quebrado y se levantó en febrero de 2003. Este resultado significó un amplio triunfo de los trabajadores y del pueblo, y una nueva derrota de la alianza imperialista-burguesa de derecha.

A pesar de la política de Chávez y de la cúpula chavista, a lo largo de todo el proceso los trabajadores habían avanzado en su conciencia y organización, a través de los círculos bolivarianos que enfrentaron el golpe, así como de las movilizaciones y las experiencias de control obrero que quebraron el lockout patronal. Los militantes de la LIT-CI en Venezuela (hoy agru-



pados en la UST – Unidad Socialista de los Trabajadores) tienen el orgullo de haber estado en la primera línea de esas luchas.

CHÁVEZ CONCILIA CON LOS GOLPISTAS Y LOS SABOTEADORES

Todo el proceso de 2002 e inicios de 2003 dejó una relación de fuerzas muy favorable a los trabajadores y las masas frente a sus enemigos, profundizando aún más lo que ya se daba desde el Caracazo. En este sentido, esa situación favorable también lo era para el gobierno chavista, como expresión distorsionada del proceso revolucionario. Estaban dadas las condiciones para asestar un golpe liquidador a la contrarrevolución y avanzar en un proceso verdaderamente socialista.

Pero Chávez y el chavismo hicieron lo opuesto. En primer lugar, buscaron desmovilizar a los trabajadores y las masas. Derrotado el golpe de abril de 2002, después de volver al Palacio de Miraflores,

Chávez declaró: “Calma, todo está bien, vuelvan a sus casas, todo está bajo control..., los Círculos Bolivarianos, por favor, no los quiero con armas, esta es una revolución pacífica”. Después de quebrar el lockout, en 2003, se dedicó a desmontar la organización de trabajadores que había recuperado y puesto en funcionamiento las refinерías y fábricas bajo control obrero.

Esto se dio especialmente en PDVSA, donde reemplazó los comités surgidos de la lucha por gerentes y supervisores provenientes del aparato chavista, para ponerla al servicio de la naciente “burguesía bolivariana”. Un documental muy interesante (realizado por un equipo de cineastas franceses) muestra los diferentes momentos de esta historia, con reportajes muy vívidos a sus protagonistas[3]. Al mismo tiempo, concilió con los golpistas: el único preso fue Pedro Carmona, quien luego “huyó” a la embajada de Colombia. Los demás (ni los golpistas activos ni los que estaban por detrás) no sufrieron



ningún castigo.

El imperialismo y la burguesía tradicional aprendieron de las derrotas de 2002-2003 y pasaron a adoptar otra táctica, con el mismo objetivo estratégico: proteger sus intereses. Dejaron de lado su política golpista y pasaron a la “convivencia” con los gobiernos chavistas. Al mismo tiempo, el imperialismo apoyaba a la oposición de derecha para capitalizar electoralmente el inevitable desgaste de los gobiernos chavistas y, más adelante, reconquistar el gobierno. Es decir, encuadraron su política en la táctica que hemos denominado “reacción democrática” y que analizamos en el artículo de debate con la izquierda.

En ese marco, en los años siguientes, aprovecharon el puente que el gobierno les tendía para hacer muy buenos negocios. Así pasó con el grupo Cisneros (dueño de los principales medios de prensa y de numerosas empresas), el grupo de bebidas y alimentos Polar-Mendo-

za (hizo numerosos acuerdos para abastecer las Misiones) y las compañías petroleras estadounidenses (como Chevron, Exxon y Texaco), que aumentaron su inserción en el sector gracias a la profundización de la “apertura petrolera” impulsada por el gobierno. La naciente boliburguesía incluso comenzó a hacer inversiones en empresas y propiedades en EE. UU. (como la formación de la petrolera CITGO por parte de PDVSA).

LA MANIOBRA DEL PLEBISCITO (2004)

El cambio de táctica del imperialismo y de la burguesía tradicional venezolana se expresó en el impulso de un petitorio para la realización de un “plebiscito revocatorio” (mecanismo previsto por la Constitución chavista). A pesar de la intensa propaganda, el dinero invertido, las presiones a los trabajadores de sus empresas para que firmaran, y las falsificaciones de firmas, no consiguieron el número

requerido por la Constitución. Sin embargo, finalmente Chávez aceptó realizar el referendo.

¿Por qué se dio esta coincidencia entre el imperialismo y la oposición burguesa, por un lado, y el gobierno chavista, por otro? Porque, más allá de sus roces y enfrentamientos, ambos sectores tenían un objetivo común: sacar a los trabajadores y a las masas de las calles, de la autoorganización y de la lucha, y meterlos en el terreno de las elecciones y de las instituciones normales de la burguesía. En ese marco, Chávez estimó correctamente que ganaría la votación.

Para convencer al pueblo venezolano de que no apoyaba la realización del plebiscito, Chávez lo comparó con una lucha popular del siglo XIX y dijo que se trataba de una “nueva batalla de Santa Inés”[4]. De hecho, Chávez ganó el referendo con un margen de 18 puntos (59 contra 41%). Pero, detrás de esta victoria electoral se escondía un objetivo mucho más profundo: el chavismo utilizó este proceso para esterilizar los círculos bolivarianos formados en la lucha y transformarlos en “comités electorales” controlados por cuadros designados desde el gobierno. El proceso revolucionario, nacido con el Caracazo, comenzaba a ser “congelado” y sometido al férreo control del aparato chavista.

El verdadero curso que adoptaba el chavismo se hizo evidente poco después de las elecciones: Chávez firmó un acuerdo de 5.000 millones de dólares con Texaco-Mobil y Exxon para que exploraran y explotaran los campos petrolíferos y gasíferos en la Faja del Orinoco.

LOS AÑOS DE ORO DEL CHAVISMO

Como vimos, entre 2003 y

2004, el chavismo logró desmontar los procesos de control obrero y “domesticar” a los comités bolivarianos. Al mismo tiempo, tendió un puente entre el imperialismo y la burguesía tradicional. Había logrado sus objetivos (frenar la revolución y negociar un espacio mayor para un nuevo sector de la burguesía venezolana), y se consolidó en el poder.

Contradictoriamente, se abrieron los que fueron sus “años de oro”: el alza permanente del precio del barril de petróleo en los mercados internacionales (superó la barrera de los 100 y llegó a cotizar a 140) permitió un gran crecimiento de la renta petrolera que quedaba en el Estado y así “lubricó” su relación con todos los sectores sociales. El aumento de la renta petrolera impulsó un crecimiento anual del PIB de 12%, y, con esa base, era posible otorgar negocios al imperialismo y a la burguesía tradicional, pagar la deuda externa (incluso anticipadamente en algunas ocasiones), crear su propia boliburguesía (ver artículo de debate con la izquierda) y hacer concesiones a las masas con mayores inversiones en el área social (con programas de salud, educación, construcción de casas populares y microempresas).

Eran “medidas asistenciales” que no quebraban ningún criterio capitalista ni cambiaban la estructura económico-social (incluso eran recomendadas por los organismos de la ONU). Pero significaron una mejora real en la vida de extrema pobreza de sectores de la población que, por ejemplo, accedían por primera vez a una atención médica. Por eso, las organizaciones sociales responsables de estas políticas (las Misiones) se implantaron profundamente en los barrios más pobres. El chavismo reforzaba

ahí su base electoral y fortalecía su apoyo de masas, lo que le permitió a Chávez ganar todas las elecciones en las que se presentó.

Incluso pudo nacionalizar algunas empresas como la telefónica CANTV, Electricidad de Caracas y Sidor (Siderúrgica Orinoco). Estas medidas, si bien pueden considerarse “progresivas”, no tienen ni un poco de “socialistas” ya que fueron hechas según las reglas capitalistas aceptadas (compra del paquete accionario).

Apoyado en esa bonanza, fue un período en el que el chavismo “enrojeció” su discurso: dejó de referirse al peronismo argentino y pasó a afirmar que estaba construyendo el “socialismo del siglo XXI”. En enero de 2007, Chávez incluso declaró que era partidario de Trotsky y de la revolución permanente. Se trataba, como hemos visto, de “propaganda engañosa”, pero aumentó su apoyo en la izquierda mundial entre muchas corrientes provenientes del trotskismo que creyeron (o eligieron creer) en ella.

SE ACENTÚA EL BONAPARTISMO

Al mismo tiempo que “enrojecía” su discurso, el chavismo acentuaba las características bonapartistas del régimen. Veamos dos elementos.

El primero fue la formación del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) en 2007, como partido oficial del régimen. Podemos definirlo como un “partido-régimen”, una herramienta política típica del bonapartismo sui generis (ver artículo sobre el tema). A través de este partido, desde el aparato del Estado, Chávez y el chavismo podían ejercer un control mucho más férreo sobre el movimiento de masas y, al mismo tiempo, disciplinar verticalmente, en esta estructura, a

todos los cuadros del movimiento chavista (todas las organizaciones que no integraban el MVR pero que apoyaban el gobierno fueron obligadas a entrar y disolverse en el PSUV). Este tipo de partido no era ninguna novedad histórica: repetía esencialmente lo que habían hecho el PRI mexicano, el peronismo argentino o los partidos del nacionalismo árabe.

Otro terreno en el que el chavismo avanzó en esta política bonapartista fue el de los sindicatos. La relación del gobierno con los trabajadores asalariados (especialmente con el movimiento obrero industrial) siempre fue mucho más crítica que con los sectores populares. Esto se debe a varias razones: la mayoría de los obreros industriales trabajan en empresas privadas y no en el aparato del Estado (la excepción más importante fue PDVSA y, más tarde, Sidor). Si bien el gobierno otorgó algunas concesiones (como una mayor estabilidad en los contratos laborales o la elección de los delegados de prevención de salud y accidentes), el nivel salarial general siempre fue muy bajo y las condiciones laborales pésimas. Por eso, si bien la mayoría de los obreros industriales y trabajadores asalariados simpatizaba con Chávez y votaba por él, lo hacía desde una actitud mucho más autónoma y desarrollaba luchas por sus propias reivindicaciones (salarios, contratos colectivos, condiciones laborales, etc.), independientes del aparato chavista.

En el marco de todo el proceso, la vieja burocracia sindical de la CTV vivía una crisis aguda y se había dado un riquísimo proceso de reorganización “por abajo”, expresado, en esos años, en la fundación de la UNT (Unión Nacional de Trabajadores), con la confluencia de diversos componentes: desde

chavistas “puros” y rupturas de la CTV hasta sectores encabezados por dirigentes provenientes del trotskismo. El chavismo impidió la consolidación de una UNT independiente o democrática. Primero la dividió para formar su propia central sindical (la FSB), luego fue obligando a los sindicatos a entrar en ella y les impuso dirigentes adictos. Recordemos que, en 2007, Chávez había realizado un discurso atacando duramente la “autonomía sindical”. Como corolario de eso, desde hace dos años, el gobierno de Maduro suspendió las elecciones en los sindicatos porque sabe que, de realizarse, los dirigentes chavistas serán desplazados y reemplazados por dirigentes opositores más combativos, como es el caso de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros.

En estos “años dorados”, el chavismo intentaba “mediar” en la mayoría de estos conflictos entre obreros y patrones (nunca apoyaba a los obreros en esas luchas). Pero en otros, aplicaba una durísima represión y a los activistas que los dirigían. Una lista muy incompleta incluye la represión a la huelga petrolera de 2000; la durísima represión de la Guardia Nacional a los trabajadores de Sanitarios Maracay (2007); el asesinato de los dirigentes sindicales Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena (dirigentes sindicales del Estado de Aragua y militantes de la organización que hoy se llama PSL), en 2008, y el asesinato de dos trabajadores de la fábrica Mitsubishi por parte de la fuerza policial, en 2009. Nunca los represores fueron castigados ni los asesinatos investigados. Ya en esos años, comenzaron a surgir los primeros grupos armados de militantes chavistas.

Esta avanzada bonapartista quiso coronarse con la refor-

ma constitucional que impulsó en 2007. El texto otorgaba poderes absolutos a Chávez: introducía la posibilidad de su reelección presidencial indefinida (mientras ese derecho le era negado a los gobernadores o alcaldes); le daba la facultad de modificar, según su parecer, la división político-administrativa del país, creando nuevos Estados o fusionando otros (muy útil para eliminar gobernadores molestos). Finalmente, otorgaba rango constitucional al control del régimen sobre el movimiento obrero (eliminando, de hecho, los sindicatos independientes y a sus dirigentes legítimos) mediante la creación de los llamados Consejos Laborales, tal como denunció en su momento el dirigente sindical Orlando Chirino[5].

La reforma fue rechazada por la mayoría de los votantes (fue la única derrota electoral del chavismo durante la vida de Chávez). Más allá de este traspie, desde 1999, el chavismo ya había ido construyendo un régimen de tipo bonapartista sui generis (categoría creada por Trotsky en la década de 1930 y que analizamos en otro artículo de esta revista).

COMIENZA LA DECADENCIA

Hemos dicho que el modelo de acumulación capitalista semi-colonial de Venezuela se basa en la renta petrolera y que el chavismo profundizó esto. Su dinámica y su evolución, por lo tanto, deben analizarse en el marco de los precios internacionales del barril de petróleo (y, por lo tanto, con la fracción de la renta petrolera que queda en el país y en el Estado).

Entre 1999 y 2008, este precio siguió una dinámica ascendente constante, pasando de algo menos de 25 dólares hasta alcanzar un pico de casi 140 dólares. No es

casualidad que este período coincida con sus “años de oro”. La crisis económica internacional iniciada en 2007/2008 abrió un período de caída de su cotización (con algunas recuperaciones menores en el medio) hasta tocar un piso de 40 dólares en 2016. Tampoco es casual que ahí empiece su decadencia.

Con la abrupta caída de la renta petrolera, el PIB venezolano registra una caída cercana al 30% y esta crisis profunda del modelo rentista agudiza todas las contradicciones. Por un lado, hace mucho más duros los enfrentamientos de la boliburguesía con los demás sectores burgueses que quieren retomar el control del Estado para garantizar sus negocios.

Por otro lado, como elemento fundamental, enfrenta al régimen con las masas a las que no solo no puede darles más concesiones, sino que las condena a una existencia cada vez más miserable y, si protestan, las reprime con dureza. Por eso, estas rompen mayoritariamente con el chavismo y comienzan a movilizarse contra el gobierno de Maduro. El propio aparato político chavista empieza a desgajarse.

Este proceso puede haberse acelerado con la muerte de Chávez y la designación de Nicolás Maduro (con mucho menos prestigio y habilidad política) como su sucesor. Pero las bases del fracaso y las raíces de clase que lo originaron ya estaban en desarrollo: haber congelado la revolución y haberse limitado a un tímido proyecto burgués que no cambió nada de la estructura socioeconómica del país.

Esta ruptura de los trabajadores y las masas con el chavismo comenzó a expresarse en el ajustado triunfo de Maduro sobre Henrique Capriles (figura con la que la oposición burguesa de derecha había renovado su cara), a finales



de 2012. Y se expresó con mucha mayor claridad en las elecciones legislativas de 2015: los candidatos chavistas fueron derrotados por los de la oposición en una proporción de 2 a 1.

La farsa de la reciente elección para la Asamblea Constituyente mostró que el gobierno de Maduro hoy solo cuenta con el apoyo de 20% de la población. El resto lo rechaza. Basado en esa minoría, con el apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas (íntimamente compenetradas con la boliburguesía) y en su control del aparato del Estado, el régimen va transformándose en una dictadura antidemocrática y represiva.

El gran problema es que el feo rostro de la realidad actual del chavismo, la decepción de grandes sectores de masas por la estafa que sufrieron sus esperanzas y sus luchas, y la desmoralización en que ha quedado la mayoría de la izquierda venezolana que lo apoyó, han hecho que sea la vieja derecha camuflada con nuevos rostros quien capitalice una parte importante de este descontento y que los trabajadores organizados todavía no entren claramente en escena. La responsabilidad de esta situaci-

ón es del propio chavismo, no solo por la estafa que protagonizó, sino también porque, con su accionar represivo, le regaló a esa derecha las banderas de la defensa de las libertades democráticas.

En ese marco difícilísimo, es necesario insistir en una política para que sean los trabajadores y las masas, con sus propias banderas, reclamos, organización y métodos, quienes lleven adelante una gran lucha nacional para echar al gobierno de Maduro y al régimen bonapartista que construyó el chavismo. Solo así se podrán lograr libertades democráticas y solucionar los gravísimos problemas que los afectan (como el hambre y la miseria o la feroz represión). Es decir, avanzar en el camino de un gobierno obrero y popular que inicie la construcción del verdadero socialismo y no la farsa burguesa (hoy trágica) que llevó adelante el chavismo.

En Venezuela y en el mundo, es necesario también que las organizaciones que lo apoyaron honestamente y los muchos activistas y trabajadores que simpatizaron con él realicen un balance profundo de este fracaso para no caer en nuevas frustraciones y derrotas. ■

NOTAS

1 - Venezuela después de Chávez: un balance necesario, Alejandro Iturbe (Org.). San Pablo: Ediciones Marxismo Vivo, San Pablo, 2013.

2- Para ver imágenes de todo el proceso y, en especial, la profunda diferencia entre la actitud del aparato chavista y la de las masas, recomendamos ver los videos “Golpe de Estado en Venezuela, abril 2002, llegada del Presidente Hugo Chávez, golpistas huyen” en: <https://www.youtube.com/watch?v=ELU1U2e7oPk> Y “La revolución no será televisada” en: <https://www.youtube.com/watch?v=Cko8R2Z-SEzE>

3 - Ver “Nuestro petróleo y otros cuentos” (cuya exhibición hoy está prohibida en el país) en [titulo_6072.htm](http://www.titulo_6072.htm), y el libro “Luta operária e participação popular na Venezuela: estudo sobre a resistência dos trabalhadores – O paro petroleiro de dezembro de 2002”, de Fernando Damasceno.

4 - Esta batalla ocurrió el 9 y 10 de setiembre de 1859. Durante la Revolución Federal (1859-1863), Ezequiel Zamora dirigió un levantamiento de campesinos pobres y ex esclavos contra los hacendados y latifundistas. En la batalla, Zamora fingió huir para llevar a las tropas enemigas a un terreno más favorable para él, y allí las aniquiló.

5 - Quienes tengan interés en conocer más sobre este tema, recomendamos leer el artículo “El carácter de la reforma propuesta por Chávez: ¿socialista o burguesa bonapartista? En: revista Marxismo Vivo n.º 16 (2008), o en el libro ya citado Venezuela después de Chávez.

LA “BOLIBURGUESÍA”: UN NUEVO SECTOR BURGUÉS

Una burguesía que nace parasitando al Estado

LEONARDO ARANTES, CORREO INTERNACIONAL, DICIEMBRE 2015.

El Estado venezolano ha sido fructífero en dar origen y apalancar el surgimiento de poderosos grupos económicos y sectores burgueses. No es el objetivo de este artículo describir históricamente este proceso (para eso sería necesario un trabajo mucho más amplio), pero es ineludible mencionar que casi todos los grupos económicos y sectores burgueses existentes (y algunos desaparecidos) han surgido a partir de parasitar la renta petrolera, de usufructuar el presupuesto nacional y de los favores recibidos del Estado por los gobiernos de turno. Ejemplo de esto han sido los grupos Alfonzo Rivas (desaparecido al ser adquirido por la estadounidense Cargill), Delfino y Mendoza, por mencionar solo algunos. Bajo el régimen chavista, esto no ha sido una excepción.

Boliburguesía es un vocablo formado por la combinación de las palabras “bolivariano” y “burguesía”. Fue el término acuñado por el periodista Juan Carlos Zapata para designar a un nuevo sector burgués surgido en el transcurso de los años de gobierno de Chávez (continuando con el de Maduro) y estrechamente ligado a su régimen. La expresión engloba tanto a aquellos que, teniendo un origen de clase distinto, se convirtieron en empresarios multimillonarios a partir de negocios lícitos o ilícitos facilitados por los gobiernos Chávez-Maduro, como a los que, siendo ya empresarios de alta, mediana o poca monta, desde sus inicios hicieron parte del proyecto chavista e incrementaron sus fortunas a partir de los mismos negocios.

¿Cuáles son los orígenes de este nuevo sector burgués? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué sectores lo integran? Son todos interrogantes a las que este artículo intentará aproximarse.

LAS BASES MATERIALES PARA EL SURGIMIENTO DE LA BOLIBURGUESÍA Y SUS MECANISMOS DE ACUMULACIÓN

Un elemento a considerar es la heterogeneidad de la composición social del movimiento chavista

desde sus inicios. Tal como en cualquier movimiento con una estrategia electoral y un programa reformista, esto es lo que explica la coexistencia en un mismo movimiento de sectores tan disímiles como activistas del movimiento popular, militantes de los partidos de izquierda reformista, viejos políticos reciclados de los partidos de la derecha tradicional, militares, banqueros, empresarios y burócratas sindicales, entre otros.

En el curso de los primeros ocho años del chavismo (en 2006 se empezaría a hablar por primera vez de la existencia de una boliburguesía), se hizo evidente la tendencia, directamente como parte de la dirección chavista o de sectores cercanos a la misma, de parasitar el Estado en beneficio propio y como forma de enriquecimiento, teniendo un papel privilegiado en esto los militares, los banqueros y el empresariado. Este proceso, que ha continuado hasta ahora, tuvo como base material la abundancia fiscal que comenzó en 1999, cuando Chávez encontró el petróleo a nueve dólares el barril, y vino luego la racha alcista que lo colocaría en sesenta y dos dólares y que, pasado 2006, lo elevaría a más de cien dólares el barril. Hoy, cuando la dinámica es la contraria —el precio del petróleo decrece y las cuentas fiscales son deficitarias—, el parasitismo y la rapiña van en aumento.

Los mecanismos de enriquecimiento han sido diversos: servir como intermediarios en los negocios entre las empresas privadas y el imperialismo con el Estado, recibir sobornos y favores para el otorgamiento de los contratos públicos, las “empresas de maletín” (de fachada), el desvío de partidas presupuestarias, la corrupción, el fraude cometido principalmente desde las gerencias de las empresas estatales con el otorgamiento de las divisas para importaciones de alimentos, repuestos y demás (cuestión que también ocurre en empresas privadas), han sido, entre otros, los medios empleados para amasar o incrementar fortunas.

Desde la dirección de ministerios, instituciones, PDVSA (estatal petrolera), empresas básicas y otras



empresas estatales, bancos públicos y privados, aseguradoras, todos han sido espacios propicios para el enriquecimiento y la constitución de poderosos grupos económicos, cuyas fortunas son imposibles de justificar lícitamente.

SU GÉNESIS, SECTORES Y CARACTERÍSTICAS

El economista de izquierda, periodista e historiador Domingo Alberto Rangel¹ señalaba la existencia de tres grandes grupos económicos. El primero y más fuerte gira en torno a Diosdado Cabello y Rafael Sarriá, ambos militares retirados. Las propiedades de ese grupo incluirían bancos, varias plantas industriales y participación como accionistas en empresas de servicios. Posiblemente, después del Grupo Polar, es el primer imperio financiero del país.

Un segundo grupo es el esbozado en torno a otro militar retirado, Jesse Chacón. Su hermano sería el dueño o líder aparente de este grupo, que en los primeros ocho años de chavismo habría adquiri-

do un banco, una de las fábricas de leche en polvo más grandes de Sudamérica, y varias haciendas.

Por último, se refería a un tercer grupo oligárquico cuyos cabezas serían Ronald Blanco La Cruz y Edgar Hernández Behrens, militares retirados ambos, gobernador de Estado Táchira el primero (2006), y el otro, banquero, presidente del Fondo de Garantías de Depósitos (Fogade), de CADIVI (Comisión de Administración de Divisas) y de SUDEBAN Superintendencia de Bancos) durante un largo período. En aquel momento, eran los tres grupos económicos entre los que se repartían sus efectivos la entonces naciente boliburguesía.

A estos grupos debíamos sumar a los empresarios y banqueros que acompañaron a Chávez desde sus inicios (o que se acercaron en sus primeros años) y que, con el chavismo, vieron incrementar su fortuna. Entre ellos están Alberto Cudemus, presidente de FEPORCINA; Alberto Vollmer dueño de Ron Santa Teresa y hoy representante de Venezuela en el Mercosur;

Miguel Pérez Abad presidente de FEDEINDUSTRIA; Víctor Vargas Irasquín, dueño del Banco Occidental de Descuento (BOD), llamado en su momento “el banquero preferido de Chávez”, y suegro de Luis Alfonso de Borbón (duque de Anjou y bisnieto del dictador Franco); Víctor Gil, presidente del extinto banco Fondo Común; Wilmer Ruperti, multimillonario naviero petrolero, quien luego de ayudar a Chávez durante el paro petrolero de 2002, vio crecer su fortuna hasta los 10.000 millones de dólares; Luis Van Dam, empresario metalúrgico, chavista desde 2005 (en 1988 estuvo involucrado en un escándalo por una pretendida estafa a la Nación por el orden de 70 millones de dólares, en el caso de un contrato para la repotenciación de unos tanques AMX30), y hoy en el negocio petrolero y eléctrico.

También son señalados por los medios como “boliburgueses” José David Cabello (hermano de Diosdado), ministro de la Infraestructura desde 2006 hasta 2008 y, desde entonces, director del SENIAT

(Servicio de Impuestos y Aduanas). Todo el comercio exterior de entrada y salida de mercancías está en sus manos; todos los impuestos, tasas, desacuerdos, pleitos y procesos son gestionados por él. Rafael Ramírez Carreño (ex presidente de PDVSA y ex ministro de Energía y Petróleo hasta su destitución por parte de Maduro) participaba del programa de alimentación del gobierno que importa la comida a través de PDVAL, de la construcción de viviendas (Gran Misión Vivienda) y del financiamiento de las misiones sociales, todo esto junto al negocio energético. Se estima que manejaba al menos 150.000 millones de dólares anuales.

Muchos se han beneficiado de parasitar la renta petrolera y el presupuesto nacional (constituido mayoritariamente por ingresos fiscales). Millones de regionales han surgido gracias a su relación con el régimen chavista. Y también están aquellos cuyas fortunas y negocios trascienden las fronteras nacionales, convirtiéndose en verdaderos “magnates boliburgueses”.

Diversos medios (como los opositores Reportero24 y Sexto Poder) señalan a los siguientes como parte de los principales exponentes de la boliburguesía: Diego Salazar Carreño, alias el “Rojo de Oro”, hijo de un guerrillero y poeta de los años ’60 y primo del mencionado Rafael Ramírez Carreño, quien le otorgó el multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de PDVSA, pasando de vendedor de pólizas de seguros a ser uno de los hombres más ricos del país. Alejandro José Andrade Cedeño (teniente del Ejército, participó en el intento de golpe de 1992). Se le calcula una fortuna de 5.000 millones de dólares. Pedro Torres Ciliberto, con un patrimonio de 700 millones de

dólares. Se lo señala como testafarro del periodista chavista José Vicente Rangel. Leonardo González Dellán, expresidente del Banco Industrial de Venezuela (de capital mixto entre el Estado y la banca privada); se le calcula una fortuna de 1.000 millones de dólares. Eudo Carrullo Perozo (hijo de Eudomaro Carrullo, exdirector de PDVSA que prestó a Chávez colaboración durante el paro petrolero), posee aparentemente un patrimonio de 500 millones de dólares. A Baldo Sansón, exasesor financiero de PDVSA, se le calcula una fortuna de 600 millones de dólares. Armando Capriles Capriles (vinculado a las empresas de la familia, amigo del exministro de Finanzas Nelson Merentes y primo del opositor Henrique Capriles Radonsky) se le estima con una fortuna de 2.000 millones de dólares.

La lista continúa: Samark José López Bello (de origen humilde con padres profesores), es actualmente el presidente de Profit Corporation (empresa cuyos principales clientes son PDVSA, PDVSA GAS y el Ministerio de Relaciones Exteriores). Está involucrado en los escándalos de la importación de alimentos descompuestos a través de PDVAL. Posee un capital de 1.000 millones de dólares. Raúl Antonio Gorrín Belisario (“El hombre de los guisos en Venezuela”). Asociado a negocios ilícitos, con el apoyo de hombres poderosos del gobierno, se dice que actúa como testafarro de dueños de medios. Aparece como comprador del canal Globovisión por un monto de 68 millones de dólares. Es dueño de Seguros La Vitalicia, y su riqueza asciende a 2.000 millones de dólares.

Hay otros como Walid Makled (llegó a comprar la línea aérea AEROPOSTAL); Eligio Cedeño, Leopoldo Castillo Bozo (dueño de

Banvalor, casa bursátil), y Miguel Mawad, todos ellos poseedores de riquezas exorbitantes y relacionados con funcionarios y exfuncionarios gubernamentales (Freddy Bernal, Aristóbulo Istúriz y Luis Felipe Acosta Carles, entre otros).

Cometieron actos ilícitos tan escandalosos que el gobierno, para no ser salpicado por ellos, abrió procesos judiciales en su contra (también motivados por faltar a su “lealtad” al gobierno). Por ejemplo, Makled amenazó al gobierno de revelar nombres y secretos de altos oficiales vinculados al “cártel de los soles” (relacionado con el narcotráfico), y Cedeño financió la fuga de Carlos Ortega (expresidente de la CTV y líder del paro petrolero patronal de 2002-2003). Hoy son prófugos de la justicia venezolana. Sus relaciones giraban en torno a empresas estatales como PEQUIVEN y el BANDES (Banco Nacional de Desarrollo).

Hay dos fenómenos más recientes, aún poco conocidos: el surgimiento de los llamados “bolichicos” y los “bolichoros”. El primero se trata de un conjunto de jóvenes de entre veinte y treinta años, convertidos en millonarios por jugosos contratos con las empresas del Estado. En algunos casos, más que contratistas son testafarros de altos funcionarios del régimen. En general, son jóvenes de refinados gustos, provenientes de familias adineradas, que estudiaron en los mejores colegios y universidades del país y se desenvuelven en la alta sociedad. Nada tiene que ver con algo que se parezca al antiimperialismo y/o socialismo. El segundo es el de militares que se dedican al narcotráfico, a la extorsión e incluso a manejar redes de delincuencia organizada, actividades a través de las cuales acumulan grandes cantidades de dinero. ■

COLECTIVOS CHAVISTAS:

¿“GUARDIANES DE LA REVOLUCIÓN” O GRUPOS PARAMILITARES?

NOTA PUBLICADA EN EL AÑO 2017 PARA LA PAGINA DE LA LIT-CI

La agencia alemana de noticias DW, al citar al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), dice que “los colectivos” son grupos parapoliciales y paramilitares que actúan en estrecha coordinación con otras fuerzas de seguridad del Estado”. DW concluye que: “Los civiles desarmados de Venezuela son los que más podrían sufrir a manos de estas falanges, que han sido comparadas más de una vez con los Tonton Macoute del dictador haitiano François Duvalier (1957-1971).”

La comparación parece exagerada, pero en las movilizaciones opositoras y en las luchas de trabajadores de los últimos años se ha visto actuar a algunos de estos grupos de civiles armados junto a la Guardia Nacional o la Policía. Disparaban sus armas para dispersar y amedrentar las protestas. En varios casos, son responsables de muertos y heridos.

“EL BRAZO ARMADO DE LA REVOLUCIÓN”

Algunos de estos colectivos existen desde el Caracazo (1989), antes de Chávez y del chavismo: eran una forma de organización de activistas de izquierda en las parroquias populares de Caracas. Hacían actividades políticas, comunitarias y culturales.

Muchos de ellos tuvieron una actuación destacada cuando el golpe proyanqui del 2002 y lo enfrentaron en el momento en que Chávez estaba preso y el aparato chavista ya se había rendido. También atacaron la sede de FEDECAMARAS, donde se nuclea lo más rancio de los empresarios venezolanos, y de donde provenía el efímero presidente que sucedió a Chávez, Pedro Carmona. Incluso se rebelaron contra la política del chavismo de “perdonar” a los golpistas. En esos momentos, se los conocía como “Círculos bolivarianos” y se expandieron por numerosos barrios, donde eran la autoridad más respetada, y Chávez los llamó “el brazo armado de la revolución”.

Entre los colectivos más antiguos está La Pie-





drita, que surge a mediados de los 80. Otros eran Alexis Vive (homenaje a Alexis González Rivette, nombre de un activista asesinado durante el golpe de 2002, Tupamarios (nombre tomado del conocido grupo guerrillero uruguayo), surgidos después del caracazo, el Movimiento Revolucionario de Liberación y la Coordinadora Simón Bolívar, entre otros

LA INSTITUCIONALIZACIÓN

Al mismo tiempo, Chávez y el chavismo comprendían que estos “círculos” contenían elementos de doble poder, que no podían perder el control de sus acciones y que debían “domesticarlos”.

Una parte de esa política consistió en transformarlos en meros “comités electorales”, controlados por cuadros confiables, especialmente a partir del “plebiscito revocatorio” de 2004. Por otro lado, se los fue transformando en comités implementadores de las Misiones de educación, asistencia médica, distribución de alimentos, etc. Es decir, la mayoría de ellos pasaron a ser instrumentos del aparato chavista.

LA MUERTE DE CHÁVEZ Y LA “PARCELACIÓN DEL PODER”

A partir de la muerte de Chávez, el poder en Venezuela se ha ido fragmentando. Y eso también se dio en el caso de los colectivos. Según la periodista Sebastiana Barraez, “no todos responden a Maduro”. Algunos están cerca de Diosdado Cabello y de un sector de las FANB. Otros de Freddy Bernal, responsable de la distribución de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). También Bernal actúa como “protector” (una especie de gobernador paralelo) del estado Táchira, uno de los más conflictivos del país, por estar allí la principal frontera con Colombia.

Si bien todos son financiados por el gobierno, algunos organismos de derechos humanos opinan que “aunque no todos, una buena parte de ellos se financian con actividades ilegales” [1].

Con la decadencia económica y social, los colectivos han ido mutando y han escapado al control orgánico del chavismo. Incluso varios han sido acusados por

el entonces Ministro del Interior, López Torres, como simples “delincuentes”. Fue en 2014 cuando fue asesinado el joven diputado José Serra, estrechamente ligado a los “colectivos”, en un confuso episodio de “intento de robo” en su casa.

Uno de los dirigentes de la Coordinadora 5 de Marzo (compuesta por unos 100 colectivos), José Odreman, un ex policía, declaró ante los medios que “¡Basta de asesinar a camaradas! Si algo me pasa, responsabilizo al Ministro López Torres”. A los pocos días, en “un enfrentamiento con delincuentes”, Odreman caía abatido, junto a otros integrantes de la Coordinadora [2].

La importancia y fortaleza de estos grupos quedaron demostradas, en ese momento, cuando una protesta de los colectivos salió a las calles de Caracas exigiendo la renuncia de López Torres y “una profunda investigación” de los asesinatos. La renuncia del ministro se produjo a los pocos días.

DE “GUARDIANES DE LA REVOLUCIÓN” A GRUPOS

PARAMILITARES

No todos los colectivos han utilizado armas para amedrentar. Pero los trabajadores y sectores populares que se han movilizan dan cuenta de la presencia de estos grupos que los han golpeado para dispersarlos o dispararles.

Roberto Briceño, del OVCS, los define como “verdaderos grupos paramilitares en Venezuela”. También actúan en fábricas y en otros lugares de trabajo, “apretando” y amedrentando a los activistas. Este salto en su papel de represor “paramilitar” aparece con toda claridad en el 2017, con el ataque a las movilizaciones masivas de ese año, en el que actuó junto a la Guardia Nacional, que causó más de 100 muertos.

Según la ONG de Derechos Humanos PROVEA, el gobierno de Maduro habría utilizado estos grupos para reprimir en el marco de las últimas manifestaciones opositoras. Los llamados “colectivos” actuaron en: Acarigua, Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Boconó, Cabimas, Cagua, Calabozo, Caracas, Carora, Carrizal, Carúpano, Ciudad Bolívar, Coro, Cumaná, Ejido, El Tigre, El Vigía, Guanare, Guarenas-Guatire, La Guaira, La Victoria, Los Teques, Maracaibo, Maracay, Maturín, Mérida, Naguanagua, Ocumare del Tuy, Pampanito, Porlamar, Puerto Ayacucho, Puerto Cabello, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Punto Fijo, San Antonio de Los Altos, San Antonio de Táchira, San Carlos, San Felipe, San Fernando de Apure, San Joaquín, San Juan de los Morros, Santa Elena de Uairén, Tinaquillo, Tucupita, Upata, Ureña, Valencia y Valera [3].

DECADENCIA Y DESCOMPOSICIÓN DE LOS



“COLECTIVOS”

Como decimos más arriba, hay signos de descomposición en varios de estos grupos. La crisis económica y la reducción de presupuestos han llevado a que su financiamiento se realice por vías ilegales (secuestros, chantajes, drogas, etc.). Algunos han degenerado en pandillas comunes que se venden al mejor postor, a veces disparan contra las movilizaciones opositoras y otras veces las apoyan. Por eso, ya no dan garantías, y eso es un problema para la dictadura.

Según varios periodistas, en algunos “colectivos” habría crisis y diferencias con Maduro. Estos periodistas incluso han informado de “deserciones por cientos” de sus miembros y de su paso a Colombia y a Brasil. No hemos podido chequear esta información. Pero quizás esto explique que Iris Varela, ministra responsable de las cárceles venezolanas, haya aparecido en la frontera con Colombia, acompañada de civiles armados, para cumplir con acciones represivas (se dijo que eran “presos”) [4].

Hoy disparan contra la oposi-

ción al régimen chavista. Pero no sería extraño que, ante la descomposición cada vez más acentuada del régimen, un sector de estos “colectivos” que han degenerado en grupos paramilitares, ligados a negocios legales e ilegales, sin un programa político, pueda ahora pasarse al otro campo burgués de oposición, proimperialista, tan corrupto que ofrece “amnistía” a los jefes militares y civiles. Tal vez algunos de estos grupos terminen beneficiándose de esa “amnistía” apuntando sus armas a sus excompañeros de lucha. ■

NOTAS

[1] Ver <http://www.defiendo-ddhh.org/rafael-uzcategui/>

[2] http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/quien-era-jose-odreman-lider-del-colectivo-marzo_118415

[3] <https://www.derechos.org.ve/> y <http://talcualdigital.com/>

[4] <http://epmundo.com/2019/iris-varela-sueta-presos-en-la-frontera-videos-evi-dencia/>

Posicionamientos de la UST contra las agresiones del imperialismo estadounidense

ANTE EL AUMENTO DE LA OFENSIVA INJERENCISTA DEL IMPERIALISMO CONTRA VENEZUELA, NO A LAS AMENAZAS MILITARES

LEONARDO ARANTES / UST - VENEZUELA
ABRIL 11, 2020

EL GOBIERNO INORTEAMERICANO INCREMENTA SU NIVEL DE AGRESIÓN CONTRA VENEZUELA

Las últimas semanas hemos sido testigos de un recrudecimiento de la ofensiva injerencista del imperialismo norteamericano contra Venezuela, que ha alcanzado varios niveles en la política de agresión contra el país.

Además de que el pasado 26 de marzo el Fiscal general de los EE.UU. Willian Barr lanzara acusaciones de narcotráfico y terrorismo contra Nicolás Maduro, así como contra varios ministros de su dictatorial gobierno y ofreciera recompensas por sus cabezas, posteriormente el Secretario de Estado Mike Pompeo, emite declaraciones planteando una propuesta de gobierno de transición para Venezuela, sin la participación de Maduro ni Guaidó, conformando un consejo de estado que sería integrado por representantes del chavismo y de la oposición burguesa y que convocaría a elecciones legislativas y presidenciales en un periodo de 12 meses. Queda en evidencia que el gobierno norteamericano se asume el derecho de decidir sobre el rumbo político de Venezuela y de cualquier otro país.

Luego, el pasado miércoles primero de abril, el secretario de Defensa Mark Esper anunció el despliegue de destructores navales, barcos de combate, helicópteros, aviones de la Fuerza Aérea y patrullas de la Guardia Costera, integrantes del Comando Sur, para “labores de vigilancia” en costas del Caribe, cercanas a Venezuela, duplicando su presencia militar en la región, con el argumento de evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Este anuncio y todo el despliegue militar se reali-

zaron haciendo alusión al gobierno de Nicolás Maduro (que fue acusado una semana antes de narcoterrorista) al afirmar que no permitirían que “gobiernos corruptos aprovecharan la crisis del COVID-19 para introducir drogas en EE.UU. y lucrarse con ello”. En declaraciones posteriores al anuncio, Donald Trump declaró a la prensa que: «Los actores corruptos, como el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela, dependen de las ganancias derivadas de la venta de narcóticos para mantener su poder opresivo».

Todo este incremento de la presión política contra el régimen dictatorial de Maduro, son la continuidad de una permanente política de agresiones que desde el año pasado se expresa en un conjunto de acciones políticas, como el desconocimiento político y diplomático de Maduro como Presidente, la proclamación de Juan Guaidó como Presidente encargado, el reconocimiento inmediato de este último por parte de los gobiernos de derecha del continente y del imperialismo, principalmente el norteamericano, intentonas de golpes militares como el del 30 de abril de 2019, y el intento de hacer entrar al país una supuesta “ayuda humanitaria” a través de la frontera colombiana (Cúcuta) con la intención de dividir las FF.AA. Nacionales y dejar a Maduro sin su única base de apoyo.

Esta política de agresiones también se manifiesta en la implementación, desde mediados de 2019, de una serie de sanciones económicas que no hacen más que agravar la crisis económica venezolana y las penurias a las que el gobierno mantiene sometida a la población trabajadora y a los sectores populares del país. Lo cual no ha estado ausente en esta oportunidad, siendo que, simultáneo al anuncio del despliegue militar, la presi-



ón del imperialismo yankee llevó a la petrolera Rosneft a terminar sus operaciones en Venezuela y a traspasar sus activos al gobierno ruso, lo que persigue asfixiar aún más la maltrecha economía del país.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y LAS POSIBILIDADES DE UNA INVASIÓN MILITAR DIRECTA

En el actual contexto de crisis sanitaria mundial y por la actual situación de la lucha de clases en el continente, vemos con dificultad que el imperialismo norteamericano apueste a la carta de una invasión militar directa contra Venezuela, debido a que esta podría causarle graves complicaciones políticas, al correr el riesgo de que la intromisión militar se prolongue más de la cuenta, generando reacciones adversas en su territorio y en el resto del continente, pu-

diendo también unificar a diversas fuerzas políticas continentales en torno a la lucha antiimperialista y en rechazo a la agresión.

Consideramos que las acciones actuales constituyen la continuidad de esta política de agresión y provocación, lo que incrementa la presión sobre el gobierno de Maduro. No obstante, no podemos descartar que el imperialismo implemente otras acciones militares y de provocación, como la invasión del espacio marítimo, la violación del espacio aéreo e incluso algún enfrentamiento con algún componente de las FF.AA., por ejemplo, la Armada (Marina), que genere algún saldo de muertes a fin de generar crisis a nivel de las FF.AA. y propiciar una eventual división de las mismas.

TOTAL RECHAZO AL INJERENCISMO

IMPERIALISTA

Esta nueva ola de injerencismo y agresión se da en un contexto de agravamiento de la crisis generada por la pandemia de COVID-19 en EE.UU., pasando este país a ser hoy el epicentro de la pandemia, con un número de contagiados que aumenta de manera exponencial (cerca de 400.000), amenazando con colapsar el sistema de salud y con superar el número de víctimas fatales registradas en Italia y España.

Por eso ante el desprestigio político que esto le ha ocasionado y para desviar el enfrentamiento del escándalo Trump busca trasladar la atención hacia las pretensiones de derribar a Maduro, invirtiendo grandes sumas de dinero en despliegues militares, recursos que bien podrían ser usados para enfrentar la crisis sanitarias ocasio-

nada por el coronavirus, pero a la vez sometiendo a mayores presiones, sanciones y bloqueo económico a la población de un país como Venezuela azotado por una brutal crisis económica, un gobierno hambreador y represivo y también azotado por el Covid19.

Por lo tanto, desde la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST), nos pronunciamos rotundamente en contra de estas intromisiones políticas por parte del gobierno norteamericano en asuntos internos de Venezuela (así como en los de cualquier otro país del mundo), así como de las amenazas de acciones militares y de cualquier acto de provocación similar.

Denunciamos el doble papel criminal de la política de Trump, quien, en un contexto de crisis sanitaria mundial, priva a los trabajadores de su país de recursos para enfrentar la pandemia y, a la vez, agrava el estrangulamiento de la economía venezolana, aumentando las penurias que viven la población trabajadora y los habitantes de los sectores populares del país.

Denunciamos a los sectores de la oposición patronal que auspician y celebran este tipo de acciones contra el país, intentando hacerlas pasar por una solución a la crisis que azota al país. Alertamos a los trabajadores y al pueblo venezolano de que no podemos esperar nada bueno del imperialismo ni de la oposición patronal venezolana en ninguna de sus fracciones.

Exigimos el cese inmediato de las intromisiones políticas, las amenazas militares, las sanciones y el bloqueo económico contra Venezuela por parte del gobierno norteamericano y del imperialismo conjunto. Rechazamos la actitud colaboracionista de los gobiernos de la derecha continental.

FUERA EL IMPERIALISMO DE VENEZUELA. NINGÚN APOYO AL GOBIERNO DE MADURO. MOVILIZACIÓN OBRERA Y POPULAR PARA SALIR DEL GOBIERNO

Toda esta posición, esta lejos de significar cualquier respaldo político Maduro, al contrario, la sostenemos desde el más profundo rechazo a su gobierno y régimen, al que denunciamos como una dictadura antiobrero, hambreadora y represiva, responsable de la brutal crisis que azota al país y que descarga contra los trabajadores un brutal paquete de ajuste para hacer que estos paguen los costos de la crisis, destruyendo sus salarios, violando y eliminando las convenciones colectivas, sometiendo a despidos, desconociendo sus derechos sindicales, laborales y sociales y haciéndoles pagar las consecuencias de la destrucción de los servicios públicos, del sistema educativo y del sistema de salud pública, resultando esto último especialmente grave en este contexto de crisis sanitaria por el Covid19.

La crisis sanitaria y económica que azota al país solo tendrá una solución a favor de los trabajadores y el pueblo humilde si se da un giro a la economía, priorizando los intereses de la clase trabajadora y no los de los grandes empresarios y banqueros nacionales y transnacionales.

Lo que significa tomar medidas como el cese de los pagos de deuda externa, destinar todos esos recursos a la atención de la pandemia, para ofrecer garantías de alimentos, medicinas, implementos seguridad y servicios para los trabajadores, nacionalización bajo control de los trabajadores de la industria de producción de alimentos y medicinas, nacionalización cien por ciento de la industria

petrolera, sin transnacionales ni empresas mixtas, confiscación de los bienes de corruptos y especuladores, repatriación de los capitales fugados, plan de obras públicas para la construcción hospitales y viviendas necesarias para la atención de los enfermos y para dar garantías de habitación y salubridad a la población, estatización de las clínicas privadas y de todo el sistema de salud, así como de edificios desocupados, asignándolos a las familias sin vivienda, salario mínimo igual a la canasta básica, renta mensual durante la contingencia para quienes viven del día a día y en la informalidad, ningún despido mientras dure la pandemia, reenganche inmediato de todos los despedidos, libertad inmediata para todos los detenidos por luchar y por denunciar irregularidades en el manejo de la crisis del Covid - 19, entre otras medidas que ningún gobierno burgués como el de Maduro (ni tampoco de la oposición burguesa) aplicaría.

Por eso, para garantizarlas, es necesario luchar por el FUERA MADURO. Llamamos a los trabajadores y a las masas populares a movilizarse de manera unitaria e independiente para derribar al gobierno de Maduro, sin confianza alguna en el imperialismo ni en Guaidó ni en ningún representante de la oposición patronal.

Solo con la movilización obrera y popular independiente, los trabajadores y el pueblo venezolano podemos expulsar a Maduro del poder e imponer un gobierno obrero y verdaderamente socialista que vaya en función de los intereses de los trabajadores y del pueblo venezolano.

Total repudio a las intromisiones políticas del imperialismo y sus amenazas militares.

Fuera Maduro. ■

Posicionamientos de la UST contra las agresiones del imperialismo estadounidense

¡NO A LA AMENAZA INJERENCISTA DE DONALD TRUMP Y EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO! ¡FUERA LAS TROPAS YANKEES DE VENEZUELA Y DE LATINOAMÉRICA!

LEONARDO ARANTES (UNIDAD SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES – VENEZUELA), 25 AGOSTO 2025

En días recientes, el gobierno norteamericano, encabezado por el ultraderechista Donald Trump, ha venido realizando una serie de anuncios y ejecutando acciones orientadas al desarrollo de una operación militar en aguas de América Latina y el Caribe, bajo el argumento de enfrentar el narcotráfico.

EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO AMENAZA Y MUESTRA SUS DIENTES

Mediante una inusitada demostración de poder militar naval, Estados Unidos ha comenzado desde hace un par de semanas a desplegar varios buques de guerra y personal militar en el área antes señalada, en la cual, según reseña la prensa internacional se habrían empleado hasta ahora, tres buques de guerra, un submarino nuclear con capacidad misilística y operaciones de inteligencia, además de aeronaves de patrulla marítima P-8 Poseidón y un personal militar que sobrepasaría los 4000 efectivos marines.

Además de esto, se anunció el envío, hasta el límite del mar territorial venezolano, de tres destructores dotados del sistema de defensa aérea Aegis, así como submarinos y aviones. Se trata de buques armados con misiles guiados, entre ellos los Tomahawk, para atacar objetivos en tierra, de última generación en la Marina de Estados Unidos.

Se trata de buques polivalentes que cumplen funciones de combate naval, escolta de buques mayores —como portaaviones—, bombardeo a tierra y defensa aérea, entre otras, pudiendo ser usados tanto para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia como a manera de plataforma de lanzamiento para

ataques militares selectivos.

Todo este desproporcionado despliegue armamentístico, para un supuesto combate al narcotráfico, haciendo uso de armas, equipos bélicos, recursos y poderío militar más característico de guerras y/o invasiones militares, dejan en evidencia, que, bajo ese argumento de lucha contra el narcotráfico, este operativo que desarrolla el imperialismo norteamericano, constituye una nueva amenaza contra los pueblos de Latinoamérica y el Caribe en general y en específico contra Venezuela; país este último al respecto del cual, viendo desarrollar todo este operativo en las cercanías de las fronteras de su mar territorial y considerando la tensión política de los últimos días, es imposible no plantearse la posibilidad de que este siendo considerado como un potencial objetivo militar.

EL CONTEXTO POLÍTICO EN EL QUE SE DESARROLLA LA AMENAZA INJERENCISTA

Consideramos pertinente describir y analizar el contexto político en el que se enmarca el operativo actual y la amenaza injerencista norteamericana.

Tal despliegue militar se produce a posteriori de que el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, emitiese, el pasado 08 de agosto, una orden autorizando el uso de las fuerzas armadas para la “lucha contra carteles de drogas extranjeros, con el objetivo de defender a su nación”, previo a esto el gobierno norteamericano (07/08/2025) había duplicado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Vale recordar que, en 2020, durante el primer mandato de Trump, Madu-

ro fue acusado por Estados Unidos de narcotráfico y terrorismo. En concreto, el gobierno de EE.UU. asegura que Maduro, funcionarios y militares de alto rango de su gobierno lideran el “Cartel de los Soles”, una supuesta organización criminal a la que EE.UU. declaró terrorista.

Luego de los anuncios señalados, La Fiscal General de EE.UU., Pam Bondi, afirmó que el gobierno norteamericano había “confiscado más de 700 millones de dólares en activos a Maduro”, los cuales incluirían “dos aviones de lujo, varias casas, una mansión en República Dominicana y otras en Florida, una granja de caballos y millones de dólares en joyas”, todo esto producto de su accionar como “líder del Cartel de los Soles”.

Las semanas previas a esto, la administración Trump había desarrollado un proceso de negociación con el gobierno de Maduro, que incluyó el canje de prisioneros norteamericanos por migrantes venezolanos retenidos por el gobierno de Bukele en cárceles de El Salvador, la liberación de algunos presos políticos en territorio venezolano y el otorgamiento de una nueva licencia que autoriza a Chevron a operar en el país, extraer y comercializar petróleo venezolano.

Es pronto para afirmar si se trata de una pretensión real del gobierno de EE.UU. de intervenir militarmente en Venezuela o si por el contrario se trata como en otras ocasiones de un aumento de la presión contra el gobierno de Maduro (algo también bastante probable) para empujar a este a negociar en peores condiciones acuerdos en función de seguir profundizando la entrega de la soberanía del país, sobre todo los recursos petroleros y minerales.

Lo cierto es que el argumen-

to del “combate al narcotráfico” no pasa de ser un pretexto barato que, como en ocasiones anteriores y como la historia lo demuestra, utiliza el imperialismo para intensificar su ofensiva recolonizadora en América Latina y el Caribe, y, en este caso particularmente, contra Venezuela.

Con el actual despliegue militar, lo menos que persigue Trump y su gobierno., como representantes del imperialismo yankee, es combatir, controlar y derrotar al narcotráfico. Su verdadero objetivo consiste en reforzar el resguardo de sus intereses económicos, políticos, geopolíticos y militares en una región históricamente estratégica para el imperialismo norteamericano.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DE MADURO, EL FALSO ANTIIMPERIALISMO

Tal como era de esperarse, la respuesta de Maduro y de funcionarios de su gobierno como Diosdado Cabello (Ministro de Relaciones Interiores), Delcy Rodríguez (Vicepresidenta Ejecutiva), entre otros, varios de ellos acusados de diversos delitos, ha sido negar las acusaciones que los vinculan (tanto a Maduro como a esos funcionarios) con el narcotráfico, además de hacer altisonantes declaraciones en el tenor de “...ningún imperio va a venir a tocar el suelo sagrado de Venezuela...” (Nicolás Maduro 19/08/2025) ó “...Nosotros también estamos desplegados, en el Mar Caribe, en nuestro mar territorial venezolano, para defender nuestra soberanía...” (Diosdado Cabello 19/08/2025).

Igualmente, han anunciado la movilización de más de 4 millones de milicianos (reservistas), y el inicio de un proceso de alistamiento (incorporación de nuevos

miembros) y adiestramiento de tales fuerzas (en lo que seguramente obligaran bajo chantaje a participar a los trabajadores de la administración pública), mientras que la Vicepresidenta Ejecutiva hace llamados a “la unión de los países latinoamericanos ante amenazas directas de intervención militar por parte de EE.UU.” (Delcy Rodríguez 19/08/2025).

Con todo esto, Maduro hace alarde de un falso antiimperialismo, mientras continua entregando nuestra soberanía, recursos petrolíferos, hidrocarburos y minerales a empresas transnacionales imperialistas como Chevron, así como Barrick Gold y Gold Reserve en el Arco Minero Orinoco (AMO), a la vez que exonera de pagar impuesto sobre la renta a las empresas imperialistas en el negocio petrolero y de importación de alimentos, y aplica un brutal ajuste contra los trabajadores venezolanos a quienes mantiene padeciendo miseria y penurias, devengando un salario mínimo mensual de menos de 1\$, con las convenciones colectivas congeladas y conculcados todos sus derechos laborales, sindicales y sociales.

LA OPOSICIÓN BURGUESA CELEBRA EL OPERATIVO Y LAS AMENAZAS

Fiel a su a su carácter burgués y ultraderechista y a su papel lacayo y servil a los intereses del imperialismo norteamericano, María Corina Machado y el sector opositor que se organiza en torno ella, apoyan las amenazas injerencistas y celebran el operativo militar imperialista, alimentando entre la población expectativas en una eventual intervención militar contra Maduro y el país, clamando inclusive por una ejecución inmediata y fugaz de la misma, a la vez

que declara que los Estados Unidos serían «el mejor aliado comercial, energético y de seguridad en la región» en caso de ella ser gobierno.

Desde acá alertamos que los trabajadores y el pueblo venezolano no debemos depositar ninguna confianza en una dirigente burguesa, socia servil de los más rancios intereses imperialistas, ni en el sector político que ella representa y mucho menos en el imperialismo norteamericano, su gobierno y sus fuerzas armadas.

RECHACEMOS LAS AMENAZAS INJERENCISTAS IMPERIALISTAS, NINGÚN APOYO A MADURO Y SU GOBIERNO

Desde la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST), rechazamos y llamamos a repudiar esta nueva amenaza injerencista y esta agresión imperialista. Categóricamente, estamos en contra del despliegue militar estadounidense en las cercanías de los límites del mar territorial venezolano y en los mares de toda Latinoamérica y el Caribe. Exigimos la retirada inmediata de las tropas gringas de estas latitudes. Exigimos a los gobiernos del continente que se pronuncien en contra de dicho operativo militar.

De igual manera, afirmamos que, rechazar tal agresión y ofensiva del imperialismo norteamericano contra Venezuela, no significa brindar ningún apoyo político a Maduro y su gobierno, al contrario, denunciaremos su política entreguista de nuestra soberanía y recursos naturales energéticos y minerales a las transnacionales yankees, chinas y rusas, entre otras, estamos en contra de su política de destrucción del salario, de bonificación del ingreso de cercenamiento de los derechos laborales y sociales, de violación de las libertades de



mocráticas, de la represión contra dirigentes obreros, sindicales y políticos opositores al gobierno, así como también de sus pretensiones de eliminar los sindicatos mediante la pretendida constituyente sindical; llamamos a los trabajadores a organizarnos y movilizarnos de manera unificada para derrotar la política de entrega de la soberanía del país, derrotar el ajuste antiobrero y antipopular que aplica el gobierno y expulsar a Maduro del poder.

Solo derrocando al gobierno de Maduro, mediante la movilización autónoma e independiente de los trabajadores y los sectores populares, se puede desarrollar un antiimperialismo consecuente que ponga freno a la entrega del país, expulsando a las transnacionales y empresas mixtas del negocio petrolero y del Arco Minero Orinoco, nacionalizando 100% el petróleo, la banca, la producción de alimentos, las telecomunicaciones y otros sectores estratégicos, dejando de pagar la deuda externa y repatriando los capitales fugados.

Todas estas son tareas antiimperialistas que no llevará adelante el gobierno burgués y dictatorial de Maduro, ni ningún gobierno burgués. Estas tareas solo pueden ser acometidas por un gobierno de los trabajadores y de los sectores

populares del país.

- Fuera las tropas yankees de América Latina y el Caribe.
- No a la injerencia imperialista en Venezuela. Rechacemos las amenazas y agresiones del imperialismo.
- Ninguna confianza en la oposición burguesa, en el imperialismo norteamericano, en su gobierno ni en sus fuerzas armadas.
- Movilización obrera y popular para frenar la entrega de la soberanía del país.
- Derrotemos el ajuste antiobrero y antipopular del gobierno de Maduro.
- Por el rescate del salario, las convenciones colectivas, los derechos laborales, sindicales y sociales de los trabajadores. Basta de Represión
- No a la constituyente sindical, por la defensa de los sindicatos
- Fuera el gobierno de Maduro
- Por un gobierno obrero y popular ■

LA CRISIS DEL CHAVISMO Y LA CATÁSTROFE SOCIAL

Este artículo es una síntesis que contiene partes de artículos publicados en Correo Internacional en 2017 y en 2019, así como artículos publicados en la web de la LIT-CI en 2020

VÍCTOR QUIROGA E LEONARDO ARANTES / UST-VENEZUELA

En las polémicas entre las distintas corrientes de izquierda, suelen discutirse las políticas frente al gobierno de Maduro, la Constituyente y/o el imperialismo. Pero, lamentablemente, poco se dice sobre la profundidad de la crisis económica y social (además de la política) que padece el pueblo venezolano. En estas líneas, trataremos de aportar algunos datos para una mejor comprensión de la situación y del escaso sustento de las corrientes que defienden el régimen y el gobierno de Maduro, así como su Constituyente y el PSUV.

Debemos comenzar por reconocer que los trabajadores y sectores populares, en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez Frías, obtuvieron algunas concesiones que les permitieron acceder a un mejor nivel de vida. Esto se dio sin que se produjera ningún cambio estructural en la dependencia de la economía del imperialismo ni ninguna ruptura con la burguesía. Por eso, las concesiones perduraron hasta la profunda caída del precio del petróleo, la crisis capitalista mundial y su refracción en Venezuela. A partir de ahí comenzó la pérdida de cada una de las concesiones. Trataremos de explicar la situación actual. Más allá de nuestro repudio a cualquier maniobra intervencionista, la oposición burguesa proimperialista, con Guaidó a la cabeza, se apoya en una situación real: los trabajadores y el pueblo venezolano viven una verdadera catástrofe social. Uno de los motivos centrales de esa catástrofe se explica por el endeudamiento acumulado de todos estos años, que sitúa la deuda externa venezolana en 184.500 millones de dólares (una cifra que representa cinco veces las exportaciones calculadas para este año).

Una deuda externa que se continúa pagando a pesar de la caída del ingreso en dólares que vive el país: a inicios del año pasado, el presidente Nicolás Maduro reconoció que durante su gobierno se habían

pagado 74.000 millones de dólares por ese concepto.

Como marco, están la caída del precio internacional del petróleo y, fundamentalmente, la tremenda caída de su producción nacional, que reporta el 96 % del ingreso de divisas: se pasó de más de tres millones de barriles diarios a un millón doscientos mil, principalmente por falta de inversión. Todo esto sucedió mucho antes de “las sanciones y los bloqueos” del imperialismo. La situación ahora se ha agravado con esas sanciones, pero ya existía antes.

En este marco, la hiperinflación castiga con fuerza, con aumentos de precios a diario. El salario, desde enero de este año, es de 18.000 bolívares soberanos y un bono alimentario de 1.800. La inflación de este año es impredecible, pero al día de hoy la cesta básica (calculada por CENDAS) llega al millón de bolívares soberanos.

EL GOBIERNO DE MADURO ATACA EL SALARIO

Para medir la magnitud de los ataques al nivel de vida de los trabajadores asalariados, basta con observar la evolución del salario. En 2012, en vida de Chávez, el salario mínimo equivalía a unos 400 dólares; incluso tomando el dólar paralelo, el salario se acercaba a esa cifra. La inflación rondaba un dígito y, aunque insuficiente, un trabajador podía comer tres veces al día.

Hoy las cosas son diferentes. El salario mínimo al 18/8/2017 es de 256.000 bolívares, según el precio del dólar oficial DICOM que es de 2.970 bolívares, es decir, 84 dólares, aunque las “malas lenguas” dicen que ese dólar que va a una subasta pública ronda los 4.500 bolívares. Pero si se toma en cuenta el dólar “negro” que se publica en dólar Today, está en 14.140 (14/8/2017): ¡el salario estaría en 18 dólares! Junto con esto, hay que ver dos datos de importancia: la Cesta Básica (o Canasta Familiar) llegó en agosto a 2.400.000



bolívares (¡9 veces el salario mínimo!). La inflación de 2016 llegó al 600% y, según el FMI, este año llegaría al 1.000 %. Pero más allá de estos datos fundamentales, hay otro: ¿cuál es el poder adquisitivo de esos 256.000 bolívares? Diremos al pasar que ese es un salario compuesto por un salario mínimo de 97.531 bolívares y un Bono Alimentario no remunerable (no sirve para calcular vacaciones, jubilación, etc.) de 153.000 bolívares.

La familia tipo venezolana se compone de cinco personas. Un kilo de arroz puede durar tres o cuatro días; un kilo de harina precocida, lo mismo. Un kilo de azúcar, quizás una semana. En el mercado “normal”, no el “negro” sino en el supermercado de la esquina de cualquier barrio o urbanización, el kilo de arroz se cotiza en aproximadamente 15.000 bolívares (pueden ser mil más o mil menos); la harina precocida ronda ese mismo

valor; una botella de aceite de soja 18.000, un kilo de azúcar 12.000 y un kilo de pasta (fideos) 18.000. ¡Un cartón de huevos ha llegado a 30.000 bolívares! (cuando se consigue). A esto no le agregamos siquiera las proteínas de carne de res, pollo o cochino (cerdo) que están por las nubes. ¿Cómo se llega a sobrevivir con estos precios liberados por el gobierno?

Por eso, no es de extrañar estos datos de la ENCOVI (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida) de 2016, elaborada por un equipo de investigadores de la UCV (Universidad Central de Venezuela), la USB (Universidad Simón Bolívar) y la UCAB (Universidad Católica), que determinó que 52% de los hogares del país no tienen el ingreso necesario para comprar la cesta de alimentos. Por ello, se consideran en situación de pobreza extrema. Más aún, aunque tiene ingresos para comprar alimentos, no tiene

ingresos para otros rubros de gastos básicos del hogar. En consecuencia, el 82% de los hogares del país se encuentran en situación de pobreza. La pobreza estructural, que en 2014 estaba en el 16 %, en dos años (2016) llega al 31%.

EL ABANDONO DE LA SALUD POPULAR

Con las Misiones, hubo un avance para los sectores más marginales que nunca habían tenido acceso a un centro de diagnóstico. La Misión “Barrio Adentro”, con una mayoría de médicos cubanos, contribuyó a que esos sectores tuvieran acceso a atención primaria. Aunque no hubo un cambio profundo ni estructural en los hospitales respecto de una medicina más compleja, estos sí tuvieron algún avance.

Hoy la salud ha retrocedido a niveles de 1998 o peor. El Ministerio Popular para la Salud publicó

el 9 de mayo de 2017 el informe epidemiológico correspondiente a 2015-2016. Es un tipo de informe que alerta sobre las enfermedades y su posible impacto en la población. En él se destaca por sus niveles de mortalidad materna. Este índice, que en la región latinoamericana estaba bajando en los últimos años a una tasa de 2%, en Venezuela ha venido aumentando a una tasa del 12%. Pero en los años analizados, pegó un salto: entre 2015 y 2016, aumentó un 65%. En solo un año pasó de 456 mujeres fallecidas en 2015 a 756 en 2016.

Otro tanto ocurre con la mortalidad infantil. La media de Venezuela era de entre 5 y 6‰. Un índice que ya era alto, dado que el crecimiento poblacional es de 1,49% anual. Estar por encima de esa cifra ya significa un retroceso. Entre 2015 y 2016, la mortalidad infantil se situó en 29,5‰.

Las cifras del crecimiento de otras enfermedades también son impresionantes: la malaria pasó a 240.000 casos en 2016, cuando había registrado 136.402 en 2015 y 89.822 en 2014. En 2010 esta enfermedad se restringía a tres estados; hoy ya alcanza a 13. Otras enfermedades que se han generalizado son el zika y la chikunguña, como nuevas epidemias, y la reaparición de viejas, como la difteria. Un hecho “curioso” es que la ministra que reveló estos datos “renunció” a los pocos días de su publicación.

Todo esto se explica fundamentalmente por una gran desinversión del Estado y la destrucción de la salud pública: los médicos y enfermeras vienen movilizándose desde hace mucho tiempo por salarios, falta de insumos y, fundamentalmente, por la ausencia de material descartable y de medicamentos.

Según una encuesta publicada por la Asamblea Nacional y la organización “Médicos por la Salud” sobre “Hospitales de todo el país en 42 ciudades”: “el 51% de los quirófanos están inoperativos y un 78% de esos hospitales tienen escasez de medicinas; el 64% no tiene fórmulas lácteas para alimentar a los niños; más de la mitad de las cocinas no funcionan por falta de comida; prácticamente no funcionan los tomógrafos, y el 89% tienen fallas o no funcionan los rayos X”.

Estas cifras, emitidas por la opositora Asamblea Nacional, pueden ser exageradas, pero ayudan a explicar las oficiales. Esta catástrofe para la salud pública también explica el gran crecimiento de la salud privada: más del 55% de los pacientes se atienden en clínicas o consultorios privados.

A todo este drama hay que agregar la falta casi total de medi-



camentos para enfermedades crónicas o terminales: no se hallan medicamentos para la hipertensión, la quimioterapia para el cáncer, el VIH, las enfermedades de la próstata, la diabetes, etc. Estas medicinas solo se consiguen en el mercado negro, a pesar de que, según el gobierno, los laboratorios o los importadores han recibido “dólares preferenciales”. ¿Quién se queda con los dólares y los medicamentos importados?

AVANZA LA CRISIS SOCIAL

A los datos aportados sobre salarios y salud, debemos agregar que casi 10 millones de personas acceden solamente a dos comidas diarias (un desayuno y un almuerzo o una cena). En ese marco, avanza la desnutrición infantil por la falta de leche en polvo y de proteínas.

La violencia y la inseguridad se han transformado en verdaderas pandemias: Venezuela tiene 7 ciudades entre las más violentas del mundo (Caracas, como la primera; Maturín, Ciudad Guayana, Valencia, Barquisimeto, Cumaná y Barcelona), según el “Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia”, una organización con sede en México.

La cantidad de muertos por hechos violentos en el país pasó de 4.550 en 1998 a 28.479 en 2016 (la cifra más reciente estimada por el Observatorio Venezolano de la Violencia). En total, estaríamos contando con 287.926 víctimas en los últimos 18 años o, lo que es lo mismo, poco más de 43 muertos por día.

A todas estas penurias graves hay que agregar el sufrimiento de los sectores populares por la falta de abastecimiento de las bombonas (garrafas) de gas (imprescindibles para preparar la comida): se

forman colas interminables desde la madrugada para lograr comprar una.

Todos los servicios se han deteriorado: los cortes de electricidad continúan siendo periódicos; el abastecimiento y la calidad del agua potable son deficientes, incluso en estados como Bolívar con fuentes hídricas suficientes. El servicio de aseo urbano es inexistente en algunas ciudades y la basura se amontona en las calles...

Las diferentes corrientes de izquierda que polemizan sobre la situación venezolana deberían tomar en cuenta, aunque sea en parte, las cifras que aquí exponemos para tratar de comprender y explicar las verdaderas causas del enfrentamiento que las masas ven desde hace tiempo con el gobierno de Nicolás Maduro y de la ruptura con él. A pesar de las diferentes coyunturas que pueden abrirse, este proceso de ruptura, desmoralización y crisis es irreversible. La experiencia que las masas están teniendo con el chavismo y el fracaso del proyecto nacionalista burgués abrirán un proceso reflexivo que es importante tener en cuenta para sacar conclusiones y construir una alternativa política independiente de la burguesía, de los militares falsamente “socialistas” y de la burocracia estatal y sindical.

EL “PAQUETAZO ROJO” CONTRA LOS TRABAJADORES

En agosto de 2018, Nicolás Maduro anunció una serie de medidas económicas con el “Programa de Recuperación Económica y Bienestar”, un tremendo ajuste contra los trabajadores y el pueblo humilde de Venezuela. Este plan incluyó la reconversión monetaria, con un nuevo bolívar soberano devaluado (quitándole cinco ceros al “viejo bolívar fuerte”) y el

anclaje del nuevo bolívar al Petro, una criptomoneda creada por el gobierno y vinculada al precio del barril de petróleo.

Esto se acompañó de una reforma fiscal muy regresiva. Por un lado, el gobierno aumentó el IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 12% al 16% y las tarifas de algunos servicios básicos, con un nuevo esquema de precios y un ajuste salarial (que, con la devaluación, aceleró la pauperización). Por otro lado, exoneró de impuestos sobre la renta a las empresas importadoras de alimentos, a las transnacionales petroleras y mineras y a las petroleras multinacionales.

El objetivo era alcanzar un “déficit 0” mediante disciplina fiscal, tal como en otros países con economías neoliberales, y en ese marco, PDVSA entregó un bloque completo de reservas petroleras certificadas, 29.298 millones de barriles, al Banco Central de Venezuela (BCV), para poder emitir nuevos activos financieros con ese respaldo. Es decir, para la contratación de nueva deuda se utilizaron como garantía reservas y activos petroleros, aprovechando agujeros legales de la Constitución y la legislación vigentes que impiden dicho entreguismo.

Complementó este paquete con lo que fue quizás la medida más letal: la Resolución Ejecutiva 2792 del 11 de octubre de 2018, que significó otro duro golpe a las conquistas de los trabajadores estatales, porque establecía la creación de un tabulador único; algo que, en los hechos, elimina los convenios colectivos y los bonos adicionales, y deja a los sindicatos fuera de la discusión salarial. Hay que tener en cuenta que la nómina de empleados públicos es de cuatro y medio millones; hay tres millones de pensionados y unos ciento noventa

mil militares. Habría que agregar también los “contratados”. En total, la cifra de quienes reciben salarios o ingresos del Estado asciende a 6 millones de personas.

En ese momento se fijaba el salario de un general del Ejército en 5.324 bolívares Soberanos (por supuesto, se les respetaban otras prebendas) y en 2.800 bolívares para profesionales. Para los jubilados, pensionados y obreros se fijaba en apenas 1.800 bolívares. Esto produjo una reacción, sobre todo de los trabajadores de las industrias básicas en manos del Estado (como SIDOR, Venalum, Ferrominera, Alcasa y Bauxilum, entre otras de la Gobernación del Estado Bolívar), con paros, huelgas y movilizaciones. Otro tanto ocurrió con los médicos, las enfermeras, los trabajadores universitarios, las maestras y los maestros, así como con los trabajadores petroleros de PDVSA. Estas luchas continuaron hasta fin de año y algunas, como las de los maestros, comenzaron este año. Fueron luchas que encendieron todas las alarmas tanto en el gobierno como en la oposición burguesa. La dinámica iba hacia un posible “estallido social”.

LA SALUD PÚBLICA EN CAÍDA LIBRE

Cuando la exministra de Salud, Antonieta Caporale, expuso los índices de epidemias, muertes maternas e infanticidios y la situación de la salud en Venezuela –luego de varios años de absoluto silencio–, hubo un gran revuelo. Al cabo de unos días, y a poco de haber asumido, la ministra “renunció”. ¿Qué datos ofreció la funcionaria? Que la mortalidad materna había aumentado un 65 % en 2016 y la infantil un 30 %.

Esos datos, preocupantes por sí mismos, eran aún mucho peo-

res por la reaparición de enfermedades que parecían erradicadas, como la tuberculosis y la malaria. En años anteriores, Venezuela había logrado avances significativos en el control de epidemias, pero a partir de 2014 comenzó la caída. Los datos sobre tuberculosis muestran que aumentaron de 6.000 casos en 2014, a 7.800 en 2016, y a más de 10.000 en 2017. La malaria, que estaba circumscripita a tres Estados, ahora se ha extendido a más de trece y sigue diseminando. Otros países, como Brasil, también han tenido incrementos de casos, pero de los 770.000 de toda la región sudamericana, Venezuela tiene 411.000. Es decir, 53% de toda la región, uno de los porcentajes más altos de los últimos 40 años. Al mismo tiempo, también vuelven a aparecer la difteria y el sarampión, por falta de vacunas.

Según la ONG Cáritas Venezuela, la “desnutrición aguda moderada a severa” entre niños y niñas de menos de cinco años aumentó del 10 % en febrero de 2017 al 17 % en marzo de 2018. Un nivel indicativo de una “crisis”, según los estándares de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Si bien en julio de 2018 había descendido en algunos estados, en Caracas y Vargas seguía por encima de los niveles de crisis (16,7 % y 20 %, respectivamente). La misma Cáritas detectó que el 48 % de las mujeres embarazadas está en comunidades de bajos recursos y con “desnutrición severa, aguada o moderada”. Otro tanto sucede con la desnutrición infantil: ingresan a hospitales niños y niñas que representan entre el 18 % y el 40 % (según la región) de la población de esas edades.

La situación hospitalaria no ha mejorado. Muchos hospitales empiezan a sentir el éxodo de profesionales: faltan pediatras, cardió-

logos, oncólogos, etc., que al principio abandonaban los hospitales públicos para ir a los privados, pero ahora ya han emigrado al exterior.

Hay encuestas que se repiten año tras año y que dan cuenta de las falencias en los trescientos hospitales públicos del país: fallas en el suministro de agua, cortes habituales de electricidad; los servicios de emergencia presentan fallas operativas o simplemente no funcionan. Además, faltan medicinas (en más del 70% de los casos) e insumos médicos (en más del 79% de los casos). Estas cifras varían de hospital en hospital, ya que llega algún insumo, pero desaparecen otros.

Un problema que se repite en los hospitales, según los profesionales médicos, es la falta de reactivos para detectar enfermedades y orientar los tratamientos. Por este motivo, familiares de pacientes deambulan por farmacias y por redes sociales para conseguir algunos insumos y medicamentos. También se manifiesta de forma crónica la escasez de medicamentos de alto costo para determinadas enfermedades, que llega al 95%; en tanto, las medicinas esenciales, como los hipertensivos, presentan escasez del 85%, según la Federación Farmacéutica.

LA POBREZA

Tres de las principales universidades del país han realizado un relevamiento de la situación social y de salud, así como de los índices de pobreza. Profesionales de la UCV (Universidad Central de Venezuela), la UCAB (Universidad Católica Andrés Bello) y la USB (Universidad Simón Bolívar) presentaron un estudio sobre estas variables.

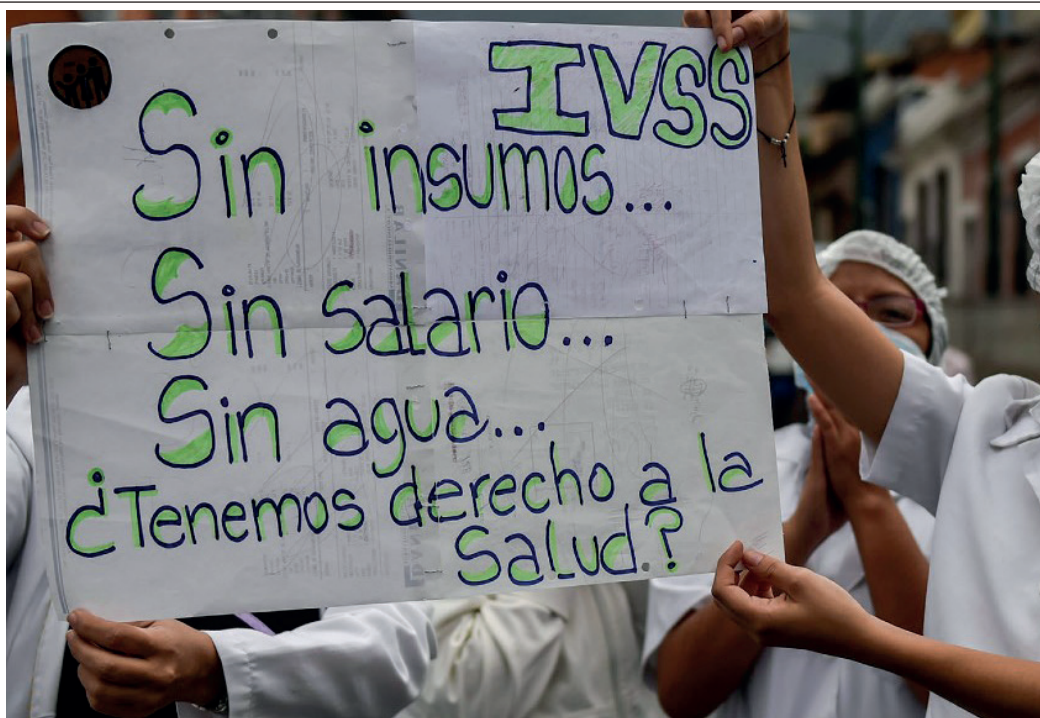
Según esta investigación, la pobreza pasó del 48% en 2014 al 87% en 2017, según la ENCO-

VI (Encuesta de Condiciones de Vida), medida por ingresos. Es decir, prácticamente se duplicó. Estos investigadores aclaran que en estos indicadores todavía no se reflejan los efectos de la hiperinflación que se desató a partir de octubre de ese año. Otro dato: más del 60% de los adultos se saltan una de las tres comidas para poder alimentar mejor a sus hijos. Según este estudio, los hogares considerados “no pobres” solo representan el 13% (en 2014 eran 51,5%). Por su parte, la pobreza extrema aumentó en la siguiente secuencia: 2014, 23,6%; 2015, 49,9%; 2016, 51,5%; 2017, 61,2%. Es decir, ¡en tres años se multiplicó por 2,6!

Un intento del gobierno para paliar la situación ha sido la implementación de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), que proveen cajas o bolsas de alimentos subsidiados. En ciudades como Caracas, llega a casi el 62% de los hogares de forma más o menos regular, una vez al mes. Pero no es así a nivel nacional, donde la periodicidad disminuye significativamente. Estos productos apenas alcanzan para cubrir las necesidades alimentarias de una familia durante una semana. Para adquirir estos productos, hay que estar censado. Pero “ayuda” a contar con el Carnet de la Patria.

Este nuevo documento ha sido utilizado por el gobierno como una herramienta de chantaje y termina siendo un instrumento de control político y social, como la coacción y el chantaje sobre los votantes en las últimas elecciones de la Asamblea Constituyente y presidenciales.

Al mismo tiempo, según el ENCOVI, las Misiones, creadas en vida de Chávez como un mecanismo de asistencia a los sectores más pobres, han ido reduciéndose, en



algunos casos, hasta desaparecer o fusionarse con otras, como reflejo de su falta de financiamiento. Contradictoriamente, el deterioro de la situación social hace que cada vez más porcentajes de la población dependan de ellas para su supervivencia.

LA EDUCACIÓN YA NO LLEGA A TODOS

El informe de las universidades citadas considera la relación entre el hambre, la pobreza y la educación. La conclusión es que el 76% de los escolarizados de los sectores populares, de 3 a 17 años, no asiste con regularidad a clases por falta de alimentos. Ya hay un sector importante de la población que no desayuna.

Una de las profesionales de la UCAB que participó en el estudio, Anitza Freitez, expresó: “Solo 9.931.000 de 12.734.000 (niños y jóvenes) están recibiendo educación y un sector significativo (500.000) tiene dificultades de aprendizaje con riesgo de exclusión educativa”.

AVANCES EN LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y ENTREGA DE RESERVAS

Durante los dos primeros años de la implementación del plan de ajuste, el gobierno ha venido profundizando su política de ajuste contra los trabajadores, avanzando en temas como la privatización de empresas estatales, entre ellas PDVSA, y en la entrega de los recursos minerales. Ya antes de 2018, se firmaron los acuerdos del Arco Minero Orinoco (AMO), que entrega importantes reservas minerales a transnacionales imperialistas.

Se trata de un área de 111 843,70 km², que ocupa mayoritariamente el norte del estado Bolívar y en menor proporción el nordeste del estado Amazonas y parte del estado Delta Amacuro, equivalente a 12,4 % del territorio venezolano, duplicando a la faja petrolífera del Orinoco, y que cuenta con 7000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales, que estarían siendo entregadas para su extracción a al menos 150 empresas de 35 países, principalmente a la



norteamericana Gold Reserve Inc., que en tiempos de Carlos Andrés Pérez depredó la zona sur del país y la canadiense Barrick Gold que posee un historial de denuncias en los lugares donde tiene presencia, relacionados con asesinatos y abusos en países como Papúa Nueva Guinea y Tanzania, así como de contaminación y daños ecológicos alarmantes, como el derrame de al menos un millón de litros de solución cianurada en cinco ríos de la provincia argentina de San Juan.

Muchas empresas nacionalizadas han sido reprivatizadas, algunas a nivel de varios estados y otras a nivel nacional, como los casos de la cadena de hoteles Vene-tur, entre ellos el Hotel Humboldt, entregado a los empresarios de la cadena Marriott, los abastos Bicentenario, empresas de procesamiento de alimentos, entre otras.

Es un proceso que viene

avanzando también en PDVSA y que ha incluido la reducción y, en algunos casos, la entrega de la mayoría accionaria en empresas mixtas y refinerías de PDVSA en el exterior. Como en 2016, cuando se redujo de 60% a 50,1% la participación de PDVSA en la empresa mixta PetroSinovensa y del 83% al 60% en PetroMonagas, de la faja petrolífera del Orinoco (FPO), la entrega a una empresa de maletín de Malta del Bloque Junín 10 de la FPO, que antes operaba PDVSA. Asimismo, en 2020, la creación de PDV – Puertos para la gestión de puertos y terminales petroleras del país, empresa que contaría con ingresos propios y con la facultad para hacer alianzas con asociaciones nacionales e internacionales, y la venta del 35% de las acciones de la refinería sueca Nynas, pasando PDVSA del 50% al 15%, cediendo la posición mayoritaria en el pa-

quete accionario.

Es decir, todo un plan de reestructuración hacia la privatización, violatorio de la Ley de Hidrocarburos vigente y de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Cabe, adicionalmente, que con la aprobación en 2016 de la reforma de la Ley de Hidrocarburos Gaseosos, se abrió la puerta para la entrega del gas costa afuera a las empresas transnacionales.

LEY ANTIBLOQUEO PARA LEGALIZAR EL SAQUEO

Con el propósito de dar una cobertura legal a todo este proceso de privatizaciones y entrega de reservas y recursos naturales, minerales e hidrocarburos a las transnacionales imperialistas, así como también chinas y rusas, el gobierno de manera apresurada y casi sin discusión, ha hecho aprobar la

cuestionada Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, valiéndose para esto de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aunque la aprobación se dio sin la unanimidad de dicho organismo de clara orientación oficialista.

Variados han sido los cuestionamientos al instrumento legal, algunos giran en torno a que la recién aprobada legislación va en contra de la constitución nacional, otros alrededor del secretismo, apresuramiento y poca discusión para su aprobación, y los restantes al respecto de que se aprueba una norma, que se salta importantes aspectos constitucionales sin la mínima consulta para su aprobación popular, como podría ser un referéndum, lo que la convierte en una norma totalmente fraudulenta.

Esta ley permite al ejecutivo saltarse los controles de la Asamblea Nacional para privatizar activos de la República y empresas del Estado, revertir expropiaciones o nacionalizaciones, reestructurar empresas del Estado, incorporando a entes privados nacionales e internacionales, eludir leyes para llevar a cabo estas acciones, celebrar contratos que impliquen endeudarse y todo ello bajo el más absoluto silencio y confidencialidad, de espaldas a los trabajadores y al pueblo.

La posibilidad de privatizar y revertir nacionalizaciones, entre otros mecanismos, se materializa cuando se allana el camino para alterar la composición accionaria de empresas en las que el Estado posee más del 50% de la participación, lo que supone reducir esa participación y aumentar la participación privada, y también permite dirimir divergencias a través de los tribunales internacionales aliados del imperialismo.

Resulta extremadamente preocupante el bloqueo de toda posibilidad de conocer los términos de los acuerdos a los que llegaría el ejecutivo con las entidades privadas nacionales y foráneas, así como de su veto por la Asamblea Nacional, amparados por la confidencialidad, llegando incluso a establecer la posibilidad de judicializar y penalizar a quienes indaguen sobre los mismos.

De esta manera, se dejan las manos libres para la acción del capital privado, tanto nacional como internacional, para el saqueo de la nación, la extracción ilimitada de los recursos petroleros y mineros de Venezuela, el incremento de la dependencia y la colonización del país, y la explotación de los trabajadores. Por eso no es de extrañar que, pese a las críticas al respecto del secretismo y la premura en su aprobación, voceros de la burguesía como Ricardo Cussano, presidente de Fedecamaras (principal gremio burgués del país), celebren la aprobación de la referida ley, reivindicándola como necesaria para la “atracción de inversiones”.

LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DE MADURO Y EL PSUV

Con estos datos, buscamos demostrar que la decadencia del proyecto chavista no tiene su origen en la “guerra económica” ni en el “bloqueo imperialista» que Maduro menciona desde hace tiempo. Aunque el reciente bloqueo de cuentas del Estado venezolano agrava la situación, esta decadencia se inició con el fracaso del proyecto “nacionalista burgués” del chavismo, sin rupturas con el imperialismo ni cambios estructurales en esa dependencia. El gobierno de Maduro y el régimen chavista son los principales responsables de la

trágica situación, que ya se gestaba durante los gobiernos de Chávez, en los que, además de no modificar el carácter capitalista dependiente y semicolonial del país —que, por el contrario, se profundizó—, se comenzó a destruir el aparato productivo nacional y a entregar las reservas de hidrocarburos y minerales, priorizando el pago de la deuda externa, garantizando ganancias para las transnacionales y manejando la economía de manera desastrosa. A esto se suma la mayor fuga de capitales en la historia del país. El chavismo, desde el principio, impulsó la creación de un nuevo sector burgués que se apropiaba de la renta petrolera y de los negocios del Estado, desplazando a otro sector burgués. Todos estos sectores han vivido y siguen viviendo de estos negocios, en estrecha relación con el imperialismo yanqui y con las burguesías gobernantes en China y Rusia. Ejemplos de esto son las multinacionales petroleras, farmacéuticas, químicas, alimentarias y automotrices, entre otras.

Durante los 20 años de chavismo, el imperialismo “soportó” los gobiernos chavistas que les garantizaban ganancias suculentas, negocios especulativos con el dólar y las importaciones y, fundamentalmente, la tranquilidad de recuperar ganancias con las masas desmovilizadas a partir de concesiones. Cuando la “estabilidad social” terminó con la crisis económica, cuando la clase obrera y las masas se hartaron de ser el “pato de la boda” y salieron a luchar y enfrentar al gobierno y al régimen de Maduro, el imperialismo decidió volver a sus viejos socios, hoy en la oposición burguesa. Para eso, intentan aprovechar el descontento obrero y popular que la catástrofe social que hemos descrito genera de manera creciente. ■

AUGE Y DECADENCIA DE CHAVISMO

COMITÉ EDITORIAL, LIT-CI, SEPTIEMBRE 2014

Los gobiernos cubano y venezolano cuentan con el apoyo de la mayoría de las organizaciones de izquierda de todo el mundo. Ese apoyo, sin embargo, vivió su auge en la década pasada y ahora está en decadencia, al igual que la situación de crisis de esos gobiernos.

El peso internacional de ese apoyo —que llamaremos de castro-chavismo— es muy importante. Pero por ser muy heterogéneos los partidos y movimientos que apoyan a los gobiernos cubano y venezolano, no podemos clasificar al castro-chavismo como una organización internacional (como fue, en su momento, el aparato estalinista internacional) ni tampoco como una corriente. Se trata de partidos, organizaciones, movimientos, gobiernos de diversos orígenes y características, muy diferentes entre sí. Una parte asume el modelo nacionalista burgués del chavismo, el bonapartismo del castrismo y la colaboración de clases entre ambos. Otra parte solo apoya esos gobiernos.

Los gobiernos cubano y venezolano no son obreros (ni pequeño-burgueses reformistas). Tienen orígenes distintos, pero hoy son gobiernos burgueses que dirigen estados capitalistas.

El castrismo proviene de una corriente pequeño-burguesa que cumplió una tarea revolucionaria al tomar el poder y expropiar a la burguesía. Después, condujo la restauración del capitalismo en Cuba y se convirtió en burguesa. La dictadura castrista se apoya en un estado burgués posrestauración.

El chavismo era una corriente pequeño-burguesa que llegó al gobierno venezolano y generó una nueva burguesía. Maduro dirige un gobierno bonapartista en el estado burgués venezolano. Es más bien una versión del nacionalismo burgués, como el peronismo argentino, el aprismo peruano y el nasserismo egipcio.

Cuba no es el “último bastión del socialismo” del siglo XX. En Venezuela nunca se expropió al capitalismo. El “socialismo del siglo XXI” es apenas una propaganda sin ningún punto de contacto con la realidad. El estalinismo ya le hizo mucho mal al movimiento revolucionario al identificar las dictaduras estalinistas

con el socialismo.

Estas son direcciones burguesas, con base en el movimiento obrero, popular y estudiantil. Pero el apoyo a estos gobiernos, que vivieron un auge a inicios del siglo XXI, ahora está en un claro declive.

1- CUBA: DE LA REVOLUCIÓN A LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA

La revolución cubana marcó profundamente la historia latinoamericana. Una pequeña isla, a pocas centenas de kilómetros de la costa norteamericana, expropió a las empresas multinacionales y puso fin a la economía capitalista. Eso nunca había ocurrido hasta entonces y no se repitió hasta hoy.

El ejemplo cubano permitió materializar lo que significa una alternativa a la economía capitalista. Eso superaba el nivel de debate anterior con los defensores del capital en el terreno de las ideas y del programa, transformándose en una experiencia que podía compararse. Eso, que ya existía a nivel mundial con la URSS, se concretó en América Latina a través de Cuba.

Cuba era uno de los países más pobres y miserables del continente. Una parte del turismo hacia la Isla era de ricos norteamericanos que iban a sus prostíbulos. Eso terminó con la revolución y la expropiación del capitalismo.

Fue un ejemplo impactante. En la Isla se acabaron los problemas sociales que ni en los países imperialistas se habían solucionado. Acabaron con el desempleo y la falta de vivienda. Todos podían comer y acceder a la educación y a la salud. Los cubanos pudieron acceder a una educación de calidad y gratuita, incluida la universitaria. Podían contar con asistencia médica calificada en todos los niveles. El cambio en la calidad de vida de la población se reflejó en los deportes: una pequeña isla comenzó a disputar con los Estados Unidos el liderazgo en medallas en los Juegos Panamericanos.

Eso tuvo una enorme importancia para la conciencia de las masas latinoamericanas y para su vanguardia. Lo que la revolución rusa ya había demostrado a nivel mundial, ahora se hacía presente en

América Latina. El socialismo no es un sueño, sino un programa real que puede cambiar el mundo y la vida de las personas. Generaciones y generaciones de activistas en América Latina recibieron las primeras lecciones de socialismo a partir de los ejemplos cubanos.

El Movimiento 26 de Julio, que tomó el poder, era una guerrilla de dirección pequeñoburguesa. Ese movimiento cumplió una tarea revolucionaria, no solo por haber derrotado a la dictadura de Fulgencio Batista, sino también por haber construido un Estado obrero.

El proyecto de la dirección castrista no era llegar tan lejos. Pero después de derrocar a la dictadura de Batista, quiso recuperar la economía, que estaba en una crisis completa. Y tuvo que enfrentarse a la burguesía cubana y, en particular, a las empresas norteamericanas presentes ahí. Después del acuerdo para la importación de petróleo de la URSS a precios muy bajos, las refinerías norteamericanas se negaron a refinarlo. Fidel reaccionó expropiando esas empresas, lo que inició un enfrentamiento con el imperialismo y llevó a la ruptura con el capitalismo y a la construcción de un nuevo estado.

Pero se trataba de una dirección pequeñoburguesa, apoyada esencialmente en el movimiento estudiantil, en las clases medias de las ciudades y en el campesinado pobre. Desde el inicio, ese movimiento tuvo una diferencia fundamental con la revolución rusa: el ejercicio del poder en Cuba nunca estuvo respaldado por la democracia obrera de los soviets como en 1917, sino bajo el control dictatorial de los dirigentes guerrilleros. Desde el inicio fue un estado obrero burocratizado.

Al inicio, Castro incluso adoptó una postura más a la iz-



quierda que la de la burocracia soviética. Mientras la dirección de la URSS aplicaba la política de “coexistencia pacífica” con el imperialismo, la dirección cubana estimulaba a la guerrilla latinoamericana. El Che Guevara murió impulsando esa política en Bolivia en 1967. Aun siendo la estrategia guerrillera completamente equivocada, demostraba una política distinta de la rusa. Pero después, la dirección cubana se incorporó a la misma política de la URSS, lo cual fue fundamental para evitar que la revolución sandinista en Nicaragua, en 1979, evolucionase hacia la expropiación del capitalismo.

La restauración del capitalismo en la URSS fue acompañada por el mismo proceso en Cuba. A partir del año 1977 se inician cambios de apertura al capitalismo en la Isla. Al inicio, fue la apertura del campo a las cooperativas y a los mercados libres campesinos, así como al trabajo autónomo en las ciudades. En la década del '90 se dan los pasos cualitativos para la restauración con la Ley de Inversiones Extranjeras de 1995, la

privatización de los sectores fundamentales de la economía cubana (turismo, producción de caña y tabaco), el fin de la planificación económica estatal y del monopolio del comercio exterior.

El bloqueo económico a Cuba, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos en 1962, es una de las principales “demostraciones” de los castro-chavistas de que la Isla sigue siendo un “bastión del socialismo”. Sin embargo, el bloqueo no es del conjunto del imperialismo sino sólo de los norteamericanos. La burguesía europea se aprovechó de esa situación para tomar la delantera en la ocupación económica de la Isla durante la restauración. No es por casualidad que buena parte de la estructura hotelera de turismo tiene como principales agentes a redes españolas como Meliá. Incluso la burguesía de los Estados Unidos está dividida, con un sector creciente que se opone al bloqueo por la pérdida de la “oportunidad”. En realidad, aún pesa decisivamente para el mantenimiento del bloqueo la posición de la burguesía cubana “gusana”, asentada princi-

palmente en Miami. Esta burguesía quiere la restauración, pero con la devolución de “sus” propiedades y, por eso, mantiene una postura belicosa contra la dictadura castrista. Incluso así, Estados Unidos es uno de los mayores exportadores a Cuba (variando entre el cuarto y el quinto lugar).

El plan de la burocracia castrista es transformar a Cuba en una China más próxima a la costa de los Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora por lo menos, el imperialismo sólo se apropió de las antiguas empresas estatales cubanas, sin grandes inversiones en la Isla. El resultado es una clara decadencia del país. La producción industrial fue 55% menor en 2011 que en 1989. La producción de azúcar cayó de 8 a 1,3 millones de toneladas. El salario real se redujo en un 72% en veinte años.

Ahora, ya con la restauración completada, Raúl Castro está implementando un nuevo paso de calidad: otra Ley de Inversiones Extranjeras, el plan de despido de un millón de funcionarios y la apertura de una enorme zona franca (semejante a las chinas) en el Puerto de Mariel. Por la nueva ley de inversiones, los inversores no pagarán impuestos sobre las ganancias durante los primeros ocho años de operación y, después, pagarán la mitad de la alícuota vigente. El Puerto de Mariel es modernísimo y puede recibir navíos de gran calado (pos-Panamax). Costó mil millones de dólares y es una apuesta por que Cuba forme parte del comercio de Asia hacia el mercado estadounidense.

Estos son nuevos pasos de apertura del país, ya restaurado, hacia nuevas inversiones extranjeras. Puede que estas nuevas iniciativas estén articuladas con una perspectiva de fin del bloqueo e de

inversiones de la burguesía norteamericana.

La fábula, ampliamente divulgada por los castro-chavistas, es que Cuba es el “último bastión del socialismo”. Niegan la restauración del capitalismo, apoyados en las figuras de Fidel y Raúl Castro, quienes dieron la misma dirección que comandó la revolución.

La realidad cubana desmiente al castro-chavismo. La economía en la Isla no está más regida por la planificación estatal, sino por las leyes del mercado capitalista. No existe estado obrero si no está apoyado en la propiedad estatal de los medios de producción, en la planificación económica y en el monopolio del comercio exterior.

Cuba hoy ya no es, en la conciencia de las masas latinoamericanas, la demostración de que un estado obrero puede ser una alternativa al capitalismo. Por el contrario, en la Isla existe una tragedia social derivada de la restauración, que conlleva una caída durísima del nivel de vida de los cubanos. Los trabajadores ganan salarios de 18 dólares mensuales; el desempleo amenaza con aumentar en grandes proporciones debido al plan gubernamental de despidos masivos de empleados públicos. La crisis llega a la educación y a la salud cubanas.

La opresión contra las mujeres no fue resuelta por la dictadura castrista, incluso cuando existía un Estado obrero. Pero con la restauración capitalista, el empeoramiento es cualitativo. Decenas de prostitutas rodean todos los hoteles de turismo en Cuba, retomando la triste realidad de los tiempos de Batista.

Ante el cuestionamiento del Comité por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, de las Naciones Unidas, sobre la prostitución en la Isla, el gobierno cubano respondió con un cinis-

mo impresionante: eso “constituye una elección personal de mujeres y hombres que buscan en el ejercicio de la prostitución una vía para acceder a determinados bienes de consumo que propicien un nivel de vida superior al del resto de la población trabajadora”. Fidel Castro fue más lejos aún en un discurso, casi haciendo propaganda de la prostitución: “Nuestras prostitutas son las más saludables e instruidas del mundo” (cita de Alejandro Armengol).

Mientras tanto, el turismo sexual retornó con fuerza, incluso con prostitución infantil. El cantante de rock Gary Glitter fue detenido por pedofilia en Inglaterra tras viajes consecutivos a Cuba. Un canadiense de 78 años, James McTurk, fue considerado culpable ante la justicia de su país por turismo sexual con niñas cubanas de hasta tres años de edad.

La opresión contra los homosexuales nunca terminó, incluso en tiempos en que aún existía un Estado obrero-burocratizado. El documental “Conducta impropia” tuvo gran repercusión al mostrar la represión contra homosexuales anónimos, así como contra reconocidos escritores como Reinaldo Arenas.

Quien quiera comprobar el repudio mayoritario de la población a la dictadura cubana le bastaría con viajar a la Isla y conversar con las personas en las calles, fuera del circuito “oficial”. Existe un rechazo pasivo de la amplia mayoría de la población, en particular de la más joven. Hablan mal del gobierno todo el tiempo; hacen bromas con la manera expansiva de los cubanos. La dictadura aún conserva el apoyo del sector más viejo de la población, que vivió en la época de la dictadura de Batista. Pero la amplia mayoría se opone a la dic-



tadura castrista.

La presencia en las manifestaciones convocadas por el gobierno es obligatoria y está controlada por la policía política, como en las dictaduras del Este. Poco antes del derrumbe de la dictadura estalinista en Rumanía hubo una gigantesca manifestación oficial. Los Comités de Defensa de la Revolución cubanos son como comisarías políticas en cada barrio, para vigilar a cualquier persona que manifieste una posición política contraria al gobierno, lo cual puede acarrear la pérdida del empleo o la prisión.

La dirección cubana comandó la restauración y pasó a dirigir un estado burgués. A pesar de todo el secreto con que la dictadura castrista rodea esos hechos, circulan informaciones de que altos oficiales de las fuerzas armadas cubanas son socios de empresas multinacionales que operan en Cuba.

El secreto también rodea la vida privada de los altos dirigentes cubanos. Pero acaba de publicarse un libro de Juan Reinaldo Sánchez, quien fue guardaespaldas de Fidel durante 17 años. El ex fiel servidor de Fidel afirma que este es dueño de la isla Cayo Piedra, situada al sudeste de Cuba, un “paraíso para millonarios”, a la cual siempre viaja en el

yate de su propiedad, «Aquarama II». Para esa isla, Fidel sólo invita a algunas personas escogidas, como el propietario de la CNN, Ted Turner, el empresario francés Gerard Bourgoïn, el expresidente colombiano Alfonso López Michelsen.

Lo que existe hoy en Cuba es semejante a la realidad china: una dictadura del Partido Comunista que comanda un estado burgués en una economía capitalista.

El programa revolucionario necesario para la Isla ya no es el de una revolución política, como en los tiempos del estado obrero burocratizado, sino el de una revolución social contra un estado burgués y una dictadura capitalista.

Cuando la mayor parte de la izquierda mundial defiende al castrismo, apoya una dictadura burguesa que explota y oprime a su pueblo. Es inevitable que, en algún momento, ocurra en Cuba lo que ocurrió en el Este europeo. Y esa izquierda tendrá entonces que apoyar la represión del gobierno cubano o desdecirse de todo lo que defendió hasta ahora.

2- CHAVISMO: DEL NACIONALISMO PEQUEÑOBURGUÉS AL NACIONALISMO BURGUÉS

El surgimiento con peso del chavismo tiene su origen político en la crisis vivida por Venezuela con el Caracazo, la insurrección que sacudió al país en 1989. El presidente Carlos Andrés Pérez impuso un violento paquete económico, con la desvalorización de la moneda (aumento del 100% en relación con el dólar) y el aumento del 80% en el precio del combustible. La población pobre de los morros que circundan Caracas bajó de ellos, se enfrentó violentamente a la policía y saqueó los comercios. La durísima represión mató a más de mil personas, conteniendo así la situación. Pero las fuerzas armadas se dividieron y la crisis se instaló en el régimen.

El entonces coronel Chávez intentó un golpe militar en 1992, que expresaba la insatisfacción generalizada en las FF.AA. A pesar de estar preso y de haber sido condenado, ganó un enorme prestigio entre los sectores más pobres. En 1998 ganó las elecciones presidenciales, iniciando un largo período de chavismo en el poder que se mantiene hasta hoy.

Chávez tuvo contra el imperialismo norteamericano una retórica que le valió gran prestigio en toda América Latina. Los discursos de Chávez contra el gobierno de Bush eran claramente diferentes de los de Lula y de otros gobiernos del continente. Pero ni Chávez ni Lula rompieron en ningún momento con el imperialismo.

Incluso en términos de discursos, todo cambió cuando Obama asumió la presidencia de los Estados Unidos. Chávez declaró sobre las elecciones norteamericanas: “Si yo fuese estadounidense, votaría por Obama. Y yo creo que, si Obama fuese de Barlovento o de un barrio de Caracas, votaría por Chávez.”

El gobierno venezolano siguió pagando religiosamente la deu-



da externa y mantuvo el abastecimiento de petróleo a los Estados Unidos, incluso cuando el imperialismo invadía Irak.

Aun sus medidas más famosas, como la “nacionalización del petróleo”, no significaron más que el mantenimiento de la sociedad con las multinacionales en la explotación y refinamiento del petróleo, aumentando un poco el porcentaje que recibía el Estado. En el principal ítem de la economía venezolana —el petróleo—, las multinacionales pueden ser dueñas de hasta el 49% de las empresas y de las reservas. En el caso del gas, pueden ser dueñas de hasta el 100 %. Así, no estamos hablando de pequeñas empresas sino del “socialismo” con la Exxon Mobil, la Chevron Texaco y la Repsol. Los enormes edificios de estas empresas se encuentran en las ciudades petroleras del país.

Al inicio, el imperialismo repudió duramente a Chávez y propició un golpe de Estado en abril de 2002. Las masas reaccionaron violentamente, iniciando una nueva insurrección que sólo fue contenida con el retorno de Chávez, tres días después.

En diciembre, el imperialismo aún intentó un lockout patronal y fue derrotado por las masas una vez más. Después, el gobierno de

Estados Unidos y la derecha venezolana aprendieron de sus derrotas y pasaron a apostar por el desgaste del gobierno y por la vía electoral para derrotar al chavismo.

El “socialismo del siglo XXI” de Chávez es sólo una farsa, una ideología para ganar a la vanguardia y a las masas para su proyecto burgués. El capitalismo se mantuvo intocable durante todo ese período chavista, con características semejantes a las del resto del continente, como el predominio de las multinacionales (en este caso, las petroleras) y de los bancos privados. El Estado burgués venezolano se mantuvo intacto, con sus fuerzas armadas controladas por el chavismo. Nunca hubo nada parecido a organismos de poder de las masas.

Ese fenómeno ya fue definido por Trotsky como bonapartismo sui generis, un tipo de gobierno burgués que se apoya en el movimiento de masas y presenta fricciones parciales con el imperialismo.

La definición de bonapartismo se relaciona con el carácter antidemocrático y autoritario del chavismo. Eso es algo que los chavistas intentan, pero no logran esconder. Los sindicatos están controlados por una burocracia chavista y los activistas son perseguidos. Chávez reprimió las huelgas que escapan

al control de la burocracia chavista —y Maduro lo hace ahora—, como ocurrió con la ocupación de la Mitsubitch en 2009 (dos muertos) y la de la Sidor en 2014 (tres heridos). El PSUV (Partido Socialista Único de Venezuela, fundado por Chávez) es un partido burgués que usa el aparato estatal como lo hizo el PRI mexicano o el Partido Colorado en Paraguay para cooptar y controlar al movimiento en un partido único.

Otros roces parciales con el imperialismo existen porque el chavismo es una expresión del nacionalismo burgués latinoamericano, al igual que el peronismo o el aprismo. Pero con las limitaciones que el nacionalismo burgués tiene en tiempos de la globalización económica del siglo XXI. No tiene espacio para medidas antiimperialistas de mayor peso, como la estatización del petróleo realizada por Cárdenas en México en 1938, o las estatizaciones realizadas por el peronismo tanto del petróleo como de la energía eléctrica y de los ferrocarriles. Ni para concesiones importantes al movimiento de masas, como las del peronismo.

Las multinacionales están tan fuertemente presentes en Venezuela como en toda América Latina. Y, como en el resto del continente,

involucradas en grandes negocios con el gobierno. Uno de los últimos escándalos en Venezuela fue la divulgación, nada menos que por la presidenta del Banco Central (Edmée Betancourt, quien duró apenas tres meses en el cargo), de que en 2012 entre 15 y 20 mil millones de dólares fueron entregados por el Estado a un grupo de “empresas de maletín” que sobrefacturan importaciones. Entre esas empresas estaban General Motors, Toyota, Ford, Cargill, Chrysler, American Airlines, Nestlé Venezuela y Procter & Gamble. Entre 2004 y 2012, las “empresas de maletín” recibieron 180.000 millones de dólares del Estado en una estafa gigantesca.

En Venezuela existe una fuerte disputa interburguesa entre el chavismo y la burguesía tradicional (llamada “escuálida”) desde la ascensión del chavismo. Es eso lo que explica el golpe de 2002, el lockout, las marchas actuales, así como las disputas electorales violentas. Pero la izquierda chavista confunde esa disputa interburguesa con una disputa entre un supuesto sector revolucionario y la burguesía en su conjunto. O incluso, como si fuesen Cuba y los Estados Unidos en los años '60.

Los trabajadores venezolanos viven en las mismas pésimas condiciones salariales y laborales que sus hermanos latinoamericanos. El salario mínimo “vale” alrededor de cien dólares (según la cotización real en el mercado paralelo), lo que es menor que el de la mayoría del continente. En el país que es el mayor exportador de petróleo del continente, casi el 40 % de la población vive en la pobreza. Existen 1,2 millones de desempleados y la mitad de los empleados está en el sector informal. Las cooperativas, impulsadas por el gobierno, contribuyen enormemente a la flexibi-

lización de los derechos laborales, sin estabilidad para sus trabajadores ni reconocimiento de derechos mínimos, como sindicalización, huelga, previsión, etc.

En Venezuela, la opresión contra las mujeres, los negros y los homosexuales es la misma que en el resto de América Latina. En algunos terrenos es aún mayor que en otros países latinoamericanos. Por ejemplo, no existe derecho al aborto como en la Ciudad de México y en Uruguay (en las primeras 12 semanas).

La cara “social” del chavismo es la misma que la de otros gobiernos latinoamericanos de “izquierda” y de derecha: programas sociales compensatorios y asistencialistas. Las “Misiones” venezolanas tienen el mismo carácter que la “Bolsa Família” del Brasil, el “Juanito Pinto” y la “Renta Dignidad” de Bolivia, el “Hambre Cero” de Nicaragua, el “Familias en Acción” de Colombia, el “Oportunidades” de México y el “Juntos” del Perú.

Esta política atiende a las recomendaciones del Banco Mundial y del FMI de aplicar estos programas junto con los planes neoliberales. Vienen juntos con la reducción de los presupuestos de salud, educación y jubilación para garantizar el pago de las deudas a los banqueros. Según estas instituciones del imperialismo, son “programas eficientes” a un “costo bajo” que ayudan a aplicar los planes neoliberales y a mantener la estabilidad política.

En Venezuela, las “Misiones” tienen un enorme peso, alcanzando a más del 40% de la población. Esta es la diferencia cuantitativa en comparación con otros países. Financiadas con la renta petrolera, las “Misiones” pueden abarcar un mayor número de personas, asegurando apoyo electoral y político al chavismo.

El enorme potencial económico de la exportación de petróleo no se aprovechó para transformar la economía del país mediante la industrialización. El petróleo pasó de un peso del 70% de las exportaciones en 1998 a un 96% en 2012. Mientras tanto, el sector industrial cayó del 17,3 % del PIB en 1998 al 14 % en 2012.

El chavismo dio continuidad al modelo rentista parasitario de la burguesía venezolana. No avanzó ni siquiera en el camino del nacionalismo burgués de antes, como el de Perón, Vargas y Cárdenas, que desarrollaron sectores industriales sustituyendo importaciones en sectores clave como la siderurgia, la industria automotriz, la alimenticia, etc. Podría haber avanzado en ese sentido con la renta del petróleo, pero se mantuvo exactamente en la misma postura parasitaria tradicional de la burguesía venezolana.

Chávez no rompió con el capitalismo y, por eso, tampoco cambió la vida de los trabajadores. Así, Venezuela no puede presentar al mundo un cambio social semejante al que vivió Cuba tras la expropiación del capitalismo.

A diferencia de avanzar en un rumbo socialista, como afirman sus defensores, el chavismo impulsó, desde el Estado, la construcción de una nueva burguesía, conocida como la “boliburguesía” (burguesía bolivariana). Esta nueva burguesía tiene un enorme peso en el gobierno y en el PSUV. Su representante más importante es Diosdado Cabello, ex oficial de las Fuerzas Armadas y actual presidente de la Asamblea Legislativa, quien llegó a disputar con Maduro la sucesión de Chávez.

El grupo económico de Diosdado tiene tres bancos, varias industrias y empresas de servicios. Ya es uno de los principales grupos

económicos del país. Otros dos grupos económicos de la boliburguesía giran en torno a Jesse Chacón y a Blanco La Cruz, también oficiales retirados de las fuerzas armadas.

El ALBA –Alianza Bolivariana para las Américas–, impulsado por Venezuela, se demostró apenas como una asociación más de libre comercio, controlada por las multinacionales instaladas en estos países.

El gobierno venezolano utiliza los negocios petroleros en los países de América Latina como parte de sus objetivos políticos. Vende a precios más bajos a los gobiernos aliados y utiliza su comercialización en otros países como puente para negociar con movimientos y partidos.

Al no avanzar en un camino anticapitalista, el chavismo expuso a Venezuela a la crisis económica mundial y a las maniobras de la burguesía local. Venezuela vive hoy una de las mayores crisis económicas del continente, con una probable recesión este año (-0.5%), hiperinflación (más de 50%) y escasez de alimentos de primera necesidad (más del 30% de los productos). Si el país fuese realmente socialista, no se podría justificar esta crisis por la situación económica mundial. Basta comparar los avances de la Unión Soviética, que crecía a tasas superiores al 10% en plena depresión mundial de 1929. Como –a diferencia de lo que dice el chavismo– no se avanzó en la ruptura con el capitalismo, el país vive hoy una crisis gigantesca.

La muerte de Chávez expuso con claridad la crisis del chavismo, con innumerables disputas internas que se agravan a medida que pierde apoyo popular. El gobierno de Maduro es cada vez más frágil y cada vez más repudiado.

La burguesía se apoyó en ese descontento para promover grandes movilizaciones en las calles, a

inicios de 2014, apoyándose en las clases medias y en los estudiantes. Por sus dimensiones y por estar asociadas al descontento general con el gobierno, estas muestran la amenaza concreta que representa la derecha para el chavismo. El acuerdo entre el gobierno de Maduro y la oposición de derecha para frenar las movilizaciones significó más ataques contra los trabajadores y más descontento popular.

La política, en general, del imperialismo y de la oposición de derecha es desgastar al gobierno y apostar por su derrota electoral en las legislativas de 2015 y, después, en las presidenciales. El desencanto con la inflación, la escasez, la corrupción del chavismo es cada vez mayor y puede ser capitalizado por la oposición de derecha. Una evolución de Venezuela en el mismo sentido que lo hizo Nicaragua (que incluyó una derrota electoral del sandinismo por parte de la derecha) es la primera estrategia de dicha derecha.

El gobierno sigue teniendo el control de las fuerzas armadas y el apoyo de un sector importante de la población, lo que inviabiliza un golpe militar. No se puede descartar, sin embargo, un cambio en el curso del proceso en caso de que el gobierno de Maduro se debilite aún más y la derecha consiga apoyo en las fuerzas armadas.

El movimiento obrero protagonizó innumerables huelgas durante todos estos años de gobierno chavista. La respuesta fue, en general, dura, con represiones directas y asesinatos de dirigentes huelguistas. Ahora se está extendiendo un enorme descontento en los sectores populares y se está dando inicio a una ruptura con el chavismo. Recientemente hubo luchas de trabajadores de la salud, profesores, la industria automotriz y de Sidor. Si-

dor es una empresa estatal, la principal siderúrgica del país, y desde 2012 está en lucha en defensa de un contrato colectivo de trabajo. Diosdado Cabello llamó a los trabajadores de Sidor “mafiosos”. Maduro los acusó de “hacerle el juego a la derecha”. El día 11 de agosto, una marcha de los obreros de Sidor fue violentamente reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana, lo que dejó tres heridos y a muchos detenidos.

Es fundamental que el movimiento obrero venezolano construya una alternativa independiente, tanto del gobierno como de la oposición de derecha.

3- LA GÉNESIS DEL RETROCESO CASTRO-CHAVISTA

Las caracterizaciones de las direcciones mayoritarias del movimiento de masas tienen mucha importancia para nuestra comprensión de la realidad y, por lo tanto, del programa. Durante muchos años, la polémica fundamental en el movimiento obrero giraba en torno a reformistas y revolucionarios.

Pero existe un proceso social y político que afectó a las direcciones mayoritarias del movimiento de masas en los últimos treinta años, concomitante con la globalización de la economía y el desarrollo de los planes neoliberales. En esencia, hubo un movimiento reaccionario de transformación de burocracias en nuevas burguesías, que pasaron políticamente de reformistas a neoliberales.

En el momento en que terminaba el boom posguerra (finales de la década del '60 e inicios de los años '70), el imperialismo hacía la conversión de sus planes neokeinesianos hacia el neoliberalismo. Para recuperar la tasa de ganancia, era necesario cambiar la econo-

mía, imponiendo un retroceso a las conquistas del proletariado en la posguerra (el llamado estado de bienestar social), además de privatizar las empresas estatales y avanzar fuertemente en el control del capital financiero sobre toda la economía.

El neoliberalismo, que era una corriente intelectual marginal desde su fundación en 1947, fue asumido por los pensadores y gobernantes del capitalismo. Primero, como una experiencia durante la dictadura de Pinochet en 1973 (nunca antes se había aplicado un plan neoliberal). Después, asumido por los gobiernos de Reagan y Thatcher al inicio de la década del '80. Finalmente, generalizado por los países imperialistas y en todo el mundo.

Es necesario investigar el paralelismo entre la globalización económica y la restauración del capitalismo en el Este europeo. Existen elementos que apuntan a una relación entre ambos procesos, aunque no se pueda explicar la restauración en el Este únicamente por un proceso económico.

Pero es un hecho que las burocracias gobernantes en los ex estados obreros no tenían las condiciones políticas para efectuar un ataque a los trabajadores semejante al de los planes neoliberales, sin riesgo de rebeliones. Por otro lado, tampoco tenían condiciones tecnológicas para acompañar la incorporación de la informática, la telemática y la robótica en la producción. Esto reforzó enormemente la presión del mercado mundial sobre estas burocracias.

La resultante de esa relación —y, seguramente, de otros procesos asociados— es que esas burocracias prefirieron asociarse directamente al gran capital en el proceso de restauración del capitalismo. A partir de allí, se apropiaron de las empresas estatales y se transformaron en



nuevas burguesías. Eso se dio de manera generalizada en todos los países en los que se efectuó la restauración. Un ejemplo típico es el de Abramovich, quien se apoderó de las empresas petroleras rusas y se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo.

En los países semicoloniales se daba un proceso en el mismo sentido: la transformación de partidos y movimientos reformistas pequeñoburgueses en burgueses al llegar al gobierno. Fue así con el Frente Sandinista en Nicaragua. Después de destruir las fuerzas armadas burguesas —la Guardia Nacional de Somoza— en 1979, el sandinismo se negó a expropiar al capitalismo. Por el contrario, los dirigentes sandinistas se apoderaron, de manera privada, de muchas de las propiedades de Somoza. Varios de ellos se convirtieron en multimillonarios y en parte de la burguesía, como Daniel Ortega, actual presidente del país.

Se observó el mismo fenómeno en Mozambique y Angola. Las fuerzas armadas que sustentaban el poder burgués y colonial eran las tropas portuguesas. La Revolución de los Claveles en Portugal, en 1975, favoreció la victoria de los movimientos de liberación nacional que ya eran fortísimos en ese país. Tanto el MPLA [Movimento

Popular de Libertação de Angola] en Angola como el Frelimo [Frente de Libertação de Moçambique] en Moçambique mantuvieron el capitalismo y sus direcciones se transformaron en nuevas burguesías.

La familia de Eduardo dos Santos —actual presidente de Angola— es accionista de las 21 mayores empresas del país. Su hija, Isabel dos Santos, es socia de uno de los burgueses más poderosos de Portugal —Américo Amorim— en el Banco BIC de Angola. En Mozambique, la privatización de los bancos estatales BCM [Banco Comercial de Mozambique] y BPD [Banco Popular de Desarrollo] en 1996-97 tuvo como principales beneficiarios a varios dirigentes del Frelimo, quienes desaparecieron con más de 400 millones de dólares. Armando Guebuza, actual presidente, es un gran accionista de Intelec Holding y socio de la multinacional Vodacom. Su hijo, Mussubuluko Ghebuza, también es socio de Américo Amorim en la creación del Banco Único en Mozambique.

En África del Sur, los dirigentes del CNA [Congreso Nacional Africano] en el gobierno abrieron el camino para la formación de una nueva burguesía negra, socia menor de la burguesía blanca. Cyril Ramaphosa, líder del Sindicato de



Mineros (NUM) y del COSATU [Congreso de Sindicatos Sudafricanos] en la lucha contra el apartheid, es hoy socio-propietario y miembro del directorio de la empresa multinacional Lonmin. Fue durante la represión de 2013 contra la huelga de los mineros de Marikana, de esa empresa, cuando la policía, enviada por el gobierno del CNA, mató a 34 mineros.

En el PT brasileño, que gobierna desde hace doce años, está en curso un proceso de aburguesamiento de su dirección. El hijo de Lula, testaferro de la familia, era empleado de un zoológico en San Pablo y ganaba cerca de 300 dólares mensuales cuando el padre asumió el gobierno. Hoy es socio de una multinacional de telefonía. Zé Dirceu, abogado y socio de multinacionales. No afirmamos que ya exista una transformación acabada del PT en un partido burgués, sino que sí un proceso en curso.

Existe una totalidad que une la globalización y la restauración del capitalismo, la conversión de las burocracias en nuevas burguesías en los antiguos estados obreros, en los países imperialistas y en los países dependientes y semicoloniales.

La dirección castro-chavista es, por lo tanto, una expresión de ese movimiento ultrarreaccionario de transformación de las bu-

rocracias y de los movimientos pequeñoburgueses en nuevas burguesías, tanto en Cuba como en Venezuela. El origen de esos dos gobiernos es distinto, como vimos. Pero hoy están unidos y son una referencia política para buena parte de la izquierda mundial. Una pésima referencia, como veremos.

4. LO QUE RESTA DEL APARATO MUNDIAL DEL STALINISMO

Los partidos estalinistas de todo el mundo apoyan a los gobiernos cubano y venezolano. Cuando se habla de “restos del estalinismo”, puede concluirse que esos partidos no tienen fuerza alguna. Eso es un grave error.

Evidentemente, la situación actual no tiene nada que ver con los tiempos en que tenían detrás de sí a estados obreros burocratizados que dirigían un tercio de la humanidad. Pero siguen teniendo un peso muy importante en algunos países.

Esos partidos organizan reuniones anuales con organizaciones de más de cincuenta países. Reúnen partidos de distintas naturalezas, aunque –por la tradición– con el mismo nombre de “partido comunista”.

Incluye partidos mayores que, a pesar de la crisis, aún tienen gran peso nacional (como el PC portu-

gués) y otros de menor peso, producto de la crisis del estalinismo, como el PC brasileño.

Pero también incluye partidos que ya dejaron de ser obreros reformistas para convertirse en partidos burgueses en la gestión de estados capitalistas, como el PC cubano y el PC chino.

5. EL AUGE DEL CASTRO-CHAVISMO Y SUS CONSECUENCIAS EN AMÉRICA LATINA

El castro-chavismo tuvo su auge a inicios del siglo XXI, asociado al momento en que partidos frentepopulistas y nacionalistas burgueses ocupaban la mayoría de los gobiernos de América Latina.

Evidentemente, el impacto de la revolución cubana en 1959 provocó una oleada de simpatía en América Latina desde entonces. Pero eso fue debilitándose debido a las repercusiones del Este europeo.

Estamos hablando de un fenómeno posterior. A inicios del siglo XXI, una oleada antiimperialista y antineoliberal barrió el continente latinoamericano. Existía una lucha creciente contra los planes neoliberales, contra el gobierno de Bush y su plan ALCA.

La mayoría de los gobiernos que aplicaron los planes neoliberales fue derrotada, ya sea a través de movilizaciones directas (como en Argentina, Bolivia y Ecuador) o a través de elecciones (Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y otros).

Nunca antes en la historia estuvieron al mismo tiempo en el poder tantos gobiernos de frente popular y de nacionalistas burgueses en América Latina. Ese es el momento de auge del castro-chavismo, apoyado por Lula, Evo Morales, Chávez, Correa, Bachelet, Lugo y varios otros gobiernos.

Como parte de ese proceso

de luchas, el plan imperialista del ALCA fue derrotado. Se abrieron [así] las condiciones para un proceso inédito en América Latina. Era posible luchar contra el no pago de las deudas externas con un frente de países deudores. Era posible avanzar hacia una ruptura con el imperialismo en una parte importante del continente, lo que abriría camino a un proceso revolucionario anticapitalista de gran peso.

Todas las veces que se discute una política de ruptura con el capitalismo, con partidos y movimientos que defienden la colaboración de clases con la burguesía, es inevitable que la respuesta sea la misma: “La relación de fuerzas no lo permite”. En aquel momento, esta respuesta era completamente absurda.

Más que en cualquier otro momento de la historia, el inicio del siglo XXI provocó un cambio brusco en la relación de fuerzas en el continente. Nunca hubo un momento tan favorable para una ruptura con el imperialismo y el capitalismo. Ni siquiera en el momento posterior a la victoria de la revolución cubana existió algo semejante, con tantos países que vivían la derrota de gobiernos de derecha neoliberales. La mayor parte de los gobiernos estaba ocupada por partidos y movimientos que se identificaban como de “izquierda”.

La referencia política principal en el continente era el castro-chavismo, en particular el gobierno venezolano. Grandes movilizaciones de repudio recibían a Bush cada vez que pisaba algún país del continente. Otras tantas manifestaciones de apoyo importantes recibían a Chávez. En caso de que hubiese habido una ruptura real con el imperialismo en Venezuela, un reguero de pólvora ha-

bría incendiado América Latina.

Pero nada de eso ocurrió. Los gobiernos de Venezuela y Cuba maniobraron para gestionar los roces con el imperialismo dentro de límites aceptables. Chávez y Castro no aplicaron en sus países ninguna ruptura con el imperialismo. Y tampoco defendieron medidas en ese sentido en el resto del continente.

Esos eran gobiernos burgueses, sean de tipo frentepopular o sean nacionalistas burgueses. Y las burguesías latinoamericanas no están dispuestas a romper con el imperialismo. Esos gobiernos de “izquierda” fueron la base fundamental para contener al movimiento de masas. Se apoyaron en un ascenso económico coyuntural y, con su peso popular, consiguieron restablecer la situación política. Desde 2005 hasta 2012, no se registró prácticamente ninguna huelga general ni rebelión popular en el continente. El ALCA fue derrotado, pero esos gobiernos aplicaron en sus países los planes neoliberales que habían sido derrotados junto con los gobiernos de derecha.

El papel real de las direcciones cubana y venezolana, así como de los gobiernos latinoamericanos que las apoyan, puede demostrarse en ese momento. Podría haber desencadenado un proceso histórico de ruptura con el imperialismo. No lo hicieron. Por el contrario, desviaron y congelaron el ascenso que acompañó su auge. Pero con eso también abrieron las puertas a su propio debilitamiento.

Consiguieron frenar las grandes movilizaciones que marcaron el inicio del siglo XXI hasta 2005. Desde ese año hasta 2012, no se registró prácticamente ninguna huelga general ni rebelión popular en el continente. Pero, con su desgaste, comenzaron a pagar el mismo pre-

cio que los gobiernos de la derecha al aplicar los planes neoliberales.

6. LA DECADENCIA DEL CASTRO-CHAVISMO

Desde 2013 comenzó a darse un proceso distinto en el continente. Está comenzando un nuevo ciclo en América Latina, que incluye crisis económicas y políticas, así como el enfrentamiento del movimiento de masas contra esos mismos gobiernos que antes tenían enorme apoyo popular.

La decadencia de las economías del continente regresó, acompañando el fin del boom de las materias primas que había sido una parte importante del crecimiento económico anterior. El movimiento de masas se recompuso con varias huelgas generales que sacudieron a Argentina, Perú y Bolivia, además de las movilizaciones populares de junio de 2013 en Brasil.

No existe un proceso latinoamericano homogéneo ni un ascenso permanente y generalizado. Se trata de situaciones distintas de la lucha de clases en el continente, con innumerables flujos y reflujos, idas y venidas. Más aún, porque se combina con una fortísima crisis de la dirección revolucionaria, o sea, la ausencia de organizaciones revolucionarias con peso de masas.

La decadencia y la crisis del castro-chavismo forman parte de este nuevo momento. Las economías de Venezuela y Cuba están cuestionadas por la crisis económica. El gobierno de Maduro tiene que enfrentar grandes movilizaciones, capitalizadas por la oposición de derecha. Además, muchos gobiernos que apoyan al castro-chavismo se enfrentan ahora a movilizaciones de peso, como Cristina Kirchner en la Argentina y Dilma Rousseff en Brasil.

Esos gobiernos no avanzaron

hacia una ruptura con el imperalismo. Ahora tienen que enfrentarse al movimiento de masas.

Ni en Cuba ni en Venezuela la situación de los trabajadores puede servir de referencia para otros países. Por el contrario, las filas para comprar productos de primera necesidad, la inflación en Venezuela y los bajísimos salarios en Cuba son elementos de contrapropaganda.

A diferencia del reformismo clásico, las direcciones chavista y castrista tampoco tienen compromisos con la democracia. Cuba es una dictadura y el chavismo un régimen bonapartista. Además, al asumir la defensa de dictaduras como las de Khadafi y Assad, el castro-chavismo choca con el sentimiento democrático de las masas pos-restauración.

El repudio que existía contra el estalinismo, por sus características autoritarias, se veía atenuado por la existencia de los estados obreros y sus conquistas sociales. Hoy, el castro-chavismo tiene que enfrentar el escepticismo de las masas tras la restauración del capitalismo tras las dictaduras, sin saber cómo ofrecer una referencia superior en el nivel de vida de los trabajadores. El peso de Cuba en la conciencia de las masas latinoamericanas ya estaba muy reducido debido a los acontecimientos del Este europeo. Ahora también es cuestionado por el retroceso social en la Isla.

Por estos motivos, la decadencia del castro-chavismo va haciendo que la vanguardia que surge de las luchas ya no tenga como su referente inmediato a esas corrientes. Las organizaciones que componen la corriente castro-chavista tienen peso en la realidad, pero el castro-chavismo no es más un referente "natural" de la vanguardia, como lo fue en su momento de ascenso.

7. ¿Y SI CAYERAN LOS GOBIERNOS DE CUBA Y DE VENEZUELA?

Después de la restauración del capitalismo en el Este europeo, se produjo una seria crisis en toda la izquierda mundial. Hubo una combinación de dos grandes factores que impulsó un profundo retroceso en la conciencia de las masas y de la vanguardia.

Primero, la desaparición de los Estados obreros burocratizados que, a pesar del estalinismo, demostraban la posibilidad de una economía no capitalista. Segundo, una gigantesca campaña de propaganda capitalista que dice que el "socialismo murió", que "socialismo es igual a dictadura" y que "socialismo es igual a atraso económico y social".

Las consecuencias de ese retroceso se manifiestan hasta hoy porque desapareció el referente de masas que permite superar al capital. Existe un gran escepticismo respecto de todo lo que implique revolución socialista (partido revolucionario, centralismo, etc.).

El derrumbe de las dictaduras estalinistas tuvo otra consecuencia, de signo opuesto: la desaparición del aparato estalinista mundial debilitó ese dispositivo contrarrevolucionario que aglutinaba a partidos y estados de gran peso en todo el mundo. Eso permitió una liberación muy importante de fuerzas del movimiento de masas. Sin embargo, ese elemento, muy positivo, aún está muy mediado por el retroceso en la conciencia, que atrasa la construcción de alternativas revolucionarias de peso.

¿Qué va a pasar si la dictadura castrista es derrocada por una movilización de masas, como sucedió en el Este? ¿Y si eso se combina con una derrota electoral del chavis-

mo? ¿Va a repetirse el mismo proceso, al menos en América Latina?

En primer lugar, es preciso diferenciar los procesos de Cuba y de Venezuela. La caída de la dictadura castrista por una movilización de masas sería un proceso progresivo, de la misma manera en que analizamos lo ocurrido en el Este europeo. Sería el derrumbe de un estado burgués posrestauración del capitalismo, de una dictadura capitalista. La derrota en Cuba vino antes, con la restauración del capitalismo, como también ocurrió en el Este.

Ya una victoria electoral de la oposición burguesa en Venezuela sería una derrota del movimiento de masas, aun sabiendo que se trata de un gobierno burgués. Sería la victoria de una oposición proimperialista sobre un gobierno nacionalista burgués.

La responsabilidad por todos los elementos negativos que surgieron en la conciencia de las masas, en el caso del derrocamiento de los gobiernos cubano y venezolano, es directamente de esos gobiernos y de todas las organizaciones de izquierda que los apoyan. Hasta el día de hoy no existe una alternativa de izquierda con peso de masas ni en Cuba ni en Venezuela. Las alternativas de dirección, con peso en esos países, son burguesas y proimperialistas.

La no existencia de una oposición de izquierda en Venezuela es una tragedia, de responsabilidad directa de toda la izquierda que capitula ante el gobierno chavista. Las movilizaciones de masas contra el gobierno son capitalizadas y dirigidas directamente por la oposición de derecha. Esta es la consecuencia de la capitulación al chavismo: la derrota del gobierno venezolano puede ser una victoria de la burguesía.

En Cuba, la situación es aún



peor. Existe una dictadura violenta que impide la manifestación de cualquier oposición política. No existen alternativas construidas. Pero no es difícil imaginar la facilidad con que se podrán construir direcciones burguesas respaldadas por el imperialismo “democrático”.

Pero volvamos a la pregunta sobre las consecuencias de una posible derrota de los gobiernos castristas y chavistas en la conciencia de las masas y de la vanguardia en América Latina. ¿Volvería a repetirse –o profundizarse– lo que se dio en el pos Este? ¿Va esto a comprenderse como una “derrota del socialismo”?

A nuestro ver, el impacto inmediato es inevitable, pero su magnitud depende de varios factores. Existen elementos que juegan a favor y otros que lo hacen en contra.

Los elementos que trabajan a favor de un nuevo desastre en la conciencia de las masas y de la vanguardia están concentrados en el peso de la izquierda castro-chavista.

Las organizaciones de izquierda que apoyan a los gobiernos de Cuba y Venezuela, ante la caída de estos, van a difundir, una vez más, la ideología de que el “socialismo” fue derrotado nuevamente.

Es probable que esos partidos y movimientos, en particular los de América Latina, atraviesen crisis importantes en ese caso.

¿Por qué decimos, entonces, que “depende” y que la dimensión de esos resultados no está definida? Porque algunos elementos de la realidad actual difieren de los de la década del '90 y pueden conducir a una situación distinta.

La primera diferencia es que, en el momento de la caída de las dictaduras estalinistas, en la década de los '90, el neoliberalismo vivía su auge. Los planes neoliberales se estaban aplicando y despertaban expectativas en muchos países. El capitalismo se mostraba como victorioso, contrapuesto al “socialismo” derrotado. Pero la crisis económica internacional acabó con eso desde 2009, lo que determinó una decadencia general, aunque con flujos y reflujos. La crisis económica que afecta al continente latinoamericano desde 2013 también juega en el mismo sentido.

Como vimos en este texto, también existe un desgaste en la conciencia de las masas latinoamericanas respecto de los gobiernos cubano y venezolano. Eso se debe

tanto al desencanto general pos-este como a la decadencia económica y social de esos países. También pesa en la vanguardia el apoyo de los gobiernos cubano y venezolano a las dictaduras del norte de África y de Medio Oriente.

El desgaste actual de los gobiernos de frente popular y de los nacionalistas burgueses que apoyan al castro-chavismo disminuyó el probable trauma posterior a su posible derrota.

La decadencia del castro-chavismo puede ser un factor que reduzca el impacto negativo de la derrota de los gobiernos cubano y venezolano. Puede haber una liberación de fuerzas debido a la crisis de las organizaciones castro-chavistas, lo cual sería muy positivo. Y las consecuencias negativas del retroceso de la conciencia pueden atenuarse.

En esencia, el resultado no está predeterminado. Eso tiene un profundo significado político hoy en día. Cuanto más los activistas entiendan el significado populista-burgués del castro-chavismo, menor será el impacto negativo de las derrotas de los gobiernos cubano y venezolano. Si el colapso de los Estados obreros tuvo consecuencias inmediatas fuertemente negativas, eso puede ser diferente hoy.

Para avanzar en ese sentido, queremos llamar al conjunto de la izquierda mundial al debate sobre los gobiernos cubano y venezolano. Es importante que se haga una amplia discusión ya en todo el mundo y, especialmente, en América Latina. En particular, llamamos a los sectores más combativos de la vanguardia que aún creen en esos gobiernos a entrar en este debate, a verificar si tenemos razón y a romper con ellos.

Es fundamental construir desde ya una alternativa revolucionaria al castro-chavismo. ■

URGE CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA DE LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO HUMILDE

LEONARDO ARANTES/ UNIDAD SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (UST), LIT-CI
NOVIEMBRE 11, 2023

El domingo 22 de octubre se realizaron las elecciones primarias, convocadas por los partidos de la oposición burguesa venezolana organizados en la llamada Plataforma por la Unidad Democrática (PUD), con el propósito de escoger la candidatura de esta coalición política propatronal, para un eventual proceso de elecciones presidenciales a realizarse el año 2024.

Como era previsible, María Corina Machado (MCM) del partido Vente Venezuela resultó ganadora de manera holgada en dicho proceso electoral, registrándose en el mismo una importante participación, pese a todas las maniobras urdidas por el gobierno de Nicolás Maduro previamente para impedir su realización y para sabotarlos el día en el cual se llevaban a cabo.

LAS MANIOBRAS ANTIDEMOCRÁTICAS DEL GOBIERNO

Para tratar de impedir y sabotear los comicios internos de la propatronal y antiobrera coalición opositora, el gobierno burgués-dictatorial de Nicolás Maduro, realizó una serie de maniobras antidemocráticas que incluyeron presiones para forzar la renuncia de la junta directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), principalmente de su anterior Presidente, Pedro Calzadilla y la posterior intervención de este organismo, para elegir un Presidente más incondicional con los intereses gubernamentales, en la persona de Elvis Amoroso, quien hasta entonces se venía desempeñando como Contralor General de la República, además de ex vicepresidente de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017 y ex diputado a la Asamblea Nacio-

nal por el Partido Socialista Unido de Venezuela; cargos y trayectoria política que dejan en evidencia su parcialidad a favor del gobierno.

Posteriormente, introdujeron recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para invalidar las elecciones primarias, luego, a través de la Contraloría General de la República (CGR) inhabilitaron a la pre candidata opositora María Corina Machado (favorita para resultar ganadora de las primarias opositoras), por un lapso de quince años para optar por algún cargo público y/o ejercerlo, argumentando que esta apoyó las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y respaldó a Juan Guaidó, quien declaró una presidencia interina en 2019[1]. Seguidamente negaron el apoyo técnico solicitado por la Comisión Nacional de Primarias (CNP) al CNE, condicionando este a un cambio de fecha en la realización de las primarias, para una fecha propuesta por el ente comicial, condición esta que no fue aceptada por la CNP.

Además, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a escasos dos días para realizarse las elecciones internas de la coalición opositora, el gobierno de Maduro emitió una resolución, donde se prohibía a los medios televisivos, radiales y electrónicos, públicos y privados del país, reseñar o dar cobertura al evento electoral.

A esto hay que añadir que, previamente el gobierno tenía inhabilitados a otros precandidatos opositores burgueses, como es el caso de Henrique Capriles Radonsky, inhabilitado desde 2017 por 15 años para postularse a cargos de elección popular; ha retirado la legalidad a partidos opositores de izquierda o de derecha, o intervenido sus direcciones



legítimas, mediante maniobras leguleyas para nombrar juntas directivas paralelas, más permeables a los intereses del oficialismo. El caso más reciente es la intervención de la junta directiva del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Finalmente hay que señalar los chantajes, amenazas y medidas de intimidación y coerción perpetradas contra eventuales votantes en las primarias, por parte de colectivos armados, financiados por el gobierno y líderes comunales afectos al oficialismo, quienes en los barrios populares se dieron a la tarea de

intimidar incluso con amenazas de agresión física a quienes pretendían ejercer su derecho a elegir a su candidato o a través del chantaje de retirarlos de la posibilidad de percibir “beneficios” que en la actual crisis que atraviesa el país resultan esenciales para su subsistencia, como la bolsa de comida o el acceso a los cilindros de gas doméstico para cocinar.

LO QUE MUESTRAN LAS PRIMARIAS

Resulta obvio que todas estas maniobras gubernamentales pretendían desmoralizar y desmotivar la participación de millones

de trabajadores y habitantes de los sectores populares del país, entre los cuales prevalecen la disposición de salir del actual gobierno hambreador corrupto y represivo de Nicolás Maduro, así como la justa y legítima bronca contra el mismo, por mantenerlos sometidos a años de sufrimientos y penurias, haber conculcado sus salarios y beneficios contractuales, sus derechos sindicales y sociales, haber destruido sus niveles de vida, llevándolos hasta el subsuelo, padeciendo con servicios básicos como agua, electricidad, gas y telecomunicaciones en la más completa ruina, así como unos



sistema de salud y educación públicas totalmente pauperizados.

Toda esa bronca y esa disposición de salir del gobierno, es lo que queda en evidencia con la importante participación de la población trabajadora y popular en el proceso de las internas opositoras. Donde, no obstante, las maniobras, hubo una asistencia cercana a los 2 millones 600 mil votos, 2.4 millones de los cuales, equivalente al 92% de los sufragios emitidos, fueron a parar a las tarjetas de María Corina Machado.

Muestras de lo anterior, también las podemos encontrar en la

actitud valiente y rebelde con la que los trabajadores y habitantes de los sectores populares enfrentaron las intimidaciones y chantajes de colectivos y dirigentes del PSUV, para defender su derecho a sufragar. Así como también hicieron caso omiso de las amenazas del régimen chavista de represalias y medidas disciplinarias contra los trabajadores de los organismos públicos y empresas estatales.

El hecho de que, pese a todas las trabas y maniobras antidemocráticas realizadas por gobierno por el gobierno, la crisis interna de la oposición burguesa,

expresada en diferentes posturas en torno al proceso de elecciones internas (de hecho, a pocos días de la realización de las elecciones varios candidatos se retiraron de las mismas), las primarias se llevaron a cabo con tan considerable participación, representa una dura derrota para el gobierno, en su afán de impedir las a toda costa, incluso negociando con sectores de la oposición propatrontal. Esto suscita en el oficialismo una gran preocupación debido a que les golpea en la cara la presión popular y el interés de las masas porque se realice en el 2024, un proceso electoral presidencial, en

el que el PSUV y sus aliados prevén resultados nada favorables.

Debido a que, como conclusión, la considerable participación en las primarias deja claro el interés de las masas obreras y populares por salir del gobierno capitalista dictatorial de Maduro, que desde hace años viene aplicando un brutal paquetazo antiobrero y antipopular, que pulverizó los salarios (hoy de apenas un poco más de 3\$), cercenó los derechos conquistados en las convenciones colectivas, bonificó los ingresos (política de bonificación del salario propuesta por FEDECAMARAS)[2] destruyó las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo humilde del país, sumiéndolos en la más completa pobreza. Todo en favor de privilegiar los intereses de los principales gremios patronales nacionales, FEDECAMARAS, CONINDUSTRIA[3], CONSECOMERCIO[4], entre otros, así como de banqueros y empresarios transnacionales, que son los principales beneficiarios de la aplicación del paquetazo[5].

LAS REACCIONES DEL GOBIERNO.

Posterior a la realización de las primarias, estas, han ocasionado que el gobierno continúe dando muestras de su talante tramposo y antidemocrático. Pasado el evento electoral opositor, dirigentes y voceros del gobierno y de su partido el PSUV, salieron a pronunciar afirmaciones sobre fraude e incluso a introducir denuncias en los organismos de justicia en torno al mismo, cuestionando principalmente las cifras de participación, que a su juicio no serían las anunciadas por la oposición patronal a través de la CNP (serían menores). Algo que

de no ser por lo grave del asunto provocaría risa, debido a que raya en lo ridículo, no entrando en cualquier lógica razonable dentro del pensamiento democrático más elemental.

Lo primero que cabría preguntarse es ¿Cómo es que el gobierno se inmiscuye o pretende inmiscuirse denunciando fraude y cuestionando resultados y cifras de participación, en un proceso electoral privado e interno de un partido opositor o coalición de partidos opositores, el cual se supone que está organizado por ellos, según sus estatutos y normas de funcionamiento acordadas y en los que no está en elección ningún cargo público ni el gobierno está participando? En los que además el Estado, en este caso el CNE, se negó a prestar cualquier tipo de apoyo técnico para su realización. ¿Cómo organismos del Estado a instancias del gobierno pretenden inmiscuirse y judicializar un proceso de estas características sin que medie una denuncia previa de alguna de las partes involucradas que pueda sentirse afectada por los resultados y el manejo del mismo?

También pretende el gobierno, que se entreguen al CNE y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las actas, listas y cuadernos de votación, de un proceso de elecciones internas en el que no tienen injerencia, lo que hace presumir que procuran una reedición de la tristemente célebre Lista Tascón[6].

Pero lo más grave del asunto, es que el lunes 30/10/2023, el TSJ, emitió una sentencia suspendiendo “todos los efectos” de la primaria de la oposición. Es decir, que para el gobierno y su TSJ, las elecciones primarias opositoras del pasado 22/10/2023, no exis-

tieron, ni sus resultados y mucho menos la voluntad de más de 2 millones y medio de venezolanos para escoger la candidatura de su preferencia hacia un eventual proceso electoral presidencial.

Desde la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST), somos enfáticos en repudiar todas estas maniobras antidemocráticas del gobierno de Nicolas Maduro, que no tienen sino la pretensión de cercenar derechos políticos y democráticos de los trabajadores y del pueblo venezolano, así como también de desmoralizar y desmotivar a las masas venezolanas en sus aspiraciones de salir del gobierno capitalista, dictatorial y ajustador de Maduro por la vía electoral.

LA CLASE OBRERA Y LOS SECTORES POPULARES NO DEBEN TENER EXPECTATIVAS EN MARÍA CORINA MACHADO

Desde una postura de reivindicar y defender los derechos democráticos del pueblo trabajador a que se realicen elecciones presidenciales con las garantías formales de participación y triunfo para cualquier opción opositora, e incluso de reivindicar el derecho de la oposición a escoger libremente su candidatura, debemos advertir a los trabajadores y el pueblo humilde del país que la candidata ganadora en el pasado proceso de elecciones primarias de la oposición burguesa, María Corina Machado, no representa ninguna alternativa en favor de los trabajadores y el pueblo venezolano.

María Corina Machado, representa a la ultraderecha más reaccionaria y abyecta del continente y el mundo, aliada de George Bush, Donald Trump, Bolso-

naro y Álvaro Uribe Vélez, entre otros, bonapartista y autoritaria al mejor estilo de los anteriores, xenófoba, aporofóbica[7], proimperialista y contraria a cualquier garantía de derechos para los trabajadores y el pueblo pobre.

Su programa político – económico, tal y como ella lo ha dejado claro en innumerables declaraciones está basado en priorizar los pagos de deuda externa, en un plan privatizador que incluye, avanzar en la privatización de PDVSA, así como toda la actividad asociada a la industria petrolera, las empresas básicas, así como también el resto de las empresas públicas estratégicas, descargar más impuestos sobre los trabajadores y el pueblo humilde, en favor de los sectores empresariales, la entrega de los recursos y la soberanía del país a las transnacionales norteamericanas y europeas, además de las rusas y chinas a las que ya lo hace Maduro.

En fin, su programa no es más que una continuidad y profundización del paquete antiobrero y antipopular que ya viene aplicando Maduro. Por eso, nada dice la candidata de la oposición patronal acerca de los salarios miserables, la violación y prácticamente eliminación de las convenciones colectivas, del cercenamiento de las garantías sindicales, de la bonificación del salario, entre otras condiciones laborales.

Y es que en última instancia como empresaria y representante de la burguesía que es, toda esta política resulta conveniente para el sector burgués que representa, lo que pretende es aplicarla ella y que sea su sector burgués (con ella incluida) el que se beneficie directamente de su aplicación, así como del resto de los negocios asociados a la administración de

la renta petrolera y el Estado de conjunto.

Vale decir, que, si en algún momento realiza alguna denuncia o declaración contra la privación de libertad de dirigentes sindicales y/o luchadores sociales, o por su liberación, esto lo hace solo como pose con pretensiones electorales, para hacer pie en sectores democráticos que exigen y luchan por la liberación de aquellos y la de los presos políticos en general.

Resulta obvio y comprensible, que ante el desastre que representa el régimen chavista y el gobierno de Maduro, la pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores y los habitantes de los sectores populares del país, lo que los somete a una gran desesperación y angustia; estos sectores sociales vean en María Corina Machado una opción útil para “salir del gobierno como sea” y cifren en ellas grandes expectativas de mejorar sus condiciones de vida, más aún cuando esta centra su campaña en falsas promesas de resurgimiento de una Venezuela de prosperidad con excelentes niveles de vida.

Pero lo cierto es que, por su condición social, la clase a la que representa y por sus alianzas políticas María Corina Machado, terminará traicionando estas expectativas. Algo que además queda evidenciado en su programa cuyas medidas afirmamos de manera categórica no traerán ninguna solución a los problemas de los trabajadores venezolanos.

LOS CHANTAJES Y PRETENSIONES DEL SINDICALISMO AFECTO A LA OPOSICIÓN PATRONAL.

Algunos sectores y dirigentes sindicales, principalmente

afectos a partidos de la oposición burguesa, basándose en las aspiraciones de salir del gobierno de la clase trabajadora y el pueblo humilde pretenden instalar dentro del movimiento obrero el chantaje de “salir de Maduro como sea”, con esto procuran que los trabajadores y los sectores humildes de la población aceptemos y votemos en cualquier candidato burgués, en este caso concreto, en María Corina Machado, independientemente de su programa antiobrero y antipopular.

Nos dicen que eso no importa ahora, que en esto momentos lo que se impone es la unidad con los sectores proempresariales y proimperialistas, es decir, con nuestros explotadores para salir del gobierno, de esto se hacen eco también algunos factores que se asumen de izquierda.

También nos dicen, que la salida a la crisis pasa por las elecciones, que luego que sea electa María Corina Machado como Presidenta se solucionaran todos los problemas tanto de condiciones de vida como de ataque a las libertades democráticas y que en todo caso habrá una gran amplitud de libertades y garantías democráticas que facilitarían el enfrentamiento a su eventual gobierno ante las medidas antiobreras y antipopulares que pudiera adoptar. Con este discurso intentan subordinar todo al tema electoral, e incluso convertir los espacios de organización de la clase obrera que han construido en unidad de acción con sectores sindicales luchadores, en comandos de campaña de la candidata ganadora de las primarias de la oposición patronal.

La presión de las bases que reclaman aumento de salario y recuperación de sus condiciones



laborales y de vida, los obliga a convocar a movilizaciones y a participar en espacios unitarios de lucha, junto con sectores sindicales combativos, desde donde convocan a manifestaciones, presionados también por los sectores luchadores del sindicalismo, pero se niegan a radicalizar y profundizar este proceso de movilizaciones, tal como lo mostró en su momento la negativa a convocar la huelga general nacional de los trabajadores del magisterio.

Y es que en el fondo saben que la clase trabajadora movilizada no es algo que le convenga a la aplicación del programa proempresarial y proimperialista de

su candidata, por eso movilizan solo para presionar, ganar votos y prestigio electoral y luego contener, subordinan el proceso de movilizaciones y las necesidades de la clase obrera a sus intereses electorales.

ES NECESARIO CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA UNITARIA Y AMPLIA DE LA CLASE OBRERA Y LOS SECTORES POPULARES

Desde la UST queremos expresar nuestras diferencias con tales afirmaciones, posturas y pretensiones. Compartimos con el pueblo trabajador, la aspiración y el objetivo de salir del gobierno

capitalista, hambreador, corrupto y represivo de Maduro, pero esto no nos obliga a apoyar una candidatura burguesa como la de María Corina Machado, cuyo programa como hemos mencionado antes no tiene nada que ver con los intereses de los trabajadores ni de los habitantes de los sectores populares y esto queremos expresárselo claramente a estos sectores de la población.

En segundo lugar, consideramos que las elecciones no son ninguna garantía de salida a la crisis económica en favor de la clase trabajadora, por lo tanto, sostenemos que no debemos condicionar nuestras alternativas



de salida a la crisis a un proceso electoral entre dos opciones burguesas explotadoras, al contrario, nuestra prioridad debe ser, seguir organizando las luchas y seguir movilizados para exigir nuestras reivindicaciones.

En tal sentido decimos, que el hambre y las demás penurias que padecemos no esperan y nos siguen azotando, por tal razón rechazamos las pretensiones de subordinar y condicionar las movilizaciones a un proceso electoral que además bajo la dictadura madurista no está garantizado que se vaya a realizar o que se vaya a llevar a cabo con plenas garantías

democráticas.

Consideramos sí de gran importancia la necesidad de la unidad, pero no con los sectores políticos proexplotadores y proimperialistas, sino entre la clase trabajadora y los sectores populares y oprimidos de nuestro país, con independencia de aquellos.

Unidad que debe ser construida con la mayor democracia y amplitud, al calor de las movilizaciones, que debe servir para luchar por nuestras reivindicaciones, incluso para conquistar el derecho democrático a tener elecciones libres y también debe

servir como alternativa en el ámbito electoral, construida en base a un programa de independencia de clases frente a los dos opciones burguesas que se disputan el poder, que coloque en el centro los intereses de la clase trabajadora, así como las principales reivindicaciones socioeconómicas de los sectores populares.

El desastre al cual el régimen chavista y sus gobiernos (Chávez y su continuidad Maduro) arrastraron al país, desafortunadamente es identificado por amplios sectores de la población trabajadora y sectores populares como como una consecuencia del

socialismo y la aplicación de sus medidas, lo que demostraría el fracaso de este sistema. Responsablemente, desde la UST, debemos advertir que tales ideas son equivocadas.

Lamentablemente, años de apoyo y capitulación de una gran cantidad de organizaciones de la izquierda venezolana e internacional al chavismo contribuyeron a profundizar la creencia en estas ideas erróneas. Hoy continúan alimentando las mismas tanto el partido de gobierno y sus aliados que siguen de manera falsa hablando de socialismo y también los voceros sindicales y políticos de la oposición propatronal que mienten acusando al gobierno de socialista y comunista, además de la izquierda reformista que sigue apoyando al chavismo y hablando de la necesidad de rectificación, de corregir tal o cual error y profundizar la revolución socialista en el país. Nada más falso. Pero lamentablemente todo esto contribuyó para desorganizar y atomizar al movimiento obrero, confundirlo y en muchas expresiones corromperlo.

En tales circunstancias, no existe en la actual coyuntura política y electoral una alternativa independiente de la clase trabajadora, no resultando sencillo construirla. No obstante, su construcción se plantea hoy como una necesidad de suma urgencia. No hacerlo, significaría reducir sin disputa, las legítimas aspiraciones de cambio de gobierno por la vía electoral de los trabajadores y habitantes de los sectores populares a un simple cambio de verdugo, es decir, a cambiar quien aplica el ajuste.

Por tal razón proponemos abrir el debate para discutir la construcción del programa antes referido y la posibilidad de una

candidatura de los trabajadores y el pueblo independiente de los sectores explotadores. Entendemos que existen ya algunas iniciativas en ese sentido, por eso proponemos a todos los sectores de izquierda independiente, sindicales, populares, estudiantiles y luchadores sociales, que nos oponemos al gobierno de Maduro juntarnos para empezar a construir tal alternativa.

UN PROGRAMA DE EMERGENCIA, OBRERO Y POPULAR

El programa al que nos referimos debe ser totalmente contrapuesto al paquetazo que descarga Maduro contra el pueblo trabajador y al de María Corina Machado, que como hemos dicho representa la continuidad y profundización de dicho paquete.

El nuestro debe centrarse en las necesidades de los trabajadores y abarcar a todos los sectores explotados y oprimidos de la población, creemos que su punto de partida debe ser la exigencia de aumento de salario y pensiones al valor equivalente a la canasta básica del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS – FVM) y la indexación del mismo a su valor mensual, incluyendo además la derogación del memorándum 2792 y del instructivo ONAPRE, por el rescate de las convenciones colectivas, la inmediata negociación de las convenciones colectivas vencidas, la defensa del derecho a la sindicalización y del derecho de los sindicatos a la negociación colectiva.

Por la defensa de la libertad y autonomía sindical, elecciones libres e independientes en los sindicatos, la realización de elec-

ciones en los sindicatos y federaciones con las juntas directivas vencidas sin injerencia del CNE, el MPPPST y de la patronal.

Por la libertad plena e inmediata de todos los trabajadores, dirigentes sindicales, sociales y políticos presos y judicializados, por protestar, no a la criminalización de la protesta, contra la represión de las movilizaciones y manifestaciones, por la salida de las fuerzas de la GNB y del SEBIN de las empresas estatales, por la derogación de la Ley contra el odio, fin de las suspensiones de sueldo y exclusiones de beneficios laborales contractuales o extracontractuales, no a los chantajes y amenazas contra los trabajadores que protestan, no a las jubilaciones forzosas de dirigentes y activistas luchadores.

Contra la privatización de PDVSA y las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Por la nacionalización 100% de la industria petrolera y las empresas básicas, sin transnacionales ni empresas mixtas, inversión en la recuperación y mantenimiento de la industria petrolera para recuperar la producción y refinación de crudo, gasolina y otros combustibles, no a la privatización de empresas estatales estratégicas y de servicios esenciales (electricidad, agua, gas, telecomunicaciones), por el no pago de la deuda externa, fuerte impuesto progresivo para las grandes empresas nacionales y foráneas, así como la alta ganancia y al consumo suntuario, que los que tienen más paguen más, por la repatriación de los capitales fugados, confiscación de las fortunas a los corruptos, nacionalización de la industria de alimentos, la banca y los principales sectores económicos bajo



el control de los trabajadores, por el cese de las sanciones imperialistas.

Todos estos recursos deben ser destinados a un gran plan de obras públicas, centrado en escuelas, universidades, viviendas y hospitales, para satisfacer las necesidades de la población y generar empleos productivos.

NADA QUE ESPERAR DE LOS ACUERDOS DE BARBADOS

Días previos a la realización de las primarias, exactamente el día 17 de octubre, de 2023, se firmaron en la isla de Barbados, dos acuerdos parciales entre la oposición patronal y el gobierno dic-

tatorial de Maduro, uno sobre “la promoción de derechos políticos y garantías electorales” y otro sobre “la protección para los intereses vitales de la nación”. El primero versa sobre las garantías para la realización de elecciones, acordadas para el segundo semestre del 2024, y el segundo se refiere a la disputa limítrofe con Guyana en torno al Esequibo, como también al respecto de los derechos de propiedad de Citgo, y otros activos de Venezuela en el exterior.

En el marco de los mismos el imperialismo norteamericano anuncia una flexibilización temporal de las sanciones, por un período de seis meses condicionado

a la actuación del gobierno venezolano en cuanto a dar pasos en función de la realización de elecciones presidenciales en 2024.

Estos acuerdos, se firman a instancias del gobierno norteamericano y son un pacto de cúpulas que responden a los intereses del gobierno de Maduro, de la oposición patronal y del gobierno gringo; urgido este último por la crítica situación internacional de que Venezuela vuelva al mercado petrolero como un proveedor seguro de crudo para EE.UU., además de abrir la posibilidad de que transnacionales imperialistas del petróleo puedan cobrar deudas pendientes con el gobierno venezolano.

A esto se ven forzados por la crisis de la economía mundial, marcada por un incremento de los precios del petróleo y en consecuencia del combustible, así como también la inflación que azota a las principales economías, empujada por el alza de precios de los combustibles y alimentos. Todo esto en un contexto político signado por la invasión rusa a Ucrania y los ataques del estado Nazi – Sionista de Israel contra Palestina en la franja de Gaza, que agrava la crisis económica del capitalismo imperialista.

Quienes, como no podía ser de otra manera en un acuerdo de cúpulas explotadoras, no ven reflejados sus intereses son los trabajadores y el pueblo humilde de Venezuela. Nada dicen los acuerdos al respecto de aumento salarial y de pensiones a nivel de la canasta básica, nada dice sobre rescatar las convenciones colectivas cumpliendo lo establecido en las mismas y discutiendo las vencidas, nada sobre la libertad de los trabajadores y luchadores activistas presos por protestar en defensa de sus derechos, ni sobre la libertad de los presos políticos en general, ni una palabra sobre la corrupción en PDVSA y sobre castigar a quienes desfalcaron la industria petrolera, ni una sola mención a recuperar los servicios básicos en el país ni a mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Es por eso que desde la UST afirmamos, que más allá de la importancia que tiene lograr garantías electorales democráticas, nada podemos esperar los trabajadores y el pueblo humilde de Venezuela en cuanto a nuestros intereses vitales.

Por último, cabe decir que dicho acuerdos, tampoco son garantía de condiciones demo-

cráticas para un eventual proceso de elecciones, debido a que a una dictadura acostumbrada a violar las libertades democráticas sólo la movilización y la lucha en la calle puede arrancarles garantías electorales de igualdad y transparencia y no unos acuerdos que se asemejan a una declaración de buenas intenciones donde una dictadura como la madurista “acuerda” cumplir lo que ya por ley está obligado a hacer.

Es por eso que seguimos insistiendo en construir una alternativa de independencia de clase, que unifique a los trabajadores, sectores populares y oprimidos, para la movilización y la lucha por sus reivindicaciones económicas y sociales, así como también por el logro de garantías electorales democráticas e incluso para la disputa electoral. ■

NOTAS

[1] Cabe señalar que la candidata opositora, tiene prohibida la salida del país desde hace nueve años y en 2015 fue inhabilitada por un lapso de 12 meses. En tal oportunidad la Contraloría General de la República afirmó que la dirigente política no incluyó en su declaración de bienes algunas bonificaciones que recibía en ejercicio de su cargo de diputada en la Asamblea Nacional. La candidata niega haber recibido esos bonos. <https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela-inhabilita-a-maria-corina-machado-para-cargos-publicos/7162173.html>

[2] Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Construcción.

[3] Consejo Nacional de Industrias, agrupa a los sectores burgueses asociados a la industria y manufactura, está afiliado a FEDECÁMARAS formando parte de su comité estratégico.

[4] Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, está constituido por las Cámaras y Asociaciones representativas del sector terciario de la economía, principalmente comercio, está afiliado a FEDECAMARAS.

[5] Para muestra más de 71 mil 700 millones de dólares canceló el gobierno de Maduro a la banca internacional y transnacionales, desde 2013 hasta 2017 (<https://www.telesurtv.net/news/Presidente-de-Venezuela-Hemos-pagado-nuestra-deuda-externa-hasta-el-ultimo-centavo-20171102-0067.html>).

[6] Listado manejado por el fallecido ex diputado chavista (para ese momento), Luis Tascón, a través del cual se perseguía, intimidaba y chantajeaba a las personas que había firmado en favor de realizar un referendo revocatorio contra el fallecido ex Presidente Chávez en 2004, las medidas coercitivas contra quienes aparecían como firmantes iban desde la negativa a darles empleo en organismos públicos, pasando por no otorgamiento de beneficios laborales o sociales, hasta el despido de sus empleos en instituciones y empresas del Estado.

[7] La palabra “aporofobia” es un neologismo usado para referirse al “rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado que, al menos en apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio

¿ADÓNDE VA VENEZUELA?

La crisis política venezolana divide aguas en toda la izquierda latinoamericana y mundial. La mayor parte de la izquierda reformista se alineó con el gobierno de Maduro “contra el golpe”. Se trata de una maniobra criminal para ocultar que el verdadero golpe está siendo dado por Maduro, quien está imponiendo una dictadura al servicio de la “boliburguesía”.

Declaración de la LIT-CI, 08/08/2017

El imperialismo presiona a Maduro con sanciones diplomáticas y una farsa “en defensa de la democracia” en apoyo de sus representantes, agrupados en el MUD.

Llamamos a los activistas del movimiento de masas de todo el mundo a luchar contra la dictadura de Maduro y a apoyar una alternativa independiente de los trabajadores en Venezuela.

I. BREVE RESUMEN DE LA HISTORIA RECIENTE VENEZOLANA

Venezuela es un país con una rica historia revolucionaria. En 1989, la aplicación de un plan neoliberal del gobierno de Carlos Andrés Pérez (con una gran desvalorización de la moneda y un aumento de los precios de la gasolina) provocó una insurrección popular, el “Caracazo”. El pueblo pobre de Caracas bajó de los cerros, enfrentó a la policía y saqueó los comercios durante cuatro días.

El ejército reprimió duramente, causando millares de muertes. La burguesía consiguió retomar el control de la situación, pero el gobierno y el régimen salieron heridos. Las Fuerzas Armadas se dividieron. El entonces coronel Hugo Chávez intentó un golpe de Estado en 1992. El golpe fue derrotado, pero Chávez ganó un enorme prestigio popular entre los sectores más pobres. Carlos Andrés Pérez fue destituido en 1993.

Chávez ganó las elecciones en 1998, dando inicio a un largo período de gobiernos chavistas que perdura hasta los días de hoy.

El chavismo tuvo conflictos parciales y una retórica contra el imperialismo norteamericano, lo que le valió gran prestigio en toda América Latina. Los discursos de Chávez contra Bush eran claramente diferentes de los de Lula y de otros gobiernos del continente.

Al inicio, el imperialismo atacó duramente a Chávez. Bush armó un golpe de Estado en abril de 2002. Las masas reaccionaron violentamente, iniciando una nueva insurrección que derrotó el golpe y solo fue detenida con el retorno de Chávez dos días después. Más tarde, hubo también una huelga patronal (lockout) del petróleo, igualmente derrotada en 2003.

El imperialismo aprendió con la derrota del golpe de 2002 y del lockout. Pasó a convivir con los gobiernos chavistas y a utilizarlos para mantener la explotación del país. Mientras tanto, apoyaba a la oposición de derecha para capitalizar electoralmente el desgaste de los gobiernos chavistas y, más adelante, reconquistar el gobierno.

Pasó a usar lo que llamamos reacción democrática, o sea, el uso de los procesos electorales para canalizar las crisis políticas. Una demostración de eso es que en 2004 la oposición de derecha propuso un “referendo revocatorio”, que fue aceptado por Chávez (el cual lo ganó ampliamente).

Chávez fue reelegido en 2006 y 2012 y murió en 2013. Maduro, vicepresidente de Chávez, asumió el gobierno y, en abril de ese mismo año, fue electo presidente.

La crisis económica, con la caída de los precios del petróleo, derrumbó la base material del chavismo. Desde 2014, el país vive una depresión poco vista en la historia. La resultante política fue la ruptura de los sectores populares que apoyaban tradicionalmente al chavismo. En 2015, la oposición de derecha ganó las elecciones parlamentarias, capitalizando el desgaste de Maduro y obteniendo más de dos tercios del Parlamento Nacional.

El gobierno de Maduro simplemente ignoró el Parlamento electo y recurrió al poder que en el país se ejercía mediante el apoyo directo de las fuerzas armadas. Las elecciones para gobernadores, que deberían



haberse realizado en diciembre de 2016, fueron postergadas porque todo indicaba que Maduro perdería. La oposición pasó a impulsar una campaña por un “referendo revocatorio” (el mismo mecanismo previsto en la constitución chavista y que Chávez aceptó en 2004), pero, a pesar de conseguir las firmas previstas, Maduro maniobró de todas las maneras para impedir el referendo porque sabía que sería destituido.

Hoy, el gobierno chavista tiene contra sí al 80% de la población venezolana. Por eso, Maduro está promoviendo un golpe de Estado. Convocó una “Asamblea Constituyente” y suprimió el voto universal para la elección de parlamentarios. Estableció criterios distorsionados entre los electores, privilegiando las zonas rurales en las que tiene más peso. Además, 30% de los diputados fueron electos de forma corporativa por sectores como “campesinos”, “estudiantes”, “empresarios” y “trabajadores”, quienes fueron indicados por las burocracias de esos sectores, mientras que una gran parte de las asociaciones y sindicatos está

impedida por el gobierno de realizar elecciones para la renovación de sus direcciones. Todo eso para transformar una minoría en mayoría.

Hubo un fraude gigantesco en la votación de la “Constituyente”, denunciado por la propia empresa contratada por el gobierno de Maduro, encargada de la elección. No hubo la votación del 42% anunciada por el gobierno. Fuentes independientes indican una participación de 15 a 17% de la población, incluso con toda la presión del gobierno sobre los empleados públicos y los dependientes de los programas sociales para que fuesen a votar.

Las elecciones municipales, que deberían ocurrir en 2017, y las presidenciales de 2018 están cuestionadas, ya que la “Constituyente” definió que durarán dos años. La fiscal general del país, Luisa Ortega, nombrada por Chávez pero crítica del rumbo bonapartista de Maduro, fue destituida por la “Constituyente” en su primer día.

Para imponer ese golpe, la represión es durísima: más de cien muertos, más de quinientos presos.

Además de los ataques de las fuerzas armadas y de la policía, existen los “colectivos”. Se trata de grupos paramilitares que reprimen las movilizaciones y asesinan a los opositores. Se parecen a los “tonton macoutes” de Haití y a las “Triple A” del peronismo en Argentina.

Existe un golpe de Estado en Venezuela, impuesto por el gobierno de Maduro. Un gobierno que no tiene nada de “socialista” ni de “antiimperialista”. Es un gobierno burgués, corrupto, repudiado por las masas... y apoyado por una parte importante de la izquierda reformista en todo el mundo.

II. ¿QUÉ ESTADO EXISTE EN VENEZUELA?

El carácter de clase de un Estado se define, según Trotsky, por el “carácter de las formas de propiedad y de las relaciones de producción que el Estado en cuestión protege y defiende”.

No existen Estados “intermedios” en el capitalismo: o son burgueses o obreros. El Estado en Venezuela es, sin duda, burgués; está al servicio de la mantención del capitalismo, de las multinacionales



en la explotación del petróleo venezolano y de una nueva burguesía —la boliburguesía— en el control del país.

El Estado burgués venezolano se mantuvo intacto, con sus fuerzas armadas controladas por el chavismo. Nunca hubo nada parecido a organismos de poder de las masas. El PSUV (partido chavista) es un partido burgués, controlado desde el Estado por mafias chavistas, semejante al peronismo argentino, al PRI mexicano y al Partido Colorado en Paraguay.

El “socialismo del siglo XXI” del chavismo es apenas una ideología para ganar a la vanguardia y a las masas para su proyecto burgués. En realidad, el chavismo es una corriente nacionalista burguesa, como el peronismo o el aprismo. Pero con las limitaciones que el nacionalismo burgués tiene en tiempos de la globalización económica del siglo XXI. Chávez hizo mucho menos que la estatización real del petróleo de Cárdenas en México en 1938, o incluso con las estatizaciones del petróleo, la energía eléctrica y los ferrocarriles en la época de Perón, en la Argentina.

La retórica antiimperialista (o, para ser más precisos, antinorteamericana) de Chávez nunca se

concretó en una ruptura real con el imperialismo. Después de los enfrentamientos verbales con Bush, la relación con el imperialismo de los Estados Unidos cambió con Obama. En 2008, Chávez llegó a decir que, si fuese norteamericano, votaría a Obama. Además, con el imperialismo europeo, la relación siempre fue mucho más amistosa.

El gobierno venezolano siguió pagando religiosamente la alta deuda externa. La dicha “nacionalización del petróleo” —la medida más famosa de Chávez— fue apenas la mantención de las empresas mixtas y un aumento del porcentaje de participación del Estado en la asociación con las multinacionales instaladas en el país para la explotación y el refinado del petróleo. Esas multinacionales pueden ser dueñas de hasta el 49% de las empresas y de reservas de petróleo. En el caso del gas, pueden ser dueñas de hasta el 100 %. Ese tipo de acuerdo con las multinacionales es similar al existente en países como Brasil. El chavismo mantuvo el abastecimiento de petróleo a los Estados Unidos incluso cuando el imperialismo invadía Irak.

Las pocas nacionalizaciones de empresas de otros sectores —como la Compañía Anónima

Nacional de Teléfonos, la Caracas Electricidad o la Siderurgia del Orinoco— se realizaron de acuerdo con los criterios de compra y venta de las acciones aceptados por los capitalistas.

Algunos sectores centrales de la industria, como el de automóviles, están controlados por multinacionales.

Además de las multinacionales, el Estado venezolano sirve a otro sector burgués, la “boliburguesía” (combinación de las palabras “bolivariano” y “burguesía”). Ese sector burgués surgió del aparato del Estado, en particular de la cúpula de las fuerzas armadas. Su acumulación capitalista vino de la intermediación en los negocios del petróleo en el exterior, de la corrupción abierta en los contratos públicos, de las “empresas de maletín” (de fachada), de los fraudes en el mercado de divisas. A partir de este enriquecimiento, los nuevos burgueses pasaron a comprar o fundar empresas. La cúpula del chavismo ayudó y todavía ayuda a saquear la renta petrolera, como parte de su propia acumulación capitalista.

El grupo más fuerte es el de Diosdado Cabello, alto oficial de las FFAA. Es el segundo grupo empresarial del país, dueño de bancos, industrias y empresas de servicios. Otro grupo que le sigue tiene como dueño a otro oficial retirado —Jesse Chacón—, con un banco, una fábrica de leche en polvo y estancias. Existe un tercer grupo empresarial muy fuerte, también propiedad de dos militares retirados, Ronald Blanco La Cruz y Edgar Hernández Behrens.

Además de estos, la boliburguesía incluye a los empresarios y banqueros que se aproximaron a Chávez desde el inicio y así ampliaron sus fortunas, como Alberto

Cudemus, presidente de Feporcina. O incluso Alberto Vollmer, dueño de la empresa de ron Santa Teresa, Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria y funcionario del gobierno, Víctor Vargas Irasquín (Banco Occidental de Descuento), y muchos otros.

La boliburguesía ostenta su riqueza de forma abusiva: automóviles, casas y fiestas (muchas en Miami). Además, los militares están directamente ligados al tráfico de alimentos.

El chavismo mantuvo el capitalismo en Venezuela mientras hablaba de “socialismo del siglo XXI”. La cara “social” del chavismo es la misma que la de otros gobiernos latinoamericanos de izquierda y de derecha: programas sociales compensatorios y asistencialistas.

Las “Misiones” venezolanas tienen el mismo carácter que la “Bolsa Familia” en Brasil, “Juanito Pinto” y “Renta Dignidad” en Bolivia, “Hambre Cero” en Nicaragua, “Familias en Acción” en Colombia, “Oportunidades” en México y “Juntos” en Perú.

Esos programas no tienen absolutamente nada en contra de los planes neoliberales. En realidad, son recomendaciones del Banco Mundial y del FMI para aplicarse junto con los planes neoliberales. Son compensaciones parciales de la reducción de los presupuestos de salud, educación y jubilaciones para garantizar el pago de las deudas a los banqueros. Según esas instituciones del imperialismo, estos son “programas eficientes” a un “costo bajo” que ayudan a aplicar los planes neoliberales y a mantener la estabilidad política.

El neoliberalismo es aplicado por el chavismo en Venezuela de la misma forma que en el resto del mundo. La diferencia en relación con otros países radica en el

peso del petróleo en la economía, lo que posibilita un aumento del peso cuantitativo de esos programas compensatorios, que allí llegó a superar el 40% de la población. Eso aseguró, durante muchos años, el apoyo electoral y político al chavismo. No existe nada de “socialismo” en Venezuela. Se trata de capitalismo colonial, preservado por el chavismo.

III. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE LA CRISIS ECONÓMICA VENEZOLANA?

Existe una depresión en Venezuela. En 2016, el PIB retrocedió 18,6 %. En 2017, se prevé otra caída de alrededor de 10%.

Según el economista Michael Roberts, “... el PIB de Venezuela en 2017 es 35% menor que en 2013 y 40% menor en términos per cápita. Eso es una contracción significativamente más acentuada que la ocurrida durante la depresión de 1929-1933 en los Estados Unidos, cuando el PIB de Estados Unidos cayó un 28%”.

A esa catástrofe se suman otras dos: la hiperinflación y el desabastecimiento. La inflación alcanzó 180% en 2015, 800% en 2016 y llegaría a 1.000% este año.

El desabastecimiento es terrible. Los venezolanos están obligados a enfrentar enormes filas todos los días para conseguir pan. Para conseguir productos básicos, están obligados a comprar los importados a precios carísimos.

La situación de los trabajadores es dramática. El salario mínimo actual equivale a cerca de 15 dólares mensuales, mucho menos que el de China o de cualquier país sudamericano.

La realidad actual de Venezuela pocas veces se ha visto en la historia en países que no estén en situación de guerra. Ya existen

olas de refugiados venezolanos que escapan de esa situación hacia los países vecinos, en especial Colombia y Brasil. Esa es la base material para la ruptura con el chavismo.

El gobierno chavista y sus simpatizantes en la izquierda mundial atribuyen esta crisis a las “multinacionales” y al “sabotaje de la burguesía”. Nosotros estamos de acuerdo en que el dominio de la burguesía sobre la economía es la raíz de esta crisis. Pero todavía es necesario responder a la pregunta: ¿qué hizo el chavismo en 19 años de poder para acabar con ese dominio? ¿Cuál es la responsabilidad del chavismo en esta crisis?

Una comparación es necesaria. En 2017, conmemoramos los cien años de la Revolución Rusa. Los bolcheviques asumieron el poder en 1917 en un país atrasadísimo y devastado por la guerra. Con la expropiación de la burguesía, el país pudo resolver los problemas básicos de la población, como el empleo, la educación, la alimentación y la vivienda. Mientras el mundo capitalista se hundía en la depresión de 1929 (doce años después de la toma del poder), la entonces URSS crecía en su industria a una tasa del 16% anual entre 1928 y 1940.

En Venezuela, el chavismo hizo lo contrario durante estos 19 años. Mantuvo la dominación de las multinacionales e incluso profundizó el modelo rentista petrolero, parasitario y colonial. El petróleo representaba el 64 % de las exportaciones en 1998 y pasó al 92% en 2012.

El país se desindustrializó con el chavismo, pasando de 18% del PIB en 1998 a 14% en 2012. Un informe de la Conindustria indica que de 33.000 industrias que existían en el país en 1998, se pasó a 17.000 en 2012.

El petróleo representa el 90 %

de los recursos del Estado. Cuando el boom de las commodities terminó, vino el desastre económico y la depresión.

La boliburguesía es responsable de la crisis económica como parte de la burguesía dominante. Esos grupos burgueses parasitarios se aprovechan de la crisis y del tráfico de alimentos y divisas, al igual que los otros sectores de la burguesía. El alto mando de las FFAA está directamente asociado a la corrupción y al tráfico de drogas.

El gobierno chavista agravó la crisis al priorizar el pago de la deuda externa y reducir la importación de alimentos y de remedios. Es impresionante cómo un país en depresión económica, con hiperinflación y desabastecimiento, paga puntual y obediente la deuda externa a los banqueros internacionales.

Todos los defensores del chavismo, como “antiimperialistas”, deberían explicar esto. Según el propio Maduro: “Venezuela pagó US\$ 60 mil millones en compromisos internacionales durante los últimos dos años”.

Michael Roberts afirma: “... el gobierno decidió ‘honrar’ los pagos de la deuda externa y, en su lugar, cortar las importaciones; como consecuencia, las importaciones de bienes y servicios per cápita cayeron 75% (ajustadas por la inflación) en términos reales entre 2012 y 2016, con una caída aún mayor en 2017”.

La otra reacción de Maduro ante la crisis económica fue profundizar la entrega del país. A diferencia de la ideología del “antiimperialismo” de Maduro, en 2016 el gobierno anunció el plan del Arco Minero del Orinoco, que entrega a las multinacionales el 12% del territorio del país, rico en oro, diamantes, hierro y otros minerales.

Los gobiernos chavistas son responsables de la catástrofe que se abate sobre Venezuela, por haber mantenido y profundizado el control de las multinacionales y de una burguesía parasitaria sobre el país.

IV. UN RÉGIMEN BONAPARTISTA, AHORA MUCHO MÁS AUTORITARIO

El régimen chavista ya era bonapartista antes de la “Constituyente”, apoyado por el gobierno y las FFAA. Ahora se cerró mucho más.

El régimen político de un país se define por la combinación de las instituciones a través de las cuales circula el poder. Si el poder pasa por el parlamento y por elecciones periódicas, se trata de una democracia burguesa. Si pasa por las fuerzas armadas, es un régimen bonapartista, autoritario.

En el caso venezolano, el chavismo impuso un cambio en el régimen democrático burgués tras la posesión de Chávez, que después se concretaría con la Constitución Bolivariana de 1999. El poder real residía en el gobierno de Chávez y en las FFAA. Pero en aquel período él contaba con un gran apoyo popular. Por eso, durante muchos años, esa característica bonapartista fue enmascarada por la mayoría electoral que apoyaba al gobierno. Tenía un parlamento elegido, pero sin poderes. Y existían elecciones presidenciales, que se mantuvieron mientras el chavismo pudiese ganarlas, así como para gobernador, etc., y quien indicaba las candidaturas del PSUV era Chávez, quien así imponía su voluntad en todos los niveles de gobierno.

Ese tipo de régimen político populista fue caracterizado por Trotsky como bonapartista sui generis; algo semejante ocurrió en varios países dirigidos por

el nacionalismo burgués, como el peronismo en la Argentina, el cardenismo en México y el nasserismo en Egipto. Esas burguesías se basaban en regímenes autoritarios y se apoyaban en sectores del movimiento de masas –haciendo algunas concesiones– para negociar conflictos con el imperialismo, a cambio de un margen un poco mayor de independencia y mejores condiciones económicas.

Incluso en esos momentos, mantenían una postura regresiva ante las masas. Chávez reprimió duramente huelgas, como la de Sanitarios Maracay, en 2007. En 2009, dos trabajadores de la empresa Mitsubishi en huelga fueron asesinados por la policía.

Existe una burocracia sindical chavista corrupta y mafiosa, semejante a la burocracia peronista argentina. Las elecciones sindicales en sectores clave, como los petroeros, fueron suspendidas hace cuatro años para mantener a esos burocratas gansteriles en el comando.

La crisis económica y la caída de los precios del petróleo cambiaron todo. Hacia finales de 2015, la oposición de derecha obtuvo la mayoría parlamentaria, pero el gobierno despreció el resultado. El poder siguió pasando por el gobierno y las fuerzas armadas.

Las próximas elecciones presidenciales de 2018 pondrían en jaque el poder chavista, porque la mayoría electoral pasó ampliamente a la oposición de derecha. Esa es la explicación de la “Constituyente”, en realidad, un golpe.

La “Constituyente” es un giro bonapartista dentro del régimen, pasando incluso por encima de la constitución chavista. Anula el voto universal, base de la democracia burguesa, suprime el parlamento elegido y ya llevó a la destitución de la fiscal opositora. En síntesis,

acaba con la “contradicción democrática” en el régimen bonapartista.

En Venezuela se está viendo la consolidación de la transformación del bonapartismo chavista sui generis en un bonapartismo clásico de derecha. Acompaña la evolución de otros procesos del nacionalismo burgués que evolucionaron hacia el bonapartismo de derecha, como el PRI mexicano desde Cárdenas, y la evolución de Nasser a Sadat y a Mubarak en Egipto.

V. LA FARSA “DEMOCRÁTICA” DEL IMPERIALISMO

El gobierno de Trump “defiende la democracia” en Venezuela y no reconoce la Constituyente de Maduro. La Unión Europea hizo lo mismo, así como la mayoría de los gobiernos sudamericanos.

Se trata de una farsa. El mismo imperialismo que apoya el Estado nazi-fascista de Israel habla de “democracia” en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos, que patrocinó un golpe de Estado en 2002, ahora se dice defensor de las libertades democráticas.

En realidad, el imperialismo no tiene ningún compromiso con las libertades democráticas. Solo usa esa táctica para desgastar aún más al gobierno venezolano. Trump presiona a Maduro para lograr un acuerdo que posibilite elecciones en las que gane el MUD –la oposición de derecha proimperialista–.

Así, esa derecha burguesa retomaría el control del país. El programa económico del MUD es la radicalización del neoliberalismo en Venezuela, lo que abre aún más el país al imperialismo y reduce o suprime los programas sociales.

Pero es importante definir la política concreta del gobierno de los Estados Unidos porque la mayoría de la izquierda reformista



denuncia el “golpe militar imperialista”. Por lo menos hasta este momento, eso no existe, exactamente porque el imperialismo aprendió con la derrota del golpe de 2002 y ahora defiende otra táctica con el mismo objetivo estratégico.

Eso es tan evidente que el New York Times publicó un artículo explicando por qué el gobierno de los Estados Unidos no interviene militarmente, señalando que eso podría desatar un “choque más violento”. Y que “las olas de choque en todo el hemisferio podrían agravar las complicaciones para el gobierno americano en el momento en que intenta concentrarse en Corea del Norte e Irán”.

El gobierno de los Estados Unidos también impuso sanciones económicas menores, bloqueando los bienes de Maduro en el país. Si Trump quisiese atacar duramente en términos económicos, bastaría con dejar de comprar petróleo venezolano. Pero eso no interesa ni económicamente ni políticamente para Trump.

La mayoría de los gobiernos

sudamericanos se alinearon con la posición del imperialismo; el Mercosur suspendió a Venezuela por “ruptura del orden democrático”. Esos mismos gobiernos mantienen acuerdos comerciales y tratados con Israel. Además, es impresionante ver la farsa de Temer y Peña Nieto, que son repudiados por el 90% de la población de sus países, al criticar a Maduro.

Estuvimos en la línea del frente de la lucha contra el golpe de 2002 patrocinado por el imperialismo. Ante cualquier iniciativa de golpe militar del imperialismo, tendremos la misma postura que en 2002: categóricamente en contra y en la línea del frente del enfrentamiento. Y hoy estamos contra las presiones del imperialismo, tanto diplomáticas como económicas. Nada de positivo vendrá de Trump, de los gobiernos europeos ni de la burguesía sudamericana. Son las masas venezolanas las que deben derrocar a Maduro.

VI. LA RUPTURA DE LAS MASAS CON EL CHAVISMO



Existe un cambio central en la situación política del país: la ruptura de los sectores populares con el chavismo. Los barrios populares, antes reductos chavistas, hoy votan abiertamente contra el gobierno. La tragedia venezolana es que no se construyó una alternativa (ni sindical ni política) de los trabajadores frente a los dos bloques burgueses, independientemente del chavismo.

Las movilizaciones contra Maduro ya no se limitan a los barrios de clase media, como en las movilizaciones del MUD del pasado. Incluyen ya a sectores populares importantes, como las movilizaciones contra el gobierno argentino en 2001 y las jornadas de junio de 2014 en Brasil. Las pesquisas indican entre el 80% y el 85% de repudio a Maduro y a la “Constituyente”.

El movimiento obrero está paralizado por la depresión económica, la durísima represión y el control burocrático-estatal. La PDVSA, así como las fábricas estatales como Sidor, está dirigida por militares.

La base obrera y popular del país está contra el gobierno. Ese es el cambio más importante en la

situación política del país y el que causó la crisis abierta del chavismo. Una serie de sectores chavistas viene rompiendo con Maduro.

La síntesis de la situación venezolana puede expresarse en una imagen simple de un compañero venezolano: en el pasado, quien hablase contra Chávez en un ómnibus de un barrio popular de Caracas podía ser agredido y arrojado fuera del ómnibus. Hoy, quien defiende a Maduro en los mismos barrios puede ser agredido.

Pero también existe desconianza en los sectores populares hacia el MUD. Ese es el motivo de fondo por el cual, hasta hoy, los barrios populares, incluso estando fuertemente contra Maduro, no salieron a la lucha en un nuevo Caracazo. Eso todavía no ocurre, pero puede ocurrir en cualquier momento.

Algunos activistas en Venezuela hablan de que el 15% de la población apoya al gobierno, el 35% apoya al MUD y el resto está en contra de los dos.

El enorme problema es que no se construyó una alternativa de izquierda contra el chavismo, aunque minoritaria, debido a la capitulación de la “izquierda” reformista.

VII. ¿CUÁLES SON LAS PERSPECTIVAS?

Hoy, el gobierno de Maduro se apoya esencialmente en las fuerzas armadas. Si hubiera una ruptura militar, el régimen chavista podría venirse abajo. Lo que explica ese apoyo de las FFAA a Maduro es la boliburguesía. La cúpula de las FFAA es parte esencial de la boliburguesía y perdería parte de sus privilegios en caso de que cayera el gobierno y el régimen.

Según Rolando Astarita: “Los militares pueden comprar en mercados exclusivos (por acaso, en bases militares), tienen acceso privilegiado a créditos y a la compra de automóviles y apartamentos, y reciben sustanciales aumentos de salarios. También obtuvieron lucrativos contratos, aprovechando los controles cambiarios y los subsidios. Por ejemplo, vendiendo en los países vecinos la gasolina comprada barata en Venezuela, con enormes lucros”.

Pero si la cúpula es parte de la boliburguesía, eso no se extiende al conjunto de las FFAA, en particular, a la baja oficialidad y a los soldados. Para ese sector, solo sobran la crisis y la represión al pueblo. Por eso, se acumulan elementos de crisis en la base de las FFAA. Ya hay más de 100 militares presos, según informa la prensa.

Al bloquear una salida electoral, el chavismo tensa fuertemente el país. La crisis puede caminar para algunas de estas hipótesis:

- una explosión popular semejante al Caracazo, ahora contra el gobierno chavista;
- una represión sangrienta, con una variante “siria”;
- Una crisis de las FFAA chavistas que obligue al gobierno a ceder y a negociar una salida electoral.

Puede que exista una variante combinada de esas tres primeras hipótesis. O puede ser que ocurra incluso la consolidación del régimen bonapartista posconstituyente durante un período. La continuidad de la crisis económica y política tiende a reducir estratégicamente esa hipótesis.

VIII. EL APOYO DE LA MAYORÍA DE LA IZQUIERDA REFORMISTA AL GOLPE DE MADURO

La mayoría de la izquierda reformista y centrista en el mundo apoya el golpe “constituyente” de Maduro. No se trata de toda la izquierda reformista, sino de su mayoría. Se trata de los partidos estalinistas de todo el mundo, así como de partidos socialdemócratas con cuadros de dirección de origen estalinista, como el PT en Brasil. Eso se da también en partidos neorreformistas como el PSOL (Brasil), Podemos e Izquierda Unida (Estado español) y Die Linke (Alemania). Existen también sectores centristas y algunos que se dicen trotskistas, como el CWI (Comité Internacional de los Trabajadores) y el MAIS (Brasil), en apoyo abierto a Maduro.

Existen también los sectores reformistas más próximos a la socialdemocracia que se contraponen, aunque de forma limitada, como el Bloco de Esquerda (Portugal), Melenchón (Francia) y una parte del PSOL. Al final, ser aliado de Maduro no es bueno para ganar votos. Bachelet, de Chile, se pronunció contra el golpe de Maduro. El gobierno uruguayo apoyó la suspensión de Venezuela del Mercosur.

Existen todavía sectores centristas, como el PO, el PTS y Nuevo MAS (Argentina), que se contraponen a la constituyente de Maduro,

pero se recusan de defender “Fuera Maduro”, en una capitulación a la dictadura venezolana.

Los reformistas y centristas que apoyan el golpe son cómplices de los asesinatos de más de 100 personas y de la detención de más de 500 personas. Y asumen su responsabilidad por todo lo que aún puede venir, como la consolidación del golpe. Son cómplices de una dictadura capitalista, que le da una cobertura “de izquierda”. Se trata de un crimen político.

Hablan en defensa del “socialismo” y de la “izquierda”. En realidad, hacen juego de la propaganda anticomunista de la burguesía, asociando el socialismo con la inmundicia capitalista y corrupta de Maduro. Ayudan así a deformar por completo la imagen del socialismo, exactamente como lo hacía el estalinismo. Es necesario que los trabajadores de América Latina y del mundo sepan que no existe socialismo en Venezuela y que los socialistas revolucionarios se oponen a esa dictadura capitalista y corrupta.

El reformismo y el centrismo se cansaron de denunciar los “golpes parlamentarios o militares” contra los gobiernos de frente popular y los nacionalistas burgueses, cuando no existían. Ahora que existe un golpe, pero dado por el chavismo, ellos asumen la defensa.

IX. UN PROGRAMA PARA EL PAÍS

¡Fuera Maduro!

¡Por una huelga general organizada desde la base para derrocar el gobierno y ese régimen! ¡Por un “venezolanazo” que unifique todas las luchas contra Maduro!

¡Elecciones generales de inmediato!

¡Abajo la represión! ¡Libertad y autonomía sindical! Elecciones

libres en todos los sindicatos, sin interferencia del Estado

¡Por la más amplia unidad de acción contra la dictadura de Maduro! Los trabajadores deben organizar y decidir, por las bases, las acciones contra el gobierno.

Ningún apoyo al MUD que quiere capitalizar el descontento de la población para imponer un plan económico aún peor.

¡Por la independencia política de los trabajadores frente a los dos bloques burgueses!

Por un programa económico para los trabajadores, basado en la expropiación de las multinacionales y de las grandes empresas. Abajo, el plan neoliberal de Maduro, así como el del MUD. El petróleo y el gas deben ser 100% venezolanos. Por la revocación del plan del Arco Minero de Orinoco. Por el incumplimiento del pago de la deuda externa. ¡Expropiación de las empresas de la boliburguesía y de todas las grandes empresas! Congelamiento de los precios de los alimentos, prisión y expropiación de los especuladores.

¡Por el control obrero y popular de la producción y la distribución de los alimentos! ¡En defensa del pueblo pobre, expropiar los alimentos de las empresas burguesas!

¡Prisión y confiscación de los bienes de todos los corruptos y corruptores! ¡Escala móvil de salarios acorde con la inflación!

¡Por la autodefensa de los trabajadores! Llamamos a las bases de las FFAA a romper con su dirección, a no reprimir a los trabajadores y a sumarse con sus armas a las movilizaciones.

¡Ni Maduro ni MUD! ¡Por un gobierno socialista de los trabajadores!

Por la construcción de una dirección revolucionaria en Venezuela. ■

DECLARACIÓN CONJUNTA

La crisis política venezolana divide aguas en toda la izquierda latinoamericana y mundial. La mayor parte de la izquierda reformista se alineó con el gobierno de Maduro “contra el golpe”. Se trata de una maniobra criminal para ocultar que el verdadero golpe está siendo dado por Maduro, quien está imponiendo una dictadura al servicio de la “boliburguesía”.

Las organizaciones que integramos el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo y otras corrientes antiimperialistas, desde una posición de independencia de clase y de cualquier otro factor de poder opresor, nos posicionamos ante la grave situación que atraviesa nuestro país tras los ataques criminales perpetrados por los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump en suelo venezolano, y asumimos la defensa del derecho de autodeterminación de Venezuela y de la soberanía nacional, llamamos a rechazar la agresión militar y ofensiva imperialista contra el país.

1. CONDENA DE LA VIL AGRESIÓN MILITAR ESTADOUNIDENSE EN SUELO VENEZOLANO

Expresamos nuestro más categórico repudio a los bombardeos ejecutados por el gobierno de Donald Trump la madrugada sobre Caracas y diversas zonas del territorio nacional el pasado 3 de enero. Denunciamos esta acción como una violación flagrante a la soberanía, una agresión criminal contra el pueblo venezolano cuya consecuencia se está traduciendo en la imposición de un gobierno bajo tutela imperialista en Venezuela, cuya misión es imponer una agenda colonial sobre la nación, nuestro petróleo y sus recursos estratégicos.

El extendido ataque militar contra el país, con el asesinato de unas cien personas, entre militares y civiles, es la continuidad y punto más alto de una sistemática agresión imperialista que va desde las diversas medidas de coerción («sanciones») durante largos años, al asedio militar en el Caribe, junto a los bombardeos y asesinatos a sangre fría en altamar. Se inscriben en una agenda de dominación continental, en el resurgimiento de la nefasta «Doctrina Monroe», que pretende el derecho de Estados Unidos a imponer sus intereses sobre los pueblos del continente, como activo en su competencia con otras potencias. El ataque y sometimiento nacional contra Venezuela está siendo así usado como ejemplo para amedrentar a otros países de la región.

Nos solidarizamos con los familiares de quienes fallecieron víctimas de la agresión, como con las y los afectados por la destrucción de sus viviendas o estructuras de instituciones del Estado. Así también con quienes quedaron afectados emocionalmente por los bombardeos.

Expresamos también nuestra solidaridad a las comunidades de Fuerte Tiuna, El Hatillo, parroquias El Paraíso, San Juan, 23 de Enero, sectores cercanos a La Carlota, y al pueblo caraqueño, Mirandino y de La Guaira en general, que desde ese día viven en confusión y zozobra ante la posibilidad de un nuevo ataque.

Como organizaciones que nos oponemos al gobierno venezolano, Repudiamos con fuerza a los políticos patronales que, desde la oposición proimperialista, aplauden la agresión militar contra el país y el plan de sometimiento nacional de Trump. María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma y todos los que tienen esa política merecen el rechazo más firme de parte del pueblo trabajador venezolano.

2. RECHAZO AL SECUESTRO DE NICOLÁS MADURO Y CILIA FLORES

Pese a las profundas diferencias políticas con el gobierno, rechazamos el secuestro de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores por parte de fuerzas militares extranjeras. Exigimos información oficial y respeto a sus derechos humanos, y su liberación, pues no le concedemos de ninguna manera al imperialismo el derecho de detener y juzgar a un gobernante venezolano, que sólo puede ser potestad de nuestro propio pueblo.

Exigimos respeto a los principios de autodeterminación del pueblo venezolano. Ninguna potencia extranjera tiene jurisdicción para actuar como «gendarme del mundo» ni para aplicar sus leyes de forma extraterritorial en suelo venezolano.

3. EL PUEBLO VENEZOLANO TIENE EL DERECHO INALIENABLE DE DISCUTIR Y

DECIDIR SU DESTINO

Con la brutal ofensiva neocolonial sobre el país no está en juego solo el destino de un gobierno, está en juego el presente y el futuro del pueblo venezolano. Está en entredicho la más elemental condición de país soberano. Lo que está planteado es que el manejo de los recursos nacionales y del fruto del trabajo nacional se hará en Washington desde las oficinas del presidente de los Estados Unidos, en sus reuniones con los magnates estadounidenses y de otros países. Un retroceso histórico sin precedentes.

¡Es inaceptable que la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares del país sean puestos al margen!. Exigimos plenas libertades democráticas para discutir y luchar contra las insolentes pretensiones neocoloniales sobre el país. El derecho a realizar asambleas libres de coacción en los lugares de trabajo, de estudio y en las comunidades, para debatir la situación y definir los pasos para responder ante los propósitos de sumisión nacional. Libre derecho a reunión y manifestación.

4. NUESTRO REPUDIO AL IMPERIALISMO LO HACEMOS DESDE UNA OPOSICIÓN VERDADERAMENTE DEMOCRÁTICA Y DE IZQUIERDA AL GOBIERNO VENEZOLANO

Nuestra condena a la agresión imperialista no implica apoyo político a la cúpula que ha detentado el poder ni al gobierno tutelado de colaboración implantado tras la intervención de los EE.UU. Coincidimos en señalar que:

- El gobierno ha ejecutado un ajuste económico brutal que destruyó totalmente los de-

CONCENTRACIÓN

YANKEE GO HOME

¡Rechazo a la agresión militar y la ofensiva imperialista!

¡No a la colaboración neocolonial del gobierno nacional con Trump!

¡Libertades democráticas para enfrentar las pretensiones neocoloniales y luchar por los derechos del pueblo trabajador!

MIÉ. 28 | 10 AM | PZA. MORELOS DEFENSORÍA DEL PUEBLO

LTS **PSL** **ms** **PPT** **ABR** **PCV** **USTC** **Movimiento Popular Alternativo** **REVOLUCIÓN COMUNITARIA**



rechos de la clase trabajadora conquistados en años de luchas. Al drástico ajuste del gobierno para pagar la deuda externa vinieron a sumarse luego las medidas de coerción imperialistas (“sanciones”), que buscaban asfixiar la ya en crisis economía nacional, profundizando las penurias, la política del gobierno ha descargado las consecuencias de toda la crisis sobre los derechos de la clase obrera y las condiciones de vida del pueblo, mientras en cambio se preservan los intereses de las clases propietarias de dentro y de afuera, generando cada vez mayor desigualdad social: para los empresarios y patronos todo, para los trabajadores nada, esa ha sido en los hechos la lógica gubernamental. Por lo que es urgente el rescate del salario y las pensiones, restableciendo las prestaciones sociales y la restitución de los derechos sindicales y laborales arrebatados.

- Así mismo cuestionamos la persistente situación de encarcelamiento a personas militan-

tes o no por motivos políticos. Estos mecanismos de represión utilizados por el gobierno contribuyeron a profundizar su deriva autoritaria. Mecanismos que deben ser derogados, como la Ley del Odio.

- Las liberaciones que se están dando bajo la presión del imperialismo, ameritan de la solidaridad y movilización popular para acelerar ese proceso y que les sea otorgada la libertad plena a todos los excarcelados.
- Exigimos el reconocimiento de todos los derechos democráticos del pueblo venezolano; por ende, debe acelerarse la libertad plena de los presos políticos y atender la exigencia de familiares, organizaciones sociales y políticas que han luchado por su liberación, e ir mitigando el dolor causado a miles de familias venezolanas que se encuentran enfrentando esa dura e injusta situación.
- Deben cesar en lo inmediato los arrestos y allanamientos

arbitrarios, desapariciones forzadas y requisas sin orden judicial por parte de los cuerpos policiales y grupos paramilitares.

- Denunciamos que existe una opacidad inaceptable respecto a la respuesta de los sistemas de defensa nacional y el impacto real (víctimas y daños) de los ataques del 3 de enero. Exigimos al actual gobierno de Delcy Rodríguez que se expliquen con total transparencia los hechos, así como que se informe al pueblo sobre la identidad de los asesinados en ese criminal atentado, y que se informe sobre los daños estructurales, sus costos y las estimaciones de las afectaciones en la población.
- Como elemento esencial, exigimos que le sea restituido el salario mínimo como derecho a la clase trabajadora venezolana, tal como lo establece el artículo 91 de la CRBV, y otras medidas de emergencia para recuperar unas condiciones de vida dignas para el conjunto

de la población.

5. NOS OPONEMOS A CUALQUIER TIPO DE GOBIERNO TUTELADO POR LOS ESTADOS UNIDOS

En el marco del brutal ataque y la extorsión militar imperialista, el gobierno de Trump viene imponiendo drásticas medidas para su manejo sobre los recursos del país, las cuales vienen siendo aceptadas sumisamente por el gobierno venezolano. La «colaboración» y la «cordialidad» con el imperialismo son las pautas planteadas por el gobierno de Delcy Rodríguez, facilitando la avanzada neocolonial, prácticamente como un gobierno tutelado por Estados Unidos para entregar nuestro petróleo y demás riquezas naturales del país.

Rechazamos cualquier tipo de cooperación con las imposiciones de Washington, bien sea desde cómo pretenden imponernos el manejo de la industria petrolera nacional y del resto de los recursos naturales y energéticos venezolanos, hasta el control de la economía nacional y de las relaciones internacionales.

Alertamos sobre la sujeción del gobierno venezolano con su colaboracionismo y «cooperación» con el de Trump para entregar nuestro petróleo y demás riquezas naturales y energéticas del país.

6. LLAMADO AL PUEBLO VENEZOLANO Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL A LA MOVILIZACIÓN, ES NECESARIA UNA RESPUESTA DE MASAS E INTERNACIONALISTA

Trump de forma arrogante pretende pasar por encima del pueblo venezolano y de su historia de lucha independentista y an-

tiimperialista, autoproclamándose «Presidente Interino de Venezuela», imponiendo sobre nuestra nación presiones abusivamente colonialistas.

Ahora más que nunca tenemos la imperiosa e impostergable necesidad de trabajar por la unidad de la clase trabajadora y el pueblo explotado venezolano en torno a sus intereses de clase, y por el rescate de la soberanía nacional.

La organización y la movilización popular y de la clase trabajadora es imprescindible para superar la dominación imperialista que se nos pretende imponer. Por ello hay que recuperar la posibilidad de realizar asambleas y promover espacios de encuentro en donde participe el pueblo venezolano, que claramente se opongan al intervencionismo, donde se discuta lo que ha sucedido, y se plantee una serie de demandas para resolver la crisis desde los sectores populares y la clase trabajadora.

En estos tiempos debemos prepararnos para desarrollar distintas y eficaces formas de lucha en defensa de la soberanía nacional y los derechos de nuestro pueblo, denunciando y organizándonos contra todo aquello que implique la entrega de recursos petroleros, minerales, naturales o el tutelaje extranjero.

El destino de Venezuela no debe decidirse entre cúpulas negociadoras ni bajo las imposiciones de Washington, sino a través de la voluntad soberana de su pueblo.

Exhortamos al pueblo trabajador venezolano, a los pueblos de América Latina y a las fuerzas democráticas del mundo a manifestarse contra esta agresión militar. La salida a la crisis debe ser obrera y popular, rechazando tanto el intervencionismo neocolonial de Trump, así como, la continuidad

de un modelo que sostiene y privilegia los intereses de los empresarios de cualquier origen nacional, de los ricos y nuevos ricos, a fuerza de suprimir los derechos económicos, sociales y políticos de las masas trabajadoras.

Toda América Latina está bajo amenaza y nuestros pueblos deben unirse para enfrentar y frenar al invasor estadounidense, sus nuevas formas de colonización y la extensión de sus intereses imperialistas sobre las naciones latinoamericanas.

Llamamos a la más amplia movilización en Latinoamérica y dentro de los propios Estados Unidos. En ese sentido proponemos una gran movilización internacional capaz de frenar la agresión imperialista. A la juventud, a la clase trabajadora y a la intelectualidad progresista de los Estados Unidos, los llamamos a oponerse resueltamente a su propio imperialismo.

¡Fuera el imperialismo yanqui de Venezuela y América Latina!

¡Retiro del cerco militar yanqui de las costas de Venezuela!

¡Por plenas libertades democráticas para luchar contra las pretensiones neocoloniales de Trump y por todos los derechos del pueblo trabajador!

¡No a la entrega nacional!

¡Por la restitución de los derechos de la clase trabajadora!

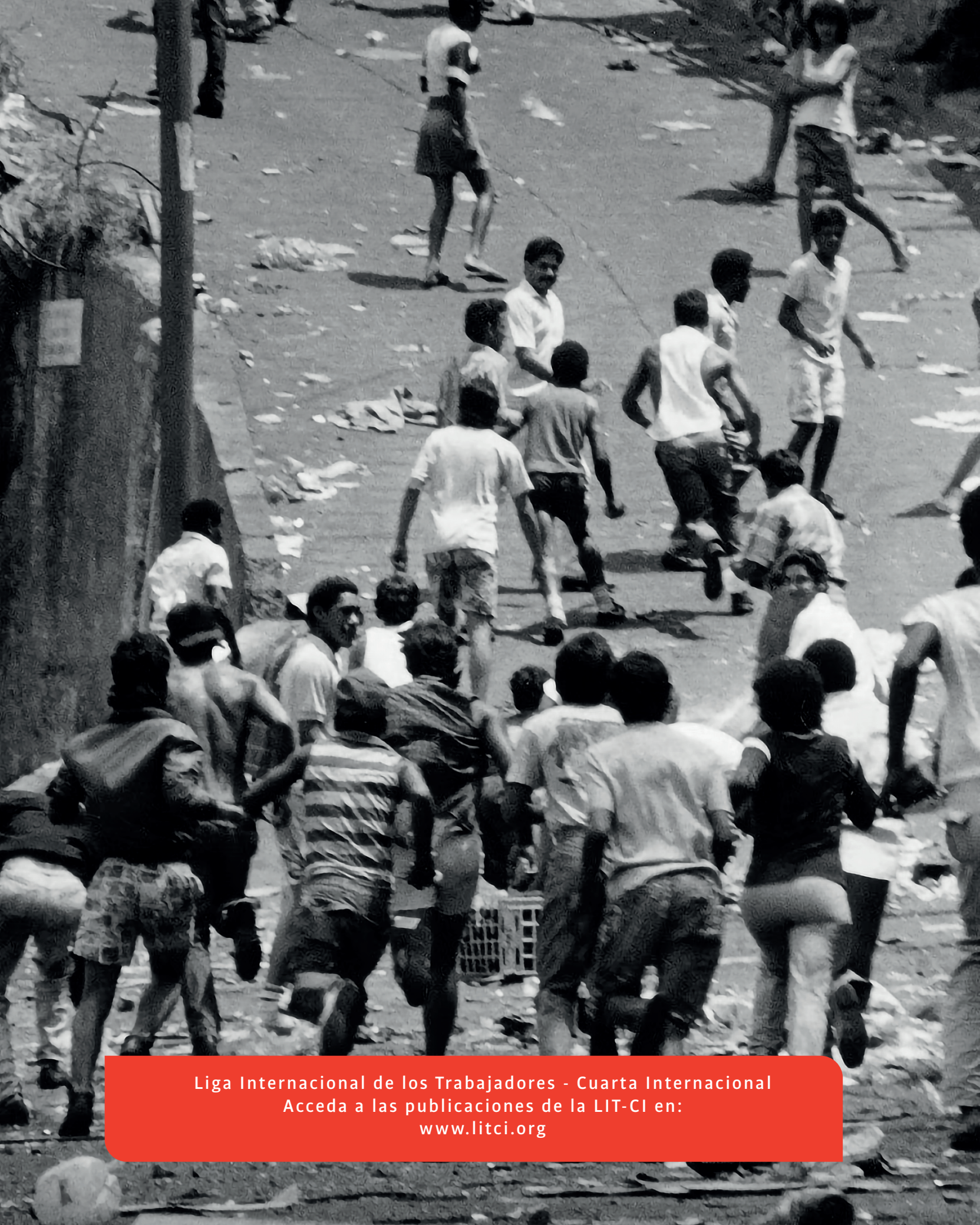
Caracas, enero de 2026.

Partido Patria Para Todos, PPTAPR – Marea Socialista – Partido Comunista de Venezuela, PCV Dignidad – Partido Socialismo y Libertad – Liga de Trabajadores por el Socialismo – Revolución Comunista – Bloque Histórico Popular – Movimiento Popular Alternativo – Unidad Socialista de Los Trabajadores (UST). ■

CARACAZO, 1989







Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
Acceda a las publicaciones de la LIT-CI en:
www.litci.org